



# Violencia juvenil en contextos urbanos

Diciembre de 2014

Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC

Violencia juvenil en contextos urbanos / Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos - CERAC. -- Bogotá : Opciones Gráficas Editores, 2014.

256 páginas : gráficos ; 16 x 23 cm. -- (Jóvenes transformando sociedad)

ISBN: 978-958-58815-0-1

1. Violencia juvenil - Prevención 2. Violencia urbana - Aspectos socioeconómicos 3. Delincuencia juvenil - Aspectos socioeconómicos I. Tít. II. Serie.

364.36 cd 21

A1471591

CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango

**CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA  
SECRETARIADO NACIONAL DE PASTORAL  
SOCIAL CARITAS COLOMBIA**

**Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria**

Director del Secretariado Nacional De Pastoral Social

**Pbro. Andrés Bustacara Bustacara**

Subdirector

**Rosa Inés Floriano Carrera**

Animadora Área de Desarrollo Institucional

**FUNDACIÓN INSTITUTO PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ – FICONPAZ**

**Mons. Héctor Fabio Henao Gaviria**

Director

**Carlos Henao Gaviria**

Comunicaciones

**Jennifer Vargas Reina**

Coordinadora de Proyectos

**CENTRO DE RECURSOS PARA EL ANÁLISIS  
DE CONFLICTOS CERAC.**

**Jorge Alberto Restrepo**

Director

**Pablo Alberto Ortega Poveda**

**María Fernanda Arocha V.**

**Jaime Márquez**

Investigadores

**Jorge Alberto Restrepo**

**Pablo Alberto Ortega Poveda**

**María Fernanda Arocha V.**

Autores de los textos

**Catalina Arcila - Olga Gualdrón**

Asistentes de investigación

**Corrección de estilo**

Johnny Albert Vélez

**Producción gráfica**

Opciones Gráficas Editores Ltda.

[www.opcionesgraficas.com](http://www.opcionesgraficas.com)

---

**INFORME FINAL SOBRE VIOLENCIA JUVENIL EN CONTEXTOS URBANOS**

**Colección**

Jóvenes transformando sociedad

**Volumen**

Libro sobre violencia juvenil en contextos urbanos

**ISBN: 978-958-58815-0-1**

Material educativo, prohibida su venta reproducción total o parcial por cualquier medio, sin autorización expresa de los autores.

Todos los derechos reservados.

# Índice

## Primera parte

### Capítulo 1. Nuestro segundo principal problema de desarrollo .....

#### 1.1. Referentes teóricos .....

- 1.1.1. Análisis de la violencia juvenil .....
- 1.1.2. Análisis de los factores de riesgo y protección .....
- 1.1.3. Análisis de las iniciativas .....

#### 1.2. Metodología .....

- 1.2.1. Metodología cualitativa .....
- 1.2.1.1. *Búsqueda sistemática de información* .....
- 1.2.1.2. *Entrevistas semiestructuradas* .....
- 1.2.1.3. *Entrevistas no estructuradas (historias de vida)* .....

#### 1.2.2. Metodología cuantitativa .....

- 1.2.2.1. *Batería de indicadores y línea de base* .....
- 1.2.2.1.1. *Caracterización de las preguntas de investigación y de las dimensiones que abarca el estudio* .....
- 1.2.2.1.2. *Identificación de los objetivos y de las preguntas de investigaciones que se quieren estudiar* .....
- 1.2.2.1.3. *Definición de la tipología del indicador* .....
- 1.2.2.1.4. *Estructuración y construcción del indicador* .....
- 1.2.2.1.5. *Selección de indicadores* .....
- 1.2.2.1.6. *Limitaciones* .....
- 1.2.2.2. *Índice de riesgo y nivel de situación de violencia contra los jóvenes* .....
- 1.2.2.2.1. *Análisis en componentes principales* .....
- 1.2.2.2.2. *Análisis factorial múltiple* .....
- 1.2.2.2.3. *Análisis factorial múltiple jerárquico* .....
- 1.2.2.2.4. *Limitaciones de la metodología* .....
- 1.2.2.2.5. *Datos* .....
- 1.2.2.2.6. *Clasificación de los datos* .....

### Capítulo 2. De estado del arte sobre la violencia juvenil .....

#### 2.1. Introducción.....

- 2.1.1. Descripción de la metodología .....

#### 2.2. Aproximaciones al fenómeno de la violencia juvenil .....

- 2.2.1. El joven como individuo violento o víctima .....
- 2.2.2. Los grupos armados con los que se vinculan los jóvenes .....
- 2.2.3. El enfoque de violencia juvenil que se aborda .....

#### 2.3. Factores de riesgo y protección frente a la violencia juvenil .....

- 2.3.1. El modelo ecológico de la violencia .....
- 2.3.2. Otros modelos de análisis de riesgo .....
- 2.3.3. Los vacíos en la literatura .....
- 2.3.4. El modelo adoptado en el estudio .....

<b>2.4. Iniciativas de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
2.4.1. Modelos para la clasificación de las iniciativas .....	
2.4.2. Hallazgos sobre la eficacia de las iniciativas de prevención de la violencia juvenil .....	
<b>2.5. Conclusiones .....</b>	
<b>2.6. Breve mención sobre los referentes teóricos del libro .....</b>	
2.6.1. Análisis de la violencia juvenil .....	
2.6.2. Análisis de los factores de riesgo y protección .....	
2.6.3. Análisis de las iniciativas .....	

## Segunda Parte

### Capítulo 3. Jóvenes y violencia en Bogotá: análisis de una problemática focalizada, persistente, pero prevenible .....

<b>3.1. Contexto de la ciudad .....</b>	
3.1.1. Condiciones socioeconómicas .....	
3.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO .....	
3.1.2.1. <i>Primera etapa (1970 – 1991): incursión del Cartel de Medellín</i> .....	
3.1.2.2. <i>Segunda etapa (1990 – 1999): presencia de grupos                 guerrilleros en la ciudad</i> .....	
3.1.2.3. <i>Tercera etapa (1999 – 2004): incursión del Frente Capital de las AUC</i> .....	
3.1.2.4. <i>Cuarta etapa (2004 – 2009): emergencia de grupos                 posdesmovilización paramilitar</i> .....	
3.1.2.5. <i>Quinta etapa (2009 – actualidad): posicionamiento                 de Bogotá la criminalidad</i> .....	
3.1.2.6. <i>Persistencia de zonas focalizadas de violencia en la ciudad.</i>	
<b>3.2. Análisis de la violencia juvenil .....</b>	
3.2.1. Los jóvenes y la violencia organizada .....	
3.2.1.1. Nivel bajo: barras violentas de fútbol y pandillas.	
3.2.1.2. Nivel intermedio: bandas delincuenciales y oficinas de cobro .....	
3.2.1.3. Nivel alto: “Ganchos” y GPDP .....	
3.2.1.4. Grupos de vigilancia comunitaria .....	
3.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes .....	
3.2.2.1. <i>Afectaciones por limpieza social</i> .....	
3.2.2.2. <i>Afectaciones por violencia entre pandillas, bandas                 criminales y barras violentas</i> .....	
3.2.2.3. <i>Reclutamiento forzado</i> .....	
3.2.2.4. <i>Explotación sexual de mujeres y niñas</i> .....	
3.2.2.5. <i>Afectaciones por violencia de la Fuerza Pública</i> .....	
3.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes .....	
<b>3.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil .....</b>	
3.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada .....	
3.3.1.1. <i>Modelo I</i> .....	
3.3.1.2. <i>Modelo II</i> .....	
3.3.1.3. <i>Modelo III</i> .....	
3.3.1.4. <i>Modelo IV</i> .....	
3.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada .....	
3.3.2.1. <i>Modelo I</i> .....	
3.3.2.2. <i>Modelo II</i> .....	

3.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
3.3.3.1. Modelo I .....	
3.3.3.2. Modelo II .....	
3.3.3.3. Modelo III .....	
3.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
<b>3.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
3.4.1. Caracterización de la infraestructura .....	
3.4.2. Efectividad de la infraestructura .....	
<b>3.5. Conclusiones .....</b>	
<b>Capítulo 4. Cali: ¿Hacia un punto de no retorno en la violencia juvenil? .....</b>	
<b>4.1 Contexto de la ciudad .....</b>	
4.1.1. Condiciones socioeconómicas .....	
4.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO .....	
4.1.2.1. Primera etapa (1970 - 1994): el M19 y los carteles del narcotráfico .....	
4.1.2.2. Segunda etapa (1994 - 1999): las FARC, el ELN y el Cartel del Norte del Valle .....	
4.1.2.3. Tercera etapa (1999 - 2004): creación del Bloque Calima de las AUC .....	
4.1.2.4. Cuarta etapa (2004 - 2011): fracturas y guerra en el Cartel del Norte del Valle .....	
4.1.2.5. Quinta etapa (2011 - actualidad): lucha por el control de Cali entre GPDP .....	
4.1.2.6. Cali como territorio estratégico .....	
<b>4.2. Análisis de la violencia juvenil .....</b>	
4.2.1. Los Jóvenes y la violencia organizada .....	
4.2.1.1. Nivel bajo: pandillas y barras violentas de fútbol .....	
4.2.1.2. Nivel intermedio: bandas criminales y oficinas de cobro .....	
4.2.1.3. Nivel alto: las FARC, GPDP y grupos narcotraficantes .....	
4.2.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes .....	
4.2.2.1. Asesinatos en el marco de la violencia entre los GVO del nivel bajo e intermedio .....	
4.2.2.2. Restricciones a la movilidad .....	
4.2.2.2.1. Reclutamiento ilegal .....	
4.2.2.2.2. Violencia sexual .....	
4.2.2.5. Amenazas a líderes juveniles .....	
4.2.2.6. Amenazas y asesinatos en el marco de la limpieza social .....	
<b>4.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil .....</b>	
4.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada .....	
4.3.1.1. Modelo I .....	
4.3.1.2. Modelo II .....	
4.3.1.3. Modelo III .....	
4.3.1.4. Modelo IV .....	
4.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada .....	
4.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
4.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
<b>4.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
4.4.1. Caracterización de la infraestructura .....	
4.4.2. Efectividad de la infraestructura .....	
<b>4.5. Conclusiones .....</b>	

## Capítulo 5. Medellín: Violencia juvenil soterrada y profesionalizada ....

<b>5.1. Contexto de la ciudad .....</b>	
<b>5.1.1. Condiciones socioeconómicas .....</b>	
<b>5.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO .....</b>	
5.1.2.1. <i>Primera etapa (1980 - 1990): influencia del narcotráfico .....</i>	
5.1.2.2. <i>Segunda etapa (principios de los 90): milicias urbanas .....</i>	
<b>5.1.2.3. Tercera etapa (finales de los 90 – 2007): hegemonía paramilitar .....</b>	
5.1.2.4. <i>Cuarta etapa (2008 - actualmente): reconfiguración de poderes .....</i>	
<b>5.2. Análisis de la violencia juvenil .....</b>	
5.2.1. <i>La violencia armada organizada y los jóvenes .....</i>	
5.2.1.1. <i>Nivel I .....</i>	
5.2.1.2. <i>Nivel II .....</i>	
5.2.1.3. <i>Nivel III .....</i>	
5.2.2. <i>Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes .....</i>	
5.2.2.1. <i>Restricciones a la movilidad .....</i>	
5.2.2.2. <i>Asesinatos a jóvenes .....</i>	
5.2.2.3. <i>Agresiones en el marco de enfrentamientos entre combos .....</i>	
5.2.2.4. <i>Desplazamientos intraurbanos .....</i>	
5.2.2.5. <i>Desapariciones forzadas .....</i>	
5.2.2.6. <i>Violencia sexual .....</i>	
5.2.2.7. <i>Detenciones arbitrarias .....</i>	
<b>5.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil .....</b>	
5.3.1. <i>Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada ....</i>	
5.3.1.1. <i>Modelo I .....</i>	
5.3.1.2. <i>Modelo II .....</i>	
5.3.2. <i>Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada .....</i>	
5.3.3. <i>Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....</i>	
5.3.4. <i>Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....</i>	
<b>5.4. Iniciativas de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
5.4.1. <i>Caracterización de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil .....</i>	
5.4.2. <i>Análisis de la efectividad de la infraestructura de prevención .....</i>	

## Capítulo 6. Cartagena: ciudad de murallas.

### La violencia juvenil olvidada .....

<b>6.1. Contexto de la ciudad .....</b>	
6.1.1. <i>Condiciones socioeconómicas .....</i>	
6.1.2. <i>Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO .....</i>	
6.1.2.1. <i>Primera etapa (1998 – 2005): control paramilitar y desmovilización .....</i>	
6.1.2.2. <i>Segunda etapa (2005 – actualidad): reacomodo de los GPDP .....</i>	
6.1.3. <i>Ejes de criminalidad .....</i>	
<b>6.2. Análisis de la violencia juvenil .....</b>	
6.2.1. <i>Los jóvenes y la violencia organizada .....</i>	
6.2.1.1. <i>Nivel bajo: pandillas .....</i>	
6.2.1.2. <i>Nivel medio: pandillas tradicionales .....</i>	
6.2.1.3. <i>Nivel alto: GPDP .....</i>	
6.2.2. <i>Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes .....</i>	
6.2.2.1. <i>Reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los GVO .....</i>	

6.2.2.2. Agresiones físicas y asesinatos en el marco de los enfrentamientos entre pandillas .....	
6.2.2.3. Asesinatos selectivos de jóvenes en el marco de acciones de sicariato .....	
6.2.2.4. Violencia contra líderes sociales y de víctimas por parte de GPDP .....	
6.2.2.5. Restricciones a la movilidad .....	
6.2.2.6. Violencia sexual por parte de redes criminales no identificadas .....	
<b>6.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil .....</b>	
6.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada ....	
6.3.1.1. Modelo I .....	
6.3.1.2. Modelo II .....	
6.3.1.3. Modelo III .....	
6.3.1.4. Modelo IV .....	
6.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada .....	
6.3.2.1. Modelo I .....	
6.3.2.2. Modelo II .....	
6.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia. ....	
6.3.3.1. Modelo I .....	
6.3.3.2. Modelo II .....	
6.3.3.3. Modelo III .....	
6.3.3.4. Modelo IV .....	
6.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
<b>6.4. Iniciativas de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
6.4.1. Caracterización de la infraestructura .....	
6.4.2. Análisis de la efectividad de la infraestructura de prevención .....	
<b>6.5. Conclusiones .....</b>	
<b>Capítulo 7. Ibagué: ¿Qué lecciones aprender de un caso no tan grave de violencia juvenil? .....</b>	
<b>7.1. Contexto de la ciudad .....</b>	
7.1.1. Las condiciones socioeconómicas .....	
7.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO .....	
7.1.2.1. Primera etapa (década de los 90): tradición guerrillera .....	
7.1.2.2. Segunda etapa (2000 - 2007): entrada de las AUC .....	
7.1.2.3. Tercera etapa (2007- actualmente): relativa estabilidad .....	
<b>7.2. Análisis de la violencia juvenil .....</b>	
7.2.1. Violencia armada organizada y jóvenes .....	
7.2.1.1. Nivel Alto .....	
7.2.1.2. Nivel intermedio .....	
7.2.1.3. Nivel bajo .....	
7.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes .....	
7.2.2.1. Agresiones en el marco de las riñas entre jóvenes .....	
7.2.2.2. Afectaciones asociadas a la delincuencia común .....	
7.2.2.3. Detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado .....	
7.2.2.4. Prostitución .....	
<b>7.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil .....</b>	
7.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada .....	
7.3.1.1. Modelo I .....	
7.3.1.2. Modelo II .....	

7.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada .....	
7.3.2.1. <i>Modelo I</i> .....	
7.3.2.2. <i>Modelo II</i> .....	
7.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
7.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia .....	
<b>7.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil .....</b>	
7.4.1. Caracterización de la infraestructura .....	
7.4.2. Efectividad de la infraestructura .....	
<b>7.5. Conclusiones .....</b>	
<b>Capítulo 8. Panorama actual de la violencia juvenil en los contextos urbanos de Colombia .....</b>	
<b>8.1. Dinámicas de violencia juvenil en contextos urbanos .....</b>	
8.1.1. Jóvenes y violencia organizada .....	
8.1.1.1. <i>Ciudades con un problema muy grave de violencia juvenil</i> .....	
8.1.1.2. <i>Ciudades con un problema medianamente grave de violencia juvenil</i> .....	
8.1.1.3. <i>Ciudades con un problema poco grave de violencia juvenil</i> .....	
8.1.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes .....	
<b>8.2. Factores de riesgo y protección frente a la violencia juvenil .....</b>	
8.2.1. Vulnerabilidad frente a la violencia organizada .....	
8.2.2. Resiliencia frente a la violencia organizada .....	
8.2.3. Factores de riesgo para ser víctima de violencia .....	
8.2.4. Factores de protección frente a la violencia .....	
<b>8.3. Infraestructura de prevención de la violencia: alcances y limitaciones ....</b>	
8.3.1. Bogotá y Medellín .....	
8.3.2. Cali e Ibagué .....	
8.3.3. Cartagena .....	
<b>8.4. Recomendaciones para afrontar y prevenir la violencia juvenil .....</b>	
<b>Referencias .....</b>	
<b>Abreviaturas .....</b>	
<b>Notas .....</b>	

# Violencia juvenil en contextos urbanos

## Segunda parte



## **Jóvenes y violencia en Bogotá: análisis de una problemática focalizada, persistente, pero prevenible**

*Pablo Alberto Ortega Poveda*

### **3.1. Contexto de la ciudad**

---

Durante esta década, la capital del país se ha convertido en un referente nacional en materia socioeconómica y en seguridad. Bogotá ostenta unas de las cifras más importantes en reducción de los indicadores de pobreza y desigualdad, así como de violencia y criminalidad. Pese a lo anterior, en lo local, persisten nichos de inseguridad, pobreza y marginalidad en los cuales se concentran las principales problemáticas de violencia juvenil. Así mismo, dichas problemáticas se pueden ver afectadas y recrudecidas por la tendencia a un posicionamiento de la ciudad como un lugar cada vez más estratégico para la criminalidad organizada nacional.

#### **3.1.1. Condiciones socioeconómicas**

Bogotá es ejemplo de avance en las condiciones socioeconómicas. Si se compara con las demás ciudades de estudio y con el promedio nacional, la capital está muy por encima de ellos en la reducción de la población en situación de pobreza, con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y en condición de desempleo.

En efecto, según el DANE, entre el 2002 y el 2013 la capital pasó del 7,1% al 1,6% de la población en situación de pobreza (una reducción del 325%). De igual forma, si se compara con 1993, la ciudad pasó de tener un porcentaje de población con NBI del 17,2% al 9,2% en el 2005. Finalmente, en una década, Bogotá redujo su tasa de desempleo a la mitad (del 14,8% en el

2003 a 7,9% en el 2013). En todos los años de los que se tiene información más reciente, Bogotá reportó mejores indicadores sociales que el promedio nacional y que las ciudades de interés: en el 2013 la población en situación de pobreza a nivel nacional fue 9,1%; en el 2005 el índice NBI del país fue 27,7%; y en el 2013 la tasa de desempleo de Colombia fue 9,2%.

Sin embargo, a nivel territorial, los avances no se han extendido en toda la ciudad. Según la Encuesta Multipropósito de 2011, en 7 localidades se concentran los problemas de pobreza y desigualdad: Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Usme, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe. Allí se registra el 77,4% de la población en situación de pobreza en Bogotá, así como las tasas más altas de desempleo y el mayor índice NBI (Bogotá Cómo Vamos, 2014).

### **3.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO**

En términos de seguridad es posible destacar dos tendencias importantes en Bogotá: en primer lugar, la persistente focalización de las problemáticas de criminalidad y violencia en zonas específicas de la ciudad; y, en segundo lugar, su posicionamiento como una ciudad cada vez más estratégica para la operación de grupos de criminalidad organizada de mediano y pequeño alcance, tras la caída de los grandes carteles de narcotráfico al final de la primera década del siglo XXI.

Para dar cuenta de lo anterior, es necesario analizar cinco etapas relacionadas con la presencia y actuación de los GVO en Bogotá.

#### **3.1.2.1. Primera etapa (1970 – 1991): incursión del Cartel de Medellín**

Desde los 70, las problemáticas de seguridad en Bogotá estuvieron fuertemente asociadas a la presencia y las disputas entre grupos criminales al servicio de mafias esmeraldíferas. Estas organizaciones, provenientes de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Meta, tuvieron una fuerte participación en la violencia homicida en el marco de acciones sicariales y ajustes de cuentas (FIP, 2013).

Posteriormente, la entrada del Cartel de Medellín a la capital del país, en la década de 1980 condujo a un reacomodamiento de los GVO, dada la fusión de las mafias esmeraldíferas con aquel grupo narcotraficante (FIP, 2013). Esta situación tuvo un doble efecto en la ciudad (CODHES y ACNUR, 2013): primero, incrementó la violencia homicida, que llegó a su punto más alto en el año 1993 en el período 1970-2012, por la doble

guerra que libraban estos grupos, en su ajuste de cuentas interno y en contra del Estado; y segundo, activó y dinamizó a los grupos y redes criminales en zonas focalizadas de la ciudad, asociados al lavado de activos, contrabando, limpieza social, extorsiones, y distribución de drogas al menudeo.

### **3.1.2.2. Segunda etapa (1990 – 1999): presencia de grupos guerrilleros en la ciudad**

Entre finales de 1980 y mediados de la década del 2000 hicieron presencia activa, aunque siempre marginal, grupos guerrilleros como el M19, el ELN y las FARC.

El primero en ingresar a la capital fue el M19. En el marco de los acuerdos de paz con el Gobierno Betancur (1982 - 1986), este grupo organizó campamentos urbanos (p.e. en la localidad de Ciudad Bolívar) en los que funcionaban “ollas comunitarias”, pero donde también reclutaban milicianos e impartían instrucción ideológica y militar a sus células y cuadros políticos (Perea, 2000). Así mismo, el M19 hizo presencia en Corabastos y participó en el asesinato selectivo de delincuentes en zonas marginales de la ciudad (FIP, 2013).

Como resultado del proceso de desmovilización de comienzos de los 90, el ELN y, sobre todo, las FARC coparon los espacios que dejó el M19 en San Cristóbal, Rafael Uribe, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y Suba (FIP, 2013).

Para las FARC, Bogotá era central en el plan estratégico hacia la toma del poder que diseñó el grupo en la VIII Conferencia (Torres, 2011). Por ello, desplegó siete frentes guerrilleros y cinco columnas móviles en Cundinamarca y consolidó el corredor Sumapaz – Usme – Soacha - Ciudad Bolívar, incrementando su capacidad operativa cerca de la capital del país (Pérez, 2007). Así mismo, conformó el Frente Urbano Antonio Nariño (FUAN) que operó en la ciudad con el objetivo de realizar acciones militares por parte de las milicias y servir de enlace con las demás estructuras guerrilleras en Cundinamarca (CODHES y ACNUR, 2013).

El ELN, por su parte, hizo presencia mucho menos visible que las FARC con el Frente Urbano Regional Óscar Fernando Serrano Rueda, en la localidad de Engativá, además de las anteriormente mencionadas (FIP, 2013).

La influencia de estos grupos en las dinámicas de violencia en Bogotá fue limitada. Aunque las FARC realizaron retenes ilegales, hostigamientos, amenazas y secuestros en los alrededores de la ciudad; no tuvieron una

participación determinante en los niveles de homicidios (Pérez, 2007). Aún así, estos grupos entregaron armas a los integrantes de bandas criminales y pandillas, de tal forma que potenciaron la capacidad de dichos grupos de ejercer violencia. De hecho, algunas redes criminales trabajaron para las FARC durante los 90 (FIP, 2013).

### **3.1.2.3. Tercera etapa (1999 – 2004): incursión del Frente Capital de las AUC**

Los grupos paramilitares incursionaron en Bogotá con el Frente Capital de las AUC en 1999 y, luego, fortalecieron su posición con la adquisición de la franquicia del Bloque Centauros (del cual hacía parte este frente) por parte del narcotraficante Miguel Arroyave en el 2001. Este grupo tenía como objetivo impedir el acceso de las FARC a Bogotá, desestructurar sus rutas de abastecimiento de material de intendencia y de guerra, y controlar fuentes de financiación de rentas ilegales asociadas al narcotráfico y los mercados de criminalidad de la capital del país (CODHES y ACNUR, 2013).

El posicionamiento de los paramilitares en la ciudad coincidió con el despliegue de las operaciones militares “Aniquilador 1” y “Aniquilador 2” contra las FARC y el ELN por parte de la Fuerza Pública. Estas acciones militares le permitieron al Estado recuperar el control del corredor Sumapaz – Usme – Soacha - Ciudad Bolívar, y aislar al FUAN de los demás frentes guerrilleros (CODHES y ACNUR, 2013). Durante la década del 2000, la Fuerza Pública continuó la ofensiva contra dicho frente guerrillero, dejándolo prácticamente desactivado (Torres, 2011).

Luego de librar una disputa con el Frente República de las Autodefensas Campesinas del Casanare, que terminaría por ganar, el Frente Capital copó los espacios que dejaron las guerrillas en la ciudad, pero, no sólo eso, también se posicionaron en lugares estratégicos donde operaban mercados informales e ilegales<sup>6</sup> (CODHES y ACNUR, 2013). De igual forma, este grupo infiltró sectores políticos y de la Fuerza Pública, así como también logró reorganizar y controlar las oficinas de cobro que operaban en Bogotá (Torres, 2011).

En cuanto a la capacidad operativa del paramilitarismo en la capital, lo más importante a destacar es la forma como este grupo usó redes criminales locales para el control de mercados, poblaciones y territorios (FIP, 2013). En localidades como Ciudad Bolívar y Bosa, el Frente Capital no operó como una estructura militar regular; más bien, articuló a bandas delincuenciales y pandillas locales que realizaban asesinatos selectivos, amenazas y patrullajes a su encargo, sin ser incorporadas formalmente a su estructura (CODHES y ACNUR, 2013).

### **3.1.2.4. Cuarta etapa (2004 – 2009): emergencia de grupos posdesmovilización paramilitar**

El declive del Frente Capital comenzó en el 2004 con el asesinato de Miguel Arroyave por alias “Cuchillo” y alias “Jorge Pirata”, dos comandantes de frentes del Bloque Centauros que él comandaba (CODHES y ACNUR, 2013). A lo anterior se sumaron la desmovilización de dicho bloque y los resultados operativos exitosos de la Fuerza Pública contra jefes financieros y militares del Frente Capital, lo que debilitó la estructura del grupo (CODHES y ACNUR, 2013).

Sin embargo, es necesario aclarar que el Frente Capital no se desmovilizó y su estructura (conformada por cerca de 450 hombres) permaneció activa (Torres, 2011). De hecho, desde el 2004 emergieron distintos grupos posdesmovilización paramilitar (GPDP) que coparon los espacios dejados por el Frente Capital. Específicamente, en ese período de tiempo se observó en Bogotá a las Águilas Negras, el Bloque Cacique Nutibara, los Héroes de Carlos Castaño y el ERPAC (Torres, 2012). Estos grupos tenían presencia en Kennedy, Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Corabastos (Torres, 2012).

Los GPDP tienen tres características que vale la pena resaltar: (1) operaban a través de redes criminales que hacían presencia en barrios marginales (CODHES y ACNUR, 2013; FIP, 2013). (2) Bajo el liderazgo del narcotraficante Daniel “El Loco” Barrera, hicieron mucho más selectivas e imperceptibles sus acciones, al tiempo que focalizaron sus zonas de interés, relegando el objetivo de ejercer un control abierto y completo de la ciudad (Torres, 2012); es decir, mantuvieron un perfil mucho más bajo que el Frente Capital (Torres, 2012; CODHES y ACNUR, 2013). (3) Persistieron en el control de mercados ilegales e informales en diferentes puntos de la ciudad; para ello tuvo un fuerte protagonismo el narcotráfico, y se profundizó la activación de redes tanto para el intercambio de armas y drogas, como para el establecimiento de “contratos de prestación de servicios” (Torres, 2012).

### **3.1.2.5. Quinta etapa (2009 – actualidad): posicionamiento de Bogotá en la criminalidad**

La última etapa, en la cual se concentrará el análisis de la violencia juvenil que se realizará a continuación, es una profundización de los procesos que se presentaron desde el 2004. Ellos obedecen a las condiciones actuales de seguridad asociadas al narcotráfico en Colombia y a nivel internacional.

Lo primero está relacionado con las operaciones exitosas que la Fuerza Pública ha realizado desde el 2009 contra los jefes de las últimas grandes organizaciones al servicio del narcotráfico, lo cual llegaría a su punto más alto en el 2012 con la captura de Daniel “El Loco Barrera” en Venezuela

(El Espectador, 2012). A ello se suma al creciente control de las cadenas más importantes del narcotráfico, la introducción y venta en los mercados internacionales, por parte de los carteles mexicanos en detrimento de las organizaciones colombianas (Ávila, 2014).

Ambos hechos condujeron a dos procesos simultáneos: por un lado, la descentralización de las organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, dada la emergencia de pequeños y medianos “capos” incapaces de controlar todo el negocio en las ciudades, lo que, a su vez, favoreció la división del negocio entre el “aparato empresarial” y el armado (Ávila, 2014). Por otro lado, la necesidad de estos grupos de criminalidad organizada de diversificar sus fuentes de rentas ilegales, a través de la extorsión o el control de la minería ilegal (Ávila, 2014).

Bogotá no ha sido ajena a estas dos tendencias. Por el contrario, la ciudad ha tomado mayor relevancia para organizaciones criminales de mediano y pequeño alcance, específicamente en lo concerniente a la expansión y profundización de los mercados locales de distribución y expendio de estupefacientes (Ávila, 2014: 35). De hecho, según Ariel Ávila (2014), el leve incremento de los homicidios en la ciudad durante el 2009 correspondía al desplazamiento y expansión de los puntos de expendio y a una corta etapa de reacomodamiento entre organizaciones criminales por el control de este negocio en distintas zonas de la ciudad.

Si bien esto implica un cambio en la tendencia de Bogotá a ser una ciudad poco estratégica para la criminalidad organizada; en la capital del país no se observan grandes grupos armados que se disputen o se hayan aliado para mantener el control de la ciudad, como es el caso de Cali y Medellín, respectivamente (Ávila, 2014; FIP, 2013). Sin embargo, esta situación sí ha tenido un efecto en términos de dinamización y reactivación de bandas y pandillas locales; GVO que tienen una alta participación en la violencia juvenil en la ciudad..

### **3.1.2.6. Persistencia de zonas focalizadas de violencia en la ciudad**

De lo anterior, se destaca la concentración de la violencia y la criminalidad en focos específicos de la ciudad. Esta situación se refleja en una tendencia que inició a mediados de los 90, con el desplazamiento de la violencia homicida del centro a las zonas periféricas (FIP, 2013). Así, según Medicina Legal, aunque los índices de homicidios en Bogotá no han dejado de bajar desde hace dos décadas, persisten altos niveles en Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba, Bosa, Usme y San Cristóbal (FIP, 2013; Ávila, 2014). Estos niveles han estado fuertemente relacionados con las acciones de grupos y redes criminales (FIP, 2013).

En concreto, es posible agrupar las unidades de planeación zonal (UPZ) donde se concentra la criminalidad y la violencia en seis grandes áreas de la ciudad:

1. La autopista sur y la zona conurbada con Soacha (Cundinamarca) que representan las UPZ de Arborizadora, El Tesoro, Jaime Perdomo y Jerusalén en Ciudad Bolívar; y de Bosa Central, Bosa Occidental y El Porvenir en Bosa.
2. Las UPZ de La Flora (Usme), Los Libertadores (San Cristóbal), Diana Turbay (Rafael Uribe) y Danubio (Usme) que tienen la influencia de la Cárcel Modelo y están ubicadas sobre la autopista al llano; vía que se presta para el tráfico ilegal de armas, municiones y droga (Corporación Nuevo Arco Iris, s.f.).
3. Las UPZ de Corabastos y Patio Bonito (Kennedy). La principal central de abastos de Colombia ha sido un centro de actividades ilegales como contrabando, entrada de droga, armas, etc (Torres, 2011). Allí confluyen grupos criminales y bandas delincuenciales de Patio Bonito y María Paz (Ávila, 2012).
4. La UPZ de La Sabana (Mártires). Esta es una de las zonas céntricas que persisten como altamente conflictivas en la ciudad.
5. Las UPZ de Suba Rincón y Tibabuyes (Suba), en donde se observan asentamientos informales y grupos criminales (FIP, 2013).
6. La UPZ de Verbenal (Usaquén). Allí existe contrabando, venta de drogas y hacen presencia redes criminales desde los 90 (FIP, 2013).

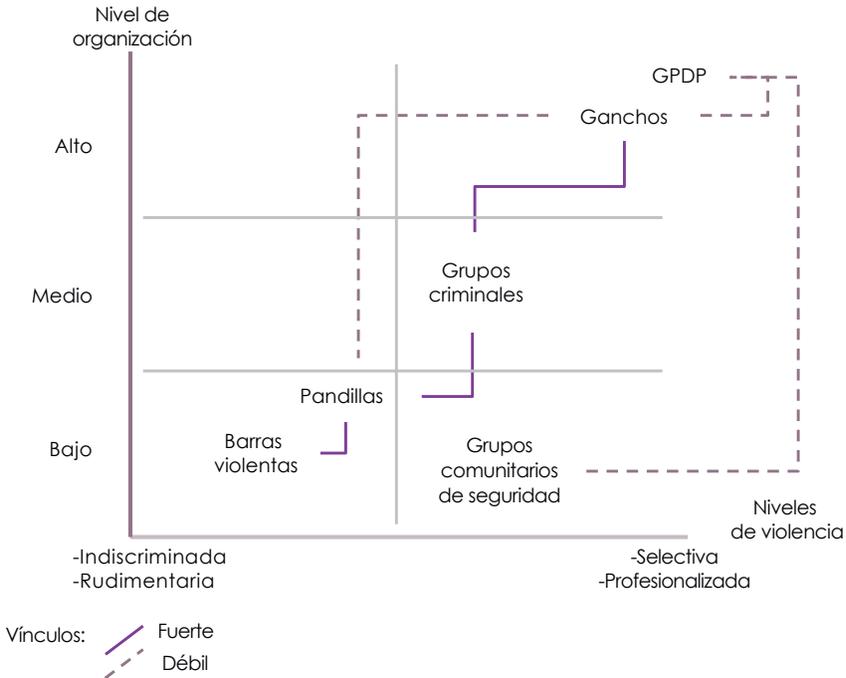
Estas áreas tienen en común tres aspectos: (1) Los peores indicadores socioeconómicos presentados más atrás. (2) Mercados criminales relacionados con la provisión ilegal de servicios de seguridad; el narcotráfico; el tráfico de armas; el contrabando; el lavado de activos, etc. (Ávila y Pérez, 2011). (3) Las principales problemáticas de violencia juvenil (CEACSC, s.f.).

## 3.2. Análisis de la violencia juvenil

### 3.2.1. Los jóvenes y la violencia organizada

En Bogotá hacen presencia siete GVO que tienen relación con la violencia juvenil: barras violentas de fútbol, pandillas, bandas criminales, oficinas de cobro, grupos al servicio de narcotráfico, GPDP y grupos de vigilancia

comunitaria. El Gráfico 1 presenta estos grupos conforme a su nivel de organización (alta, media o baja), al tipo de violencia que ejercen (indiscriminada y “rudimentaria” o selectiva y profesionalizada) y a las relaciones que sostienen entre ellos.



**Figura 1.** Grupos de violencia organizada en Bogotá (2009 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Como se observa en la figura anterior, es posible agrupar los GVO relacionados con la violencia juvenil en la ciudad en tres niveles:

### 3.2.1.1. Nivel bajo: barras violentas de fútbol y pandillas

Las barras violentas de fútbol y las pandillas son los grupos que tienen mayor relación con la violencia ejercida por los jóvenes en Bogotá. Aunque estos grupos comparten similitudes en torno a su conformación casi exclusivamente juvenil, al bajo nivel de organización de su estructura, y al tipo indiscriminado y rudimentario de violencia que ejercen, son dos organizaciones diferentes.

Las pandillas han sido las agrupaciones juveniles violentas por excelencia en la ciudad. Estos son grupos de jóvenes (entre los 14 y 22 años) que se caracterizan por su participación tanto en enfrentamientos violentos

con otros GVO, como en actividades delictivas (Ramos, 2004 Pesca, et al., 2011).

No se sabe con precisión el número exacto de estos grupos en Bogotá, puesto que los conteos al respecto varían notablemente entre las fuentes; las cifras van desde 1.319 en el 2008<sup>7</sup> hasta 132 en el 2012<sup>8</sup>. En todo caso, las diferentes mediciones coinciden en que la mayoría de estos grupos se concentran en Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy, Rafael Uribe, y Suba (Ramos, 2003). Así mismo, para autores como Ávila (2014) es posible observar una reactivación e, incluso, un incremento en la actividad de las pandillas desde el 2009, dada la expansión del microtráfico del centro hacia esas zonas periféricas de la ciudad.

En cuanto al primer rasgo característico de estos grupos, se destaca un alto nivel de conflictividad violenta interpandillas y un nivel mucho más bajo de enfrentamientos con otros GVO (Ramos, 2003). La mayor parte de las riñas entre pandillas se originan en agresiones menores y conductas percibidas como desafiantes y que requieren una respuesta violenta por parte de grupos rivales que comparten espacios comunes (Ramos, 2003). En ese sentido, los conflictos y rencillas entre estos jóvenes son tramitados de forma violenta por estos grupos.

La búsqueda de control territorial por parte de las pandillas, mediante la restricción a la movilidad a personas y grupos rivales en zonas específicas de la ciudad también genera disputas entre estos GVO (Ramos, 2003). Estas restricciones, a su vez, afectan a la comunidad; “(algunos) barrios se dividen en sectores, cada sector es manejado por una pandilla, si te pasas por ese sector tienes problemas: te chuzan, te roban, o te pueden matar” (Entrevista 3. Líder juvenil).

Finalmente, varios de los enfrentamientos entre pandillas tienen que ver con la comisión de delitos económicos: ya sea por el robo a un integrante de uno de estos grupos, un familiar o un conocido por parte de una pandilla rival<sup>9</sup>, o por arreglos inequitativos en las ganancias de una acción delictiva en la que participaron de forma coordinada varios grupos (Ramos, 2003).

Según los entrevistados, los pandilleros usan armas blancas en estos encuentros violentos, y sólo en pocos casos usan armas de fuego, lo que por lo general está reservado para los jefes de estos grupos (Entrevista 20. Líder juvenil). Las principales afectaciones que ocasionan estas acciones son golpizas, heridas de gravedad y amenazas, y, con menor frecuencia, asesinatos (Ramos, 2003). Es, precisamente, lo rudimentario y limitado en los recursos para ejercer violencia lo que caracteriza a las pandillas de Bogotá frente a otras formas de GVO.

Las acciones delictivas en las que más se involucran los pandilleros son, sobre todo, hurtos a personas y venta de droga, y en menor medida sicariato, y hurtos a entidades comerciales, residencias y vehículos (Ramos, 2003). Como lo señalaba un líder juvenil entrevistado, las pandillas operan tanto en los barrios donde provienen sus integrantes así como en otros sectores de la ciudad (Entrevista 3. Líder juvenil). En las actividades delictivas, los pandilleros cumplen funciones diferenciadas que se intercambian en cada operación (Perea, 2000).

La estructura de estos grupos es flexible y no se caracteriza por fuertes jerarquías (Ramos, 2004; Perea, 2000). Según un joven exagresor, la pandilla a la que él pertenecía “funcionaba como una corporación, por funciones, o vueltas. Había un líder que era yo, pero no existía una jerarquía” (Entrevista 18). En algunas zonas de Bogotá los líderes son conocidos como “caciques”; son quienes “controlan el microtráfico y la criminalidad (quién roba qué) en el barrio. El cacique es una persona del barrio, ‘el duro’, que logró imponerse y lo domina. Son personas reconocidas por los habitantes de la comunidad” (Entrevista 1. Líder juvenil). Los demás integrantes obedecen sus órdenes: “También existen subordinados; parches juveniles que asumen el rol de ñeros... Estos grupos forman lazos muy fuertes, parecidos a vínculos familiares” (Entrevista 1).

Finalmente, en torno a las pandillas cabe destacar el afianzamiento de los rasgos de lo que Carlos Perea (2000) denominó “nuevas pandillas”: por un lado, una reducción del número de sus integrantes y del espacio territorial que controlan (antes barrios completos, ahora en el mejor de los casos algunas cuadras); y, por otro lado, un incremento en los niveles de la capacidad para ejercer violencia y un mayor involucramiento en actividades delictivas. En parte, el último aspecto tiene que ver con una mayor injerencia en la formación y las actividades de las pandillas por parte de GPDP y organizaciones al servicio del narcotráfico (Ávila, 2014).

Por su parte, las barras violentas de fútbol son grupos de aficionados a un equipo de fútbol, en su mayoría jóvenes, que realizan acciones violentas y algunos de sus integrantes han cometido hechos delictivos (Pesca, et al., 2011). Sin embargo, estas actuaciones no son su rasgo distintivo; los une más la identidad colectiva en torno a su afición deportiva. En ese sentido, si bien estos grupos son altamente conflictivos, sus enfrentamientos se restringen casi exclusivamente con aficionados de equipos rivales y participan en hurtos contra personas y comercio, así como en la venta de estupefacientes, en la mayoría de los casos para financiar su asistencia a encuentros deportivos (Pesca, et al., 2011)<sup>10</sup>.

Pese a lo anterior, las barras violentas tienen una fuerte participación en las dinámicas de violencia juvenil en Bogotá. Según varios de los entrevistados,

las restricciones a la movilidad que imponen a grupos rivales<sup>11</sup>, los enfrentamientos y riñas que sostienen con armas blancas y piedras, y los actos vandálicos que ejercen están entre las principales problemáticas de seguridad y convivencia en Kennedy, Tunjuelito, Bosa, Suba, Usme, Usaquén y Ciudad Bolívar. Para un líder, “Las barras son percibidas como las nuevas pandillas”, dada su participación en dinámicas violentas y delictivas que afectan a las comunidades (Entrevista 21).

En cuanto a su estructura, las barras violentas mantienen un patrón similar a las pandillas; existen liderazgos muy fuertes y reconocidos, conocidos como “capos”, pero es una organización flexible, como lo señala el testimonio de una líder juvenil entrevistada: “existe jerarquía, siendo el capo el que da la orden, pero no pasa nada si uno de los miembros la desobedece” (Entrevista 7). Aunque los barristas ingresan voluntariamente a estas agrupaciones, se involucran en dinámicas violentas; “Los jóvenes entran por identidad pero terminan viéndose inmersos dentro de la lógica violenta de las barras, donde para escalar dentro de la jerarquía en ocasiones es necesaria la violencia” (Entrevista 5. Líder juvenil).

Para terminar, estos grupos tienen en común su relación con la comunidad, la respuesta de la Fuerza Pública, y la participación de mujeres en estos grupos.

En cuanto a lo primero, la relación entre jóvenes agresores y comunidades es muy conflictiva. En parte, esto se debe a la notable desconfianza en “doble vía” que se observa entre los jóvenes y los “adultos” en los barrios donde se concentran las problemática de violencia juvenil. Por parte de los jóvenes, su desconfianza tiene que ver con la percepción que tienen de la presunta participación de varios sectores de la comunidad en campañas de “limpieza social”; así como en la tendencia en los jóvenes a demostrar un rechazo frente a instituciones formales como la familia, el colegio, el Estado, etc. (Pesca, et al., 2011).

Por parte de los adultos, existe un alto nivel de estigmatización en un gran sector de la población frente a los jóvenes que frecuentan y se reúnen en gran número en sitios públicos, consumen drogas, practican deportes extremos, y pertenecen a culturas urbanas (Entrevista 14. Funcionaria; Entrevista 95. Funcionario)<sup>12</sup>. En ocasiones, ello ha conducido al cierre de espacios formales de participación para los jóvenes, como las juntas de acción comunal (JAC) (Entrevista 1. Líder juvenil).

Aún así, la relación entre jóvenes agresores y adultos es compleja. Si bien la comunidad rechaza las acciones de pandillas y barras violentas, el nivel de denuncia de estos hechos es muy bajo<sup>13</sup> (Entrevista 1. Líder juvenil). En parte, esto se debe a la desconfianza ciudadana frente a las

autoridades estatales; al hecho que algunos pandilleros se presentan como los ‘protectores del barrio’; y los lazos de familiaridad de estos jóvenes con las comunidades<sup>14</sup>.

Sin embargo, muchas de las “tensiones generacionales” y los conflictos entre “adultos” y jóvenes agresores se tramitan de forma violenta. Según Ramos (2003) y Pesca, et al., (2010), las pandillas también sostienen enfrentamientos con vecinos del barrio, celadores, comerciantes y miembros de JAC, así como con grupos de vigilancia comunitaria (de quienes se hablará más adelante). Contrario a la percepción general, Ramos (2003) encontró que en estos enfrentamientos resultan mucho más afectados los jóvenes agresores que los pobladores.

### Recuadro 1. Grupos de vigilancia comunitaria

Otros grupos que tienen incidencia en la violencia juvenil son las agrupaciones de vigilancia comunitaria, que operan en zonas marginales, y son conformados por pobladores que ejercen violencia contra “la delincuencia”, y sectores estigmatizados de la población (Ramos, 2003). En los barrios son conocidos como paramilitares, no obstante son más cercanos a una expresión de “autodefensa” comunitaria frente a las fallencias estatales en la provisión de seguridad<sup>15</sup> (Perea, 2000).

Estas agrupaciones no “encajan” en ninguno de los niveles de la estructura criminal: tienen un nivel bajo de estructura organizativa, caracterizado por su conformación esporádica y clandestinidad; pero ejercen violencia selectiva y, es posible, que reciban apoyo de GPD y de agentes estatales (Ramos, 2003). Su participación en la violencia juvenil está restringida a campañas de limpieza social contra jóvenes.

Por su parte, la relación entre jóvenes y autoridades estatales es negativa. En casi todas las entrevistas se reportó un trato agresivo y abusivo de la Policía contra los jóvenes y una notable desconfianza de estos últimos frente a los primeros. Ello explica por qué en zonas como Ciudad Bolívar y Usme algunas pandillas y barras se enfrentan a la Policía como si fuera un GVO más “La Policía en las áreas rojas no entra, ya que cuando entra son rechazados por los jóvenes por medio de pedreas o asonadas” (Entrevista 3. Líder juvenil); “Hay zonas de Usme donde la Policía agrede a los jóvenes y ellos responden” (Entrevista 11. Líder juvenil).

Finalmente, también participan mujeres en estos grupos, y ese fenómeno parece que no es novedoso (Perea, 2000). Según Carmen Torres-Castro (2013), es posible encontrar en Bogotá pandillas “mixtas” y pandillas exclusivamente femeninas (aunque muy escasas)<sup>16</sup>. Las jóvenes agresoras no

sólo ejercen el rol de “compañeras”, novias o amantes de los integrantes de estos grupos; también participan directamente en actos delictivos, sobre todo en el hurto a mano armada; auxilio de heridos; transporte y envío de armas, droga y mensajes (Pesca, et al., Torres-Castro, 2013)<sup>17</sup>. Así mismo, participan en enfrentamientos con otras integrantes de grupos rivales (Entrevista 1. Líder juvenil<sup>18</sup>).

### **3.2.1.2. Nivel intermedio: bandas delincuenciales y oficinas de cobro**

Los grupos de crimen organizado tienen una participación significativa en la violencia juvenil; no sólo por la participación de jóvenes en estos grupos, sino sobre todo por la violencia que ejercen contra jóvenes, agresores o no.

Las bandas delincuenciales (p.e. Los Pascuales o Los Luisitos) son los GVO más cercanos a los grupos del nivel anterior e, incluso, según Ramos (2003) operan como modelos de referencia para los pandilleros. Sin embargo, estos grupos se diferencian de las pandillas y las barras violentas en tres aspectos: primero, sus integrantes se unen exclusivamente para capturar rentas a partir de la comisión de delitos; robos de mayor cuantía (al transporte público, al comercio), falsificación, contrabando, extorsión<sup>19</sup> o tráfico de drogas (Ramos, 2003; Perea, 2000). En otras palabras, las bandas dejan de lado aspectos identitarios que son centrales para la cohesión de los grupos juveniles violentos que se abordaron atrás.

En segundo lugar, el nivel de violencia de las bandas es más “profesionalizado” y selectivo. Estos grupos usan armas de fuego en las acciones violentas en las que se involucran, pero tratan de restringir el uso de la violencia a casos extremos, como ajustes de cuentas internos (Ramos, 2003). Lo anterior tiene que ver con el interés de estos grupos de mantener un “bajo perfil” público (Perea, 2000).

Por último, su estructura organizativa es mucho más sofisticada: tienen una división clara de funciones, que les permite reemplazar a sus integrantes con facilidad, y tienen líneas de mando más consolidadas que las pandillas (Ramos, 2003). Estos grupos, entre los que se encuentran “oficinas de cobro”, tienen, además, fuertes vínculos con los GVO del nivel alto, y relaciones con sectores políticos, económicos y de la Fuerza Pública de la ciudad (Torres, 2010)<sup>20</sup>.

Si bien se observan jóvenes vinculados a bandas (Torres, 2012), la relación que tienen estos grupos con la violencia juvenil es en su rol de victimarios (FIP, 2013). Las bandas suelen tener enfrentamientos con las pandillas, sobre todo, por alianzas mal logradas en la comisión de delitos económicos coordinados entre ambos grupos y por el control del territorio, cuando las

pandillas atraen la atención de la Fuerza Pública o de otros GVO (Ramos, 2003). En este tipo de hechos, los principales afectados tienden a ser los pandilleros (Ramos, 2003).

### 3.2.1.3. Nivel alto: “Ganchos” y GPDP

En la cima de la cadena criminal en Bogotá están las organizaciones al servicio del narcotráfico, denominados en la ciudad como Ganchos, así como los GPDP.

En cuanto al primer grupo, los resultados operativos exitosos de la Fuerza Pública contra el expendio y la distribución de droga en el centro, primero en El Cartucho (2002), y recientemente en la calle de Cinco Huecos (2010) y el Bronx (2012), explican el proceso de descentralización y expansión de los Ganchos encargados de este negocio del centro a las periferias de la ciudad (Ávila, 2014).

Según la Policía, 22 Ganchos operan con 73 redes criminales en diferentes zonas de la ciudad, en el expendio y distribución de droga, así como de la realización de crímenes como extorsiones, hurtos y homicidios (El microtráfico: guerra por las ‘ollas’, 2012). Las localidades donde se reporta un mayor número de sitios dedicados a la venta de droga coinciden con las zonas focalizadas de violencia juvenil<sup>21</sup> (Marín, 2014).

Los grupos al servicio del narcotráfico tienen una estructura en red altamente sofisticada, en la que se observan los siguientes roles: proveedor de armamento; asesor financiero; asesores jurídicos; jefes de zona; jefes de seguridad o sayayines (cerca de 15 en cada grupo); administradores por cada sustancia; contador en bodega; taquilleros; y expendedores (Así se lucha contra el microtráfico y las ‘ollas’ en Bogotá., 2014). las bandas, los Ganchos usan violencia selectiva para regular disputas, al tiempo que priorizan la construcción de relaciones de cooperación o connivencia con agentes estatales por medio de prácticas de corrupción (Ávila, 2014).

Según Ávila (2014), la expansión de los Ganchos hacia la periferia de la ciudad ha estado acompañada por un incremento en la subcontratación de bandas y pandillas por parte de estas organizaciones. En ese sentido, en campo se reportó lo siguiente: “Las actividades que ejercen los jóvenes principalmente son las del microtráfico en las ollas, siendo los que trafican la droga y la venden” (Entrevista 2. Lideresa juvenil); “Hay jóvenes involucrados en el expendio de droga; algunos trabajan como mensajeros, pero en algunos casos jóvenes ‘sanos’, que no tienen nada que ver con este negocio, son obligados a llevar encargos con droga de un punto a otro” (Entrevista 96. Funcionaria).

Por lo general, los jóvenes que se involucran en el microtráfico ejercen el rol de campaneros, intermediarios, y transporte o correos humanos. El resto de funciones, como la “taquilla”, la administración del expendio y la provisión de seguridad, la controlan los Ganchos o grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2013). Por ello, algunos entrevistados resaltaban que “Los jóvenes son los que manejan el microtráfico pero no controlan el negocio” (Entrevista 14. Funcionaria).

Las mujeres también participan en el microtráfico. Según un líder entrevistado, en zonas como Patio Bonito (Kennedy) este negocio:

(...) es delegado, en su mayoría a jóvenes mujeres entre los 13 y 20 años que andan en bicicleta por toda la zona vendiendo sustancias. Esta estrategia probablemente se deba a que las mujeres son menos propensas a ser capturadas, y la acción policial de igual forma va a ser más medida y controlada con ellas. (Entrevista 21)

Una situación similar se identificó en Usme (Entrevista 95. Funcionario) y Bosa (Entrevista 5. Líder juvenil).

Por su parte, GPDP, como Las Águilas Negras y Los Rastrojos, hacen presencia en zonas muy restringidas y periféricas de Bogotá, específicamente en las UPZ conurbadas con Soacha (Cundinamarca) en Ciudad Bolívar y Bosa (Defensoría del Pueblo, 2013)<sup>22</sup>. Así mismo, en las entrevistas realizadas en Usme se reportó que en un asentamiento ilegal de esta localidad, conocido como Tocaimita, opera un GPDP no identificado (Entrevista 11. Líder juvenil; Entrevista 95. Funcionario).

Igual que los Ganchos, los GPDP operan en red y ejercen un control indirecto sobre los territorios y poblaciones en los que tienen influencia mediante la contratación de grupos criminales y pandillas locales (Defensoría del Pueblo, 2013). Según Iván Torres (2010), en los barrios fronterizos de Bogotá y Soacha, los GPDP han utilizado bandas y oficinas de cobro que demuestran capacidad de ejercer dominio territorial y poblacional, acceso a fuentes de financiación ilegal, y reclutamiento de nuevos integrantes (en particular, jóvenes)<sup>23</sup>.

En algunos casos las pandillas también son utilizadas por GPDP. Para un líder entrevistado, “Muchas pandillas están organizadas o patrocinadas por los paramilitares porque es una forma visible de control territorial: Los grupos paramilitares le pagan a líderes pandilleros para que controlen el barrio, pero detrás hay una red de narcotráfico y paramilitarismo” (Entrevista 1).

En particular, los GPDP tienen incidencia en la violencia juvenil tanto por la participación de jóvenes en estos grupos, mediante el reclutamiento forzado, como por el ejercicio de asesinatos y amenazas de jóvenes en el marco de campañas de limpieza social (que se abordarán más adelante). Los jóvenes involucrados en GPDP actúan como vigilantes, mensajeros, vendedores de droga, cobradores de extorsiones, y participan directamente en acciones violentas en la modalidad de sicariato (Defensoría del Pueblo, 2013). De igual manera, mujeres y niñas son usadas para el transporte de armas y droga (Defensoría del Pueblo, 2013).

Por último, los GVO del nivel alto han favorecido el incremento de la conflictividad y la capacidad de ejercer violencia de los GVO juveniles. Esto se debe no sólo a la entrega de armas a bandas y pandillas, sino también al poco control que ejercen sobre estos grupos. Si bien en la parte “alta” de la estructura criminal se establecen acuerdos de “no agresión” entre los grupos, para no llamar la atención de las autoridades y maximizar la obtención de rentas (Defensoría del Pueblo, 2013), en la parte “baja” los GVO tienen autonomía, llevan a cabo procesos de expansión y se involucran en disputas con grupos similares.

### Recuadro 2. Zonas de disputa entre GVO del nivel bajo en Bogotá

1. Usaquéen (El Codito y Santa Cecilia): incremento en el número de pandillas, y conflictos entre bandas de mediano alcance, que tienen articulaciones con pandillas locales, por el control de microtráfico, extorsiones y robos (Ávila, 2014; FIP, 2013).
2. Suba (El Rincón y La Gaitana – Lisboa - Bilbao): enfrentamientos armados entre pandillas y parches con redes criminales que manejan el expendio de droga (FIP; 2013).
3. Kennedy (Chucua de La Vaca, María la Paz y ronda del río Bogotá): alquiler de armas, expendio de droga y enfrentamientos por el microtráfico de droga entre pandillas, parches, distribuidores y expendedores de narcóticos (FIP; 2013).
4. Ciudad Bolívar: “Los grupos dedicados al microtráfico se apropian de determinada zona y empiezan a granear el tráfico de drogas, lo cual lleva a que se generen enfrentamientos violentos” (Entrevista 15. Líder juvenil).

Es posible identificar cinco tipos de situaciones críticas de violencia contra jóvenes en Bogotá: (1) asesinatos y amenazas en el marco de acciones de limpieza social; (2) agresiones físicas y restricciones a la movilidad ocurridas en el marco de enfrentamientos entre pandillas, bandas criminales y barras violentas; (3) reclutamiento forzado de jóvenes, y vinculación y uso ilegal de menores de edad por parte de grupos armados; (4) explotación sexual de niñas y mujeres jóvenes; y (5) detenciones arbitrarias y agresiones físicas por parte de agentes estatales.

#### 3.2.2.1. Afectaciones por limpieza social

El tipo de violencia que más afecta a los jóvenes de las zonas marginales de Bogotá son los asesinatos y las amenazas que se realizan en el marco de campañas de “limpieza social”. Estos hechos afectan la vida e integridad de los jóvenes víctimas, así como generan miedo y restringen la libre personalidad de los demás jóvenes (Ramos, 2003; Entrevista 1. Líder juvenil)<sup>24</sup>.

Las campañas de limpieza social son un fenómeno difícil de caracterizar dada la multiplicidad de actores e intereses que intervienen en él.

En primer lugar, se observa la participación de sectores de la comunidad en estas acciones; en particular, JAC, comerciantes y otros líderes barriales. En efecto, esto fue confirmado por la mayoría de entrevistados en que se reportó la problemática de la limpieza social en el trabajo de campo. En concreto, la comunidad participa en la limpieza social, ya sea como autores intelectuales de los hechos, mediante la elaboración de los listados de las víctimas o a través de la entrega de información que permita reconocerlas; o como ejecutantes directos de las acciones a través de los grupos de vigilancia comunitaria (Perea, 2000).

Al menos, tres factores explican la propensión de un sector de la comunidad a apoyar, realizar o justificar estos hechos: (1) la estigmatización de la juventud en estos lugares<sup>25</sup> (Torres, 2010); (2) la afectación efectiva de los habitantes por parte de pandillas o bandas mediante robos o extorsiones, lo que vulnera seriamente la reproducción material de los hogares y genera serias tensiones en la población (Ramos, 2003); (3) La percepción de incapacidad o tolerancia de la Fuerza Pública frente a la criminalidad por parte de los pobladores.

En segundo lugar, autores como Perea (2000) han identificado la injerencia de integrantes de la Fuerza Pública en las campañas de limpieza social, lo cual también se recogió en terreno (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 20. Funcionario). Para Leandro Ramos (2003), en parte, ello se debe a la desconfianza en la capacidad de sanción del sistema judicial entre quienes

participan en estos hechos. La limpieza social termina siendo para dichos agentes estatales una especie de “solución final” a una serie de trasgresiones que no se pueden reprimir por los medios legales (Ramos, 2003)<sup>26</sup>.

Finalmente, también participan en estos hechos GPDP<sup>27</sup>, bandas y oficinas de cobro. Los dos últimos grupos tienden a ser los autores materiales de los hechos, dado que de allí provienen los sicarios contratados para ejecutar los asesinatos (Perea, 2000). Por su parte, el papel de los GPDP evidencia la complejidad del aparato criminal que opera en la realización de estos hechos. Según Torres (2010), en Ciudad Bolívar, Bosa y Altos de Cazuca (Soacha), los GPDP (y antes los paramilitares), proveen lo necesario para realizar las acciones de limpieza: (1) los intermediarios que se ponen en contacto con las JAC y los comerciantes; (2) las relaciones con el mercado del sicariato; y (3) el discurso que legitima y hace “necesario” el uso de la violencia para la solución de conflictos locales, a través del asesinato de los jóvenes considerados como “indeseables”.

En canto a las víctimas, se observan tres perfiles de jóvenes:

En primer lugar están los integrantes de GVO y consumidores de drogas (Pesca, et al., 2010; Entrevista 6. Líder juvenil). En particular, es preocupante la situación en Usme:

Entre 2011 y 2013 se presentó una serie de asesinatos selectivos de jóvenes que estaban involucrados en la venta y el consumo de sustancias psicoactivas por parte de desconocidos en la UPZ La Flora (...) De dos meses para acá, volvieron a presentarse 9 asesinatos de jóvenes relacionados con el tráfico de drogas (Entrevista 95. Funcionario público)<sup>28</sup>.

En segundo lugar, la limpieza social también ha sido usada por GPDP para asesinar a militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, muchos de ellos jóvenes, quienes por su labor podrían dificultar el accionar de estos grupos (Torres, 2010). En ese sentido, la Defensoría del Pueblo (2013) denunció que las Águilas Negras y Los Rastrojos asesinan a jóvenes y otras personas con esos perfiles en Bosa y Ciudad Bolívar con el objetivo de influir en las solicitudes de la comunidad en torno a la legalización de predios informales y neutralizar las denuncias ciudadanas en torno a las afectaciones a la seguridad y la convivencia que estos grupos generan. Corroborando lo anterior, se recogieron testimonios sobre el asesinato reciente de líderes juveniles en estas localidades. En Ciudad Bolívar, un líder señalaba: “Grupos paramilitares, como Las Águilas, realizan estas acciones, posiblemente con apoyo de la Policía y el Ejército. A otro amigo, Carlos, lo asesinó la limpieza y él era un líder social. No se entiende el modus operandi” (Entrevista 1)<sup>29</sup>. En Bosa “Se presentan

también situaciones de limpieza social ligada con tendencias políticas de los jóvenes y asesinatos selectivos” (Entrevista 5. Líder juvenil).

Finalmente, muchos jóvenes son asesinados tan sólo por estar en el sitio y lugar de los hechos en el momento “equivocado”. Así, se evidencia el carácter indiscriminado en la afectación a los jóvenes que pueden tener estos hechos. No obstante, los grupos que realizan estas acciones tratan de legitimarlas, señalando que las víctimas son “(...) ‘drogadictos’, ‘vagos’ o ‘delincuentes’; como amenaza o personas indeseables, para generar en la población una ‘sensación de desesperación’ que haga ‘necesaria’ la oferta de ‘servicios de seguridad’ estables, sólidos y duraderos como los que ellos ofrecen” (Torres, 2010, p.47).

Gran parte de estos asesinatos son precedidos por panfletos amenazantes, listas de eventuales víctimas y amenazas directas contra jóvenes emitidos por GPDP y desconocidos. Por lo general, en esas misivas se restringe el horario de movilidad de los jóvenes “no se quieren a jóvenes después de cierta hora porque se mueren (...) si no acuestan a sus hijos temprano nosotros se los acostamos”; se amenaza a otros sectores estigmatizados, “ (...) ni homosexuales, ni borrachos”; y se señala el supuesto apoyo de parte de la población a estos hechos, “(...) los comerciantes se organizaron para pedirles a ellos que los defendieran, porque la Fuerza Pública no es capaz de hacerlo” (Entrevista 1. Líder juvenil).

Así mismo, en las entrevistas se reportó que, incluso, algunas de estas amenazas han ido dirigidas contra la comunidad académica de colegios públicos (Entrevista 12. Funcionario público), y contra organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, particularmente en Usme (Entrevista 95. Funcionario).

Por último, la limpieza social afecta a todos los jóvenes de estas comunidades y no sólo a las víctimas directas, en tanto generan miedo y afectan su libre personalidad de estas personas. Al respecto, un líder señalaba: “¿A quién le tenemos miedo: a los paramilitares, al Ejército, que para nosotros son los mismos paramilitares, o a la Policía, que parece que la DIJIN organiza los mismos grupos de limpieza; y para nadie es un secreto que los grupos comunales participaron en una época en la limpieza? ¿A quién le tengo miedo?” (Entrevista 1).

### **3.2.2.2. Afectaciones por violencia entre pandillas, bandas criminales y barras violentas**

Gran parte de los hechos de violencia contra jóvenes se enmarcan en los enfrentamientos y las acciones de los GVO del nivel bajo y medio,

especialmente las barras y pandillas, en los que tienen mayor participación los jóvenes.

Como se mencionó anteriormente, las pandillas establecen restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) entre barrios y agreden físicamente o asesinan (en algunos casos) a quienes cruzan estos límites territoriales: “Por ejemplo, a cierta hora no es posible cruzar de Sierra Morena a Perdomo. Hay peleas cuando alguien lo hace; una vez un amigo lo hizo y fue apuñalado”. Estas fronteras operan en horarios específicos: “las fronteras no funcionan todo el día, suelen hacerlo más en las noches” (Entrevista 1. Líder Juvenil).

Los jefes pandilleros imponen estas restricciones:

Las fronteras son establecidas, en muchos casos, por los caciques que controlan el barrio; ellos tienen el control del microtráfico de drogas y de la criminalidad (...) Los líderes de cada barrio establecen esos acuerdos: ‘usted no se meta acá y yo no me meto allá’. (Entrevista 1. Líder juvenil)

Así, buscan garantizar exclusividad sobre el mercado de drogas y la criminalidad en un territorio:

Esas fronteras están relacionadas con el microtráfico de drogas y con una lucha de poder; los líderes defienden su barrio. Las fronteras se crean por ese juego de poder para evitar los conflictos; los líderes defienden que nadie se meta a robar a un barrio sin su permiso. (Entrevista 1)

Los enfrentamientos entre pandillas también afectan a los jóvenes de las comunidades. Así, en Usme, un funcionario entrevistado señalaba:

En la UPZ de Danubio se han presentado enfrentamientos con armas blancas entre dos pandillas. Debido a estos hechos se han presentado 3 ó 4 asesinatos y el desplazamiento de varias familias por cruzar un territorio. Los enfrentamientos están relacionados con el ‘respeto’ por el territorio y afectan a los barrios aledaños al colegio Paulo Freire. (Entrevista 95)

Así mismo, las barras violentas establecen límites territoriales que operan como “fronteras entre fronteras”, dado que sólo restringen el acceso de los hinchas del equipo rival y no de toda la población (Entrevista 1. Líder juvenil). Cuando hinchas de otro equipo ingresan a estos territorios, en ocasiones marcados por las barras, se generan enfrentamientos con armas

blancas, palos, piedras y, en menor medida, armas de fuego (Entrevista 12. Líder juvenil)<sup>30</sup>. Estas acciones van dirigidas principalmente contra los integrantes de las barras, no obstante, por el carácter indiscriminado de este tipo de violencia pueden resultar afectados hinchas que no son agresores, así como el resto de habitantes de la comunidad que queda en medio de los enfrentamientos (Entrevista 7. Lideresa juvenil).

Finalmente, en campo se reportó que existen fronteras entre barrios que no están relacionadas con los GVO sino con conflictos entre los pobladores, que en algunos casos involucran a los jóvenes, ya sea como víctimas o como agresores en el marco de la “defensa” de esos territorios (Entrevista 95. Funcionario).

### **3.2.2.3. Reclutamiento forzado**

Otra situación crítica de violencia contra los jóvenes es el reclutamiento forzado, y la vinculación y uso ilegal de menores por parte de bandas, Ganchos y GPDP.

Según la Defensoría del Pueblo (2013), en Bosa y Ciudad Bolívar, jóvenes entre los 18 y 26 años, y menores en edad escolar (11 - 18 años)<sup>31</sup>, estarían siendo víctimas de reclutamiento forzado por GPDP como Los Rastrojos y las Águilas Negras. Así mismo, de acuerdo con una funcionaria entrevistada, esta situación se presenta en los bordes de San Cristóbal y Suba<sup>32</sup>, y, al parecer, “La estrategia consiste en identificar a la población vulnerable y los jóvenes considerados como ‘problemáticos’ o más arriesgados para reclutarlos” (Entrevista 22). De igual forma, un líder entrevistado señalaba que en localidades como Ciudad Bolívar, algunos grupos de vigilancia comunitaria reclutan jóvenes forzosamente (Entrevista 1).

Los GVO reclutan a los jóvenes mediante diferentes mecanismos (Defensoría del Pueblo, 2013): (1) la inducción a la drogadicción; (2) la entrega de alimentos, artículos de valor y pequeños regalos para construir lealtad y confianza en los jóvenes; (3) el pago de sumas de dineros; y (4) la violencia<sup>33</sup>.

### **3.2.2.4. Explotación sexual de mujeres y niñas**

En las zonas focalizadas de violencia juvenil se identificaron casos de violencia sexual contra mujeres jóvenes y niñas.

Según la Defensoría del Pueblo (2013), en Bosa y Ciudad Bolívar, integrantes de redes de criminalidad de los GPDP inducen y/o constriñen a mujeres entre los 12 y 20 años a la prostitución, trata de personas, pornografía

infantil y turismo sexual. Al respecto, según un líder entrevistado, en la última localidad se observan casos de

(...) trata de blancas; llegan los viernes a ciertos colegios camionetas 4X4 y recogen a un grupo de niñas, y regresaban a la otra semana con ropa nueva y celulares de alta gama. Cuando llegaban incitaban a las demás muchachas a caer en estas prácticas. Se dice que detrás de eso están los paramilitares (Entrevista 3).

Las víctimas de estos hechos son inducidas a prostitución forzada mediante cuatro modalidades (Defensoría del Pueblo, 2013): (1) la entrega de dinero; (2) el ofrecimiento de mejores condiciones de vida; (3) la intimidación y las amenazas; y (4) la inducción a la drogadicción.

Así mismo, en estas zonas operan redes de proxenetismo: las menores inducidas, que usualmente son contactadas en colegios públicos, son obligadas a llevar a 2 ó 3 nuevas víctimas, ofreciéndoles la oferta de servicios sexuales a cambio de dinero (Defensoría del Pueblo, 2013; Entrevista 2. Líder juvenil).

### **3.2.2.5. Afectaciones por violencia de la Fuerza Pública**

Las detenciones arbitrarias, las amenazas y las agresiones físicas de jóvenes por parte de agentes estatales, especialmente la Policía, es el tipo de violencia no letal más común reportado por las personas entrevistadas en el trabajo de campo.

En el marco de acciones de registro y control suelen presentarse la mayoría de eventos violentos y agresiones contra jóvenes por parte de agentes estatales. En campo se identificó un patrón común en este tipo de eventos: la detención de los jóvenes para realizar las requisas usualmente estaba acompañada de amenazas (los agentes mostraban sus armas de dotación de forma intimidatoria), retención ilegal de documentos personales y golpizas (Entrevista 1. Líder juvenil). Además, en algunos casos, los jóvenes eran transportados en patrullas o en vehículos civiles a zonas alejadas de la ciudad por parte de los policías (Entrevista 1. Líder Juvenil; Entrevista 2. Líder juvenil; Entrevista 5. Líder juvenil).

Las víctimas de estos hechos no parecen tener un perfil específico; frente a lo cual un entrevistado apuntaba que “Los jóvenes son objetivo de la Policía” (Entrevista 1. Líder juvenil). Sin embargo, un joven reportó que integrantes de la Policía realizaban prácticas intimidatorias contra líderes sociales en Bosa (Entrevista 5), y según una funcionaria, en muchos casos,

los jóvenes consumidores de droga en Suba son detenidos arbitrariamente en estaciones de Policía y CAI, a pesar de llevar consigo la dosis permitida legalmente (Entrevista 96).

Otro escenario de conflictividad y uso arbitrario de la fuerza por la Policía se configura en sitios públicos donde se concentran grupos grandes de jóvenes integrantes de culturas urbanas. Dos testimonios ilustran estos eventos:

La Policía llega con las motos a sacarlo a uno de los parques, a patearlo, con el bolillo, a desenfundar el revólver, a amenazarlos con que se lo lleva el camión de la UPJ; porque lo vieron fumándose un porro, fumándose un cigarrillo, porque le habló feo (...) (Entrevista 1. Líder juvenil)

(...) tratos arbitrarios de la Policía contra jóvenes que practican deportes extremos en las UPZ de Gran Yomasa y Danubio. Allí se congregan en los parques grupos de 40 ó 50 jóvenes que practican estos deportes, lo cual genera mucha tensión en la comunidad que llama a la Policía, y se presentaban choques y arbitrariedades. (Entrevista 95. Funcionario)

Finalmente, los jóvenes son afectados por “batidas” ilegales que realiza el Ejército en barrios populares. En campo se denunció que camiones provenientes del Meta y del Tolima detienen arbitrariamente a jóvenes, les retienen sus documentos personales y los llevan forzosamente a centros de entrenamiento militar, actuando en contra de las decisiones de la Corte Constitucional en esta materia (Entrevista 4. Funcionario; Entrevista 12. Funcionario).

### **3.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil**

#### **3.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada**

Se identificaron 11 factores de riesgo asociados significativamente a la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la posibilidad de involucrarse en dinámicas de violencia organizada en Bogotá. Con fines analíticos se agrupan estos factores en cuatro modelos explicativos que, cabe destacar, representan mejor la realidad de las zonas focalizadas de violencia que se señalaron en la pasada sección, dada la influencia que allí tienen los GVO.

### 3.3.1.1. Modelo I

En primer lugar, tienden a estar en un nivel alto de riesgo de optar por ser parte de GVO los jóvenes que afrontan la siguiente confluencia de factores: tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales.

Estos tres factores operan como una cadena de influencias que hacen más vulnerables a los jóvenes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada y no son determinantes en sí mismos. Para comenzar, los jóvenes con exceso de tiempo libre “mal empleado”, ya sea por haber desertado del colegio o por no ocupar su horario extra-académico en actividades productivas y lúdicas son más proclives a frecuentar sitios públicos (p.e. parques y bares) donde se reúnen GVO y a entablar relaciones de amistad con integrantes de esos grupos.

Entonces, una vez los jóvenes establecen dichas relaciones tienden a estar mucho más expuestos a la oferta de involucramiento en actividades criminales y violentas por parte de sus pares<sup>34</sup>. Según líderes entrevistados:

(...) hay muchos jóvenes que no hacen nada y se la pasan en el parque, siendo este el lugar que frecuentan distintos actores como barristas o ladrones, y es así como cada joven se va involucrando en estas actividades. (Entrevista 7)

Los espacios públicos son lugares que pueden poner en riesgo a los jóvenes, puesto que son espacios donde se pueden reunir con pares que pueden influenciarlos para que pertenezcan a diversos grupos (...) (Entrevista 2)

En esos escenarios los jóvenes son seducidos, y se les pregunta si quieren pertenecer o hacer vueltas con ellos. Los grupos invitan a cervezas, y en ocasiones regalan dinero, luego de esto, los mismos jóvenes piden trabajar con ellos. (Entrevista 3)

En términos generales, es previsible que los jóvenes que carecen de proyectos de vida, referentes positivos de conducta y entornos protectores sean más vulnerables a la oferta de actividades violentas que les plantean sus pares criminales (Entrevista 4. Líder juvenil).

En particular, el tercer factor es determinante. Cuando los jóvenes pertenecen a familias disfuncionales, donde carecen de figuras de autoridad y de patrones positivos de crianza, tienen una menor supervisión del manejo de su tiempo libre y de sus

relaciones sociales, lo que los puede hacer más influenciables por sus pares (Entrevista 18. Exagresor). Además, en hogares poco cohesionados y monoparentales (usualmente por la ausencia del padre) los jóvenes pueden buscar en GVO el entorno protector del cual carecen (Torres-Castro, 2013).

Los jóvenes en mayor riesgo son los que no tienen la figura paterna en sus familias; los jóvenes entrevistados con problemas de consumo de drogas o pertenencia a pandillas tendían a compartir esa característica: madres solas, de pronto pendientes de ellos, pero sin capacidad para atenderlos. (Entrevista 95)

La ausencia de los padres es impresionante; la mayoría de jóvenes que hemos entrevistado y que consumen drogas o se involucraron en una pandilla comparten la falta de presencia de sus padres. (Entrevista 96)

### **3.3.1.2. Modelo II**

En un contexto de presencia de redes y grupos criminales que expenden y distribuyen droga, los jóvenes drogadictos suelen estar en un nivel alto de riesgo de involucrarse en GVO (Entrevista 96. Funcionaria; Entrevista 28. Funcionaria).

En efecto, la Defensoría del Pueblo (2013) documentó la forma como GPDP que controlan el microtráfico en Bosa y Ciudad Bolívar inducen a los jóvenes a la drogadicción para luego introducirlos en actividades criminales y violentas.

El mecanismo que describe esta entidad opera de igual forma para otros grupos y zonas de la ciudad: en una primera etapa, el vendedor de droga ofrece de forma gratuita una pequeña dosis de droga a los jóvenes con el fin de crear la adicción. Los jóvenes son abordados en parques públicos o en sus colegios (Defensoría del Pueblo, 2013). En ese sentido, según la Alcaldía de Bogotá, en 54 colegios públicos ubicados en Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa y Los Mártires se presenta un alto riesgo de expendio y consumo de sustancias psicoactivas por parte de jóvenes y menores (CEACSC, s.f.).

La segunda etapa inicia una vez se ha creado la adicción en el joven, y ante la carencia de recursos para financiar su necesidad de consumo, el grupo le ofrece la oportunidad de articularse a la cadena del microtráfico como vendedor, usualmente en el mismo lugar donde fue contactado (Defensoría del Pueblo, 2013; Entrevista 11. Funcionario público). En ese punto, el adicto

puede articularse fácilmente a los GVO que controlan la venta de droga; “El mayor problema es el bazuco, cuando entran en una espiral de consumo es difícil que salgan de las lógicas delictivas” (Entrevista 3. Líder juvenil).

De igual forma, los jóvenes que han sido inducidos a la adicción pueden ser más propensos a decidir participar en actividades criminales como hurtos o asesinatos que realizan pandillas o bandas criminales, con el fin de satisfacer su necesidad de consumo (Perea, 2000). De hecho, el consumo de drogas es una práctica recurrente en jóvenes pandilleros y está asociada con la capacidad de realizar acciones riesgosas y temerarias (Perea, 2008; Entrevista 18. Exagresor).

### 3.3.1.3. Modelo III

Los jóvenes también pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando perciben una amenaza contra sus vidas en los entornos sociales a los que pertenecen y han entablado relaciones de amistad o afinidad con personas relacionadas con actividades criminales.

En campo se reportó que una de las razones que puede estar relacionada con la decisión de los jóvenes a involucrarse en la violencia organizada es la percepción de inseguridad en sus comunidades debido a la presencia y acciones de GVO, y a los riesgos contra su vida; “En un escenario de violencia y sobrevivencia, para estar bien tienes que volverte uno de ellos” (Entrevista 3. Líder juvenil); “Un factor de riesgo es la sensación de inseguridad en los barrios” (Entrevista 13. Líder juvenil). Además, son proclives a involucrarse a GVO, los jóvenes que quieren cobrar venganza por una afrenta sufrida; “La necesidad de venganza y de retaliación, en la mayoría de los casos violenta puede llevar al joven a querer pertenecer a estas bandas” (Entrevista 2. Líder juvenil).

Estos jóvenes pueden buscar satisfacer su necesidad de protección o venganza en los GVO; “Sobrevivir en esos entornos es difícil. Un factor de protección es vincularse a un grupo, ya sea pandilla o de identidad, y compartir. No necesariamente son pandillas, pueden ser subculturas urbanas” (Entrevista 14. Funcionaria). En ese sentido, según Ramos (2003) para los pandilleros es muy significativa la provisión de protección y la posibilidad de hacerse respetar a través de su participación en estas organizaciones. Otros autores encontraron que la búsqueda de respeto y estatus mediante la violencia son aspectos centrales para los jóvenes agresores (Pesca, et al., 2010; Perea, 2000). A su vez, el acceso a armas a través de estos grupos puede generar la percepción de “poder y seguridad” que estos jóvenes están buscando (Entrevista 18. Exagresor).

En ese contexto, las relaciones de amistad o afinidad con pares criminales operan como una influencia que favorece el involucramiento de los jóvenes

en estos grupos: ellos pueden facilitarle a los jóvenes los medios para contactarse con los grupos o pueden ser ellos quienes contribuyen a construir la percepción de seguridad por la pertenencia a estos grupos que tienen los jóvenes en riesgo.

### 3.3.1.4. Modelo IV

Finalmente, son vulnerables los jóvenes que provienen de familias disfuncionales en las que tienen que asumir el rol de proveedores de recursos, cuando han desertado del colegio, encuentran dificultades para conseguir trabajo y reciben ofertas económicas por parte de GVO.

La presión que reciben los jóvenes para iniciar su vida laboral a temprana edad por parte de sus padres, en un contexto de vulnerabilidad económica en sus hogares, es un factor de riesgo determinante para el involucramiento juvenil en la violencia organizada (Entrevista 47. Funcionario público). Esto se debe a que el rol de proveedores puede hacer a los jóvenes más propensos a participar activa o esporádicamente en actividades delictivas, ante la premura de las necesidades materiales que afrontan:

En algún momento es la problemática social: usted está un momento de su vida en que no hay con qué comer, y un grupo de amigos le dicen que lo acompañe a ‘capturar gente en la calle’, y usted para ayudar a su mamá lo hace... o el caso típico de algunos hogares en Ciudad Bolívar donde le dan de comer al niño agua de panela con papel periódico, pues usted va a caer, va a hacer algo en contra de su voluntad. (Entrevista 1. Líder Juvenil)

Frente a lo anterior, están en mayor riesgo los jóvenes que adicionalmente han desertado de su colegio y tienen dificultades para conseguir empleo (Entrevista 4. Líder juvenil). Al respecto, Perea (2000) encontró que la mayoría de pandilleros consultados en su trabajo de campo en San Cristóbal tenían varios rasgos en común: habían abandonado temporal o definitivamente el colegio; habían comenzado su vida laboral a muy temprana edad y no habían tenido estabilidad en un solo trabajo; y casi todos estaban en condición de desempleo.

El escenario de riesgo se completa cuando los jóvenes reciben ofertas de actividades ilegales por parte de GVO; “La condición de pobreza de los jóvenes los hace más propensos a participar en grupos armados, muchas veces es el argumento que usan los grupos para reclutarlos, ofreciéndoles mejor calidad de vida y mejores ingresos” (Entrevista 2. Líder juvenil). Según la Defensoría del Pueblo (2013) GPDP, bandas y pandillas ofrecen

dinero a los jóvenes para vincularlos a sus estructuras en zonas de Bosa y Ciudad Bolívar. En ese sentido, Ramos (2003) encontró que los pandilleros también ven a sus agrupaciones como un medio para conseguir recursos económicos.

Finalmente, en barrios con presencia de GVO los jóvenes están expuestos al modelo de vida de los integrantes de pandillas y bandas, lo cual los puede hacer más susceptibles de aceptar la oferta de estos grupos: “En ese sentido en el barrio se dan las dos lógicas, el joven que trabaja en cosas legales, y gana poco, y el que trabaja en las pandillas y gana más” (Entrevista 3. Líder juvenil).

### **3.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada**

En materia de protección, es posible identificar dos conjuntos de factores que hacen más resilientes a los jóvenes frente a la opción de involucrarse en los GVO.

#### **3.3.2.1. Modelo I**

Los jóvenes que son beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o que hacen parte de grupos y redes juveniles tienden a ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

Lo anterior se debe, en primer lugar, a que esta clase de iniciativas y agrupaciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad (Entrevista 15. Líder juvenil; Entrevista 4. Líder juvenil; Entrevista 96. Funcionaria). En particular, ofrecen una amplia variedad de actividades que ocupan “positivamente” el tiempo libre de los jóvenes (en el ámbito cultural, deportivo, político, etc.), atacando un factor de riesgo clave frente a la vinculación a los GVO. Así mismo, muchas de estas actividades están diseñadas para formar habilidades que fortalecen el carácter de los jóvenes en la interacción con sus entornos (en lo laboral, educativo, sus derechos, etc.) (Entrevista 15. Líder juvenil).

En segundo lugar, con estas actividades y agrupaciones los jóvenes pueden construir referentes positivos de comportamiento entre sus pares y líderes, al tiempo que ellos mismos pueden desarrollar habilidades de liderazgo (Entrevista 18. Exagresor). Así, la formación en habilidades específicas, y la opción que tienen los jóvenes de conocer otros entornos y modelos de vida con estas experiencias, les brinda a los jóvenes la posibilidad de construir proyectos de vida diferentes a la violencia (Entrevista 15. Líder juvenil).

Los jóvenes que pertenecen a familias cohesionadas y con sistemas de autoridad funcionales tienen posibilidades de ser resilientes frente a la participación en actividades de violencia organizada, según las personas entrevistadas en terreno.

Estas familias operan como entornos protectores y redes de apoyo para los jóvenes, al tiempo que favorecen la formación de valores y referentes positivos de comportamiento, así como el control de su tiempo libre y sus relaciones sociales (Entrevista 3. Líder juvenil; Entrevista 47. Funcionaria; Entrevista 18. Exagresor).

### 3.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Se identificaron tres escenarios (representados en modelos explicativos) en donde operan factores que incrementan el riesgo de los jóvenes de Bogotá a ser víctimas de violencia por parte de GVO y otros agentes.

#### 3.3.3.1. Modelo I

Tienden a estar en mayor riesgo aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas en la comunidad (p.e. el consumo de drogas o la pertenencia a subculturas urbanas) en sitios públicos “peligrosos”, ya sea por la presencia de GVO y agentes que ejercen violencia contra los jóvenes, o por el desarrollo de actividades criminales en esos lugares.

Vale la pena iniciar con los colegios públicos y sus alrededores, puesto que en estos lugares se reúnen un gran número de amenazas que ponen en riesgo a los jóvenes de la ciudad. En efecto, la Alcaldía de Bogotá identificó 54 colegios oficiales en donde se presenta un grave riesgo para los estudiantes, la comunidad académica y los jóvenes en general, debido a la presencia de puntos de venta de droga en los alrededores de estos sitios, controladas por cerca de 200 bandas y pandillas (Marín, 2014), y por la existencia de redes dedicadas al tráfico de mujeres y niñas para la prostitución forzada (CEACSC, s.f.). Además, en campo se reportó que cerca a colegios públicos de localidades como Usme se reúnen y enfrentan barras violentas de fútbol (Entrevista 95. Funcionario público).

Así, en estos sitios los jóvenes enfrentan la amenaza de ser hurtados o agredidos físicamente por pandillas y bandas criminales; ser lesionados en el marco de los enfrentamientos entre GVO como las barras violentas; ser inducidos a la drogadicción y por esa vía ser reclutados forzosamente o vinculados a grupos criminales; e incluso, ser víctimas de prostitución forzada.

Otros lugares que representan un riesgo para los jóvenes son los parques públicos y las estaciones o Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía. Allí están en riesgo, sobre todo, aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas por la comunidad, como el consumo de drogas o la pertenencia a culturas urbanas (Hip Hop, barristas, deportes extremos, etc.). Cabe recordar la forma como sectores de la comunidad, la Policía y algunos GVO estigmatizan estas prácticas juveniles y las consecuencias que esto tiene en términos de violencia juvenil.

Los parques son sitios peligrosos porque también son punto de encuentro de pandillas, bandas y barristas, así como de venta de droga (Pesca, et al., 2010; Entrevista 7. Líder juvenil; Entrevista 5. Líder juvenil). Allí los jóvenes con el perfil mencionado se enfrentan ante las mismas amenazas señaladas anteriormente (excepto la prostitución forzada), pero además están ante el riesgo de sufrir tratos arbitrarios por parte de la Policía. Así mismo, este lugar puede ser propicio para la ejecución de asesinatos en el marco de la limpieza social.

Por su parte, las estaciones y CAI de Policía representan un lugar de riesgo para los jóvenes con el perfil mencionado en zonas marginalizadas de la ciudad, puesto que allí pueden ser víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias o amenazas. Frente a lo anterior, un líder entrevistado señalaba que jóvenes como él preferían “(...) cruzar la cuadra si veo de frente a un Policía, así en la otra cuadra esté lo que todo el mundo cree que podría ser un ladrón (...) no sé con qué me pueda salir el Policía” (Entrevista 1). Además, una funcionaria enfatizaba que estos sitios también son inseguros porque los jóvenes allí detenidos pueden sufrir arbitrariedades policiales y en esos lugares no hay control por parte de las autoridades civiles a la actuación de los agentes estatales (Entrevista 14).

### **3.3.3.2. Modelo II**

Los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo también pueden ponerse en un nivel alto de riesgo de ser víctimas de violencia, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En particular, hay dos tipos de acciones que representan un mayor riesgo para los líderes juveniles. Primero, las denuncias o acciones públicas que buscan visibilizar las acciones de los grupos armados. Por ejemplo, como se mencionó en la parte de “Situaciones críticas”, líderes comunitarios y juveniles de Bosa y Ciudad Bolívar han estado en riesgo de ser amenazados y asesinados por GPDP que buscan evitar denuncias en su contra o tener más injerencia en espacios de toma de decisión de las comunidades (Torres, 2011; Defensoría del Pueblo, 2013).

Nosotros nos organizamos con miedo; hicimos una marcha de antorchas protestando por el asesinato de jóvenes por grupos paramilitares, pero teníamos miedo de que estuviera detrás la Policía y nos iba a tomar fotos y después esas fotos iban a aparecer en una lista negra. No sabíamos si había alguien infiltrado entre los parches juveniles identificando gente; quién es el líder, quién está gritando. (Entrevista 1. Líder juvenil)

Existe un amplio riesgo al ser líder comunitario. En ocasiones es complicado hablar de algunos temas a nivel local. No hay posibilidad de hacer una denuncia de paramilitarismo si la Policía está presente, puesto que también están inmersos dentro de ese contexto. Si la Policía está presente en donde se estén dando espacios para hablar de estos temas hay desconfianza y riesgo de ser violentado. (Entrevista 5. Líder juvenil).

Segundo, en ocasiones, el trabajo con jóvenes en zonas marginales por parte de diferentes entidades es percibido como un riesgo para los intereses de los GVO (Entrevista 28. Funcionaria). Así, esto se observa en el caso del microtráfico: “Los jóvenes funcionarios de organizaciones sociales o de entidades estatales que están metidos en trabajo con jóvenes pueden ponerse en riesgo en zonas como Comuneros –Usme-, porque al influenciarlos para que dejen el consumo, pueden afectar el mercado de grupos criminales” (Entrevista 95. Funcionario).

### 3.3.3.3. Modelo III

Aunque no es generalizado, las jóvenes y niñas que establecen relaciones sentimentales con integrantes de bandas y pandillas tienden a estar en riesgo. Ello se debe a que algunas de estas mujeres son inducidas por sus compañeros a la adicción a las drogas y por esa vía a la prostitución forzada:

(...) otro rol es el de ser las novias de los duros de las pandillas, el cual representa varios riesgos, ya que se les induce al consumo de sustancias y posteriormente a la adicción (...) de la adicción se pasa a la prostitución por migajas con tal de lograr conseguir lo mínimo para obtener bichas o drogas, y así controlar la ansiedad. (Entrevista 12. Funcionario)

Además, en ocasiones, estas mujeres son agredidas por pandilleros y miembros de bandas cuando terminan su relación sentimental con ellos e inician una nueva relación con otros hombres: “(...) si usted es novia de un ñero y él le termina y después la ve con otro, paila. Mejor dicho, ya se adueña de usted, así el esté con otra vieja” (Torres-Castro, 2013, p.343).

### 3.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Finalmente, la pertenencia a organizaciones y redes juveniles puede ser un factor de protección de los jóvenes frente al riesgo de ser víctimas de violencia.

Lo anterior tiene que ver con el grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones y agrupaciones en la comunidad, y entre los jóvenes agresores, cuando no son percibidos como una amenaza por parte de los grupos en los que ellos participan. Al respecto, vale la pena resaltar dos testimonios, el primero de un líder juvenil que era perseguido por integrantes de una pandilla hasta que ellos buscaron información sobre sus actividades y terminaron por aceptarlo; “hermano, nos equivocamos con usted, usted es un chino bien. Bacano que quiera ayudar a los pelados” (Entrevista 3. Líder Juvenil).

Ser un personaje visible en el barrio es un factor de protección y más si se está vinculado a alguna organización juvenil o cultural, ya que la pertenecía a estos colectivos no significa ningún riesgo hacia las pandillas en términos de retaliaciones violentas o de otro tipo. En otras palabras si las pandillas conocen las actividades de las personas, evalúan cuales representan un riesgo, en este sentido los líderes sociales, son valorados antes que victimizados en la localidad de Rafale Uribe. (Entrevista 8. Líder juvenil)

Además, las agrupaciones y redes juveniles construyen mecanismos de protección colectiva que apuntan a la identificación y comunicación de riesgos a sus participantes (Entrevista 7. Lideresa juvenil; Entrevista 4. Líder juvenil). Así, una funcionaria señalaba que los jóvenes más vulnerables frente a la violencia son aquellos que no tienen conexiones ni redes de apoyos como éstas (Entrevista 14).

## 3.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil

---

### 3.4.1. Caracterización de la infraestructura

Bogotá es el caso de estudio con el mayor número de iniciativas de prevención de la violencia juvenil identificadas entre 2008 - 2014. La ciudad cuenta con 52 intervenciones locales y 50 más que hacen parte de programas nacionales o que se aplican al tiempo en varias ciudades del país, lo que representa el 51,7% del total de las iniciativas registradas (102 de 197).

La mayoría de las intervenciones son implementadas por entidades estatales (35 en solitario y 17 más en alianzas con otros sectores), seguidas de ONG nacionales e internacionales (16 en solitario y 9 en alianzas), fundaciones privadas (13 en solitario y 9 en alianzas), cooperación internacional (2 en solitario y 19 en alianzas) y alianzas entre varios de los anteriores sectores (32).

Así mismo, se observa una predominancia de las iniciativas directas de prevención de la violencia (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil) frente a las indirectas<sup>35</sup>. En el primer grupo, 46 de las intervenciones tienen entre otros objetivos las víctimas de la violencia juvenil, 36 apuntan a los posibles victimarios, 3 a los instrumentos (armas) con que se ejerce la violencia y ninguna a las instituciones que regulan esta materia.

Las principales entidades estatales que participan en la implementación de las iniciativas son la Alcaldía de Bogotá y sus diferentes entidades, el ICBF, el SENA, la Policía Nacional, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República. Este tipo de intervenciones abordan una amplia variedad de temáticas y han priorizado las zonas de concentración de violencia juvenil (Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal, Suba, Usaquén, Los Mártires, entre otras localidades).

Las de carácter indirecto hacen hincapié en la formación de habilidades en los jóvenes para que sean agentes positivos de cambio en sus comunidades; en la inclusión de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad a través de ofertas educativas e inserción laboral; en la atención de factores de riesgo mediante la prevención del trabajo infantil y del consumo de drogas; y en la provisión de actividades lúdicas a jóvenes como una forma de ocupación de su tiempo libre.

Las iniciativas directas pueden agruparse en tres clases: (1) las que buscan prevenir la violencia a través de la formación de habilidades en los jóvenes en relación con sus derechos y deberes, la transformación de conflictos y la creación de una cultura de paz. (2) Las que apuntan a la creación y fortalecimiento de entornos protectores: el colegio, a partir de la prevención de la violencia escolar, el consumo de drogas y la violencia sexual; el hogar, mediante la prevención de la violencia intrafamiliar; y las casas de juventud y los clubes juveniles, que ofrecen actividades lúdicas a los beneficiarios. (3) Las que se dirigen a jóvenes pandilleros (p.e. Programa Trapecistas), barristas (Goles en paz), o adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal; así como a la prevención del reclutamiento y vinculación de jóvenes por parte de GVO (v.g. Mambrú no va a la guerra).

Entre las ONG que implementan las intervenciones en Bogotá se destacan la Cruz Roja Colombiana, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA por sus siglas en inglés), la Fundación Artística y Social la Familia Ayara

(Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil) y la Corporación Movimiento por la Vida. Estas iniciativas hacen énfasis en dos aspectos: (1) en el uso de culturas urbanas (en particular, el Hip Hop) como plataforma para la capacitación de jóvenes en derechos humanos, la PPJ, prevención del consumo de drogas, violencia intrafamiliar, entre otros temas. (2) En el fortalecimiento y acompañamiento de organizaciones juveniles en lo concerniente a su incidencia en políticas públicas, defensa de los derechos juveniles, participación activa y positiva en la comunidad, y prevención de la violencia juvenil.

Otras iniciativas apuntan, como en el caso de las estatales, a la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad (p.e. habitantes de calle), a través de ofertas laborales y educativas; así como a la prevención de la violencia de género, la explotación sexual de menores, y el reclutamiento y vinculación de jóvenes por parte de GVO. En particular, esta última iniciativa se implementó con un enfoque de construcción de redes, lo que, a su vez, tuvo como resultado el fortalecimiento de organizaciones juveniles y la realización de acciones colectivas en contra de hechos violentos relacionados con la limpieza social en Ciudad Bolívar y Bosa.

Las fundaciones que implementan iniciativas de prevención de la violencia juvenil hacen parte del sector privado, específicamente de las empresas Ecopetrol, Bancolombia, BBVA, General Motors, Chevrolet y Terpel. También se destacan la Fundación Restrepo Barco y la Fundación Imago. Estas intervenciones tienden a ser indirectas y se enfocan en la inclusión de jóvenes, a través de su formación laboral y empoderamiento como emprendedores sociales, lo que a veces va acompañado de programas de contratación por parte de los patrocinadores.

Así mismo, hay un fuerte énfasis en la educación, por medio de la financiación de programas de becas de educación superior, el fortalecimiento de la calidad de la educación básica y la prevención de la deserción escolar, y actividades de refuerzo escolar. Este sector también es líder en la implementación de programas de prevención de la violencia escolar y en la formación de habilidades en los estudiantes en resolución de conflictos (p.e. Aulas en Paz y Hermes).

Finalmente, se utilizan prácticas deportivas, en especial el fútbol, para la ocupación positiva del tiempo libre de los jóvenes, y la prevención del reclutamiento forzado, la violencia juvenil y la violencia de género.

Entre las agencias de cooperación internacional se destacan GIZ de Alemania, AECID de España y USAID de Estados Unidos. También tienen protagonismo agencias de las Naciones Unidas como UNICEF, ACNUR,

UNODC, OIM, PNUD, BID y Banco Mundial. Estas agencias operan como financiadores de las iniciativas, que son implementadas por otros agentes en el marco de alianzas. Sólo en dos casos, agencias de cooperación internacional han implementado por sí mismas las iniciativas: en un programa de formación de habilidades empresariales y en una intervención enfocada en el fortalecimiento de entornos protectores.

Finalmente, en la ciudad se observa un número importante de iniciativas de base de difícil caracterización por la falta de información disponible sobre sus actividades, objetivos y resultados alcanzados. No obstante, un indicador aproximado del volumen de estas intervenciones lo aporta la cantidad de organizaciones, colectivos y parches juveniles, así como ONG que trabajan en temas de juventud en la ciudad. En el año 2009, la Alcaldía de Bogotá registró 995 de estas organizaciones, la mayoría de ellas concentradas en Ciudad Bolívar (109), Usaquén (109), San Cristóbal (105), Kennedy (89) y Bosa (70) (Entrevista 1. Líder juvenil; Entrevista 13. Líder juvenil; Entrevista 14. Funcionaria pública).

Las iniciativas comunitarias operan en red, con el apoyo de cooperación internacional, ONG y el Estado (Entrevista 1. Líder juvenil), y tienen un alcance importante en los barrios y las localidades de su procedencia.

### Recuadro 3. Principales actividades de las iniciativas comunitarias

1. Formación en política, derechos humanos, memoria histórica, etc., con el objetivo de construir sujetos proactivos en la comunidad, y creación de nuevos espacios de participación (v.g. las Juntas de Acción Juvenil en Kennedy). Varios de los beneficiarios de estas iniciativas han participado en espacios formales, como el CDJ o las JAC (Entrevista 5. Líder juvenil; Entrevista 21. Líder juvenil).

2. Creación de espacios construcción de acuerdos entre diferentes sectores para mejorar la convivencia. Entre ellos se destacan los pactos de paz entre barras y entre pandilleros; y los escenarios de acercamiento entre jóvenes y Fuerza Pública, que han tenido el propósito de mitigar y cambiar las relaciones de desconfianza entre estos sectores (Entrevista 1. Líder juvenil; Entrevista 13. Líder juvenil; Entrevista 14. Funcionario público).

3. Fomentan la afinidad por culturas urbanas (p.e. el Hip Hop), y desde allí llevan a cabo capacitaciones en temas políticos, convivencia, prevención de consumo de drogas, etc. Se destaca el trabajo de Busthak Records, Hip Hop Pazur, Urban Clan o Casa Blanca (Entrevista 9. Líder juvenil; Entrevista 15. Líder juvenil. Entrevista 7. Líder juvenil).

4. Acciones colectivas contra problemáticas que afectan a los jóvenes: la “Noche sin miedo”, campaña para que los jóvenes se apropien de los territorios y rompan las fronteras y los horarios impuestos por GVO; las tomas de barrios con actividades lúdicas, festivales culturales (p.e. el de Chucua de la Vaca, Kennedy) y Carnavales (v.g. el que lidera el Colectivo Mitchell); y la participación en campañas de entrega de armas (Entrevista 8. Líder juvenil. Entrevista 1. Líder juvenil. Entrevista 12. Funcionario público).

### 3.4.2. Efectividad de la infraestructura

En Bogotá se presenta una situación ambivalente en torno a las iniciativas de prevención de la violencia juvenil. Si bien la infraestructura de prevención es robusta, dado el diseño y ejecución positiva de la política pública de juventud (PPJ), la oferta considerable de iniciativas frente a la problemática, la priorización acertada de las poblaciones objetivo de estos programas, y la atención de varios de los principales factores de riesgo; la efectividad de estas intervenciones es moderada para evitar la continuidad del fenómeno.

Prueba de ello es que, durante el período de estudio, la violencia juvenil se ha caracterizado por una dinamización y reactivación (no necesariamente un recrudecimiento), así como por su persistente concentración en zonas marginales de la ciudad, como se explicó a lo largo del capítulo.

A continuación se presentan los alcances y limitaciones de la PPJ, así como de las intervenciones estatales y de los demás los sectores.

En cuanto al Estado, Bogotá es pionera en la implementación de una PPJ, con la expedición del Decreto 482/2006 (gobierno Garzón 2004 - 2008) que reglamentó la política y el Decreto 299/2011 (gobierno Moreno 2008 - 2012) que instauró el sistema distrital de juventud. Este marco institucional permitió un avance en la atención de los jóvenes (Jiménez, 2011), dado que la Subdirección de Juventud de la Secretaría de Integración Social quedó a cargo de la dirección del sistema, y así, normativamente, se enmarcó esta temática en la política social del Distrito. Ello permitió hacer una aproximación a la violencia juvenil desde la prevención, y no sólo desde la represión, como sería la perspectiva de una entidad a cargo de la seguridad (p.e. la Secretaría de Gobierno).

Además, y en línea con lo anterior, la política se diseñó con un enfoque de derechos, cuya finalidad es la construcción de las condiciones efectivas para la satisfacción de los derechos de los jóvenes (Jiménez, 2011: 93). Así, unos de las prioridades de las administraciones Garzón y Moreno fue abordar

la violencia juvenil, en términos preventivos, a partir de la creación de oportunidades laborales y proyectos de vida para los jóvenes, y el fortalecimiento de la inversión social del Estado en zonas periféricas y marginales (Ávila, 2014). Como resultado, en los últimos años se ha observado una mejora en la cobertura de educación, seguridad alimentaria y salud de los jóvenes de la ciudad (Jiménez, 2011).

Finalmente, se impulsó y estableció un marco normativo al Consejo Distrital de Juventud (CDJ), creados en el Acuerdo 33/2001 de la administración Mockus (2001 - 2003), que han ofrecido a los jóvenes espacios formales de participación en las decisiones que les competen de política pública en la ciudad.

Pese a estos avances, la ejecución de la política ha perdido ritmo y se han identificado falencias en el esfuerzo de las entidades estatales en la prevención de la violencia juvenil. En primer lugar, se ha presentado un proceso paulatino de “securitización” del tema de juventud; de tal forma que, en la práctica, la PPJ se ha subordinado a la política de seguridad y no a la política social. En otras palabras, ha predominado el componente represivo frente a la violencia juvenil por encima del preventivo (Jiménez, 2011). Ello ha conducido a una criminalización de los jóvenes de sectores populares de Bogotá por parte del Estado y a la ejecución de “acciones tendientes a proteger a los jóvenes frente a la violencia y a protegerlos de ellos mismos” como los “toques de queda” (Jiménez, 2011, p.80).

Adicionalmente, en la administración Petro (2012 a la fecha) se ha observado una pérdida de liderazgo en la conducción de la PPJ por parte de la Secretaría de Integración Social (Entrevista 14. Funcionaria). En parte, esto se debe a tres factores: (1) el recorte del presupuesto de la política, que se evidencia en recursos financieros y humanos insuficientes, así como en una menor inversión en lo social (Entrevista 96. Funcionaria). (2) El traslado de rubros que pertenecían a la Subdirección de Juventud hacia el IDIPRON, en detrimento de las demás entidades del sistema (Entrevista 14. Funcionario público). (3) El recurrente cambio de liderazgo en la Subdirección de Juventud (Entrevista 95. Funcionario).

A ello se añaden dificultades en la articulación de las entidades que implementan las iniciativas de prevención de la violencia juvenil. Según funcionarios entrevistados, esto se evidencia en dos niveles: por un lado, entre la Policía y la Secretaría de Integración Social, dada la mutua desconfianza entre los funcionarios de dichas entidades (Entrevista 12; Entrevista 14). Por otro lado, entre el nivel distrital y el local, en lo concerniente a la planificación y retroalimentación de las acciones (Entrevista 95)<sup>36</sup>.

En segundo lugar, se han identificado falencias en el funcionamiento del CDJ. Este mecanismo pasó de generar un amplio entusiasmo a ser motivo de escepticismo entre los jóvenes. Según un funcionario, “Los consejos locales de juventud son un espacio muy deslegitimado, en el cual, si acaso, participa el uno por ciento de los jóvenes” (Entrevista 95). No obstante, tanto esta persona como otra funcionaria resaltan que actualmente los consejeros son muy activos en sus localidades, pero las funciones que ejercen superan con creces sus capacidades, por lo que se encuentran muy desgastados (Entrevistas 95; Entrevista 96).

En particular, las falencias del CDJ obedecen a la falta de acompañamiento a este proceso por parte del Estado, en tres ámbitos: seguridad, dado que en este momento 3 consejeros están amenazados por el ejercicio de sus funciones (Entrevista 95. Funcionario); recursos, ya que algunos de estos jóvenes ejercen sus funciones con su propio dinero (aún si provienen de zonas marginales de la ciudad) y son superados en tiempo y formación técnica y política (Entrevista 96. Funcionaria); y en dirección, “(...) no hay un liderazgo desde arriba que coordine el trabajo de los consejeros” (Entrevista 96. Funcionaria).

Por último, en la administración Moreno se presentó un serio retroceso en uno de los principales resultados de la política de juventud: los espacios de participación juvenil y la oferta estatal en alimentación, educación y salud. En esos ámbitos se presentaron problemas de clientelismo y mala administración de recursos; lo que explica el replanteamiento de la política en términos de recursos y funciones por parte del actual gobierno distrital (Ávila, 2014) (Entrevista 95. Funcionario).

Por su parte, las iniciativas comunitarias, de ONG y de fundaciones privadas, también presentan limitaciones. En ese sentido, personas entrevistadas resaltaban casos de clientelismo entre algunas organizaciones y funcionarios públicos:

Hay dispersión de recursos a estas organizaciones, hay relaciones y vínculos políticos con los alcaldes y dispersión de actividades que hacen trabajo juvenil. La contratación es un elemento de dispersión. Este ha sido el problema de la mesa juvenil (...) Las organizaciones se alinean con JAC y ediles para votar por candidatos y tramitar proyectos a su favor. (Entrevista 4. Líder juvenil)

Además, se observa una fuerte competencia entre las organizaciones por acaparar los espacios de interlocución con el Estado (Entrevista 31. Funcionario).

La participación de los jóvenes es muy vertical, se limita a lo que hacen los ‘juventólogos’ u organizaciones juveniles fuertes (...) Las organizaciones que conocen mejor las alcaldías, que saben cómo participar en los cabildos juveniles y los encuentros ciudadanos usualmente son las organizaciones comunitarias más grandes y más experimentadas que dejaron de hacer proyectos para los jóvenes y la cultura. Hay un interés mayor por la plata. Entonces hay una respuesta desde los jóvenes: ¿por qué no participan los jóvenes en esas actividades?, no nos llaman los políticos. (Entrevista 4. Líder juvenil)

Esto genera conflictos entre las organizaciones juveniles “Las relaciones entre organizaciones sociales, comunidad y partidos políticos minan las relaciones sociales” (Entrevista 4. Líder juvenil). A su vez, dificulta el trabajo en red y el establecimiento de acuerdos colectivos juveniles (Entrevista 96. Funcionaria).

Mientras que un sector de las organizaciones compite por los espacios de interlocución con el Estado, e incluso se involucra en prácticas clientelistas, otro sector se inclina por la desconfianza y el pragmatismo frente a las intervenciones estatales (Entrevista 1. Líder juvenil). En particular, la desconfianza de un amplio sector de los jóvenes frente al Estado tiene relación con varios hechos: los casos de corrupción y clientelismo ya señalados; la mutua prevención entre integrantes de la Fuerza Pública y los jóvenes; y la percepción que tienen algunos colectivos juveniles de estar siendo usados por parte de funcionarios y entidades más interesados en completar sus metas numéricas (registro de las listas de asistentes) que en el desarrollo de los procesos (Entrevista 14. Funcionaria).

Esta situación dificulta el trabajo conjunto de los colectivos y ONG comunitarias con el Estado (Entrevista 96. Funcionaria). Pero no sólo esto, además, se observan otras dos obstáculos en la articulación de estos sectores: Primero, distintos líderes juveniles rechazan el enfoque de algunas iniciativas estatales, impuestas “desde arriba” a las organizaciones, en tanto consideran que un modelo de intervención exitoso debe tener en cuenta el conocimiento de las realidades y necesidades de los jóvenes que tienen las organizaciones (Entrevista 15; Entrevista 3)<sup>37</sup>. Sin embargo, cabe aclarar que una parte de las iniciativas estatales, de fundaciones privadas y de cooperación internacional sí tienen un componente de “abajo hacia arriba”, como se mencionó en la caracterización.

Segundo, otro obstáculo tiene que ver con la forma como operan estos sectores: “Los procesos institucionales desgastan mucho a las organizaciones sociales. Mientras que las organizaciones tienen un ritmo más ‘tranquilo’,

las entidades siempre están corriendo, y eso rompe los procesos” (Entrevista 96. Funcionaria).

Finalmente, el alcance y los resultados de las intervenciones comunitarias en la prevención de la violencia juvenil también se ven limitados por otros aspectos, como (1) las tensiones que tienen las organizaciones juveniles con otras formas de liderazgo en la comunidad (p.e. las JAC y las JAL) (Entrevista 95. Funcionario; Entrevista 1. Líder juvenil); (2) la falta de recursos que afecta la sostenibilidad de los procesos; (3) las dificultades que tienen para administrar de forma transparente los recursos públicos; y (4) la falta de relevo generacional al interior de las organizaciones (Entrevista 96. Funcionaria; Entrevista 1. Líder juvenil).

### 3.5. Conclusiones

---

La violencia juvenil en Bogotá ha sido un fenómeno persistente en el tiempo y focalizado en zonas marginales y periféricas de la ciudad. No obstante, en término agregados, esta problemática ha tenido una intensidad moderada, si se compara con otros casos de estudio como Cali y Medellín. Esto se debe principalmente a las características del crimen organizado y las condiciones de seguridad en la ciudad, dada la ausencia de grandes organizaciones criminales (carteles o grupos del conflicto) que se disputen su control.

El posicionamiento de Bogotá en los circuitos del crimen organizado colombiano no ha cambiado la situación descrita más atrás, pero, de todos modos, sí ha dinamizado y reactivado la violencia juvenil; vía la entrega de armas, la articulación en el negocio del microtráfico y la subcontratación de bandas criminales, pandillas y, en menor medida, barras violentas por parte de organizaciones al servicio del narcotráfico y, marginalmente, GPDP.

Hasta el momento, esta situación no ha significado un incremento notable de los niveles de violencia juvenil, pero plantea serios desafíos en términos de prevención de este fenómeno. En particular, puede conducir a una mayor articulación entre GVO con alta participación de jóvenes y grupos criminales con una estructura organizativa más compleja y con mayores recursos para el ejercicio de la violencia; así como puede favorecer la absorción directa de un mayor número de jóvenes por parte de estos grupos. De igual forma, esto puede dificultar los esfuerzos que se han dirigido para mitigar y prevenir el fenómeno en las zonas focalizadas donde se concentra.

Por lo tanto, una de las primeras acciones a implementar para afrontar esta amenaza es finalizar el proceso de revisión de la política de juventud

por parte de la administración distrital y darle un nuevo impulso a su implementación. Ese proceso de ajuste sería exitoso si lograra crear mecanismos para blindar la política de juventud de prácticas clientelistas y de corrupción, y, al tiempo, recogiera las lecciones positivas que se identificaron en las pasadas administraciones en el manejo de la violencia juvenil.

Entre ellas se destacan la focalización de los esfuerzos institucionales en zonas y poblaciones específicas de la ciudad; el diseño de un enfoque de prevención desde la inversión social del Estado y la creación de oportunidades de vida para los jóvenes en riesgo; y la articulación con otros sectores, en especial las organizaciones de jóvenes.

En relación con lo anterior, el Plan 75/100 puede ser un marco institucional efectivo si se intervienen los sitios de concentración de la violencia e inseguridad de la ciudad, no sólo con las medidas necesarias de represión a la criminalidad, sino también con esfuerzos paralelos en prevención de la violencia juvenil e inversión social.

En todo caso, las acciones estatales en prevención de la violencia juvenil tienen que ir encaminadas a evitar un mayor grado de vinculación de las agrupaciones juveniles violentas, aunque no exclusivamente criminales, en las dinámicas del microtráfico y la criminalidad organizada. En otras palabras, el Estado es más efectivo en este ámbito en la medida que logre prevenir el tránsito de pandillas y barras violentas en bandas criminales.

Por su parte, otra estrategia para afrontar los riesgos que plantea este escenario es sostener el carácter robusto de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil. Como se mencionó en el análisis de los factores de riesgo y protección, las intervenciones de los diferentes sectores han provisto a los jóvenes con mecanismos que fortalecen su resiliencia frente a la opción de vincularse a la violencia organizada.

En línea con esto último, las iniciativas pueden continuar focalizándose en la atención de riesgos como el consumo de drogas por parte de los jóvenes, la ocupación positiva de su tiempo libre y la prevención del trabajo infantil, factores de riesgo significativos en la vinculación de jóvenes a grupos armados en Bogotá.

De igual forma, deben incrementarse las acciones conjuntas para blindar a los colegios públicos y privados de las amenazas a la seguridad e integridad de los jóvenes que allí se presentan en zonas focalizadas de la ciudad; sobre todo frente a la violencia de pandillas, la venta de drogas, el reclutamiento forzado y la explotación sexual de niñas y mujeres.

Así mismo, los diferentes sectores relacionados con la infraestructura de prevención de la violencia juvenil pueden fortalecer o, incluso, crear nuevos espacios de encuentro entre comunidades, jóvenes y Fuerza Pública, con el objetivo de reducir la desconfianza entre estos actores y, de esa forma, prevenir arbitrariedades y abusos por parte de agentes estatales contra los jóvenes.

Por su parte, otra estrategia para afrontar los riesgos que plantea este escenario es sostener el carácter robusto de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil. Como se mencionó en el análisis de los factores de riesgo y protección, las intervenciones de los diferentes sectores han provisto a los jóvenes con mecanismos que fortalecen su resiliencia frente a la opción de vincularse a la violencia organizada.

En línea con esto último, las iniciativas pueden continuar focalizándose en la atención de riesgos como el consumo de drogas por parte de los jóvenes, la ocupación positiva de su tiempo libre y la prevención del trabajo infantil, factores de riesgo significativos en la vinculación de jóvenes a grupos armados en Bogotá.

De igual forma, deben incrementarse las acciones conjuntas para blindar a los colegios públicos y privados de las amenazas a la seguridad e integridad de los jóvenes que allí se presentan en zonas focalizadas de la ciudad; sobre todo frente a la violencia de pandillas, la venta de drogas, el reclutamiento forzado y la explotación sexual de niñas y mujeres.

Así mismo, los diferentes sectores relacionados con la infraestructura de prevención de la violencia juvenil pueden fortalecer o, incluso, crear nuevos espacios de encuentro entre comunidades, jóvenes y Fuerza Pública, con el objetivo de reducir la desconfianza entre estos actores y, de esa forma, prevenir arbitrariedades y abusos por parte de agentes estatales contra los jóvenes.

Por último, estos mismos actores tienen que tomar decisiones coordinadas y oportunas para prevenir y mitigar los asesinatos y las amenazas de jóvenes en el marco de las campañas de limpieza social. Ello debe incluir el establecimiento de acuerdos de no participación en este tipo de hechos por parte de la comunidad y la Fuerza Pública de las zonas marginales de la ciudad donde se presentan este tipo de problemáticas.

## **Cali: ¿Hacia un punto de no retorno en la violencia juvenil?**

*Pablo Alberto Ortega Poveda*

### **4.1 Contexto de la ciudad**

---

#### **4.1.1. Condiciones socioeconómicas**

En términos socioeconómicos, Cali se caracteriza por un lento avance en sus indicadores sociales, que dejaron a la ciudad rezagada en los últimos años frente al resto de los casos de estudio; y por la existencia de amplias zonas con altos niveles de pobreza y marginalidad entre sus habitantes.

En torno a lo primero, es evidente que en la última década Cali se estancó en el mejoramiento de las condiciones sociales de su población. La tercera ciudad más importante del país obtuvo unos avances muy moderados en pobreza, empleo y educación; y, durante dicho período, sólo logró un progreso importante en el NBI.

Para comenzar, Cali pasó de ser la ciudad de interés con el menor índice de pobreza en el 2002 (6,2%) a estar en el segundo peor lugar en el 2013 (4,4%). Así mismo, entre 2003 y 2013, con excepción de Ibagué, Cali fue la única ciudad que no redujo su tasa de desempleo a un solo dígito; la dejó en un 11,6%, por encima del promedio nacional (9,2%). Finalmente, también se estancó en cobertura de educación secundaria: en el 2013 alcanzó un 71,3%, inferiorlos demás casos.

Contrario a lo anterior, la ciudad avanzó en materia de NBI. Si se compara la situación de 1993 con la de 2005, el índice de NBI pasó del 20,6% al 11%. Sin embargo, estos resultados no se han extendido en toda la ciudad y en amplias zonas se presentan altos niveles de pobreza y exclusión

social, específicamente en las comunas: 13, 14, 15, 16 y 21 del Distrito de Aguablanca; 1, 18 y 20 en la zona de ladera; 3 en el centro, y 6 y 7 en el nororiente (Alcaldía de Cali, 2012a). Esos territorios se caracterizan por problemas de hacinamiento crítico en los hogares y una oferta limitada de servicios públicos, dos áreas que mide el índice de NBI (Alcaldía de Cali, 2012a, p. 27; Defensoría del Pueblo, 2014).

Además, en estas zonas se ha concentrado población migrante y desplazada que se ha instalado en Cali en los últimos años, proveniente del Pacífico colombiano (p.e. Buenaventura en el Valle) y de otros municipios del departamento y del norte del Cauca. Según la Alcaldía de Cali (2012b, p.2), entre 1998 y 2011, la ciudad recibió a 19.945 familias (80.947 desplazados), la mayoría de ellas conformadas por mujeres y menores, que se ubicaron en asentamientos ilegales; las zonas más vulnerables de dichos territorios, dado que allí confluyen los peores indicadores sociales y la presencia de grupos armados, criminalidad organizada e inseguridad.

En ese sentido, la persistencia de altos niveles de recepción de población desplazada y su localización en asentamientos ilegales ha restringido la capacidad de atención estatal de las necesidades de la población más vulnerable de Cali (Entrevista 20. Funcionario), y, sobre todo, ha generado las condiciones propicias para que se perpetúen y recrudezcan las dinámicas de violencia juvenil en estas zonas de la ciudad. Sin embargo, es necesario aclarar que, a diferencia de otros casos de estudio, la violencia juvenil no sólo se restringe a las comunas donde están dichos asentamientos; es un fenómeno con una presencia generalizada en la ciudad. Estos aspectos se abordarán en las siguientes secciones del capítulo.

#### **4.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO**

La criminalidad y la violencia en Cali han estado determinadas por dos factores: de un lado, la influencia del conflicto armado, el crimen organizado y el narcotráfico del departamento del Valle; y, del otro, la importancia que tiene la ciudad para el logro de los intereses estratégicos de grupos guerrilleros, paramilitares, al servicio del narcotráfico, etc., dada su condición de tercera ciudad del país y su cercanía al océano Pacífico. Estos aspectos, a su vez, han favorecido los altos niveles de violencia juvenil que ha predominado en la ciudad durante los últimos años.

En este apartado se analizará, primero, cinco etapas relacionadas con la presencia y las acciones de los GVO en la ciudad, resaltando las articulaciones de la violencia juvenil con el conflicto armado y el narcotráfico. Luego, se evidenciará la importancia que tiene el control territorial de Cali

para los GVO y su relación con el recrudecimiento de la violencia juvenil durante el período de estudio.

#### **4.1.2.1. Primera etapa (1970 - 1994): el M19 y los carteles del narcotráfico**

La urbanización del conflicto armado inició tempranamente en Cali con la inserción del M19 a la ciudad en la segunda mitad de los 70 así como con la aparición de grupos al servicio del narcotráfico en el departamento del Valle en los 80.

Desde su creación, el M19 tuvo una influencia importante en los municipios de las cordilleras Occidental y Central del departamento del Valle (Yumbo, Pradera y Florida) y, especialmente, en su capital, donde formó milicias urbanas que operaron en el barrio Siloé y en el Distrito de Aguablanca (Nuñez, 2010).

Por ello, en 1983, el Gobierno Betancur (1982 - 1986) realizó una fuerte ofensiva militar contra el grupo en el barrio Siloé, que lo obligó a un repliegue estratégico. No obstante, esta organización no cesaría sus acciones militares y políticas hasta la firma del acuerdo de paz en 1990 y en esos años tendría una injerencia central en la criminalidad y la violencia de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014; Camacho y Guzmán, 1990).

En efecto, el M19 no sólo tuvo contactos con grupos de limpieza social sino que, sobre todo, fue determinante en la creación o fortalecimiento de las pandillas juveniles que ya operaban en sus zonas de influencia (Urrea y Quintín, 2000).

Las pandillas tienen sus orígenes en la época de los 90. Petecuí es un barrio de invasores a los cuales el M19 les entregó tierras. A partir del proceso de paz con el M19 se crearon las primeras pandillas: aparecieron La Pandilla del Cholao, La del Hueco y La del M, que se dedicaban a seguir la herencia del M19; robaban el carro de leche y la repartían entre los jóvenes y los abuelos más pobres del barrio. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Entre 1982 y 1986, jóvenes del Distrito y Siloé recibieron instrucción militar, dotación y capacitación en el manejo de armas de fuego, y formación ideológica por parte de guerrilleros del M19 (Urrea y Quintín, 2000). Posteriormente, varios de esos jóvenes liderarían pandillas y bandas, y pondrían sus habilidades al servicio de actividades criminales y violentas tanto de estos grupos como de estructuras criminales más organizadas (Urrea y Quintín, 2000).

Por su parte, a finales de los 70 se creó el Cartel de Cali, grupo narcotraficante que sería uno de los principales exportadores de droga a los Estados Unidos entre 1979 y 1994, año en que fue desarticulado por acción de la Fuerza Pública (Los capos del cartel de Cali, 2012). Esta organización centró sus operaciones en la ciudad, dada su cercanía a la costa Pacífica y la facilidad para el lavado de activos, tejiendo una red de corrupción con autoridades civiles e integrantes de la Fuerza Pública. En cuanto a la violencia juvenil, el Cartel vinculó en la organización a algunos exmilitarios e integrantes de pandillas como guardaespaldas y sicarios (Urrea y Quintín, 2000).

#### **4.1.2.2. Segunda etapa (1994 - 1999): las FARC, el ELN y el Cartel del Norte del Valle**

En los 90, las FARC y el ELN coparon los espacios que dejó el M19, mientras que el Cartel del Norte del Valle hizo lo mismo tras la desaparición del Cartel de Cali.

Las FARC y el ELN siguieron la ruta trazada por el M19 en las zonas de ladera y en el Distrito. Estos grupos no solo crearon frentes urbanos y milicias, como los frentes Manuel Cepeda Vargas y Omaira Montoya, respectivamente (Defensoría del Pueblo, 2014), sino que además tuvieron un contacto directo con pandillas y bandas locales, dinamizando la violencia juvenil, al igual que su predecesor.

Yo era líder de esa pandilla y teníamos peleas con otra pandilla. Un día estábamos parados en una esquina y llegó un hombre que decía pertenecer al Frente 30 de las FARC y nos dijo que si queríamos pertenecer a la milicias urbanas de la guerrilla. Eso fue por allá en el año 96. Nos dijo que sólo teníamos que hacer presencia y que la idea era que le prestáramos seguridad al barrio de los jíbaros y los ladrones. A mí me dio risa, porque esos éramos nosotros (...) A los 15 días aceptamos y comenzamos a patrullar el barrio con brazaletes de las FARC y con fusiles. (Entrevista 45. Exagresor)

La misma modalidad fue implementada por el ELN, generando una guerra entre ambos grupos:

Pero las cosas cambiaron cuando entró el ELN como en el 98. El ELN hizo lo mismo que las FARC con nosotros: armó a la pandilla rival y la hizo parte de las milicias urbanas. Entonces se desató una guerra muy tremenda. Había mucha matazón por todo lado y ya era una guerra con armas largas y todo. (Entrevista 45. Exagresor)

Las acciones de las FARC y el ELN recrudecieron la intensidad de la violencia juvenil y establecieron un primer antecedente de subcontratación de pandillas y bandas por parte de grupos del conflicto. Como sucedió con el M19, estas acciones no facilitaron la conformación de cuadros políticos y militares afines a la insurgencia; más bien incrementaron las acciones criminales de los grupos juveniles y facilitaron el uso de jóvenes por parte de organizaciones delictivas (Urrea y Quintín, 2000). Además, la articulación entre el conflicto y la violencia juvenil mostró un rasgo aún presente en Cali: la confrontación de algunos GVO juveniles con los grupos que los han patrocinado (Entrevista 45. Exagresor).

Durante los 90 también fue central la expansión del Cartel del Norte del Valle (CNV) al resto del departamento: las facciones de este grupo han protagonizado el conflicto en Cali y el resto del Valle desde la década del 2000 hasta la fecha.

El Cartel emergió entre 1994 y 1995 como una coalición de narcotraficantes y mandos medios del extinto Cartel de Cali, y tomó el control de las rutas de tráfico de drogas al exterior por el Pacífico y por el corredor que del Cañón de Las Garrapatas conduce el centro del departamento (Tuluá, Buenaventura, Palmira y Cali) (Tobón, 2012). Durante este período, el Cartel mantuvo un equilibrio con los demás grupos que hacían presencia en el Valle (Tobón, 2012).

#### **4.1.2.3. Tercera etapa (1999 - 2004): creación del Bloque Calima de las AUC**

El incremento de las acciones de las FARC y el ELN, así como el rompimiento de los acuerdos tácitos entre los grupos guerrilleros y los narcotraficantes favorecieron la aparición de estructuras paramilitares en el Valle (Nuñez, 2010). Vicente Castaño conformó el Bloque Calima de las AUC en 1999, por solicitud de algunos sectores empresariales y, contó con el apoyo del CNV<sup>39</sup>.

En particular, los secuestros masivos de civiles en la Iglesia La María en Cali por el ELN (1999) y de los diputados de la Asamblea del Valle por las FARC (2002) explican el ingreso de los comandos urbanos del Frente Farrallones del Bloque Calima a la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014). El ejercicio de la violencia por parte de este grupo y del resto de los frentes del Bloque quedó al servicio de las distintas facciones del CNV (Tobón, 2012).

En este período, la Fuerza Pública libró una fuerte ofensiva contra el ELN y las FARC que los obligó a replegarse a las zonas montañosas del departamento. No obstante, estos grupos lograron mantener durante ese tiempo milicias urbanas con un bajo perfil en Cali, encargadas de labores de apoyo logístico a los demás frentes del Valle y del Cauca (Defensoría del Pueblo, 2014; Nuñez, 2010).

#### **4.1.2.4. Cuarta etapa (2004 - 2011): fracturas y guerra en el Cartel del Norte del Valle**

Antes de la desmovilización del Bloque Calima en el 2004, las fracturas internas del CNV condujeron a una guerra entre organizaciones criminales que iniciaron una nueva etapa en la violencia del Valle Cauca.

Este conflicto empezó en el 2003 cuando dos jefes del Cartel conformaron ejércitos privados, apoyados en estructuras sicariales, para librar una guerra por el control del narcotráfico en el centro y norte del departamento: Wilber Varela (Jabón) y Diego Pérez (Diego Rastrojo) organizaron Los Rastrojos; mientras que Diego Montoya (Don Diego), antiguo jefe del CNV, se alió con Giraldo Rodríguez (el Señor de la Camisa Roja) para crear a Los Machos (Nuñez, 2010). Luego, las falencias en la desmovilización del Bloque Calima fortalecieron a ambos grupos, quienes incorporaron a sus filas a exparamilitares, y se expandieron al resto del departamento y al sur del país (Arevalo y Guáqueta, 2014).

Tanto Los Machos como Los Rastrojos hicieron presencia en barrios y comunas de Cali mediante la cooptación y financiación de oficinas de cobro y pandillas, a partir de los cuales se disputaron el control de los mercados ilegales de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014; Arevalo y Guáqueta, 2014).

La captura de Diego Montoya, a finales de 2007, favoreció la derrota militar de Los Machos por parte de Los Rastrojos. Esta victoria le permitió al grupo expandirse hacia la zona de influencia de paramilitares desmovilizados y establecer alianzas con grupos guerrilleros en torno al narcotráfico, consolidando su dominio en el Pacífico colombiano y en la ciudad (Arévalo y Guáqueta, 2014).

#### **4.1.2.5. Quinta etapa (2011 – actualidad): lucha por el control de Cali entre GPDP**

El período final es una nueva edición de la guerra entre GPDP herederos del narcotráfico por el control del Pacífico y el Valle, que se describió anteriormente. Sin embargo, en esta etapa, en la que se enmarca el análisis de la violencia juvenil del capítulo, se observa una expresión urbana de la confrontación, puesto que Cali se convirtió en uno de los principales escenarios de disputa entre estos grupos.

La hegemonía de Los Rastrojos terminó con la incursión de Los Urabeños al Pacífico, en el marco de la expansión de este GPDP del norte al sur del

país. El acceso al Valle fue conseguido por este grupo como resultado de una alianza con Los Machos en el 2011 (Defensoría del Pueblo, 2014). Previamente, el dominio de Los Rastrojos se había comenzado a resquebrajar por la captura de sus líderes (Diego Rastrojo y Los Comba); lo que generó disputas al interior del grupo que fueron aprovechadas por sus rivales (Arévalo y Guáqueta, 2014).

La intensidad del conflicto en Cali tiene que ver con el interés de Los Rastrojos por contener la ofensiva y expansión de Los Urabeños. Sin embargo, es necesario aclarar que esta disputa no se ha librado directamente por estos grupos, sino por pandillas, bandas criminales y oficinas de cobro que se han agrupado mediante alianzas y acuerdos bajo alguno de los dos bandos (Defensoría del Pueblo, 2014). Así, los GPDP han dinamizado y recrudecido la violencia juvenil, como resultado de la estrategia de subcontratación de GVO locales que han usado históricamente los grupos del conflicto que han operado en Cali.

#### **4.1.2.6. Cali como territorio estratégico**

En parte, la tendencia histórica a un alto nivel de violencia en Cali tiene que ver con que la ciudad es un territorio estratégico para grupos del conflicto, carteles del narcotráfico y grandes agrupaciones del crimen organizado.

En efecto, la ciudad es un escenario propicio para la articulación de la “micro-criminalidad” local con la “macro-criminalidad” que tiene conexiones internacionales (Arévalo y Guáqueta, 2014). Cali es un nodo de actividades criminales de pequeña escala que generan rentas ilegales, como la extorsión, el microtráfico y el abastecimiento de insumos para la producción y el procesamiento de narcóticos; y, al tiempo, es una zona estratégica para el control de rutas de tráfico de drogas, armas y contrabando (Defensoría del Pueblo, 2014).

Algunas comunas son centrales para el desarrollo de dichas actividades (Defensoría del Pueblo, 2014): (1) las comunas 1, 18 y 20 de la zona de Ladera tienen salida hacia la zona rural del municipio, los Farallones de Cali y las áreas rurales de los municipios vecinos de Buenaventura y Dagua. Estos territorios permiten la interconexión fluvial hacia el océano Pacífico. (2) En la zona oriental, las comunas 6 y 21 limitan con Palmira y Candelaria, municipios que conforman un corredor hacia la Cordilera Central; y las comunas 14 y 15 colindan con los municipios del nororiente del Cauca (p.e. Puerto Tejada) y tienen algunos barrios por donde pasa el Jarillón del río Cali, corredor fluvial que permite el tránsito entre los departamentos del Valle y el Cauca. (3) Por último, la comuna 10, donde se encuentra el principal centro de acopio de la capital del Valle

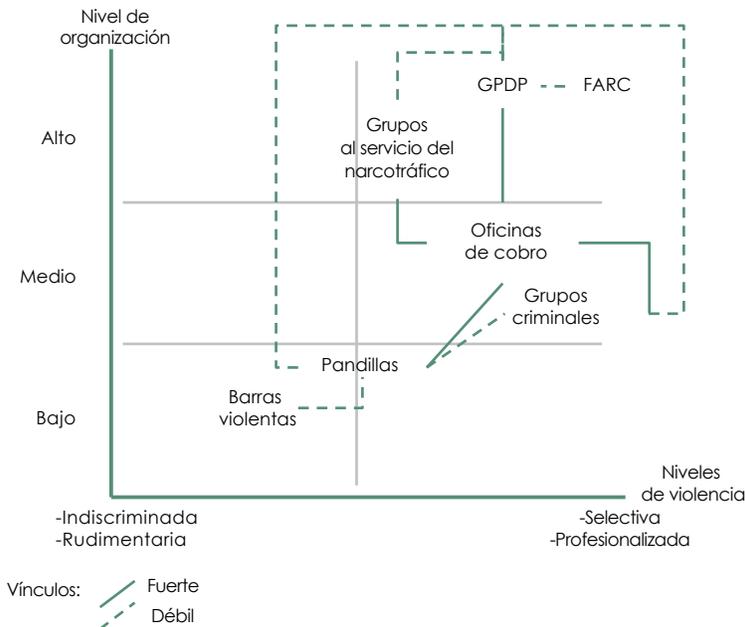
## 4.2. Análisis de la violencia juvenil

### 4.2.1. Los Jóvenes y la violencia organizada

Actualmente, en Cali se observa el mayor nivel de intensidad de la violencia juvenil entre los casos de estudio. Ello se explica, al menos por dos factores, que serán desarrollados más adelante: (1) la alta participación de jóvenes en la mayoría de GVO de la ciudad; de ahí que ellos sean los principales actores materiales (no necesariamente intelectuales) y víctimas de la violencia que se está ejerciendo en el marco de la confrontación por el control de la ciudad entre diferentes GPDP. (2) La transformación de la estructura y las acciones de los GVO juveniles (pandillas y barras violentas) en grupos más organizados, criminales y violentos.

En particular, es posible identificar 7 GVO que tienen relación con la violencia juvenil en Cali: barras violentas de fútbol, pandillas, bandas criminales, oficinas de cobro, grupos al servicio del narcotráfico, grupos guerrilleros y GPDP.

La siguiente figura describe el nivel organizativo de estos grupos (alto, medio o bajo), el tipo de violencia que ejercen (indiscriminado y “rudimentario” o selectivo y profesionalizado) y las relaciones que ellos tienen. Las flechas señalan el proceso de transición que se mencionó anteriormente.



**Figura 2.** Grupos de violencia organizada en Cali (2011 – 2014).

Fuente: Elaborado por CERAC.

A continuación, se abordarán las dos características idiosincráticas de la violencia juvenil en Cali, a partir de un análisis de los GVO de la ciudad en tres niveles:

#### **4.2.1.1. Nivel bajo: pandillas y barras violentas de fútbol**

En Cali, las pandillas tienen un rol central tanto en la violencia juvenil como en las problemáticas de seguridad, tal vez mucho mayor que en otros casos de estudio. Ello se debe, en primer lugar, al proceso de transición de estos grupos, de formas tradicionales de pandillerismo a estructuras más organizadas e involucradas en actividades criminales (Entrevista 35. Funcionaria; Personería de Cali, 2013)<sup>40</sup>.

Sin embargo, no todas las pandillas han sido objeto de estas transformaciones, por lo que es posible observar tres tipos de ellas:

Primero, las pandillas “tradicionales”, conformadas por menores de edad, para quienes los aspectos simbólicos y de identidad que los unen son tan importantes como la defensa del territorio contra los grupos rivales y la participación en actividades criminales como el robo en diferentes modalidades (Entrevista 30. Funcionaria; Entrevista 32. Líder juvenil). Estos grupos se caracterizan por tener una estructura poco jerarquizada; ejercer una violencia indiscriminada en la que prima el uso de piedras, cuchillos y, en pocos casos, armas de fuego; y por su interés de alcanzar reconocimiento público, mediante la visibilización de sus acciones (Callejas, 2012).

Segundo, están las pandillas que adquieren las características de una banda criminal. Estos grupos no se limitan a acciones de defensa y expansión territorial; más bien, su rasgo distintivo es la participación directa o a través de redes, en delitos graves como sicariato, comercio de armas, microtráfico, secuestro, extorsión, asalto a bancos y proxenetismo (Personería de Cali, 2013).

Por último, algunas pandillas han adquirido un perfil más cercano a las oficinas de cobro. Estos grupos se han especializado en actividades criminales de alto impacto y, al igual que las oficinas, ofrecen sus servicios a los GVO de alto nivel), quienes las contratan para la ejecución de acciones específicas a cambio de dinero (Personería de Cali, 2013). La Personería (2013) las denomina “pandillas mercenarias” por su participación en homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de personas, entre otros graves hechos criminales.

#### Recuadro 4. Homicidios en el marco de la violencia pandilleril en Cali

Un indicador del peso que tienen las pandillas en la seguridad de la ciudad lo proveen los homicidios. Según el Observatorio Social de Cali (2014), la participación del número de homicidios cometidos en el marco de enfrentamientos o retaliaciones directas entre pandillas en el total de homicidios de la ciudad fue del 12,9% (238 de 1.843) en el 2012, porcentaje que se incrementó el año anterior a un 17,9% (349 de 1.939).

Además, tanto las pandillas mercenarias como las criminales cuentan con armas de fuego sofisticadas e industriales (fusiles, granadas de fragmentación, revólveres y armas automáticas); tienen capacidad de control de los GVO de bajo nivel en sus zonas de influencia; y operan como intermediarias de dichas organizaciones frente a narcotraficantes y GPDP (Personería de Cali, 2013).

Allí, desde el 2012, es donde se comienza a dar una transición de pandillas a bandas criminales (...) No todas las pandillas han hecho el tránsito, hay tres tipos de pandillas: las pandillas “clásicas” que se caracterizan por el consumo de drogas por parte de sus integrantes; las pandillas que se han convertido en bandas de microtráfico, que son los mismos integrantes de las pandillas pero con armas, medios de transporte y control de venta de drogas; y las pandillas que sólo responden a las oficinas de cobro. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Un segundo aspecto que evidencia la gravedad del fenómeno del pandillerismo es su presencia en casi la totalidad del caso urbano (17 de las 22 comunas) de la capital del Valle. Según la Personería de Cali (2013), la mayoría de estos grupos operan en las zonas más pobres y marginales de la ciudad, como el Distrito de Aguablanca (62 pandillas - el 46,2% del total) y la zona de Ladera (29 - 21,6%). De esas áreas, las comunas 13 y 20 tienen la mayor concentración de pandillas (21 y 26, cada una).

Sin embargo, esta problemática no es exclusiva de los barrios más empobrecidos de Cali; en comunas de estratos medios (p.e. en la 2 y la 3) y altos se observan pandillas con injerencia en hurtos, venta de droga y sicariato. Además, 5 pandillas operan en toda la ciudad: la Alianza y la Contra-alianza, por ejemplo, cuentan con cerca de 200 miembros que se dedican a actividades delictivas y a enfrentamientos con rivales (Personería de Cali, 2013).

Por último, es necesario destacar la alta intensidad de la confrontación entre las pandillas de Cali durante el período de estudio. Si bien esto tiene que ver con la disputa más amplia por la ciudad entre Los Urabeños y Los Rastrojos, los enfrentamientos interpandillas tienen una lógica relativamente autónoma: estos grupos pretenden controlar su territorio de influencia, derrotando o doblegando a sus rivales, con el doble objetivo de acceder a rentas ilegales que fortalezcan su organización y ascender en la estructura criminal de la ciudad.

En efecto, las pandillas son grupos que compiten fuertemente por el control territorial, y la expresión más clara de ello son las restricciones a la movilidad que establecen (Entrevista 38. Funcionaria). En esas líneas imaginarias los grupos controlan, sobre todo, rentas ilegales derivadas del microtráfico (Entrevista 32. Funcionaria). Así, gran parte de los enfrentamientos entre pandillas tienen que ver con la expansión o violación de esas fronteras (Callejas, 2012); puesto que el dominio de territorios para la venta de drogas termina siendo la principal forma en que las pandillas fortalecen su estructura interna (Personería de Cali, 2013).

En ese sentido, es crítica la situación en tres barrios de Cali, El Vergel (comuna 13), Siloé (comuna 20) y Potrero Grande (comuna 21), dado que en estos sitios hay un gran número de pandillas (entre 1 y 2 grupos por cada sector), lo que recrudece las lógicas de disputa territorial, trayendo graves afectaciones a la población (Entrevista 38. Funcionaria; Entrevista 42. Líder juvenil).

Por otro lado, en Cali también hacen presencia barras violentas de fútbol. Estos GVO juveniles son altamente jerarquizados, le dan importancia a los aspectos identitarios y se involucran en enfrentamientos con armas de fuego contra integrantes del equipo rival. El alcance de estos grupos no se limita a zonas marginales de Cali; “Las barras violentas son grupos que incurren en los límites de la intolerancia en cualquier parte de la ciudad. Hay barras en zonas de estrato alto. Por ejemplo, Templete (barrio de estrato 4) es un punto de encuentro donde se enfrentan estas bandas” (Entrevista 35. Funcionario).

Si bien la magnitud de la violencia de las pandillas invisibiliza la de las barras violentas, esta problemática no es marginal. De hecho, parte de las hinchadas más grandes de Cali (Barón Rojo y Avalancha Verde) se han involucrado cada vez más en dinámicas criminales y violentas, al punto que la Personería de Cali (2013) las describe como pandillas que operan en toda la ciudad, con cerca de 200 miembros cada una, y que se involucran en microtráfico y hurtos.

#### 4.2.1.2. Nivel intermedio: bandas criminales y oficinas de cobro

Otros dos tipos de GVO que tienen una alta injerencia en las dinámicas de la violencia juvenil son las bandas criminales y las oficinas de cobro.

Las oficinas de cobro son la máxima autoridad en la estructura criminal de los barrios de Cali; ellas coordinan el trabajo de las bandas y pandillas, y ejercen un rol de intermediación entre estos grupos y las estructuras armadas del nivel alto (Entrevista 23. Líder juvenil)<sup>41</sup>. Las oficinas tienen una larga tradición en la dinámica delictiva de la ciudad, dado que emergieron como ejércitos privados al servicio de GVO durante el auge de los carteles de la droga (Callejas, 2012).

Estos grupos se caracterizan por tener una estructura jerárquica, en la que es posible identificar dos roles: el jefe o “la firma”, y los subordinados o “los muchachos” (cerca de 25 en cada grupo) (Callejas, 2012; Entrevista 30. Funcionaria). El jefe es una persona reconocida dentro del mundo criminal que no sólo agencia los “contratos” con los “clientes” para la comisión de las actividades delictivas que realiza el grupo, sino que también define las tareas que realizan sus subordinados; por su parte los “muchachos” son, en su mayoría, jóvenes (hombres y mujeres) que ejecutan dichas órdenes (Callejas, 2012).

En particular, las oficinas se involucran en cuatro tipos de delitos: (1) los cobros de deudas<sup>42</sup> (Callejas, 2012); (2) El microtráfico de drogas (Personería de Cali, 2013); (3) El asesinato por encargo (sicariato), realizado en su mayoría por jóvenes (Callejas, 2012); (4) Por último, las extorsiones (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 37. Líder juvenil).

Por su parte, las bandas toman la misma forma organizativa de las oficinas, pero tienen una posición menor en la estructura criminal, por lo que son conocidas en terreno como “oficinas de barrio” (Entrevista 23. Líder juvenil). De hecho, estos grupos trabajan para las oficinas y se articulan con ellas en dos vías: de un lado, mediante la subcontratación de la banda para la ejecución de delitos por parte de la oficina y, del otro, a través de la compra y uso de la franquicia criminal de la oficina por parte de la banda (Callejas, 2012)<sup>43</sup>.

Este modelo de interacción opera de igual forma “hacia abajo” con las pandillas. En efecto, las bandas y las oficinas no sólo subcontratan a estos grupos para tareas específicas (Personería de Cali, 2013; Defensoría del Pueblo, 2014), sino que también les ofrecen un padrinazgo y respaldo armado a sus acciones:

Si una oficina trabaja con una pandilla, y otra oficina se mete con esa pandilla, entonces la primera oficina respalda a la pandilla y se inicia una guerra entre ambas oficinas. Ya no es sólo una pelea de bandas o pandillas, es una guerra de oficinas y pandillas, de todo. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Además, los GVO del nivel intermedio expresan este padrinazgo mediante la entrega de armas y la “formación” de pandilleros conforme a sus intereses:

Las bandas subcontratan a las pandillas; pero no sólo eso, también le prestan un entrenamiento a sus miembros y los adaptan a las necesidades específicas de las bandas; les enseñan roles especializados como el robo de celulares, el fleteo, el sicariato, la microextorsión, etc. Las bandas y las pandillas crean ‘cadenas productivas’ del delito y la violencia. (Entrevista 30. Funcionaria)

Para finalizar, cabe destacar tres aspectos que tienen en común los GVO tanto del nivel bajo como del intermedio. En primer lugar, en la base de la estructura criminal de todas estas agrupaciones están los jóvenes (Callejas, 2012). De hecho, la mayoría de los integrantes de las bandas y oficinas son expandilleros:

(...) las oficinas se dedican a reclutar a los pelados de las pandillas para que cometan asesinatos y realicen otras tareas. En el Distrito de Aguablanca, la Comuna 18 y la Comuna 1 reclutan pelados de 16 años para atrás, porque saben que por ley si los cogen tienen que soltarlos de una. (Entrevista 30. Funcionaria)

Las bandas usan a los pandilleros y los terminan convirtiendo en su brazo armado. (Entrevista 35. Funcionario)

En estas organizaciones las mujeres también tienen un rol central:

Son las que andan armadas, cuando llega la Policía y requisas a los pelados de las bandas, las mujeres esconden las armas; les llaman ‘La Bodega’. Son los correos: llevan drogas, armas y municiones. Son ‘ganchos’ o ‘pican arrastre’, es decir, atraen a los hombres de un grupo rival a un sitio para ser asesinados o golpeados por una banda. Hay mujeres gatilleras, ‘que bolean balín’. Son mujeres sicarias. (Entrevista 31)

Otro aspecto que tienen en común los grupos del nivel bajo e intermedio es el tipo de relación que sostienen con las comunidades bajo su influencia. En los barrios afectados por la criminalidad es posible observar dos formas diferentes en que los pobladores se relacionan con estos grupos: por un lado, a través del miedo, dado el alto nivel de afectaciones y desmanes que sufren por cuenta de la violencia de las pandillas, las bandas y las oficinas (Personería de Cali, 2013). Por otro lado, con cierta aceptación; algunos sectores de la población son permisivos y tolerantes frente a las acciones de estos grupos (Entrevista 44. Funcionaria).

En parte, los valores ambivalentes de la comunidad frente a los GVO tienen que ver con tres factores: (1) gran parte de quienes integran estos grupos son familiares o conocidos de los habitantes<sup>44</sup> (Entrevista 44. Funcionaria); (2) algunos habitantes están relacionados directa o indirectamente con las economías criminales que dinamizan estos grupos y dependen materialmente de que ellas sigan funcionando (Entrevista 30. Funcionaria); (3) algunas personas consideran que los GVO les proveen seguridad al barrio (Entrevista 23. Líder juvenil)<sup>45</sup>.

Finalmente, también es similar la respuesta de la Fuerza Pública a los diferentes grupos relacionados con la violencia juvenil en el nivel bajo e intermedio. En campo se señaló como principal problemática la participación de policías en hechos de corrupción relacionados con el microtráfico:

(...) la Policía es la más corrupta, llega a la olla y dice: ‘bueno vengo por la tarifa’. Le dicen a los jíbaros cuándo es el allanamiento. La otra vez cogieron a un gamín, lo llevaron a una cancha y le dijeron: ‘¿se quiere ir?, denos 2 millones y llévese su droga’. El gamín se fue. (Entrevista 31. Líder juvenil).

Así mismo, se reportó que agentes estatales estarían relacionados con la entrega de armas a integrantes de las pandillas y las bandas:

La Policía te coge armado, te coge el arma y te lleva preso (...) pero luego te llevan a un sitio solo y te dice: ‘por esa arma le van a meter 10 años, venga y le proponemos un negocio, nosotros nos quedamos con el arma, usted se va y no pasa nada’. Luego cogen esa misma arma y se la venden a la banda rival. Fuera de eso luego venden las municiones. (Entrevista 31. Líder juvenil)

En suma, los pobladores de estos barrios desconfían de la Fuerza Pública y no denuncian ante las autoridades las actividades de los GVO, dada la percepción que tienen de la entrega de información a bandas por

parte de agentes estatales<sup>46</sup> (Entrevista 42. Líder juvenil; Entrevista 44. Funcionaria).

Las falencias en la atención estatal a los problemas de violencia juvenil e inseguridad también están relacionadas con una limitada capacidad de los organismos de seguridad en Cali.

Los cuadrantes no funcionan allí donde las pandillas y las bandas delincuenciales tienen un poder tan fuerte, y donde no hay personal y dotación suficiente. Frente a un grupo de jóvenes con armas largas, automáticas, granadas y con conocimiento de la zona, donde cualquiera desde cualquier punto puede dispararle a un policía sin ser identificado, es muy difícil que dos policías se enfrenten con unas ‘pistolitas’. En esas circunstancias a los policías les quedan tres opciones: arriesgarse a que los maten; hacerse los ciegos, sordos y mudos; o convertirse en corruptos. (Entrevista 30. Funcionaria)

#### **4.2.1.3. Nivel alto: las FARC, GPDP y grupos narcotraficantes**

En el nivel alto de la estructura criminal se encuentran los GPDP, los grupos al servicio del narcotráfico y, marginalmente, las FARC. Los primeros han sido los principales protagonistas de las problemáticas que afectan la seguridad de Cali, incluyendo el recrudecimiento de la violencia juvenil, durante este período.

Esto se debe, primordialmente, a la competencia entre Los Rastrojos y Los Urabeños por el dominio de Cali para convertirla en un centro de operaciones de sus actividades, y en un lugar de enlace entre dos dimensiones distintas de la criminalidad (Defensoría del Pueblo, 2014; Arévalo y Guáqueta, 2014).

Ambos GPDP se han insertado en dos negocios criminales con conexiones internacionales (Arévalo y Guáqueta, 2014): (1) el contrabando transnacional de diversa variedad de productos que entran por el Pacífico a través del puerto de Buenaventura; y (2) el tráfico de drogas, a través de la participación en las fases intermedias de la cadena controlada por los carteles mexicanos, en específico la compra de base de coca, la producción de clorhidrato y la custodia y embarque de los narcóticos que se envían hacia Centroamérica.

Estas actividades, en especial el narcotráfico, tienen una conexión con la criminalidad local de Cali. Dada la pérdida de importancia de las

organizaciones colombianas en la cadena internacional del narcotráfico, para los GPDP ha tomado mayor importancia el control y la ampliación del mercado interno de drogas en la ciudad (Personería de Cali, 2013; Arévalo y Guáqueta, 2014). Además, son importantes para estos grupos otras fuentes de rentas ilegales como la extorsión y la venta de seguridad (Defensoría del Pueblo, 2014).

Sin embargo, como se aclaró anteriormente, la disputa por el dominio de estos mercados criminales no la ejercen directamente estos grupos sino a través de las bandas criminales, las oficinas de cobro y las pandillas. Según la Defensoría del Pueblo (2014), los GVO del nivel bajo e intermedio son funcionales a los intereses de los GPDP, en tanto les permiten controlar territorios, poblaciones y actividades criminales de una forma relativamente “económica” y “reemplazable”.

Estos dos testimonios ilustran la forma como los GPDP establecen una cadena criminal con las bandas y las pandillas en los territorios, conforme a sus intereses:

El narcotráfico da droga y pide a las bandas que la distribuyan en el territorio. El negocio lo maneja la banda, los jibaros. Se monta una estructura para controlar ese negocio. Se distribuyen las ganancias y la banda se encarga de blindar el mercado: nadie más puede entrar a él. Ellos se encargan de tener blindado al consumidor que se abastece. Por su parte, los ‘paras’ abastecen a las bandas con armas para que puedan amedrentar a sus enemigos. (Entrevista 44. Funcionaria)

En la Comuna 6 y el Distrito de Aguablanca, Los Urabeños y Los Rastrojos tienen personas que controlan la ciudad. Por ejemplo, el ‘Anticristo’ lideraba el microtráfico en la ciudad y tenía un duro en cada barrio que, a su vez, mandaba sobre las personas que manejan el negocio. En Petecú habían 3 duros que manejaban el negocio, recibían órdenes desde arriba. Por eso es más fácil hablar con los de arriba para controlar a esos grupos. (Entrevista 38. Líder juvenil)

En efecto, los GPDP han transformado la dinámica del conflicto de los GVO juveniles. Primero, ellos han entregado dinero, armas, entrenamiento y combatientes a bandas y pandillas, incrementando la capacidad de estos grupos para ejercer violencia (Defensoría del Pueblo, 2014).

Estos grupos llegaron a Cali y comenzaron a proveer armas y medios de transporte a las pandillas. Con la entrada de las

bacrim a la ciudad cambia la dinámica. Los grupos ya no amenazan o corretean a quien cruza la frontera, ahora los matan. Con estos grupos hay herramientas más contundentes de control territorial, que hacen más desgarradora y violenta la solución de los conflictos. (Entrevista 38. Líder juvenil)

Segundo, la alineación de bandas y pandillas a Los Urabeños o Los Rastrojos ha impactado la territorialidad de los barrios con mayores niveles de la violencia. Dado que los grupos locales actúan como una extensión de los GPDP, la disputa por el territorio ya no obedece directamente a los intereses de los grupos locales sino al proyecto de dominio de la ciudad de los GPDP (Defensoría del Pueblo, 2014).

La intensidad del conflicto obedece, además, a cuatro factores: (1) la forma como han incursionado Los Urabeños en Cali; este grupo tiene “(...) la mayoría del control territorial de la ciudad por lo cual han estado acabando con las oficinas, ya que si estos no se les unen, si no les dan el negocio y las armas entonces los desaparecen” (Entrevista 38. Funcionaria). (2) Las guerras internas dentro de estos grupos por la captura de algunos de sus jefes (Arévalo y Guáqueta, 2014). (3) Las dificultades de ambos grupos por dominar por completo a las bandas y oficinas de la ciudad, algunas de las cuales se resisten a la presencia de los GPDP en sus zonas de influencia (Entrevista 30. Funcionaria). (4) La presencia de Los Buenaventureños en algunas comunas, lo que aumenta el número de GPDP en disputa por la ciudad (Arévalo y Guáqueta, 2014).

En otras ciudades, como Medellín, hay pocos grupos armados muy bien posicionados y hegemónicos que organizan a las bandas y las pandillas. Por eso los niveles de disputa y vendettas son bajos. En cambio en Cali hay tres grupos grandes, Los Urabeños, Las Águilas Negras y Los Rastrojos o Buenaventureños, que han llegado a enfrentarse. Además, el nivel de outsourcing ha crecido, y existen por ello bandas súper reconocidas y otras emergentes trabajando en el territorio. Algunas bandas emergentes quieren dejar la segunda liga y quieren subir a la primera liga, quitándoles terreno a las bandas consolidadas. Todo esto hace que el nivel de enfrentamiento y violencia en Cali sea mucho más alto que en ciudades como Medellín o Bogotá. (Entrevista 30. Funcionaria)

Para finalizar, la “ruta de la criminalidad” de los jóvenes agresores en Cali llega hasta estos grupos: muchos jóvenes de pandillas “mercenarias” o “criminales” son reclutados por oficinas, en donde reciben orientación en la comisión de delitos de alto impacto y luego ingresan a los GPDP (Personería de Cali, 2012)<sup>47</sup>.

Al parecer, en la mayoría de los casos, los jóvenes que inician en actividades delictivas buscan ascender en la estructura criminal de forma voluntaria, siguiendo un modelo de “éxito” en el mundo criminal, en el que es necesario posicionarse como el “duro” de la banda que controla el barrio, para así comenzar a relacionarse con narcotraficantes o paramilitares, y terminar siendo la “mano derecha” de un jefe de un GPDP (Callejas, 2012). Lo anterior se retrata en el siguiente testimonio de un pandillero citado por la Personería de Cali (2012): “Uno se relaciona tanto con la delincuencia que el sueño de uno es pertenecer a una oficina grande, si no existe la posibilidad de salirse de esto” (p.21”).

#### Recuadro 5. La injerencia de las FARC en la violencia juvenil en Cali

Milicias de las FARC hacen presencia con un bajo perfil en zonas periféricas de la ciudad (Defensoría del Pueblo, 2014). Este grupo ha subcontratado a bandas de Cali para la ejecución de delitos en esta y otras ciudades del país. Además, las FARC tienen vínculos con Los Urabeños para entrar droga proveniente del Pacífico y el norte del Cauca y para reclutar jóvenes que son llevados a áreas rurales (Entrevista 30. Funcionaria).

### 4.2.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes

En Cali se observan, al menos, seis situaciones críticas de violencia contra jóvenes<sup>48</sup>: (1) asesinatos en el marco de la violencia entre pandillas y bandas criminales; (2) restricciones a la movilidad; (3) reclutamiento forzado de jóvenes y uso ilegal de menores de edad por parte de los GVO; (4) violencia sexual contra las mujeres jóvenes y las niñas ejercida por integrantes de GVO; (5) amenazas a los líderes juveniles; y (6) amenazas y asesinatos en el marco de acciones de limpieza social.

#### 4.2.2.1. Asesinatos en el marco de la violencia entre los GVO del nivel bajo e intermedio

Los hechos violentos que más afectan a los jóvenes de Cali, agresores o no, son los asesinatos, en su mayoría, ocurridos en el marco de los enfrentamientos y la violencia de las pandillas, las bandas criminales y las oficinas de cobro.

Para comenzar, cabe destacar que Cali tiene una de las tasas de homicidios de jóvenes más altas del país. En efecto, según la Policía Nacional, entre 2005 y 2012 la ciudad mantuvo una tasa superior a 100 jóvenes asesinados por cada cien mil habitantes. La tendencia de la tasa de homicidios de

jóvenes cayó entre 2005 y 2008 de 164 a 100, y luego volvió a incrementarse desde el 2009 hasta el 2012 de 119 a 142; los años de mayor intensidad del conflicto por el control de la ciudad entre los GPD. En el año 2012, la tasa de homicidios de jóvenes de Cali superó con creces las de los casos de estudio y la del país<sup>49</sup>. La participación de los jóvenes asesinados en Cali entre el 2005 y el 2012 en el total de jóvenes asesinados en el país, además, alcanzó el 12,3% (7.480 de 60.446). En suma, lo anterior evidencia que Cali es la ciudad de estudio con la problemática más grave de violencia juvenil.

Una parte significativa de estos asesinatos están relacionados con la violencia entre los GVO del nivel bajo e intermedio. Así, para el Observatorio Social de Cali (2014), los homicidios de jóvenes se concentran en las comunas 13, 14 y 21 (Distrito), 1 y 20 (Ladera) y 6 (zona nororiental), áreas donde se observa una fuerte problemática de pandillerismo y presencia de bandas. Además, según el Observatorio (2014), del total de menores de edad asesinados en Cali en el 2012 (225 de 1.843 personas asesinadas), el 39% de los casos estaban relacionados con pandillas y el 21% con venganzas; porcentaje que se incrementó en el 2013: del total de menores asesinados ese año (248 de 1.939 personas asesinadas), el 47% de los casos estaban relacionados con pandillas y el 25% con venganzas.

En particular, los asesinatos de jóvenes están relacionados con cuatro escenarios protagonizados por bandas y pandillas (Entrevista 30. Funcionaria): (1) los enfrentamientos, balaceras e incursiones sicariales entre grupos rivales; hechos que afectan por igual a integrantes de los grupos, jóvenes no agresores y demás pobladores que quedan en medio del fuego cruzado. (2) La transgresión de fronteras invisibles impuestas por estos grupos. (3) Las disputas y vendettas relacionadas con el microtráfico de drogas, en la que se ven afectados jóvenes adictos o involucrados en el negocio<sup>50</sup> (4) Las riñas al interior de estos grupos.

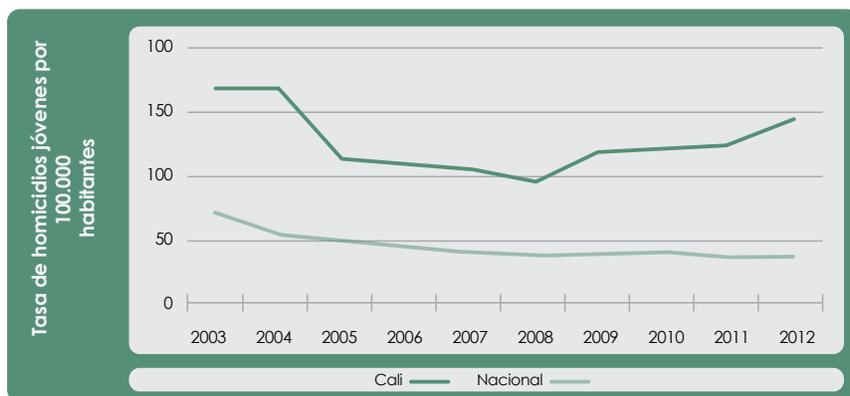


Figura 3. Tasa de homicidios de jóvenes por 100.000 habitantes

Fuente: Datos de la Policía Nacional de Colombia, procesados por CERAC

#### 4.2.2.2. Restricciones a la movilidad

Otro tipo de violencia que afecta gravemente a los jóvenes de Cali son las restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) que establecen las pandillas, bandas y GPDP. Estos hechos vulneran la movilidad, la seguridad y la integridad de los jóvenes y demás pobladores de las zonas de influencia de los GVO.

Por lo general, las fronteras invisibles operan en los límites barriales; los grupos que las establecen prohíben la entrada a ciertos territorios (con amenaza de muerte) a grupos o a personas que consideran un riesgo potencial frente a sus intereses. Con el tiempo, esas líneas pasan a ser reconocidas por la comunidad (Defensoría del Pueblo, 2014). En el 2013, la Policía identificó fronteras en los barrios como Marroquín, El Vergel, Petecuy, Mojica, entre otros en el Distrito; y entre Siloé y Terrón Colorado en la zona de Ladera (Violencia por 'fronteras invisibles' no da tregua en Cali, 2013).

Sin embargo, en barrios como El Vergel y Siloé la situación es mucho más crítica puesto que allí tienen presencia un alto número de GVO. Entonces, la competencia por el dominio de estos barrios fragmentan aún más el territorio: las restricciones a la movilidad no sólo operan en los límites barriales sino también entre sectores e, incluso, entre cuadras (Personería de Cali, 2012; Entrevista 42. Líder juvenil). Así, una funcionaria señalaba que los jóvenes de estos barrios viven en una situación similar al confinamiento forzado (Entrevista 30).

Por último, es necesario señalar que las fronteras invisibles también han limitado el acceso de algunos jóvenes a servicios públicos como la educación y a programas sociales del Estado (Defensoría del Pueblo, 2014).

##### 4.2.2.2.1. Reclutamiento ilegal

El reclutamiento forzado de jóvenes, y la vinculación y uso ilegal de menores de edad por parte de GVO es otra situación crítica de violencia en Cali. Los Urabeños, Los Rastrojos y las FARC son los principales responsables de estos hechos (Entrevista 40. Exagresor; Entrevista 42. Líder juvenil); aunque, según la Defensoría del Pueblo (2014), en determinados casos también reclutan jóvenes grupos narcotraficantes, oficinas, bandas y pandillas.

Los GVO usan dos estrategias para el reclutamiento: (1) amenazas directas a las víctimas o a sus familias, (2) la entrega de dinero y bienes a los jóvenes (Defensoría del Pueblo, 2014). La mayoría de casos conocidos por las autoridades se registran en las comunas 1, 13, 14, 18 y 20 (Defensoría del Pueblo, 2014). Según la Personería de Cali (citada en Arévalo y Guáqueta,

2014), en la zona de Ladera se han reclutado cerca de 300 jóvenes; 70 en la comuna 20 y 232 en la comuna 18 por Los Urabeños, Los Rastrojos y las FARC.

#### 4.2.2.2. Violencia sexual

En las zonas de mayor control territorial por parte de los GVO se identificaron casos de violencia sexual en contra de mujeres jóvenes y niñas.

Entre las ciudades de interés, Cali reporta unas de las cifras más altas de agresiones sexuales a mujeres jóvenes (menores de 25 años) conocidos por Medicina Legal, después de Bogotá y Medellín. Entre el 2005 y el 2012, se reportaron 3.074 casos y la tasa de mujeres jóvenes agredidas sexualmente por cada 100.000 mujeres jóvenes se incrementó de 109 a 144 durante dicho período.

En particular, es preocupante la situación de las niñas menores de 14 años en Cali. Según la Fiscalía (citada en la Personería del Pueblo, 2014, p.36), entre enero y agosto de 2013 se reportaron 705 casos de delitos sexuales contra mujeres en la ciudad, de los cuales el 57% (402 casos) están relacionados con hechos que afectan directamente a niñas menores de 14 años; acto sexual con menor de 14 años, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía infantil y explotación sexual con menores de 14 años.

Si bien no es posible generalizar ni relacionar directamente las acciones de los GVO que hacen presencia en Cali con este tipo de hechos, sí se ha conocido que en determinados casos los integrantes de las bandas y las pandillas participan en eventos de violencia sexual contra los jóvenes y las niñas. En ese sentido, la Personería de Cali (2012) denunció que las pandillas “mercenarias” y “criminales” de la ciudad participan en actividades criminales como el proxenetismo, el tráfico de personas y la inducción a la prostitución de mujeres jóvenes en la ciudad.

Adicionalmente, se han reportado unos casos contados de violaciones sexuales contra mujeres jóvenes por parte de pandilleros e integrantes de bandas, en el marco de dinámicas de retaliación de estos grupos por presuntas denuncias de los habitantes a la Fuerza Pública (Defensoría del Pueblo, 2014) o en el cobro de extorsiones en zonas en las que estos GVO tienen un fuerte dominio territorial.

En los asentamientos o lugares más marginales y vulnerables, en donde existe un mayor control por parte de las pandillas y las bandas delincuenciales se han reportado casos de violencia sexual contra mujeres jóvenes y niñas por parte de

los integrantes de estos grupos. Ellos hacen llamar a estos hechos ‘servicio sexual obligatorio’, violaciones o servicios sexuales forzados, y lo realizan cuando los miembros de una familia o negocio no pueden pagar las extorsiones o deudas con estos grupos armados. En esas circunstancias, luego de llevarse enseres o bienes materiales, los grupos abusan de las mujeres de esas familias. Este caso se reportó en el barrio Brisas de los Comuneros (del Distrito de Aguablanca), en el marco de la desarticulación de una de las bandas que allí operan. (Entrevista 30)

#### **4.2.2.5. Amenazas a líderes juveniles**

En terreno se reportaron amenazas de jóvenes que tienen un perfil de liderazgo comunitario y social por parte de los GVO en zonas gravemente afectadas por la criminalidad como los asentamientos ilegales:

Se han presentado amenazas de muerte a líderes sociales y comunitarios, e integrantes de organizaciones sociales que participan en iniciativas encaminadas a trabajar por el bienestar de las comunidades, en particular, en el asentamiento Cinta Larga. Estas acciones limitan y restringen el trabajo de las organizaciones. Inclusive yo he recibido amenazas por mi labor en la comunidad desde la Junta de Acción Comunal (Entrevista 42. Líder juvenil).

En ese sentido, líderes juveniles de la zona de Ladera y del Distrito de Aguablanca reportaron haber recibido amenazas por parte de desconocidos relacionadas con el ejercicio de sus acciones (Entrevista 31; Entrevista 23).

#### **4.2.2.6. Amenazas y asesinatos en el marco de la limpieza social**

Otros hechos violentos que afectan a los jóvenes de zonas marginales de Cali son los asesinatos y las amenazas en el marco de las campañas de limpieza social.

Aunque en terreno se reportó que estas acciones son menos frecuentes frente a años anteriores, según la Defensoría del Pueblo (2014: 5) se han reportado nuevos casos de amenazas por medio de panfletos que anuncian acciones de limpieza social contra personas vulnerables en los barrios Petecuy<sup>51</sup>, La Casona, El Florialio, Avenida Paso Ancho, Ciudad Córdoba, El Vallado y Antonio Nariño.

## 4.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil

### 4.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

En general, se identifican 13 factores de riesgo asociados de forma significativa al incremento de la vulnerabilidad de los jóvenes de Cali frente a la posibilidad de vincularse a los GVO. Con el propósito de facilitar su análisis, se plantean cuatro modelos explicativos de la forma como operan y se relacionan estos factores.

#### 4.3.1.1. Modelo I

En primer lugar, tienden a estar en un nivel alto de riesgo de vincularse a la violencia organizada aquellos jóvenes que tienen que asumir el rol de proveedores de recursos en sus hogares, cuando ellos viven en contextos muy marginales, en donde hacen presencia y tienen dominio territorial GVO y provienen de familias disfuncionales, en las que los padres no logran insertarse en el sistema laboral.

Un lugar paradigmático en donde se presentan estas características son los asentamientos ilegales y sus alrededores<sup>52</sup>. Como se mencionó anteriormente, gran parte de la población desplazada por la violencia y migrante que llega a Cali se concentra en este tipo de lugares, caracterizados por altos niveles de pobreza, una desconexión casi total de la ciudad en términos socioeconómicos, una muy limitada provisión de servicios estatales, y la presencia de GVO que toman estos territorios como zonas de refugio (Arévalo y Guáqueta, 2014).

La mayoría de las familias que se asientan en estos territorios tienen varias características (Entrevista 30. Funcionaria; Entrevista 42. Líder juvenil): en lo demográfico, son familias extendidas, afrocolombianas, que vienen del Pacífico, y se ubican en el territorio a partir de relaciones de parentesco y vínculos simbólicos regionales; en lo socioeconómico, llegan a conformar hogares con altos niveles de hacinamiento, donde los adultos encuentran serias dificultades para insertarse laboralmente, puesto que solo tienen experiencia en oficios rurales; y en la estructura familiar, no siempre cuentan con la figura del padre.

Estas familias tienden a ser disfuncionales y obligan a los hijos desde temprana edad (10 a 15 años) a tomar el liderazgo en la provisión de los bienes del hogar:

La migración opera como un factor de riesgo. El 50% ó 60% de las personas de los asentamientos son niños y jóvenes. En este tipo de contextos es frecuente encontrar hogares desintegrados y disfuncionales, donde los jóvenes viven con padres con dificultades para incorporarse en la economía de la ciudad o a veces viven con padres de segunda generación, tíos, abuelos, familiares o conocidos, con poca supervisión. Las personas de los asentamientos informales son sumamente vulnerables: sólo conocen actividades económicas rurales (casa, pesca, cultivos, etc.) y viven del rebusque en las zonas urbanas. Son los desahuciados de la economía, los que quedan completamente excluidos de ella. Los jóvenes de estos hogares son empujados a trabajar desde los 10 ó 15 años. (Entrevista 30. Funcionaria)

Sin embargo, los jóvenes que son presionados a buscar trabajo difícilmente logran insertarse laboralmente. Según una funcionaria, la ciudad no ha implementado una política pública que le permita brindar trabajo formal a las poblaciones migrantes y desplazadas que llegan a Cali, ni está preparada para dar respuesta a la creciente demanda de empleo juvenil en la ciudad (Entrevista 30). Además, estos jóvenes suelen no tener acceso a educación ni tampoco tienen formación en ningún oficio laboral, lo que les resta opciones para obtener empleo (Entrevista 44. Funcionaria). Así mismo, en muchos casos, la estigmatización de la cual son objeto las poblaciones de las zonas de asentamiento les cierra toda posibilidad de conseguir empleo o ser capacitados (Defensoría del Pueblo, 2014).

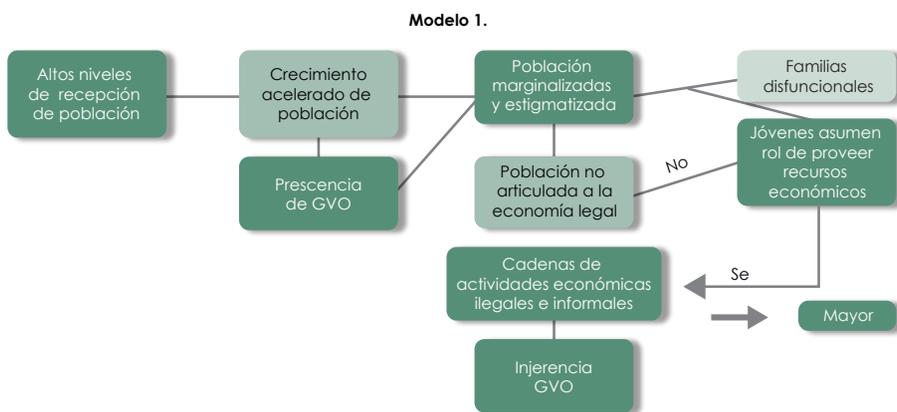
Por el contrario, estos jóvenes tienen mayores posibilidades de insertarse en las cadenas de actividades económicas informales y, en algunos casos, ilegales que se desarrollan en este tipo de territorios y de las que depende una parte importante de la población: venta de bienes hurtados<sup>53</sup>, comercialización de artículos de contrabando, actividades de rebusque, empleos informales de muy baja calidad, etc. (Entrevista 30. Funcionaria; Defensoría del Pueblo, 2014).

En ese tipo de actividades tienden a tener una alta injerencia los GVO. Es necesario recordar que los asentamientos y, en ocasiones, los barrios completos donde ellos se establecen, son territorios controlados por pandillas, bandas y GPDP. Estas áreas son similares a las “zonas de retaguardia” de los grupos del conflicto: un lugar con baja presencia estatal; propicio para el tránsito y refugio de combatientes, armas o droga; con una población muy excluida, de donde es posible reclutar nuevos integrantes (Arévalo y Guáqueta, 2014). En ese contexto, los grupos favorecen, dinamizan o, incluso, protegen estas actividades.

Además, en estos asentamientos se forman microeconomías ilegales: las tiendas se abastecen con “reciclaje”, es decir, productos robados y contrabando, piezas robadas de motos, carros, celulares, etc. Esta situación obliga a las personas involucradas en estos negocios a tener contacto con bandas, para que provean, compren o cuiden estos tipos de actividades, y para que nos los saquen del territorio. Por cuenta de esto la gente toma partido. Las bandas delincuenciales que entran a los barrios rompen el tejido social: obligan a la gente a decidir si están con ellos o no. (Entrevista 30. Funcionaria)

Una vez los jóvenes se involucran en estas cadenas, es más factible que acepten las ofertas de involucramiento en la violencia que les ofrecen los GVO:

Mientras tanto está el monstruo parado en la esquina, en grupo, que sí le ofrece alternativas económicas al pelado. Le dice ‘tome este fierro y consiga lo que necesita, y me da luego la mitad’. Después de eso el pelado ya hizo su primer robo, luego aprende y tenemos al qué ampón con el tiempo. (Entrevista 31. Líder juvenil)



**Figura 4.** Modelo I - Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Fuente: elaborado por CERAC

#### 4.3.1.2. Modelo II

En entornos con serias problemáticas de seguridad, los jóvenes pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando entablan relaciones con pares

criminales, y si perciben una amenaza contra sus vidas en el territorio o encuentran en la violencia una oportunidad para resolver sus conflictos personales.

En efecto, una de las razones que puede estar relacionada con la decisión de los jóvenes a pertenecer a GVO es la búsqueda de protección frente a un entorno hostil. Según la Defensoría del Pueblo (2014), en zonas con graves problemas de criminalidad y violencia<sup>54</sup>, “No pertenecer a una pandilla, en algunos de estos barrios es un factor de riesgo en sí mismo” (p.21). Frente a lo anterior, es ilustrativo el testimonio de un pandillero entrevistado por la Personería de Cali (2014):

En este barrio si usted no participa de una pandilla no es, por ejemplo, aquí operan los lecheros y cuando salga a coger el bus lo van a atacar, así que le toca ser de la banda. Se vinculan por fuerza porque las fronteras lo obligan (...) Para sobrevivir toca cuidarse uno mismo la espalda, entre compañeros. (p. 21)

Así mismo, los jóvenes pueden ver a los GVO como un medio para resolver de forma violenta sus conflictos personales (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 33. Funcionario). A manera de ejemplo, un líder<sup>55</sup> relató cómo en su adolescencia hizo parte de una pandilla y resaltó que, si bien tenía todos los factores de riesgo para involucrarse en este grupo (ausencia de padres, entorno conflictivo y pares violentos), el hecho decisivo para él fue la muerte violenta de su hermano: quería cobrar venganza y halló en la pandilla una oportunidad para hacerlo.

En ese sentido, se identificó que en la ciudad es común que jóvenes reciban “herencias violentas”, es decir, que asuman como suyos conflictos de sus familias (p.e. la muerte de un integrante de ella), lo que los llevaba a buscar venganza y, por esa vía, a reactivar los ciclos de violencia (Entrevista 35. Funcionario).

En ambos casos, las relaciones con pares criminales favorecen la vinculación de los jóvenes a GVO, al proveerles los medios para contactarse con estos grupos.

En particular, este modelo opera mucho mejor en los entornos sociales con graves problemáticas de convivencia y seguridad. Estas zonas se caracterizan por la presencia de altos niveles de conflictividad social y problemas de convivencia, que son asumidos muchas veces por los jóvenes, y que son fácilmente susceptibles de ser tramitados de forma violenta, dada la proliferación de armas de fuego, y la presencia de GVO<sup>56</sup> (Entrevista 25. Funcionaria; Entrevista 38. Funcionaria).

Tienden a ser vulnerables a optar por ser parte de GVO los jóvenes que buscan satisfacer ciertos estándares de vida a través de la violencia y la criminalidad, cuando afrontan la siguiente confluencia de factores: tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales.

Varias de las personas entrevistadas señalaron que, al igual que en Medellín, los jóvenes de Cali están expuestos a una “cultura de la ilegalidad”, relacionada con la influencia del narcotráfico en la ciudad, en la que priman dos valores: el consumo de bienes y servicios costosos y la pérdida del valor de la vida. A juicio de dichas personas, algunos jóvenes se vinculan a GVO para acceder a este estilo de vida<sup>57</sup>:

Los jóvenes adoptan parámetros culturales de la mafia: buscan comprar artículos de lujo como motos, carros, entre otros; y pierden el valor de la vida, saben que van a morir jóvenes, entonces buscan dejar rápido “la pinta” (un hijo). (Entrevista 30. Funcionaria)

El microtráfico funciona como un paraestado: resulta mejor que un joven ingrese a estas bandas porque hay mayor oportunidad de acceder a recursos y tener estatus social. Este paraestado funciona más fácil que el Estado y la sociedad, le ofrece al joven armas, motos, figuras paternas, resultados económicos excelentes, poder de hacer lo que se les dé la gana. (Entrevista 42. Líder juvenil)

En ese contexto, los demás factores operan como una cadena de influencias que facilitan la decisión de los jóvenes a favor de la violencia organizada. Es previsible que los jóvenes más vulnerables sean aquellos que carecen de un proyecto de vida, o que incluso hayan perdido el valor de la vida, (Entrevista 25. Funcionaria; Entrevista 27. Funcionaria) y que provengan de familias que no operan como entornos protectores (Entrevista 23. Líder juvenil; Entrevista 31. Líder juvenil).

Este último factor es determinante puesto que los jóvenes con familias disfuncionales, en donde los padres no son un referente positivo de comportamiento ni supervisan las actividades de sus hijos, son proclives a no ocupar bien su tiempo libre y a construir relaciones de afinidad con criminales.

En ese sentido, tanto el exceso de tiempo libre como las relaciones con pares criminales facilitan el contacto de los jóvenes en riesgo con GVO. En

cuanto a lo primero, un líder juvenil señalaba, “El pelado está ahí parado en la esquina y ve cómo matan a uno, cómo alquilan un arma, cómo las ollas le pasan la droga a otro para que venda” (Entrevista 31). En cuanto a lo segundo, un funcionario daba un ejemplo de cómo opera este factor con los integrantes de barras violentas de fútbol: “Muchos jóvenes que hacen parte de barras están en grave riesgo, dado que estos grupos son caldo de cultivo para pandillas y bandas” (Entrevista 33).

#### **4.3.1.4. Modelo IV**

Los jóvenes que pertenecen a familias cuyos padres o integrantes son permisivos frente a la criminalidad y la violencia son vulnerables a hacer parte de GVO.

En su estudio sobre violencia juvenil en Cali, Lina Solarte (2010) encontró que los jóvenes agresores que ella había entrevistado hacían parte de familias en las que existía cierta aceptación por lo ilegal y donde alguno de sus integrantes tenía antecedentes criminales (como el padre, tío, abuelo o hermano). A su juicio, esa relación tiene que ver con la importancia que tiene la familia como espacio primario de socialización y de aprendizaje de valores (Solarte, 2010).

Así, en campo se reportó que algunas familias facilitaban la entrada de los jóvenes a los GVO, por medio de tres vías: (1) la permisibilidad de los padres frente a la participación o el reclutamiento de sus hijos en GVO, así los padres no estuvieran relacionados con estos grupos<sup>58</sup> (Entrevista 32. Funcionaria). (2) La imitación de los jóvenes del modelo de comportamiento que tienen en familiares violentos o criminales, así los padres no los indujeran directamente a estas prácticas<sup>59</sup> (Entrevista 42. Líder juvenil). (3) La inducción directa de los jóvenes en actividades criminales por parte de los padres<sup>60</sup> (Entrevista 25. Funcionaria).

#### **4.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada**

En términos de protección, se identificó que los jóvenes beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o de grupos y redes juveniles tienden a ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

En ese sentido, Solarte (2010) encontró que uno de los factores decisivos en la trayectoria de vida de los jóvenes no agresores que ella entrevistó en su trabajo de campo en Cali fue la participación en organizaciones o grupos juveniles, desde muy temprana edad (de los 7 a los 12 años).

En parte esto se debe a cuatro factores: primero, este tipo de intervenciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad, no sólo para su ocupación productiva del tiempo libre (p.e. en prácticas culturales, deportivas o lúdicas) sino también en términos de formación de habilidades laborales, cuya ausencia en Cali se observa como un factor de riesgo.

Las organizaciones son importantes porque llegan a los sectores donde está el problema y le dan una alternativa a los jóvenes; le ofrecen una oportunidad de trabajo o de una alternativa cultural (baile, música, danza, artesanías, etc.). Nosotros podemos atravesar las barreras invisibles y llegar ahí donde los jóvenes. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Otro salvavidas son las organizaciones sociales o los proyectos del Estado. Aunque van dirigidos a pocos jóvenes, se rescatan algunas actividades. Estos ofrecen alternativas para ayudar a las comunidades a tener otro tipo de amigos, conocer cosas que no van a conocer con las bandas; pueden ser libres y cruzar de un barrio a otro o viajar a otra ciudad; y a algunos el liderazgo y el trabajo por la comunidad les gusta. (Entrevista 30. Líder juvenil)

En segundo lugar, los jóvenes que se acercan a organizaciones y grupos sociales tienen la posibilidad de conocer otros referentes de comportamiento y modelos de éxito diferentes a los que les plantea el mundo criminal.

Los pelados que están detrás de uno ven que lo que uno hace sí sirve. Por ejemplo, se enteran que vamos a ir a Francia, o salimos en televisión, o ganamos un reconocimiento y dicen: 'yo también puedo hacerlo'. Ahí usted ya dejó la espina, los pelados luego no le fallan ni a un ensayo o a un taller (...) Esto hace que la gente piense que sí podemos, que no todos los jóvenes en Siloé son vándalos, les gusta robar o consumir droga. (Entrevista 31. Líder juvenil)

En estos escenarios, el efecto demostración tiene un peso significativo para que los jóvenes se involucren en la violencia o para que la descarten:

Es la motivación de los mismos jóvenes la que orienta la decisión de ingresar, en los grupos, cuando observan a los otros divertirse (...) La falta de apoyo económico ocasiona que muchos grupos tengan que ensayar y reunirse en las calles, teniendo esto un efecto secundario, tal vez no esperado, pues,

otros jóvenes los puedan observar e interesarse. (Solarte, 2010, pp.150-151)

Tercero, las organizaciones y las iniciativas de prevención cumplen dos roles fundamentales para incrementar la resiliencia juvenil: contribuyen a la construcción de proyectos de vida y a la formación de una conciencia sobre los costos asociados a la violencia (Entrevista 41. Funcionario; Entrevista 30. Líder juvenil).

Finalmente, este tipo de intervenciones funcionan como entornos protectores de los jóvenes, dado que les construyen confianza, los acompañan y los empoderan como líderes sociales y como sujetos de derechos (Entrevista 23. Líder juvenil).

En particular, algunos jóvenes entrevistados señalaron que la posibilidad de ejercer un liderazgo “positivo” en estos espacios fue un factor decisivo para que ellos hicieran un tránsito de ser agresores a líderes sociales. Así, un líder señalaba que muchos de los jóvenes de su organización también ejercían un liderazgo:

Hay pelados de nosotros que ya están enseñando a otros 5 en la calle y esos, a su vez, les enseñan a otros en sus casas. Usted va a loma y ve 15 pelados a los que les está enseñando un pelado de aquí. Nosotros le llamamos a eso ‘multi-réplica’: gestores que generan nuevos gestores. (Entrevista 31)

#### **4.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia**

En general, la mayoría de la población que reside en barrios con graves problemas de inseguridad en Cali, como las comunas 13 y 20, están sujetos a la posibilidad de ser víctimas de agresiones físicas, asesinatos, restricciones a la movilidad, etc. Sin embargo, tienden a estar en un nivel especial de riesgo los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por los GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En concreto, el trabajo de los líderes puede ser percibido como un riesgo para los intereses estratégicos de los GVO, si se dirige a ofrecer opciones para el cambio en la trayectoria de vida de jóvenes agresores con roles importantes dentro de las estructuras de estos grupos (líderes de sicarios, vendedores de droga, etc.).

Ser líder social y comunitario puede ser un factor de riesgo en un barrio con presencia de grupos armados (...) si se mete con los intereses de los grupos armados pueden ponerse en una

situación de riesgo, ganan ‘liebres’ si quieren quitarle gente a los grupos. (Entrevista 25. Funcionaria)

Los jefes de los grupos armados se molestan porque tratan de sacar a los jóvenes de las bandas (...) Pero es mucho más complicado tratar de sacar a los niños muy metidos en transportar droga. Les genera un problema a los grupos para sacar la droga. (Entrevista 42. Líder juvenil)

Este factor de riesgo también opera para funcionarios del Estado (jóvenes o no) y otros líderes como los integrantes de las JAC que trabajan con los jóvenes en temas de prevención de la violencia. Según la Defensoría del Pueblo (2014), estas personas tienen que explicarles a los integrantes de las bandas y los GVO el trabajo que van a realizar con los jóvenes, para tener acceso al territorio, siempre y cuando no interfieran con los intereses del grupo. Los líderes entrevistados también señalaban la importancia que tenía para su seguridad recibir una especie de aval por parte de los GVO para el ejercicio de sus labores (Entrevista 42. Líder juvenil).

#### **4.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia**

Por último, cuando las organizaciones y redes juveniles no son percibidas como una amenaza por parte de los GVO, la pertinencia a este tipo de agrupaciones es un factor de protección de los jóvenes frente al riesgo de ser víctimas de violencia.

Lo anterior tiene que ver con el alto grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones entre las comunidades donde operan, e incluso con algunas pandillas y bandas<sup>61</sup> (Entrevista 25. Funcionaria). Ese nivel de legitimidad permite a los jóvenes -que pertenecen a estas organizaciones- tener un mayor nivel de movilidad en el territorio: “Nosotros estamos blindados los que estamos acá, podemos movernos a donde queramos; hay presidentes del barrio que no pueden ir a muchos lados” (Entrevista 42. Líder juvenil).

## **4.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil**

---

### **4.4.1. Caracterización de la infraestructura**

Entre el 2008 y la fecha actual, se identificaron un total de 78 iniciativas de prevención de la violencia juvenil que han operado en Cali. La mayoría de estas intervenciones (49) hacen parte de programas o proyectos que funcionan a nivel nacional y 29 tienen un alcance únicamente en la ciudad.

La mayoría de las intervenciones son implementadas por entidades estatales (20 en solitario y 21 en alianzas con otros sectores), seguidas de fundaciones privadas (17 en solitario y 18 en alianzas), agencias u organismos de cooperación internacional (3 en solitario y 11 en alianzas), ONG nacionales e internacionales (7 en solitario y 4 en alianzas) y alianzas entre varios de los anteriores sectores (27).

De igual forma, se registra una superioridad de las iniciativas directas de prevención de la violencia (41) frente a las indirectas (37). En el primer grupo, 32 de las intervenciones orientan sus objetivos al trabajo con las víctimas de la violencia juvenil, 26 apuntan a los posibles victimarios, 1 a las instituciones que regulan esta materia y ninguna a los instrumentos con que se ejerce la violencia.

Los principales ejecutores de las iniciativas son: (1) en el Estado, la Alcaldía de Cali<sup>62</sup>, el ICBF, el SENA, la Policía, el Ministerio de Educación y la Presidencia. (2) En el sector privado se destacan Comfandi, Cedecur, Fanalca, y las fundaciones de empresas como Siderúrgica de Occidente, Gases de Occidente, Fundación Carvajal y Fundación Promigas. (3) Entre la cooperación internacional participan las agencias GIZ de Alemania, AECID de España, USAID de Estados Unidos UNODC, BID y PNUD de las Naciones Unidas. (4) Entre las ONG se destacan la Cruz Roja Colombiana, Save The Childre y la Corporación Juan Bosco.

En cuanto al Estado, la mayoría de las intervenciones indirectas pretenden mejorar las condiciones socioeconómicas de la población vulnerable de Cali (entre ellos los jóvenes) a través de programas de nivelación académica y de formación de competencias para el trabajo. Así mismo, algunas intervenciones apuntan a la prevención del consumo de drogas entre los jóvenes.

Por su parte, la mayoría de las iniciativas directas tienen como objetivo la formación de jóvenes en resolución de conflictos, derechos humanos y cultura de paz; mediante capacitaciones en estos temas complementadas con actividades lúdicas (arte, danza, idiomas, deportes, etc). Varios de estos programas se dirigen a jóvenes en riesgo del Distrito, como por ejemplo Tecnocentro y Oriente Ando.

Otro tipo de iniciativas persiguen el fortalecimiento de entornos protectores (hogares, colegio y comunidades), mediante la prevención de la violencia intrafamiliar o la violencia escolar, o la creación de nuevos entornos protectores, como las Casas de Juventud y los Clubes Juveniles y Prejuveniles.

Finalmente, algunas iniciativas estatales trabajan directamente con jóvenes agresores. En particular, el programa “Cali Sin Pandillas” y las “Casas

Francisco Esperanza” (implementado en alianza con el ICBF y la Fundación Paz y Bien) han contribuido a la rehabilitación y reincorporación social de jóvenes pandilleros, integrantes de bandas e involucrados en el microtráfico, desde una perspectiva de justicia redistributiva y compensación de los daños que causaron a la comunidad.

En cuanto a las iniciativas implementadas por fundaciones priman las de carácter indirecto enfocadas en la formación de habilidades para la generación de ingresos, así como aquellas interesadas en mejorar el acceso a educación superior y la calidad de la educación de los jóvenes más vulnerables. Otras intervenciones apuntan a la ocupación productiva del tiempo libre de los jóvenes mediante la oferta de clases artísticas y deportivas. Finalmente, algunos programas tienen como objetivo la prevención del reclutamiento de jóvenes por parte de GVO.

Por último, las iniciativas impulsadas por agencias de cooperación internacional y ONG hacen énfasis en cuatro tipos de actividades: (1) la capacitación empresarial y de habilidades laborales de los jóvenes; (2) la formación de habilidades artísticas y lúdicas de jóvenes vulnerables como mecanismo para la ocupación del tiempo libre y la mitigación de los riesgos de involucramiento en GVO; (3) el fortalecimiento de las familias, las entidades educativas y las comunidades como entornos protectores de los menores frente a la violencia; y (4) la promoción de la participación y movilización de los jóvenes como líderes y agentes de cambio en sus comunidades y con incidencia en los asuntos públicos.

#### 4.4.2. Efectividad de la infraestructura

La infraestructura de prevención de la violencia juvenil de Cali es limitada en términos de oferta y moderada en cuanto a su eficacia.

Si bien en la ciudad se registra un número considerable de iniciativas en comparación con otros casos de interés, estas son insuficientes para abordar la magnitud de la problemática que se presenta actualmente en Cali. La alta participación de jóvenes en GVO, la transformación de GVO juveniles en organizaciones cada vez más criminales, y la persistencia de serias afectaciones a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de los jóvenes evidencian que este esfuerzo en materia de prevención no ha sido ampliamente efectivo.

A continuación se analizan las principales limitaciones y alcances de las iniciativas implementadas por el Estado, la comunidad, las ONG y el sector privado.

La implementación de la PPJ en Cali inició formalmente en el año 2007 con la creación del Sistema Municipal de Juventud, mediante la expedición del Acuerdo Municipal 226 en la administración Tafur Reyes (2007).

Este marco normativo estableció dos principios rectores de la política: en primer lugar, definió que el sistema de juventud quedara a cargo de la Secretaría de Desarrollo, entidad que lidera la política social del municipio; y, en segundo lugar, hizo énfasis en la creación de instancias encargadas de la articulación de los diferentes actores relacionados con el tema de juventud: (1) gobierno, comunidad, ONG, cooperación internacional y sector privado en la Mesa de Trabajo Conjunto en Juventud; (2) organizaciones de jóvenes en el Foro Permanente de Juventud; y (3) jóvenes que representan a sus pares ante el Estado en el Consejo Municipal de Juventud (CMJ).

Sin embargo, precisamente, en esos dos ámbitos se han presentado las principales fallas en la implementación de las iniciativas estatales de prevención de la violencia juvenil. Para comenzar, si bien en términos normativos la PPJ debería ser liderada por la entidad municipal a cargo del tema social -por lo que se esperaría un mayor énfasis en la prevención y el tratamiento de los problemas de convivencia entre jóvenes-, en la práctica las últimas administraciones han hecho un mayor énfasis en los elementos represivos de esta problemática.

En efecto, la principal apuesta en materia de prevención de la violencia juvenil del presente gobierno Guerrero Velasco (2012 – a la fecha), denominada “Oriente Ando” -que se implementa en el marco de la estrategia de seguridad “Territorios de Integración y Oportunidades”- está siendo acompañada por medidas de corte represivo frente a los jóvenes como los toques de queda de menores de edad que se aplican: en espacios públicos, en zonas verdes, en la calle después de las 11 de la noche, durante los fines de semana, en las comunas con mayor número de participación de jóvenes en delitos como homicidios y lesiones personales, entre otros (Arévalo y Guáqueta, 2014).

Así mismo, la pasada administración Ospina Gómez (2008 – 2011) implementó el programa “Cali Sin Pandillas” que, entre otros aspectos, fue cuestionado por el involucramiento de jóvenes en programas de vigilancia comunitaria en barrios con problemáticas de criminalidad. En la comuna 1 muchos de los jóvenes capacitados vigilaron las calles sin tener el aval de la Alcaldía ni contar con la documentación requerida para esa labor (Callejas, 2012); mientras que en el barrio Potrero Grande (comuna 21), el proyecto de vigilancia comunitaria fue una fuente de rivalidades, problemas de convivencia y conflictos entre grupos juveniles por la defensa y control del territorio (Acosta, et al., 2011).

Hay un tema estructural muy complejo, por lo cual es necesario revisar las condiciones logísticas y técnicas de cada administración. El tema de jóvenes en Cali se aborda desde la Secretaría de Gobierno y no desde la Secretaría Social. Eso quiere decir que los jóvenes son vistos como un problema que hay que recuperar. Desde esa óptica no se puede trabajar el tema de prevención; todo se convierte en un asunto de atención y de rehabilitación de jóvenes pandilleros. (Entrevista 44. Funcionaria)

En parte, el enfoque represivo de la PPJ en Cali es un reflejo de la gravedad de la problemática de la violencia juvenil durante el período de estudio. El tránsito de pandillas a bandas y oficinas, así como la mayor participación de jóvenes en todos los GVO, hace mucho más complejo la atención preventiva del problema:

Con las barras y pandillas sí se puede trabajar en prevención, no es un problema legal trabajar con ellas (...) Con las bandas el tratamiento es más policivo, es un tema que se sale de las manos de las demás autoridades. Ese problema se controla con Fuerza Pública, aunque se pueden sacar algunos muchachos de esas bandas una política enfocada en eso tendría poco impacto. Con los cabecillas identificados o con los comandantes de Los Rastrojos, Los Buenaventureños o Los Urabeños no se puede. Ese es un tema de seguridad mucho más completo que le compete al Gobierno Nacional, a la Policía y el Ejército (Entrevista 35. Funcionario)

En segundo lugar, se observan serias falencias en la articulación de los diferentes actores estatales y de otros sectores relacionados con la implementación de la política pública, lo que tiene un efecto determinante en materia de prevención.

Esto se evidencia en primera instancia entre las entidades del Estado: no hay continuidad en los programas que implementan cada una de las administraciones ni se tienen en cuenta los resultados alcanzados anteriormente (Arévalo y Guáqueta, 2014). Adicionalmente, existen problemas en la articulación de las entidades estatales que participan en la ejecución de la política tanto entre las diferentes dependencias de la Alcaldía<sup>63</sup>, como entre el nivel municipal y el nacional.

En segunda instancia, el CMJ no ha funcionado de forma efectiva como un espacio de participación formal de los jóvenes. Según un líder esta es una de las principales falencias de la PPJ, puesto que el modelo de

participación ha generado pocos resultados, desgaste en las comunidades y frustración en los jóvenes (Entrevista 23). A su juicio, esto tiene que ver con el escaso acompañamiento estatal a los consejeros, quienes no han sido capacitados sobre el contenido de la política, cómo se implementa y qué beneficios genera.

Finalmente, también se han observado serias limitaciones en la articulación entre el gobierno municipal y los demás sectores que intervienen en la infraestructura de prevención. En parte, esto tiene que ver con el desconocimiento de algunas entidades sobre el trabajo y los resultados alcanzados por las organizaciones de base (Entrevista 25. Funcionaria)<sup>64</sup>.

Ello contrasta totalmente con la visión que tienen muchos líderes sobre la importancia que tiene su trabajo para ofrecerles alternativas de vida a los jóvenes. En todo caso, la visión limitada de algunos funcionarios públicos dificulta la posibilidad que tiene el Estado de articular y aprovechar el potencial que tienen estas iniciativas para fortalecer la resiliencia de los jóvenes frente a la violencia organizada (ver la sección Factores de riesgo y protección).

Para terminar, las entidades estatales tienen falencias de planeación y liderazgo que afectan su trabajo en materia de prevención<sup>65</sup>, en tanto sólo se están implementando las actividades sin desarrollar los procesos que se requieren para la efectividad de las intervenciones (Entrevista 44. Funcionaria).

Así mismo, las iniciativas estatales son implementadas sin recursos suficientes y en muchos casos con poco apoyo por parte de las entidades ejecutoras. Tal es el caso de programas como Cali Sin Pandillas, que, a juicio de Callejas (2012), no logró cumplir las expectativas de los jóvenes, ni proveerles garantías para que pudieran salir de la violencia, por lo que pocas pandillas continuaron inscritas en el programa. En estos casos, las intervenciones estatales terminan promoviendo la frustración y la desconfianza juvenil frente al Estado (Entrevista 23. Líder juvenil).

Una última limitación del Estado tiene que ver con problemáticas estructurales frente a los cuales la PPJ no alcanza a dar los resultados suficientes. A diferencia de casos como Bogotá, donde la política de prevención se ha implementado de la mano con inversión social en las zonas más pobres de la ciudad, en Cali no hay avances significativos en las condiciones sociales de los jóvenes de las zonas más marginales. En ese sentido, una funcionaria consultada concluía:

La política pública no da una respuesta integral a los problemas de la juventud (...) También hay problemas estructurales.

Con un proyecto para 300 personas no se hace nada, es necesario pensar cuáles son las alternativas y las necesidades de los jóvenes. Esto tiene que pasar por: modelos educativos, por qué las escuelas no retienen a los jóvenes, los expulsan y no responden a sus expectativas y necesidades. Empleabilidad. Cali tiene dificultades para absorber a la población juvenil. Cuando fallan estos dos elementos se rompe la cadena: no hay una alternativa clara y el efecto de las iniciativas se vuelve muy limitado ante este contexto tan difícil (Entrevista 44. Funcionaria).

Por su parte, los demás sectores relacionados con la infraestructura de prevención también presentan dificultades para el ejercicio de sus labores.

Uno de los principales retos de las iniciativas comunitarias y ONG en Cali es la sostenibilidad de los procesos; “Una de las principales dificultades de nosotros no es la inversión, es la sostenibilidad. Es la necesidad de buscar una estructura para que los procesos continúen. No hay infraestructura, materiales ni recursos para que los jóvenes aprovechen las oportunidades” (Entrevista 31. Líder juvenil). En efecto, la principal amenaza de los procesos comunitarios es la falta de recursos para el funcionamiento de las organizaciones y sus integrantes; así mismo, se observa una falta de formación en algunos de los integrantes de las ONG y las fundaciones del sector privado (Entrevista 38. Funcionaria).

El problema de intermitencia o falta de continuidad en las intervenciones genera frustración entre los jóvenes, así como el riesgo de que muchos de ellos decidan involucrarse en actividades violentas o retomarlas (Acosta, et al., 2011). Un líder juvenil<sup>66</sup> relató cómo uno de los programas en los que participó obtuvo importantes resultados en el corto plazo, pero, con el tiempo, la suspensión de dicha iniciativa frustró los avances logrados: de los 9 jóvenes que para él estaban más comprometidos, 5 fueron asesinados, 2 tuvieron que desplazarse forzosamente del barrio y sólo 2 ejercieron las actividades en las que fueron capacitados.

De igual forma, las agrupaciones juveniles y las ONG de base tienen dificultades para trabajar articuladamente con el Estado<sup>67</sup> (Entrevista 44. Funcionaria). En parte, esto se debe tanto al desconocimiento de las iniciativas comunitarias en algunas entidades, como a la prevención de los líderes frente al manejo clientelista que puedan darles desde el Estado, como lo evidencia este testimonio:

Decidimos no recibirle nada a nadie porque cuando identificaron que existe un conglomerado para hacer cultura, y que

estas organizaciones ya salen en prensa y tienen el reconocimiento, ahora sí muchos quieren unirse para sacar propio provecho de esas iniciativas. Sobre todo los presidentes de barrio, que antes negaban la caseta, ahora sí quieren ofrecer cosas. Nosotros les decimos: ‘no señor, nosotros somos autosostenibles’. (Entrevista 31. Líder juvenil)

Aún así, en terreno se reportó que muchas organizaciones se han relacionado en prácticas de clientelismo con funcionarios públicos; “En el Distrito de Aguablanca existían muchos procesos de articulación de esfuerzos; había una mesa con más de sesenta líderes comunitarios que trabajaban en procesos de base con jóvenes, pero fueron divididos por la política” (Entrevista 25. Funcionaria).

Además, las organizaciones comunitarias tienen serias falencias para trabajar en red, debido, en parte, a la competencia entre algunas de ellas por mantener su influencia en ciertas poblaciones, a quienes hacen beneficiarios únicamente de las intervenciones en que participan (Entrevista 38. Funcionaria). Algunas de estas organizaciones, a su vez, han tenido conflictos con otras instancias de liderazgo comunitario, especialmente las JAC y las JAL<sup>68</sup> (Entrevista 44. Funcionaria).

Por último, cabe destacar que el alto nivel de violencia y control de algunos territorios por parte de GVO se convierte en un obstáculo adicional que deben afrontar las intervenciones de todos los sectores, incluso el Estado<sup>69</sup>.

## 4.5. Conclusiones

---

Cali es la ciudad de interés con la problemática más grave de violencia juvenil durante el período de análisis. Esto se debe, entre otros factores, a la transición de los grupos juveniles violentos por antonomasia, las pandillas, en organizaciones cada vez más criminales y violentas; a la alta participación de jóvenes en grupos del crimen organizado y en grupos del conflicto; y a la persistencia de situaciones críticas de violencia que afectan gravemente a los jóvenes como los homicidios y las restricciones a la libertad.

Estas problemáticas se hacen mucho más graves en amplias zonas marginales de la ciudad, como el Distrito de Aguablanca, parte del área nororiental y la zona de Ladera, en donde el incremento de los asentamientos ilegales, la subsistencia de muy altos niveles de pobreza, la oferta limitada de bienes y servicios públicos, y la exclusión de estas poblaciones del resto de la ciudad han creado las condiciones propicias para la concentración de GVO.

En estos territorios, los riesgos de que un joven sea víctima de homicidio o quede “atrapado” en el territorio son mucho mayores que en otras zonas de la ciudad, dada la disputa de pandillas y bandas por el control del microtráfico y las actividades criminales al interior de estos barrios. De igual forma, allí se presenta una serie de influencias que hacen más vulnerables a los jóvenes frente a la opción de convertirse en pandilleros, jefes de bandas criminales o la mano derecha del jefe de una oficina de cobro, un narcotraficante o un GPDP.

Sin embargo, durante el período de estudio también se identificaron importantes esfuerzos por proteger e incrementar la resiliencia de los jóvenes frente a la violencia organizada, desde las organizaciones de base, las fundaciones privadas, la cooperación internacional y el Estado. En todo caso, dada la magnitud del fenómeno de violencia juvenil, estas iniciativas han resultado ser insuficientes y limitadas en su alcance.

En ese sentido, las estrategias de represión de la criminalidad que está implementando la administración municipal deben estar acompañadas por un incremento en las iniciativas de prevención de la violencia juvenil desde el Estado en asocio con los otros sectores interesados en esta problemática (p.e. el programa Oriente Ando), así como por un esfuerzo más decidido por recuperar de la pobreza a las poblaciones de los barrios periféricos y tradicionalmente marginales de Cali.

De igual forma, la política de seguridad debe apuntar y ser más contundente en la consecución de tres objetivos: primero, controlar la disponibilidad de armas en manos de particulares; con la situación de seguridad de la ciudad las autoridades deberían seguir el modelo de otras capitales, como Bogotá, que solicitaron la restricción definitiva al porte de armas de los ciudadanos. Segundo, combatir la corrupción al interior de la Fuerza Pública, especialmente, en la Policía, y romper los vínculos de agentes estatales con grupos de crimen organizado. Por último, desarticular las estructuras de los GPDP que hacen presencia en la ciudad, dado que estos grupos han sido los principales dinamizadores del conflicto y la violencia juvenil en los últimos años.



## **Medellín: violencia juvenil soterrada y profesionalizada**

*María Fernanda Arocha Velásquez*

### **5.1. Contexto de la ciudad**

---

En los últimos años Medellín se ha destacado por sus avances en materia de desarrollo urbano y mejoras en la calidad de vida para sus ciudadanos. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para superar la estigmatización de ser una de las ciudades más violentas del país. Esta violencia ha incidido en la población joven, involucrándolos tanto como victimarios como víctimas de la violencia.

#### **5.1.1. Condiciones socioeconómicas**

Los indicadores socioeconómicos, en materia de NBI, desempleo y pobreza, han demostrado avances positivos en los últimos años. Muestra de esto es la variación positiva en pobreza, pasando de un 8% de la población en situación de pobreza para el 2002 a un 3% en 2013 (DANE).

A diferencia de otras ciudades del país, Medellín se ha destacado en materia de educación, logrando una de las tasas de cobertura de educación superior más altas (92,85% para 2012). La oferta de las administraciones se ha concentrado en mejorar sus programas en materia educativa, como una forma de prevención de la violencia juvenil. Igualmente en materia de juventud se han creado espacios especializados para la atención de las problemáticas de la población juvenil. Esto último se demuestra con la creación de la Secretaría de Juventud y el Presupuesto Participativo Joven.

Igualmente ha obtenido reconocimiento internacional por sus avances en infraestructura obteniendo en 2013 el premio como la ciudad más innovadora otorgado por *The Wall Street Journal* y *Citigroup*.

A pesar de estos aspectos positivos, Medellín no ha logrado superar uno de los grandes problemas estructurales como lo es la desigualdad, la cual se ha mantenido alrededor del 0,52. La conformación de la ciudad ha estado marcada por la recepción de población desplazada, siendo la segunda ciudad del país (por debajo de Bogotá) que más recepción de población desplazada tiene. Esta problemática continúa, para el 2010 Medellín recibió aproximadamente a 10.433 desplazados (mientras que Bogotá recibió 12.164).

Estos problemas se suman a la violencia y a la percepción de inseguridad, si bien la ciudad ha reducido sus indicadores de violencia, esta sigue siendo una de las ciudades más violentas del país. Para el 2012, según datos de la Policía Nacional, Medellín tenía una tasa de 133 homicidios por cada 100 mil habitantes, frente a la tasa nacional de 33 homicidios por cada 100 mil habitantes para el mismo año.

### 5.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO

La historia de violencia en Medellín ha sido cambiante a través del tiempo evidenciando una profesionalización de la misma. Esta transformación de la violencia se observa en la medida en que ésta ha dejado de ser ejercida en forma indiscriminada y ha disminuido su letalidad, concentrándose principalmente en objetivos estratégicos y que cada vez responden más a la criminalidad organizada. El dinamismo de la violencia que se ha vivido en la ciudad, hace necesario que se divida en distintos períodos de estudios. Se pueden evidenciar cuatro períodos clave para el análisis.

#### 5.1.2.1. Primera etapa (1980 - 1990): influencia del narcotráfico

La conformación urbana de Medellín se vio influenciada por procesos de asentamiento de población de diferentes zonas del país que fueron tomando tierras en las periferias (Entrevista 60. Líder juvenil). Este tipo de asentamientos se caracterizó por no estar acompañado de intervenciones estatales lo que llevó a que la población buscara mecanismos de autorregulación locales.

Durante el comienzo de los ochentas se evidencia, sobre todo en estos lugares periféricos, fenómenos de delincuencia común (Entrevista 60. Líder juvenil). La principal problemática de seguridad era atribuida a la conformación de pequeñas pandillas juveniles, dedicadas a delitos menores como lo eran el robo y el atraco.

La vinculación de los jóvenes en la violencia en este período da un primer paso, pasando de bandas dedicadas a la delincuencia común a operar en redes de criminalidad organizada (Rozema, 2007). El auge del Cartel de Medellín facilitó este tránsito. La necesidad de esta estructura de controlar el territorio y la población, involucró en mayor medida a los jóvenes como sicarios y como personal para adelantar labores dentro de la cadena del narcotráfico.

La ausencia estatal fue uno de los factores que permitió que el control que comenzó a ejercer el Cartel de Medellín penetrara en diferentes aspectos de la vida de los ciudadanos, los cuales recurrían a los líderes de esta estructura para solucionar conflictos de cualquier tipo. Parte importante de la población legitimó el control que se ejercía debido a que, dada la ausencia del Estado, se benefició de la seguridad proporcionada por estos grupos criminales, lo cual contribuyó luego a la conformación y consolidación de grupos de seguridad privada (Ceballos, 2000).

#### **5.1.2.2. Segunda etapa (principios de los 90): milicias urbanas**

La desintegración del Cartel de Medellín dio paso a una transformación, permitiendo que otros agentes entraran a disputarse el control y el ejercicio de la violencia. Las dinámicas del conflicto armado comenzaron a permear lo urbano a través del establecimiento de milicias en las zonas periféricas. Esto se evidenció en Medellín, principalmente en la zona nororiental (comunidades 1, 2, 3 y 4) (Rozema, 2007) y en algunas comunas de la zona centroccidental (caso especial de la comuna 13) (Entrevista 60. Líder juvenil).

La organización de estas milicias partía de la idea de autodefensas comunitarias, que buscaban garantizar seguridad y enfrentar la delincuencia producto de las redes de criminalidad organizada que hacían presencia en el territorio. Durante este período también es evidente la ausencia del Estado, en la medida en que la comunidad legitimaba la presencia de estos grupos armados debido a la inseguridad que existía en los barrios (Jaramillo, citado en Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH.], 2011).

A mediados de los 90, la presencia de milicias tanto de las FARC como del ELN y otras de carácter autónomo, llevó a enfrentamientos por el control del territorio (CNMH, 2011). El incremento de la violencia estaba influenciado por la capacidad de fuego que comenzaron a manejar los grupos barriales, que fueron evolucionando tanto por la influencia del narcotráfico como por las estrategias militares que caracterizaban los enfrentamientos entre milicias.

Ante este panorama de violencia las autoridades locales y en algunos casos la Iglesia, intentaron hacer acercamiento para lograr negociaciones y

acuerdos de paz entre las milicias y las bandas delincuenciales que controlaban territorios en los barrios populares. A pesar de que con estos esfuerzos lograron desarticular algunas pandillas, y desmovilizar algunas milicias (CNMH, 2011) seguían existiendo grupos de seguridad privada, que en la mayoría de los casos estaban involucrados con mercados ilegales heredados de estructuras como el Cartel de Medellín.

Paralelo a este proceso, en 1997 se consolidan las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fortaleciendo el movimiento paramilitar que venían desarrollándose en el país. Este grupo comenzaba a manejar el control de distintos territorios a nivel nacional, por lo cual buscó incidir en las grandes ciudades donde las milicias ejercían poder (CNMH, 2011).

### **5.1.2.3. Tercera etapa (finales de los 90 – 2007): hegemonía paramilitar**

La presencia de bloques paramilitares se observó en toda la ciudad. Principalmente con el Bloque Metro, y posteriormente con el Bloque Cacique Nutibara (Gil, 2013). La presencia de paramilitares en Medellín, estuvo fuertemente influenciada por sus nexos con estructuras de crimen organizado.

El caso de la Oficina de Envigado es de especial atención, debido a que se consolida antes de la llegada de los paramilitares como una de las principales estructuras que manejaba en Medellín el negocio del narcotráfico. La Oficina es una de las principales evidencias de los nexos de los paramilitares con el crimen organizado. La acción paramilitar se apoyó en la estructura de la Oficina de Envigado, lo que posteriormente contribuyó a la fragmentación del Bloque Metro y dio paso a la formación del Bloque Cacique Nutibara (CNMH, 2011)

Los paramilitares controlaron la ciudad expulsando a las milicias que hacían presencia en algunas comunas de la ciudad, en muchos casos los miembros de estas milicias pasaron a formar parte de los mismos grupos paramilitares.

La hegemonía paramilitar se consolidó con operaciones que se dieron en conjunto con la Fuerza Pública. Estas operaciones de carácter militar se realizaron en zonas urbanas con la intención de consolidar el control sobre el territorio y expulsar a las milicias que seguían haciendo presencia (Gli, 2013). Algunas de estas operaciones fueron: la operación Orión, la operación Mariscal, operación Águila, entre otras (CNMH 2011).

A partir del 2002 se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y las AUC, lo que llevó a un proceso de desmovilización de los bloques paramilitares. Este

proceso generó una disminución de la violencia, reflejada principalmente en la drástica disminución de las tasas de homicidios (Giraldo, 2008). Esto no significó que el Estado lograra garantizar seguridad; en el territorio siguieron operando estructuras como la Oficina de Envigado que mantenía el control de la población garantizando la disminución de los niveles de violencia (Ávila, 2010).

#### **5.1.2.4. Cuarta etapa (2008 - actualmente): reconfiguración de poderes**

El control que ejercía la Oficina de Envigado se comenzó a fracturar notablemente a partir de la extradición de Don Berna y otros paramilitares. Esta fractura conllevó a un incremento de la violencia por enfrentamiento entre distintas facciones de esta estructura criminal. En el nivel local esto se ha manifestado, principalmente por enfrentamientos entre combos delincuenciales que trabajaban al servicio de grupos derivados de la Oficina de Envigado (Gil, 2013).

Igualmente la reconfiguración de poderes por el control de la ciudad está influenciado por los GPDP, que han buscado tener presencia en Medellín para favorecer sus negocios y mercados ilegales. Este es el caso de Los Rastrojos y, actualmente, de Los Urabeños (Defensoría del Pueblo, 2013). Esta ruptura de la hegemonía ha llevado a una situación de inestabilidad, principalmente en las zonas periféricas y barrios populares de la ciudad donde estos grupos se disputan, a través de los combos, el control territorial. Esta inestabilidad se refleja en momentos de aumento y disminución de la violencia.

A mediados del 2013 se ha dado una disminución de los niveles de violencia, lo cual se atribuye a dos razones: la primera de ellas es que ha habido un aprendizaje y profesionalización del uso de la violencia, y la segunda se refiere a los pactos entre los GPDP que han influenciado los enfrentamientos entre combos (Gil, 2013). Con respecto a la primera razón, se puede observar que los grupos de violencia se han involucrado cada vez más en dinámicas exclusivas de la criminalidad organizada, modificando sus prácticas para adaptarlas a nuevos objetivos. Este tipo de cambios los lleva a buscar una mayor clandestinidad que les permita hacer operaciones ilegales sin llamar la atención. Hechos violentos como los asesinatos, las restricciones violentas de la movilidad, las amenazas, entre otras, pueden llegar a poner en peligro el accionar de estos grupos alertando a las autoridades y obstaculizando sus operaciones en la economía ilegal.

En cuanto a la segunda razón, se evidencian algunos acuerdos entre los combos y otros grupos de violencia organizada. Con este tipo de pactos

igualmente se busca disminuir el riesgo de llamar la atención de las autoridades y evitar pérdidas económicas y materiales que dejan los enfrentamientos. El pacto más reciente es conocido como el “Pacto del Fusil”, según el cual los combos a nivel local delimitaron sus zonas de control evitando de esta manera la violencia asociada a los enfrentamientos (Entrevistas 58. Líder juvenil; Entrevistas 60. Líder juvenil).

Si bien a este pacto se le atribuye el mantenimiento de los bajos niveles de violencia, no se puede hablar de que se vaya a generar una estabilidad sostenida en el largo plazo. Las relaciones entre los GVO que hacen presencia en la ciudad es muy volátil (Bernal y Navas, 2013). Los hechos de violencia más recientes que se han registrado en la ciudad de Medellín, demuestran pequeñas fracturas de esta tensa calma que se generó con el “Pacto del Fusil” (El Espectador, 2014). Si se realiza un análisis de los riesgos a futuro, la posibilidad de un aumento de la violencia es muy alta, debido a que los grupos de violencia que hacen presencia en la ciudad continuarán buscando ejercer control de manera hegemónica.

A lo largo de esta periodización se puede observar cómo los grupos armados han hecho que el fenómeno de violencia cambie. A pesar de estos cambios hay un fenómeno que es transversal y que se ha mantenido en el tiempo, este es el del crimen organizado (representado principalmente por el narcotráfico). Este último ha sido uno de los que ha permitido sostener la dinámica de violencia en los barrios, donde la población se ha acostumbrado a la ausencia de presencia estatal y al control ejercido por estos grupos ilegales.

Teniendo en cuenta la periodización presentada, la caracterización y las especificaciones que se realizarán a continuación sobre la violencia juvenil en Medellín, se concentrarán en el último período de tiempo señalado.

---

## 5.2. Análisis de la violencia juvenil

### 5.2.1. La violencia armada organizada y los jóvenes

Para el análisis de la violencia juvenil se debe tener en cuenta, no solo la violencia ejercida contra los jóvenes sino también la violencia que ejercen los jóvenes. Los diferentes grupos de violencia organizada han integrado dentro de sus estructuras a jóvenes para que cumplan diferentes roles. En el período de estudio la composición de los grupos y la presencia de estos han variado.

Para identificar los grupos que hacen presencia en Medellín y caracterizarlos se tendrán en cuenta tres niveles. Los grupos que se describirán a

continuación no sólo hacen presencia en la ciudad, sino que también involucran a los jóvenes en sus estructuras y actividades.

### 5.2.1.1. Nivel I

En este nivel se encuentran los GVO que tienen un alto nivel de organización y que ejercen a la violencia esta asociada, principalmente con la criminalidad organizada, por esta razón la violencia que ejercen tiende a ser más profesionalizada y selectiva. Esta clasificación abarca a los GPDP y a otros grupos de criminalidad organizada.

El objetivo de estos grupos es el mismo, concentrándose en el control de los mercados ilegales a través del uso de la violencia (Granada, et al., 2009). Este tipo de objetivos implican que la estructura trabaje de forma estratégica, con diferentes funciones de modo que se pueda garantizar el funcionamiento del mercado ilegal. Si bien dentro de este nivel se incluyen grupos altamente organizados que controlan territorios para el desarrollo de sus actividades ilegales, se tienen en cuenta también otros grupos que se diferencian únicamente por tener un alcance inferior en el control territorial que ejercen.

Los GPDP, en este caso concreto Los Urabeños (Defensoría del Pueblo, 2013), son estructuras que tienen un control no solo en la zona urbana sino también del área urbana. Igualmente el accionar de este grupo ha alcanzado influencia y control en diferentes zonas del país operando con una lógica nacional y no sólo con el control de una ciudad específica. Esta organización posee una estructura de mando y control híbrida, en este sentido se puede hablar de diferentes grupos en diferentes zonas del país, los cuáles poseen cierta autonomía, pero responden en sus acciones a un mando central.

Si bien la caracterización que se hace para los Urabeños a nivel general es el de una estructura híbrida, en concreto se puede decir que la facción de éste que opera en Medellín, responde a unas cadenas de mando fuertemente jerarquizadas (Mayor cargamento de cocaína líquida incautada sería de 'Urabeños', 2014).

La Oficina de Envigado es otro grupo que hace presencia en la ciudad, a diferencia de Los Urabeños esta estructura criminal no se deriva del proceso de desmovilización paramilitar. La presencia de la Oficina se ha concentrado tradicionalmente en Medellín, sin que se evidencie una expansión de este control a nivel nacional. Al igual que Los Urabeños este grupo se organiza de forma jerárquica.

Los grupos mencionado anteriormente, son los que actualmente se disputan el poder en la ciudad. La mayoría de los barrios de las comunas

se encuentran controladas bien sea por la Oficina de Envigado o por Los Urabeños. Sin embargo existen otros grupos de criminalidad organizada como lo son los Mondongueros, los Triana, los Pesebreros y las Convivir (Personería de Medellín, 2013) (Entrevista 57. Líder juvenil; Entrevista 60. Líder juvenil), los cuales también controlan zonas de Medellín.

Estos grupos, al igual que la Oficina, no se derivan de un proceso de desmovilización paramilitar. El control que ejercen se ha mantenido a lo largo de diferentes períodos de la historia en zonas focalizadas de la ciudad. El caso de las Convivir en el centro, los Triana en ciertos barrios de la comuna 1, 2 y 3, los Pesebres en barrios de la comuna 13 y finalmente los Mondongueros en barrios como Robledo (Entrevista 57. Líder juvenil; Entrevista 60. Líder juvenil). La estructura jerárquica es similar a la de Los Urabeños y la Oficina, diferenciándose por su tamaño de acuerdo al alcance que tiene cada uno de estos grupos.

El rol de los jóvenes en los diferentes grupos que se acaban de mencionar es similar, estos realizan las labores que se encuentran relacionadas con los mercados ilegales locales, el mantenimiento del control local, y otras tareas menores, diferentes al manejo macro de los mercados de la droga y la toma de decisiones de las altas jerarquías. Los jóvenes en estos grupos no tienden a ocupar altos puestos en la cadena de mando. “Es muy difícil que los jóvenes dirijan, se necesita mucha experiencia, hay que dirigir y cuidarse la vida. Las jerarquías son guerriadas” (Entrevista 57. Líder juvenil).

La participación de los jóvenes se da, principalmente, a través del vínculo que establecen estos grupos con los combos que se encuentran en un nivel inferior. La relación entre combos y las grandes estructuras criminales es directa. Esto se evidencia incluso en el reconocimiento que tiene la comunidad hacia el control que indirectamente ejercen los grupos del nivel I a través de los combos.

La relación entre los GVO del nivel I y la comunidad es indirecta, sin embargo las disputas, los cambios de control y los liderazgos que tienen estos GVO son percibidos por cualquier miembro de la comunidad, esto se pudo evidenciar en las diferentes entrevistas realizadas a jóvenes, expertos y funcionarios. Al igual que con la comunidad la relación con el territorio y los GVO del nivel I es indirecta y ejercida a través de grupos inferiores como los combos. Tanto el control como las disputas se efectúan bajo órdenes y en representación de estos GVO.

El accionar de estos GVO se concentra directamente en las dinámicas marco de los mercados ilegales, por lo tanto tienden a relacionarse con la institucionalidad buscando eliminar obstáculos que esta pueda representar

para las operaciones ilegales. La relación de las grandes estructuras criminales y las entidades estatales se ha dado de forma tradicional, lo que no sólo permite que fluya el mercado ilegal, sino que también subsista a pesar de los diferentes cambios y acciones que se han implementado para desmontar algunos GVO (Entrevista 53. Funcionario).

Dichos mercados ilegales no son únicamente el de la droga, existen otros mercados como el tráfico de armas y el cobro de extorsiones. Éstos se desarrollan en el nivel local, beneficiando indirectamente a estos grupos que subcontratan a GVO de niveles inferiores para que manejen directamente la venta de drogas y armas y el cobro de extorsiones (Personería de Medellín, 2012)

### **5.2.1.2. Nivel II**

Dentro de este nivel se clasifican los grupos que no tienen un nivel de profesionalización ni de organización tan alto como los grupos anteriores. Además estos grupos no manejan la dinámica general de criminalidad organizada, pero forman parte, a nivel micro o local, de la cadena de crimen organizado. Los combos son los principales grupos que se pueden identificar para este nivel, sin embargo no se puede hablar de ciertos combos en concreto. Según la Policía Nacional en Medellín se contabilizaban más de 150 combos (Personería de Medellín, 2013), esta cifra es cambiante debido a que este tipo de grupos es muy dinámico y se reconfiguran constantemente (Entrevista 60. Líder juvenil).

Si bien estos grupos se caracterizan por una estructura menos sofisticada, comparada con los descritos anteriormente, tienen unas jerarquías y organizaciones que permiten hablar del ejercicio de la violencia de forma profesionalizada. Este ejercicio profesionalizado se evidencia en las armas de fuego que manejan, su nivel de reconocimiento a nivel local y la capacidad de llevar a cabo acciones conjuntas con otros combos a través de alianzas (Entrevista 49. Funcionario).

Este tipo de grupos está compuesto esencialmente por jóvenes, los cuales pueden ser los líderes del combo, como también los que sirven como vendedores de drogas, cobradores de extorsiones, entre otras actividades (Entrevista 49. Funcionario). Los jóvenes que se encuentran a cargo del mando del combo son los que entablan relación con GPDP y las otras estructuras criminales (Entrevista 53. Funcionario).

A pesar de que la mayoría de los integrantes son hombres jóvenes, las mujeres también participan en actividades relacionadas con el funcionamiento del combo. Principalmente las mujeres tienen labores asociadas al

manejo y administración de recursos, como lo son el manejo de la droga, de las “plazas de vicio”, y también cumplen labores como el transporte de armas y de drogas (Entrevista 57. Líder juvenil; Entrevista 58, líder juvenil). Estas labores no implican el uso de la violencia directa, lo cual no desvincula totalmente a las mujeres de este tipo de actividades (Entrevista 53, Funcionario).

Según expertos que han trabajado con comunidades en el tema de violencia juvenil, y los mismos jóvenes pertenecientes a distintas comunidades, este tipo de grupos también tiene una relación con las entidades del Estado, especialmente con las que operan a nivel local como lo es la Policía, (Entrevista 53. Funcionario; Entrevista 57. Exagresor; Entrevista 58. Líder juvenil; Entrevista 60. Líder juvenil), Se puede evidenciar que la acción de algunos miembros de la Policía se realiza de manera conjunta con la de los combos, bien sea por acciones directas de colaboración con el tráfico de drogas y armas o por acciones indirectas como la omisión de casos donde la Policía sabe donde se vende la droga y cuáles son los miembros de los combos de cada barrio, y aun así decide no actuar.

Esta relación entre combos y Fuerza Pública también alimenta la desconfianza que tiene la comunidad hacia la Policía. Esto permite que algunos miembros de la comunidad legitimen las acciones de los combos para la resolución de conflictos y el mantenimiento del orden a través de la violencia (Entrevista 57. Líder juvenil).

En algunas comunas de la ciudad quienes ejercen el control son los llamados “muchachos del barrio”, pues se les atribuye el cuidado y la sana convivencia; así, la Policía pasa a ejercer una labor residual, ya que la comunidad no la reconoce como instancia de seguridad. (Personería de Medellín, 2012, p.115)

Lo anterior permite evidenciar una relación muy estrecha entre los combos y la comunidad sobre la cual ejercen control. A pesar de que los integrantes de los combos no portan uniformes ni identificativos especiales, son reconocidos dentro de la comunidad como integrantes de estos grupos (Entrevista 53. Funcionario). A partir de este abierto reconocimiento, la comunidad establece vínculos cercanos con los miembros de los GVO (Entrevista 51. Funcionario).

Además de ser los encargados del cobro directo de las extorsiones, de la venta de drogas y del control territorial, como se mencionó anteriormente los combos cumplen un rol importante en la resolución de conflictos en las comunidades. “Ahora se tiene que pedir permiso si le puedo hacer algo o si no me matan también” (Entrevista 55. Lideresa juvenil). A través

de amenazas, intimidaciones, desplazamientos u otros actos violentos los combos solucionan los problemas que surgen, en los diferentes aspectos de la convivencia.

A pesar de que esto en algunos casos legitima la acción violenta de los combos, hay sectores de las comunidades que rechazan la presencia de este tipo de grupos. El rechazo no se da a manera de confrontación, buscando eliminar a estos grupos, sino que tiende a manifestarse a través de la resistencia, evitando las reglas y las acciones que son impuestas.

A diferencia de los grupos en el nivel I, los combos son los que establecen una relación directa con el territorio a través de las luchas con otros combos y el mantenimiento del control en una zona específica. Actualmente la presencia de la Oficina y de los Urabeños generó enfrentamientos entre los combos de los barrios para lograr expansión y consolidar controles en ciertas zonas. A mediados de 2013 estos enfrentamientos comenzaron a disminuir a partir de lo que se ha denominado como el Pacto del Fusil (Entrevista 60. Líder juvenil).

### **5.2.1.3. Nivel III**

Finalmente se encuentran los grupos que ejercen una violencia menos profesionalizada, que tiende a ser indiscriminada y con bajos niveles de organización. Estos grupos no forman parte de la cadena de criminalidad organizada, su objetivo es principalmente la delincuencia común, por lo que no se concentran en ejercer ningún tipo de control territorial ni sobre la población.

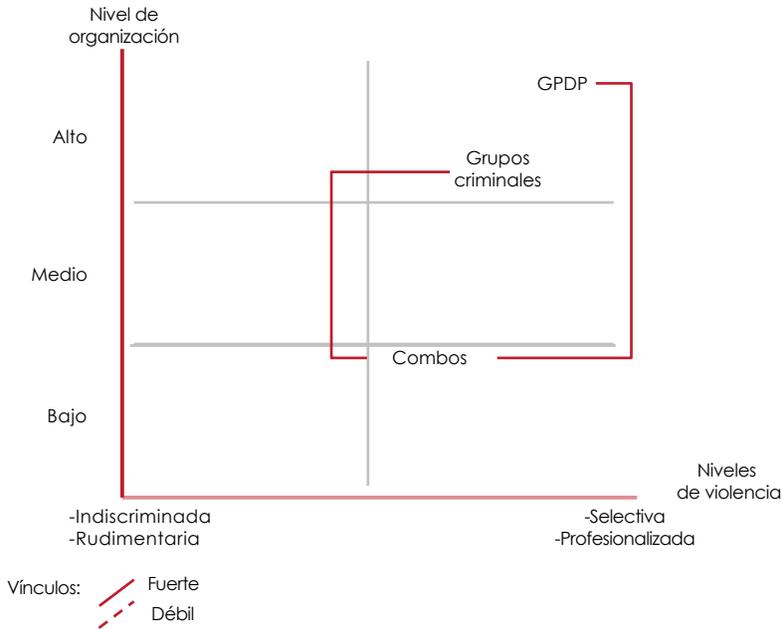
Los grupos de delincuencia común tienden a estar conformados por algunos jóvenes, dedicados a actividades como robos y atracos (Entrevista 53. Funcionario). Estos grupos no se encuentran organizados de forma jerárquica, por lo que no son estables como organización sino que funcionan de acuerdo al contexto en el que estén actuando.

Este tipo de grupos no tienen relación con los grupos del nivel I y pueden llegar a tener relaciones indirectas con los combos. Sin embargo las acciones de los combos y de los grupos del nivel I han buscado eliminar los problemas de seguridad que estos grupos de delincuencia común causan en la comunidad. La comunidad cuando tiene problemas con jóvenes dedicados a la delincuencia común, tienden a acudir al combo del barrio para que este se encargue de solucionar el problema (Entrevista 56. Lideresa juvenil).

Estos grupos no tienen un impacto tan fuerte como los grupos mencionados en los dos niveles anteriores. Esto evidencia que el fenómeno de violencia

juvenil en Medellín se encuentra altamente profesionalizado, en tanto los jóvenes se involucran en grupos que funcionan de forma coordinada para un objetivo común.

En el gráfico que se presenta a continuación se pueden ver los grupos que se han caracterizado de acuerdo a su nivel de organización y al tipo de violencia que ejercen, igualmente se puede observar cómo es la relación entre ellos.



**Figura 5.** Grupos de violencia organizada en Medellín (2008 – 2014)

Fuente: Elaborado por CERAC

## 5.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes

Diferentes hechos violentos afectan a los jóvenes en la ciudad de Medellín, sin embargo es necesario aclarar que en el período se han presentado variaciones en los niveles de afectación de las mismas. Las variaciones obedecen a momentos de enfrentamientos frente a momentos donde operan alianzas y pactos entre los GVO, disminuyendo los niveles de violencia.

Las situaciones críticas de violencia contra jóvenes que se identificaron son:

### 5.2.2.1. Restricciones a la movilidad

Este fenómeno es conocido comúnmente como fronteras invisibles, estas restricciones impuestas por el combo que ejerce control en determinadas

zonas impiden la libre circulación, ocasionando agresiones contra aquellos que traspasan las fronteras impuestas. Según funcionarios y jóvenes de las comunidades esta situación a mediados del 2013 comenzó a disminuir debido a los pactos entre los combos (Entrevista 51. Funcionario; Entrevista 60. Líder juvenil).

Este fenómeno afecta en general a toda la población. Sin embargo los jóvenes, y en especial aquellos que pertenecen a un combo o tienen algún vínculo con estos grupos, son más propensos a ser agredidos en casos de que no respeten las fronteras violentamente impuestas.

Desde la apreciación de distintos expertos en el tema, las fronteras invisibles son el resultado del control territorial para garantizar la eficiencia de los distintos mercados, legales e ilegales, que se desarrollan en la zona (Entrevista 49. Funcionario; Entrevista 53. Funcionario). Si bien no se niega la existencia de estos obstáculos para la circulación, expertos en el tema consideran que se han querido justificar fácilmente hechos de violencia a través de la idea de que la víctima transgredió una frontera invisible (Entrevista 49. Funcionario).

#### **5.2.2.2. Asesinatos a jóvenes**

La tasa de homicidios para el período de estudio es cambiante. En el 2008 se observó un incremento, que comenzó a descender en 2010, manteniéndolos hasta la actualidad (Gil, 2013). Si bien la cifra ha disminuido la tasa de homicidios, y en especial la de homicidios de la población joven es alta (94 homicidios por cada 100 mil habitantes entre los 10 y los 25 años de edad – Policía Nacional 2012).

Según expertos la disminución del número de homicidios que se ha registrado en comparación con períodos como los del auge del narcotráfico o la hegemonía paramilitar se debe a que los GVO han buscado profesionalizar su accionar violento evitando obstáculos como llamar la atención de las autoridades a través de actos como el homicidio (Entrevista 49. Funcionario).

Los homicidios de jóvenes responden a diferentes causas, no se puede establecer una generalidad en cuanto a cuál es el perfil específico de los jóvenes que tienden a ser víctima de asesinatos: “A los jóvenes los asesinan por ser jóvenes” (Entrevista 66. Funcionario). En otras palabras, gran parte de los casos de homicidios que se registran responden a problemas interpersonales de los jóvenes, en un contexto permeado por la cultura de la ilegalidad donde los conflictos sociales se tienden a resolver de forma violenta.

En este sentido resulta difícil atribuir este tipo de hechos únicamente a los jóvenes miembros de los combos o a un GVO específico. Los

problemas interpersonales pueden involucrar jóvenes no agresores, los cuáles recurren al mecanismo de la violencia sin necesariamente pertenecer a un GVO.

Esta situación también está relacionada con el fenómeno de la limpieza social. Si bien actualmente no se registran denuncias concretas de asesinatos a un grupo concreto de la población joven, este fenómeno es de carácter cíclico y los perfiles de las víctimas varían en cada momento específico (Entrevista 49. Funcionario).

### **5.2.2.3. Agresiones en el marco de enfrentamientos entre combos**

Al igual que los hechos violentos mencionados anteriormente, este también presenta disminuciones notables desde mediados de 2013. Los pactos entre los combos llegaron al acuerdo de suspender las confrontaciones, sancionando incluso con la muerte a aquellos que decidan enfrentarse.

Los enfrentamientos entre jóvenes en su mayoría tienden a ser por el control territorial entre combos. Como resultado de estos enfrentamientos hay heridos y muertos, ya que el uso de armas de fuego en este tipo de enfrentamientos es común y por lo tanto el riesgo de agresiones letales es alto. Evidencia de esto es el alto porcentaje de homicidios causados con armas de fuego (81,2% para el 2012) al igual que el porcentaje de lesiones causadas con armas de fuego (32,4% para el 2012).

Los jóvenes que tienen mayor riesgo de ser víctimas de esta situación crítica son aquellos que pertenecen a un combo, a pesar de que otros jóvenes y miembros de la comunidad pueden llegar a ser afectados por este tipo de violencia.

### **5.2.2.4. Desplazamientos intraurbanos**

Los desplazamientos forzados son un fenómeno que se ha mantenido a lo largo de la historia de la ciudad. En algunas comunas para el período de estudio, la situación de desplazamiento se volvió crítica, debido a desplazamientos intraurbanos masivos (CNMH, 2011). Sin embargo para los últimos años 2012 - 2013, no se han presentado este tipo de eventos masivos, sino que se han mantenido los desplazamientos individuales. Actualmente esta situación del desplazamiento individual persiste a pesar del pacto que se dio entre combos.

El proceso que se encuentra asociado a esta situación crítica es principalmente las amenazas por parte de los combos. Este tipo de amenazas tiende a ser la herramienta mediante la cual el combo sanciona a los miembros de

la comunidad que contravienen el orden impuesto. “Si hay un conflicto con una vecina, la vecina avisa a los actores armados, y estos median el problema expulsando a las personas del barrio” (Entrevista 54. Funcionaria).

Además de las amenazas los desplazamientos se generaban también ante los enfrentamientos entre combos que obligaban a la población a salir de sus casas para protegerse (CNMH, 2011). La población afectada por esta situación no son exclusivamente los jóvenes, la mayoría de los desplazamientos afectan a familias completas.

### **5.2.2.5. Desapariciones forzadas**

Al igual que los desplazamientos forzados esta situación crítica se ha mantenido a lo largo del tiempo (Personería de Medellín, 2013), incluso durante los momentos donde se registraban pactos entre los GVO (Entrevista 60. Líder juvenil).

La desaparición forzada se asocia principalmente a fenómenos como la explotación sexual, la “limpieza social” y el reclutamiento de jóvenes por parte de los GVO (Personería de Medellín, 2013; Entrevista 60. Líder juvenil). Este hecho violento afecta principalmente a los jóvenes de las comunidades.

Según las cifras de jóvenes desaparecidos que maneja la Personería, el porcentaje de niñas y mujeres jóvenes víctimas de desaparición es superior al de los niños y hombres jóvenes (Personería de Medellín, 2013). Si bien no se encuentra evidencia empírica para explicar el motivo de que este hecho violento afecte más a las niñas y jóvenes, la Personería tiende a asociar esto con procesos de trata de personas (Personería de Medellín, 2012).

### **5.2.2.6. Violencia sexual**

Medellín ha presentado altos niveles de violencia sexual, especialmente contra la mujer. Prueba de esto es la alta tasa de agresiones sexuales a mujeres entre los 10 y 25 años de edad, la cual para el 2012 era de 185 mujeres agredidas por cada 100 mil habitantes, mientras que la de los hombres era de 33 por cada 100 mil habitantes. Igualmente otro hecho violento que afecta especialmente a este grupo poblacional es el de la prostitución forzada (Entrevista 59. Funcionaria).

Las redes de trata de personas encargadas del negocio de la prostitución no se identifican fácilmente, sin embargo son evidentes sus nexos con los GVO (Entrevista 59. Funcionaria). La atribución de la responsabilidad de esta situación crítica no se ha logrado dilucidar del todo, si bien se tiene

conocimiento de que es un negocio ilegal manejado por grupos organizados, algunos expertos difieren en cuanto al tipo de vinculación que tienen los GVO con este negocio.

Para algunos las redes de prostitución funcionan de forma independiente, manejando ciertos nexos con miembros de los GVO (Entrevista 59. Funcionaria). Otros expertos señalan que este negocio es manejado directamente por los GVO, los cuáles utilizan los recursos obtenidos para el mantenimiento de su estructura (Entrevista 53. Funcionario). Las niñas y jóvenes que son prostitutas, tienden a ser engañadas por personas pertenecientes a esta red criminal, “Las redes de trata reclutan a las niñas haciendo contactos anteriores, ofreciéndoles alternativas diferentes y cuando llegan son obligadas a prostituirse.” (Entrevista 59. Funcionaria).

### **5.2.2.7. Detenciones arbitrarias**

A diferencia de las situaciones críticas descritas anteriormente, las detenciones arbitrarias afectan exclusivamente a los hombres jóvenes y son responsabilidad del Ejército y no de los GVO.

Las detenciones arbitrarias se dan generalmente en el marco de las llamadas “batidas”, donde se busca incorporar al servicio militar obligatorio a todos aquellos jóvenes que se encuentren remisos. Si bien la normalización del servicio militar es obligatorio para todos los jóvenes, por ley se establece que esto debe ser de manera voluntaria (Personería de Medellín, 2013).

Esta situación ha persistido a pesar de las denuncias de la población y de los mecanismos legales que se han creado para sancionar este tipo de hechos. Las denuncias de los jóvenes y de algunos funcionarios es que las “batidas” se llevan a cabo en zonas vulnerables y altamente concurridas, como las estaciones de metro, el centro de la ciudad y algunas zonas conflictivas (Personería de Medellín, 2013). Igualmente se denuncia que las autoridades detienen a jóvenes que se encuentran estudiando o trabajando y son obligados finalmente a prestar el servicio militar (Entrevista 60. Líder juvenil).

## **5.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil**

---

### **5.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada**

La participación de los jóvenes en la violencia organizada se ha mantenido siempre en niveles altos. Para el año 2013 el porcentaje de jóvenes recluidos

en Medellín era del 50,2% del total de hombres reclusos. Igualmente como se señaló anteriormente, dentro de los GVO que hacen presencia en la ciudad, los jóvenes tienen una participación representativa.

En esta sección se abordan los factores de riesgo que hacen más vulnerable a un joven para involucrarse en uno de estos grupos. Ninguno de estos factores es determinante, por sí solo al igual que ninguno es necesariamente determinante para que un joven sea agresor sino que lo hace más propenso a que tome la decisión de involucrarse en la violencia.

En diferentes estudios se ha señalado que la *cultura de la ilegalidad* es un factor que se ha desarrollado e internalizado a lo largo de la historia en la sociedad medellinense (Duque, 2013). La cultura de la ilegalidad se entiende como esa aceptación que se tiene hacia conductas ilegales como la obtención de dinero de forma ilegal, la tendencia hacia la corrupción y el uso de la violencia (extrema) para la defensa de la familia y de la comunidad o para la obtención de un beneficio político o económico (Duque, 2013). Igualmente con esta cultura se han consolidado referentes de vida que influyen de forma negativa a los jóvenes. Según lo expresa un funcionario “La ciudad tiene mafias y cultura ilegal profundamente arraigada, detrás de todo hay una mafia. Por lo tanto cualquiera que habite la ciudad está en riesgo de estar involucrado en las dinámicas de violencia” (Entrevista 66).

Partiendo de lo anterior, se contextualizarán los siguientes modelos que pretenden explicar cómo se conjugan ciertos factores para hacer más vulnerable a un joven. Teniendo en cuenta la propuesta teórica del modelo ecológico de la violencia, los factores de riesgo se encuentran en diferentes niveles en los cuales se desarrolla la persona (individual, relacional, comunitario y social).

### 5.3.1.1. Modelo I

En este primer modelo se relacionan los siguientes factores de riesgo: la adicción a las drogas, las necesidades económicas y las oportunidades de obtención de recursos ilegales ofrecidas por los GVO.

En Medellín el consumo de drogas entre jóvenes es elevado, siendo una de las ciudades del país que más consumo de sustancia psicoactivas registra (Bogotá, Medellín y Pereira, con mayor consumo de drogas, 2013). Según experto en el tema, el consumo se ha vuelto cada vez más aceptado, de modo que “los lugares de consumo son identificados y “legitimados por la comunidad” (Entrevista 62. Funcionario).

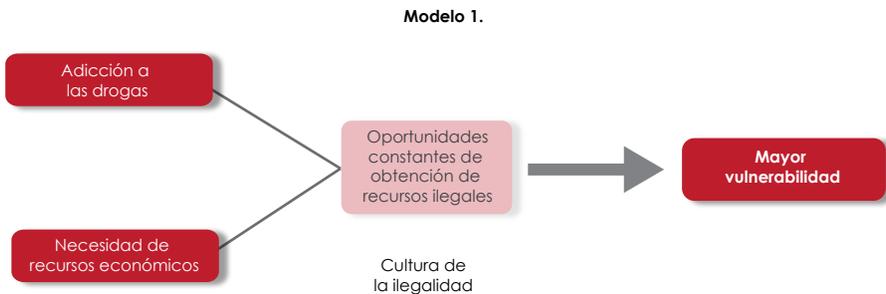
El consumo de drogas en este caso, no se entiende como un factor que lleve a la persona a tomar actitudes violentas, ya que, no se puede determinar

con exactitud que las sustancias generen este tipo de conductas en las personas. El factor de riesgo que se toma en cuenta en este caso es la adicción que este tipo de sustancia genera en el consumidor.

Otro factor que se tiene en cuenta es la necesidad de recursos económicos, lo cual afecta especialmente a la población joven de las zonas vulnerables. Esto ha obligado a que las familias, por medio del abandono o de la presión, lleven a los niños y jóvenes a conseguir recursos que sirvan de sustento económico (Entrevista 54. Funcionaria). El trabajo infantil y en los jóvenes los lleva a buscar alternativas en diferentes fuentes, como lo son trabajo como vendedores en las calles, la explotación sexual o servir a los GVO (Entrevista 54. Funcionaria). A partir de esta necesidad, se involucra la oferta constante de los GVO que hacen presencia, como fuente de obtención de recursos ilegales. “La oferta del barrio es la vinculación en grupos armados o estar vinculado de alguna otra forma a estas dinámicas” (Entrevista 60. Líder juvenil).

La adicción a las drogas genera un incremento en las necesidades económicas del joven, obligándolo a buscar recursos para poder satisfacer la necesidad del consumo. Esto conjugado con los bajos recursos económicos de la mayoría de los jóvenes de las zonas vulnerables, potencia las posibilidades de que los jóvenes busquen vincularse con los GVO, los cuales se encuentran constantemente en las comunidades ofreciendo posibilidades rápidas y fáciles para obtener dinero.

Todo esto está mediado por la cultura de la ilegalidad, que sirve de punto de apoyo, no sólo para mantener la oferta de los GVO, sino para de cierta forma legitimar la posibilidad de obtener recursos de manera ilegal satisfaciendo las necesidades individuales. En el siguiente gráfico se muestra cómo se dan las relaciones aquí descritas entre los diferentes factores de riesgo mencionados. Igualmente se señalan a qué nivel pertenecen cada uno de estos factores.



**Figura 6.** Factores asociados a la adicción a las drogas.

Fuente: elaborado por CERAC

El segundo modelo que se propone a continuación, involucra algunos de los factores antes mencionados, pero observados en relación a nuevos factores asociados con la educación. Dentro de este modelo se relacionan factores como las *necesidades no atendidas para el desarrollo de los jóvenes*, la influencia de esto en la *deserción escolar*, todo esto asociado con factores como los *pares criminales* y la *oferta de los GVO de obtención de recursos de forma ilegal*. Al igual que el modelo anterior la cultura de la ilegalidad es un factor estructural que también se tendrá en cuenta dentro de este modelo.

En materia socioeconómica la ciudad ha tenido grandes avances, uno de ellos en materia de educación siendo una ciudad con una alta cobertura de educación. Igualmente se ha buscado abrir espacios que permitan que cualquier joven de la ciudad pueda acceder a oportunidades de educación en cualquiera de sus niveles. A pesar de esto, las oportunidades que se ofrecen parecieran no estar de acuerdo con las necesidades que demandan los jóvenes. “La escuela no es atractiva y estar afuera ‘conviene’ porque es una fuente de poder y reconocimiento. La educación ya no es un referente, en un territorio tomado por la ilegalidad no es la mejor opción estudiar” (Entrevista 66. Funcionario).

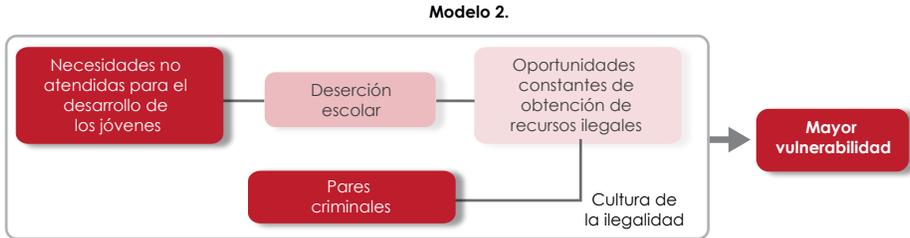
La principal consecuencia de esto son los niveles de deserción escolar, que según Medellín Cómo Vamos (2013) es uno de los principales problemas que enfrenta la administración en temas de educación. Esta deserción además de darse por temas como la necesidad de los jóvenes de producir recursos económicos para el sustento de sus hogares a temprana edad; también se da por una pérdida del referente de la educación como una posibilidad de mejorar la calidad de vida, esto ocurre sobre todo en los estratos más vulnerables (Medellín Cómo Vamos, 2013). Según un funcionario “Gran parte de los jóvenes que están estudiando tienen como proyecto de vida dejar de estudiar” (Entrevista 66).

Aunado a estos factores de riesgo, se encuentra el del relacionamiento con pares criminales. Los jóvenes en zonas vulnerables conviven constantemente con otros jóvenes que ya se encuentran involucrados en GVO, los vínculos que se generan pueden ser bien sea por relaciones familiares o por amistad. Este es un factor que puede potenciar la posibilidad de que el joven tenga acceso, con mayor facilidad, a las oportunidades que se ofrecen desde los GVO. Sin embargo, se debe resaltar que los pares criminales pueden ser un factor de riesgo que facilita la vinculación de los jóvenes con los GVO, pero que no es un determinante en todos los casos para que este acercamiento se genere.

Al igual que en el modelo I, se repite el factor de las oportunidades de obtención de recursos de forma ilegal. Teniendo en cuenta la insatisfacción

de los jóvenes, el abandono de la educación y las necesidades económicas que deben satisfacer, la posibilidad de acceder a recursos en el corto plazo de forma ilegal los vuelve más vulnerables.

En el siguiente gráfico se muestran las relaciones entre los factores mencionados. Igualmente se señalan a qué nivel pertenecen cada uno de estos factores.



**Figura 7.** Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada.

Fuente: elaborado por CERAC

Los modelos utilizados para relacionar los factores de riesgo no son excluyentes, es decir, estos se relacionan entre sí, pudiendo encontrar factores que se interrelacionan entre ambos. Igualmente dejan de lado algunos factores, que por no considerarse tan relevantes no fueron incluidos. Los modelos generalizan las relaciones que se dan, sin embargo se debe tener en cuenta que esto puede variar para cada caso.

### 5.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada

También se pueden identificar factores de protección que hacen a los jóvenes resilientes.

Según Duque el principal factor de protección que puede evitar que la cultura de la ilegalidad continúe y que mantiene a los jóvenes fuera de comportamientos violentos, es el *control familiar y los valores que se enseñan al interior de los hogares* (2013). Este factor de protección se encuentra condicionado a los casos particulares de cada individuo.

Existen otros factores que pueden ayudar a que el joven sea resiliente. Estos factores generalmente son obtenidos a partir de iniciativas o programas que indirecta o directamente previenen la violencia juvenil. Estos programas e iniciativas no vienen necesariamente desde la institucionalidad estatal, muchas veces provienen de los mismos jóvenes que voluntariamente generan grupos y colectivos dentro de las cuales comparten y desarrollan distintas actividades.

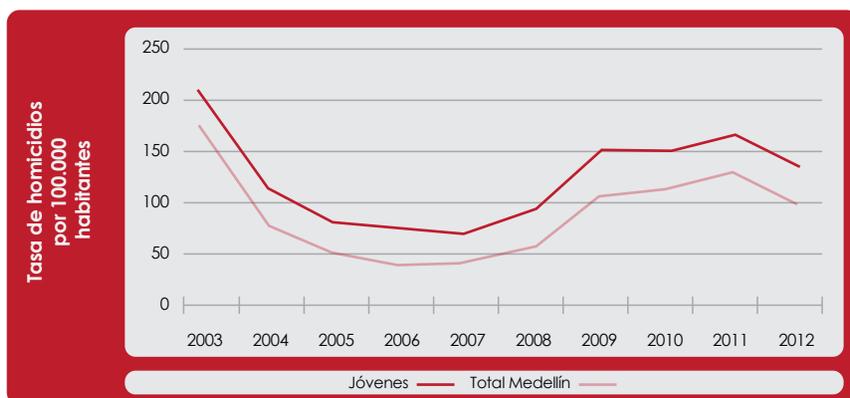
A partir de este tipo de programas y grupos se generan factores de protección tales como: *nuevas oportunidades, reconocimiento y posibilidades de crear nuevos referentes positivos*. Las nuevas oportunidades que le son ofrecida a los jóvenes tienen como base el desarrollo de habilidades que le permiten al joven sentirse reconocido por la comunidad como una persona capaz de crear y de construir a partir de su trabajo (Entrevista 60. Líder juvenil).

La línea que divide a los jóvenes agresores y no agresores en muchos casos no está bien definida. La posibilidad de vincularse a la violencia está constantemente presente y las condiciones personales de muchos los llevan a tomar esta decisión. Igualmente en muchos casos el acercamiento con la violencia puede generar en el joven la necesidad de ser resiliente evadiendo los factores de riesgo que en un momento lo pudieron haber llevado a ser agresor.

Los jóvenes se enfrentan a un dilema constante lo que conlleva a que se den en la mayoría de los jóvenes zonas grises. No es posible en muchos casos en zonas vulnerables y con jóvenes que han sufrido contextos de desatención diferenciar del 'bien y del mal y de lo legal y lo ilegal. (Entrevista 66. Funcionario)

### 5.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Los jóvenes no solo tienen participación en la violencia como agresores, igualmente son el grupo poblacional que tiende a ser más victimizado. La tasa de homicidios y de lesiones de jóvenes en Medellín, es representativa con relación a la tasa de homicidios y lesiones de la población general.



**Figura 8.** Tasa de homicidios de jóvenes en Medellín

Fuente: datos de la Policía Nacional de Colombia procesados por CERAC

Actualmente los jóvenes afectados por la violencia no responden a un perfil de víctima concreto, es decir no se pueden identificar características que sean generalizables para determinar, qué tipo de jóvenes puede estar en mayor riesgo de ser víctima de violencia. Sin embargo, se pueden destacar ciertos factores de riesgo a nivel individual que cuando se dan en determinadas coyunturas pueden hacer más propenso al joven de ser victimizado.

En cuanto a los factores de riesgo identificados, uno corresponde al nivel coyuntural y otros dos al nivel individual. En el nivel coyuntural los factores principales son la dinámica de la violencia y de control que se han internalizado; a partir de este contexto se potencia el riesgo de factores individuales como el *contravenir o retar el orden establecido y/o tener problemas personales con miembros de los GVO*.

En las zonas periféricas y populares de Medellín los GVO han tenido presencia y control a lo largo de diferentes períodos de la historia. Esto ha generado que se internalice en la contidianidad la dinámica de violencia y control, adaptando las formas de vida de la comunidad a la coyuntura de violencia a la que se enfrentan.

Este contexto de control y violencia implica el establecimiento de un orden paralelo al estatal, expresado principalmente a través de los cobros de extorsiones, las restricciones a la movilidad de acuerdo a los intereses de los grupos, la necesidad de previa autorización de los GVO para realizar ciertas actividades, entre otras acciones.

Teniendo en cuenta estas dinámicas, la resistencia que pueda poner un miembro de la comunidad, a través de la contravención directa o indirecta de las reglas impuestas, puede potenciar el riesgo. Al subvertir el orden, el principal riesgo es sufrir represarías impuesta por los GVO, que buscarán por medio de la violencia mantener ese control que ejercen.

Por otro lado el otro factor de riesgo identificado se encuentra asociado al establecimiento de vínculos cercanos con los miembros de los GVO, especialmente con los integrantes de los combos.

Este tipo de interacción cotidiana puede conllevar a que existan conflictos interpersonales entre los jóvenes de la comunidad que no están involucrados y aquellos que si lo están. La influencia que ejercen los combos en la comunidad normalmente lleva a establecer un orden a través del miedo, evitando que una persona se enfrente a algún miembro de este grupo por temor a que este pueda ejercer acciones violentas en su contra: “Si hay problemas con jóvenes que pertenecen a grupos es difícil resolverlos o intentar

enfrentarlos porque pueden haber consecuencias graves” (Entrevista 56. Lideresa juvenil).

Ambos factores de riesgo a nivel individual están fuertemente asociados al hecho de que exista un control violento arraigado en las comunidades.

#### **5.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia**

Frente a la dinámica de violencia que afecta a los jóvenes se pueden resaltar igualmente factores que los protegen de ser víctimas. Estos se derivan principalmente de los grupos y colectivos de jóvenes que se forman a partir de actividades e intereses compartidos.

Al igual que los factores de protección para ser resilientes, los principales factores que pueden proteger a los jóvenes de ser víctimas se derivan de iniciativas propias de los jóvenes o externas a ellos. La formación de grupos les permite a los jóvenes de las comunidades fortalecer el tejido social y crear redes de apoyo, dentro de las cuales se generan factores como *visibilidad, reconocimiento y respeto*.

Este es el caso de agrupaciones que se reúnen en torno a la música, la danza, actividades culturales, e incluso actividades para la promoción de la participación política. Algunos miembros de estos grupos juveniles se sienten más protegidos cuando la comunidad reconoce que se dedican a este tipo de actividades, y en ciertos casos los jóvenes llegan a obtener liderazgos que los posicionan como una figura de respeto ante los GVO. Así o expresa una joven:

Al estar vinculados a grupos artísticos, se mantiene en reuniones relacionadas con estos temas, esto excluye las posibilidades de reunirse con otro tipo de grupo o jóvenes, que en el caso de Medellín pueden devenir en Pandillas o combos. (Entrevista 55)

---

### **5.4. Iniciativas de prevención de la violencia juvenil**

#### **5.4.1. Caracterización de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil**

La infraestructura de prevención de violencia juvenil de Medellín se podría categorizar como robusta, en cuanto involucra, de forma balanceada, la participación de distintos sectores. Igualmente la oferta de iniciativas se concentra en la mayoría de los factores de riesgo que

afectan a los jóvenes, así como también refuerza los factores de protección identificados.

A partir de un mapeo realizado se pudieron identificar 80 iniciativas de prevención de violencia juvenil en Medellín, ejecutadas desde 2008. De estas 80, 34 se aplican directa y únicamente en la ciudad de Medellín, las otras 46 son iniciativas aplicadas a nivel nacional, las cuales tienen como una de sus zonas de incidencia a Medellín.

Del total, se registraron 37 iniciativas que previenen directamente la violencia juvenil, éstas en su mayoría trabajan con jóvenes de zonas vulnerables, en riesgo de ser víctimas o que estén o hayan estado involucrados en la violencia. Por otro lado, se contabilizaron 43 iniciativas indirectas, las cuales se concentran principalmente en programas educativos, de capacitación y desarrollo de habilidades en diferentes áreas.

En el mapeo realizado, se encontraron iniciativas coordinadas desde cuatro sectores, sin embargo no se podría determinar cual sector es más determinante en la oferta de prevención de violencia. Si bien las ONG son el sector que más iniciativas tiene (26 iniciativas), la diferencia no es muy representativa con respecto a las que ofrece el sector privado (17) y las entidades estatales (21).

El sector que menos oferta de iniciativas tiene es el de cooperación internacional, en el cual solo se registraron 3 iniciativas. Además de las iniciativas provenientes de estos cuatro sectores, existen iniciativas que son coordinadas en alianzas entre ONG, privados, cooperación internacional y Estado, estas suman un total de 13 iniciativas. Es importante resaltar que dentro del sector de las ONG se tienen en cuenta grupos o colectivos comunitarios, los cuales generan iniciativas de prevención.

Se pueden identificar cuatro ejes temáticos los cuales determinan las actividades y los objetivos de las diferentes iniciativas. Estos cuatro ejes son los que tienden a ser más recurrentes, sin embargo existen otras temáticas que también son abordadas.

El primero de ellos es el de “generación de habilidades para la vida”, este es un concepto que está siendo implementado principalmente por las entidades estatales locales, implementando programas que involucran distintos aspectos del desarrollo de un joven. Dentro de este concepto se involucran espacios para el conocimiento del joven, generación de habilidades de comunicación, manejo de relaciones interpersonales, capacitación para la toma efectiva de decisiones, manejo de problemas y conflictos, pensamiento creativo y crítico y por último manejo de emociones y estrés.

El segundo eje se concentra en las actividades deportivas y culturales. Éstas buscan potenciar a los jóvenes que tienen talento en el arte y el deporte, de manera que encuentren espacios donde se sientan identificados y reconocidos. Igualmente a través de este tipo de actividades, se busca que los jóvenes mantengan el tiempo libre ocupado en labores distintas a la violencia y actividades ilegales que los rodean. La mayoría de iniciativas del sector de ONG se concentran en este tipo de actividades.

El tercer eje es el de la educación, este tipo de iniciativas hacen énfasis en la escolarización, la educación primaria, superior y técnica. A partir de becas, de creación de escuelas especiales y de facilitar diferentes modos de financiación, se busca capacitar a los jóvenes para que puedan acceder al mercado laboral con una preparación formal. Este tipo de iniciativas son promovidas principalmente por el sector privado, igualmente forman parte de la oferta proveniente de las entidades estatales que actúan a nivel nacional.

Finalmente el último eje es el de las iniciativas que se centran en generar participación de los jóvenes. La principal actividad de este tipo de iniciativas es la capacitación en el manejo de las principales instituciones por las cuales los jóvenes pueden ejercer sus derechos. Igualmente se promueven figuras de liderazgo para que trabajen en sus comunidades a través de mecanismos formales e informales. Este tipo de iniciativas se aborda desde el sector de las ONG.

Existen otros tipos de iniciativas que buscan prevenir la violencia a través de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la generación de espacios protectores, la atención y orientación de los jóvenes, la prevención del reclutamiento (legal e ilegal), entre otras.

#### **5.4.2. Análisis de la efectividad de la infraestructura de prevención**

Los avances de Medellín en materia de prevención de violencia juvenil, son relevantes en comparación con otras ciudades del país. Como se mencionó anteriormente, la infraestructura de prevención es robusta, sin embargo cuando se analiza en términos de efectividad no todos los resultados son positivos. La principal evidencia de que aún falta consolidación en la prevención, son los altos niveles de violencia que se siguen observando.

Para analizar la efectividad de la infraestructura se tendrán en cuenta los avances y las limitaciones identificados. En cuanto a los avances, se puede destacar en primer lugar los logros desde la administración local, el

principal de ellos es la creación de la secretaría de juventud y la inclusión del Presupuesto Participativo Joven (PPJ). Si se observa la evolución de los planes de gobierno, se puede evidenciar cómo el tema de la juventud ha ido tomando fuerza, hasta convertirse en una población con una secretaría y un presupuesto independiente.

El fortalecimiento del sector estatal ha permitido que se logren esfuerzos conjuntos, generando iniciativas que involucran tanto al Estado como al sector privado y las ONG. Igualmente desde las comunidades se ha generado un conocimiento de la oferta de iniciativas, de los diferentes sectores, lo que ha permitido que este trabajo se lleve a cabo, en la mayoría de los casos, sin que la comunidad interfiera en el desarrollo de las actividades. Esto se evidencia principalmente con las actividades que desarrollan fundaciones, ONG y colectivos juveniles, los cuales son reconocidos y respetados por la comunidad e incluso por los GVO.

El trabajo de la fundación se hace a través de la escucha a la comunidad y la profundización de las problemáticas. Esta estrategia los ha blindado frente a las lógicas de violencia, ya que la comunidad es la que busca a la fundación, facilitando el trabajo mancomunado. (Entrevista 51. Funcionario)

Otro avance que se debe rescatar es el aumento de la capacitación y participación de los jóvenes. Los nuevos mecanismos que se han creado han preparado a los jóvenes con un pensamiento más crítico que les permite tener una mayor incidencia en espacios de generación de política pública y en las gestiones locales. A diferencia de los jóvenes de otras ciudades del país, en Medellín los jóvenes tienen un mejor conocimiento y manejo de los mecanismos institucionales que existen para hacer valer sus derechos (Entrevista 48. Funcionaria; Entrevista 64. Líder juvenil).

La mayoría de los avances se concentran en el sector estatal, sin embargo también se pueden resaltar varias limitaciones que se han generado a partir de la acción y de las modificaciones de este sector. Si bien se resaltó como un avance la creación de la secretaría de juventud y el PPJ, gran parte de las limitaciones identificadas son efectos perversos que se han generado a partir de estas dos figuras.

La Secretaría de Juventud ha tecnificado la formalización de los procesos que llevan a cabo los colectivos juveniles. Esto ha afectado principalmente a las iniciativas comunitarias, debido a que las obliga a seguir estándares impuestos por la institucionalidad, desviando en ciertos casos sus objetivos o fragmentando la colectividad. “Las iniciativas que nacen desde la comunidad son institucionalizadas por el Estado y no hay un

fortalecimiento, esto cambia las lógicas de las iniciativas y dejan de ser efectivas” (Entrevista 60. Funcionario).

Igualmente la oferta de iniciativas o de apoyo que se da desde la Alcaldía está generando rechazos en algunos sectores y colectivos juveniles. Esto se debe a la desconfianza en la institucionalidad (Entrevista 51. Funcionario) y a la dependencia a la cual se someten algunos colectivos en busca de poder mantener recursos para el desarrollo de sus actividades.

Desde colectivos involucrados en iniciativas de la Alcaldía (...) ha habido resistencia debido a que no se cree siempre en la Alcaldía, el trabajo aparece y desaparece, además de que cambia con las diferentes administraciones. No se logra el acompañamiento de grupos juveniles (Entrevista 60. Funcionario).

Otra de las problemáticas que afecta principalmente a las iniciativas comunitarias, son los efectos perversos causados por la búsqueda de recursos a través del PPJ. Si bien esto representa una innovación en materia de gestión y atención de las problemáticas juveniles, se ha generado competencia y, a veces, mal aprovechamiento de los recursos. Igualmente esto ha causado rivalidades y fracturas, dificultando la articulación de los esfuerzos de diferentes colectivos.

La problemática de articulación entre este tipo de iniciativas y las entidades estatales, también se refleja en la relación que tienen los colectivos juveniles con autoridades locales como las JAC y las JAL. La búsqueda y la competencia por recursos, en algunos casos generan que los intereses de los jóvenes no sean escuchados, y que se implementen los recursos de acuerdo a los intereses de las autoridades de las JAL (Bravo, 2011).

Ante los problemas de acceso a recursos, la falta de articulación y la desconfianza de los colectivos juveniles, las iniciativas desde el sector comunitario se ven fuertemente limitadas. Igualmente existe una fuerte competencia con las iniciativas impulsadas desde sectores más organizados y con mayor acceso a recursos (como el privado y las ONG), esto hace evidente la desventaja en la que se encuentran las iniciativas comunitarias (Entrevista 65. Lideresa juvenil).

Teniendo en cuenta que las iniciativas comunitarias, son las que generan más interés en los jóvenes y las que pueden llegar a tener un contacto más directo de manera que atiendan las necesidades reales de los jóvenes, las limitaciones antes mencionadas frenan la posibilidad de reforzar y hacer crecer este sector.

Por último se puede identificar una limitación que afecta a todas las iniciativas sin importar del sector del cual provengan. Esta se encuentra asociada a los factores de riesgo identificados anteriormente: “cultura de la ilegalidad” y “dinámicas internalizadas de violencia y control”. Según expertos, las iniciativas de prevención no logran tener la capacidad suficiente para enfrentar este tipo de problemáticas, lo cual hace que no se logre tener una efectividad total a pesar de los distintos esfuerzos que existen.

El diseño de las iniciativas de prevención no implica un acompañamiento del Estado que permita reforzar la institucionalidad, de manera que se evite que las redes de criminalidad sigan creciendo y alimentando las dinámicas de violencia (Entrevista 53. Funcionario). Si bien se logra involucrar a los jóvenes en muchas de las iniciativas aquí mencionadas, la oferta de los GVO y la cultura de la ilegalidad que la sustenta, siguen siendo un factor que genera una fuerte y constante competencia.

## **Cartagena: ciudad de murallas. La violencia juvenil olvidada**

*Jaime Márquez*

### **6.1. Contexto de la ciudad**

---

#### **6.1.1. Condiciones socioeconómicas**

En términos socioeconómicos, el distrito de Cartagena se caracteriza por tener una situación ambivalente: por un lado, tiene tres sectores muy desarrollados que generan crecimiento económico en la ciudad, sin embargo, por otro lado, existen amplias zonas marginalizadas de esos centros de desarrollo y bienestar, y los indicadores sociales parecen señalar que las condiciones de inequidad y pobreza se están perpetuando en el tiempo. Como se desarrollará a lo largo de este capítulo, estas condiciones han favorecido la persistencia e, incluso, el recrudecimiento de la violencia juvenil durante el período de estudio.

Para comenzar, cabe señalar cuáles son los principales renglones económicos de la ciudad. El primero es la hotelería y el turismo, concentrado principalmente en el Centro Histórico. La ciudad es líder en este ámbito en el país; en el 2012, ocupó el segundo lugar nacional en términos del promedio de turistas que ocupan la oferta hotelera con 6.474 personas registradas y en ingresos generados por el sector con 37.874.626 miles de pesos, sólo superada por Bogotá (DANE, 2013). Ello tiene que ver con el desarrollo de una infraestructura encaminada a aprovechar el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, que fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en 1984.

Los otros dos renglones principales de la economía están ubicados en la zona de Mamonal y corresponden, en primer lugar, al sector industrial, que cuenta con la segunda refinería de crudo y tratamiento de petroquímicos más grande del país y las industrias de plásticos; y, en segundo lugar, el sector portuario.

Pese a lo anterior, la economía cartagenera no ha logrado incorporar laboralmente a las poblaciones de barrios enteros que han quedado marginalizadas de estos sectores. Por ejemplo, en el plan municipal de desarrollo, la localidad de la Virgen y Turística, y en específico la comuna 6, no se incluyen en los planes de creación de ingresos económicos de la ciudad, a pesar de que estos territorios tienen los peores indicadores económicos (Ahora sí Cartagena, 2013).

Además, el posicionamiento del comercio y la industria en los últimos 30 años se ha logrado en detrimento de las economías locales tradicionales como la agricultura, la piscicultura y la pesca artesanal. Esto se ve representado en la evolución de la participación de estos sectores en el PIB de la ciudad; en 1980, la economía tradicional representaba el 15,4% pero hacia el año 2011 la participación en el PIB de este sector decayó hasta un 5% (Acosta, 2012).

A su vez, el desarrollo turístico ha jalonado el mercado inmobiliario, trayendo grandes marcas comerciales, y hoteleras, lo que ha generado el incremento de los costos del suelo, la vivienda, los servicios públicos, etc. La gentrificación<sup>70</sup> ha sido uno de los efectos de este proceso. En sectores aledaños al Centro, como los Barrios Getsemaní, San Diego y Manga, los habitantes tradicionales se han visto obligados a vender y desplazarse a otros espacios.

Así, en concordancia con Ángela Cañón (2014), se puede concluir que Cartagena ya no le pertenece a los habitantes locales, es una ciudad de murallas:

Nuevas murallas imaginarias, demarcadas por la circulación del capital transnacional, delimitan la posibilidad de las cartageneras y cartageneros para caminar, andar y vivir su ciudad (...) Las murallas ahora demarcan la prohibición del ingreso libre de sus pobladores. Crecientemente las oficinas gubernamentales dirigidas a la atención del público general, mayoritariamente afrocolombianos, están siendo reubicadas fuera de las murallas, para no “entorpecer” la tranquilidad de los turistas. (p.54)

Aunado a lo anterior, se han observado avances muy moderados en los indicadores sociales del distrito en la última década. En materia de pobreza, en el 2002 el 9,4% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza

pasando a un 5,8% en el 2013, siendo los mejores años de repunte el 2005 y 2011, llegando a un porcentaje de 4,6 y 4,7 respectivamente. Aun así en comparación con las otras ciudades de estudio, Cartagena tiene los niveles más altos de pobreza.

En cuanto a las NBI, también se ha visto una mejora, puesto que en el año 1993 este indicador alcanzaba el 33% de la población cartagenera, mientras que en el año 2005 dicho índice bajó 6,9 puntos, para un resultado final del 26%. Sin embargo, en comparación con las otras ciudades de estudio, Cartagena ocupa el puesto más alto en NBI. Además, en el área rural el índice NBI alcanzó en el 2005 el 35,5% de la población, reportando un incremento de 2,4 puntos porcentuales frente a 1993.

Finalmente, otro indicador que no sólo no aumentó sino que presentó un retroceso en estos años fue la cobertura en educación secundaria. Mientras que en el 2005 la ciudad contó con un porcentaje del 81% en el 2012 cayó al 79,3%.

## **6.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO**

### **6.1.2.1. Primera etapa (1998 – 2005): control paramilitar y desmovilización**

El departamento de Bolívar, del que Cartagena es su capital, se encuentra localizado en la costa Caribe y cuenta con una cadena montañosa en el centro, subregión que es conocida como los Montes de María, la cual es compuesta por la serranía de San Jacinto. Este lugar ha sido estratégico para el conflicto armado, de ahí que ésta sea una de las regiones históricamente más afectadas por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras por parte de los grupos armados (Defensoría del Pueblo, 2012).

La región montemariana tiene una especial importancia para los grupos armados, dada su cercanía con la costa, y la posibilidad de establecer rutas de tráfico de drogas, armas, y un corredor directo hacia Cartagena y el canal del Dique (Defensoría del Pueblo, 2012).

Las FARC hicieron presencia y dominaron la región con los frentes 35 y 37, hasta que en 1998 incursionó el bloque Héroes de Montes de María de las AUC (Defensoría del Pueblo, 2012). Esta confluencia de organizaciones desencadenó una disputa constante por el territorio, caracterizada por la comisión de masacres y graves violaciones a los derechos humanos de la población<sup>71</sup>, y, finalmente, condujo a la derrota estratégica de las FARC en la región, ejemplificada en la muerte en combate de uno de sus principales jefes en la zona, alias Martín Caballero (La mala hora de las FARC, 2010)

En particular, el paramilitarismo tuvo injerencia en Cartagena, apoyado presuntamente por empresarios, comerciantes, transportadores, ganaderos y agentes estatales. Este grupo tenía como objetivo en la ciudad la limpieza social, y la eliminación de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. Estas acciones delictivas eran comandadas por alias “Juancho Dique” líder del frente Canal del Dique de las AUC (Los doce sicarios de ‘Juancho Dique’ en Cartagena, 2009; Quevedo, 2009).

Otra influencia sobre la ciudad ejercida por el conflicto armado y en especial por el paramilitarismo se da de forma indirecta en relación con el desplazamiento forzado. Entre los años 2000 al 2004 la ciudad recibió 39.096 personas desplazadas, provenientes en su mayoría de la región montemariana.

Al revisar lo relacionado con la ubicación de las familias desplazadas en el Distrito, se reconoce como los sitios de mayor concentración de esta población a los barrios de: el Pozón; san José de los Campanos, Olaya Herrera, Nelson Mandela, Villa Hermosa, Henequén, el resto de familias se distribuye en 25 barrios o sectores de las localidades de la Virgen y de la bahía. (Daniels, et al., 2010, p.46).

La presencia del paramilitarismo bajo la estructura de las AUC tiene su fin el 14 de junio del 2005 cuando se desmovilizó el Bloque Héroes de María.

#### **6.1.2.2. Segunda etapa (2005 – actualidad): reacomodo de los GPDP**

El desmonte del paramilitarismo no significó el fin de las amenazas en contra de la población y la violencia en la ciudad. Algunos cuadros y miembros del bloque Héroes de Montes de María y del bloque Central Bolívar, que no se desmovilizaron, o que lo hicieron pero reincidieron en la delincuencia, buscaron posicionarse como los actores hegemónicos en los lugares que eran del control paramilitar, haciendo uso de violencia selectiva, como el sicariato o amenazas, en especial dirigida hacia líderes sociales y de desplazados, en específico, la Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena.

Los grupos que emergieron luego de la desmovilización paramilitar en la ciudad fueron Los Paisas, Las Águilas Negras, Los Urabeños y Los Rastros (Policía Nacional, 2011), quienes concentraron su accionar principalmente en la localidad de la Virgen y Turística:

Al observar la dinámica anual de los homicidios en Cartagena durante los dieciséis años, según las cifras del Centro de Observación y Seguimiento del Delito [COSED] los años 1998, 2000 y 2008, figuran como los de menor incidencia homicida, puesto

que se registraron 179, 186 y 179 homicidios respectivamente. En los años 2006 y 2009 se presentan las cifras más altas de violencia homicida, con 268 y 243 casos, respectivamente (Cosed, 2009). El aumento del número de homicidios en el año 2009 puede explicarse por la disputa de los actores armados pos desmovilización, por el control de zonas estratégicas. (Defensoría, 2012, p. 35).

La consolidación de estos grupos inició a partir del año 2009, como narra un líder social entrevistado

El 2009 es un año emblemático porque Cartagena es ciudad receptora de jóvenes desvinculados debido al proceso con las AUC, pero no se tenía en cuenta que detrás de los niños, hay estructura de familias, y detrás excombatientes de las AUC. (Entrevista 71)

La llegada de nuevos grupos armados a la ciudad generó un proceso de profesionalización y especialización en actividades delictivas de las pandillas que ya se localizaban en el territorio. Un ejemplo de ello son las labores de extorsión y sicariato que ejercen estas agrupaciones para los GPDP (Entrevista 71. Líder juvenil).

Similar al nivel nacional, actualmente los GPDP se reestructuran con base a acuerdos o confrontaciones, de ahí que Los Urabeños hayan absorbido a organizaciones con menos poder de acción en Cartagena, como Los Paisas (Corporación Nuevo Arcoiris, 2012).

En la actualidad, en Cartagena hacen presencia Los Urabeños y en menor medida Los Rastrojos y Los Paisas, los cuales se articulan en lo local ejerciendo control territorial para la protección de corredores de tráfico, extorsión al comercio, reclutamiento ilegal, amenazas a los procesos organizativos de desplazados y reclamantes de tierras y actos de sicariato, entre otras actividades delictivas.

### 6.1.3. Ejes de criminalidad

El distrito de Cartagena está dividido en tres grandes localidades: la localidad Histórica y del Caribe, que concentra lugares emblemáticos como el Centro Histórico, el Castillo de San Felipe y el cerro de la Popa; la localidad de la Virgen y Turística, caracterizada por concentrar los sectores más vulnerables de la ciudad; y, por último, la localidad Industrial de la Bahía, donde se encuentra el puerto comercial, el astillero y la zona industrial de Mamonal.

Los GVO se asientan en 3 lugares específicos que son funcionales a sus actividades criminales.

La localidad Industrial y de la Bahía concentra la actividad portuaria de Cartagena, allí existen aproximadamente 70 muelles comerciales (Entrevista 72. Funcionario) de los que solo la mitad son constantemente monitoreados y cumplen con todos los protocolos de antinarcóticos. En esa medida el puerto se encuentra bajo una amenaza constante de ser usado para actividades ilícitas, lo que se ve comprobado con el alto número de cargamentos de cocaína incautados por las autoridades en la ciudad (Incautan dos toneladas de cocaína líquida en Cartagena, 2014).

Además, esta localidad es estratégica para los GVO dado que tiene dos corredores importantes, uno hacia el anillo vial que da acceso hacia la zona portuaria y al canal del Dique y el otro hacia el Golfo de Morrosquillo.

La zona industrial se encuentra en inmediaciones a dos infraestructuras importantes en términos comerciales y delictivos: los embarcaderos y las bodegas. Esta zona es clave para el narcotráfico a gran escala, como centro de acopio y envío de droga (CTI y Armada propinaron duro golpe al narcotráfico en Cartagena, 2010); mientras que en la dinámica local “La localidad es objeto de extorsión y de reclutamiento de menores” (Caicedo, 2011, p.21). En particular, el barrio Nelson Mandela de esta localidad presenta serias problemáticas de seguridad; altos índices de homicidio en el marco del sicariato<sup>72</sup> (COSED, 2013), concentración de población desplazada y presencia de pandillas (Moreno y González, 2014).

El segundo eje es la localidad Turística de la Virgen que concentra los niveles más altos de vulnerabilidad tanto económica como ambiental, esto último debido a los altos riesgos de marea alta. Adicionalmente, la ciénaga de la Virgen, que rodea esta localidad, es el vertedero de residuos de Cartagena, lo que conlleva riesgos a la salud. Así mismo, su posición es estratégica y es objeto de disputa por parte de los GPDP debido al control del tránsito que ella permite hacia el norte de Colombia en especial el eje Cartagena–Barranquilla.

La aglutinación de población vulnerable convierte esta localidad en el lugar de reclutamiento forzado, o articulación de pandillas en prácticas delincuenciales de los GPDP. También se han encontrado la venta de productos legales, a muy bajo costo lo cual puede ser explicado como un fenómeno que hace parte de la operación de lavado de activos (Caicedo, 2011). Se ha creado un corredor de criminalidad comprendido por los barrios de Nazareno, Olaya, Nelson Mandela y el Pozón (Entrevista 74. Funcionario). Este último es importante ya que en la actualidad es un barrio receptor de comunidad desplazada, y allí se han desarrollado procesos organizativos de víctimas del conflicto y reclamantes de tierras en el marco de la Ley de Víctimas.

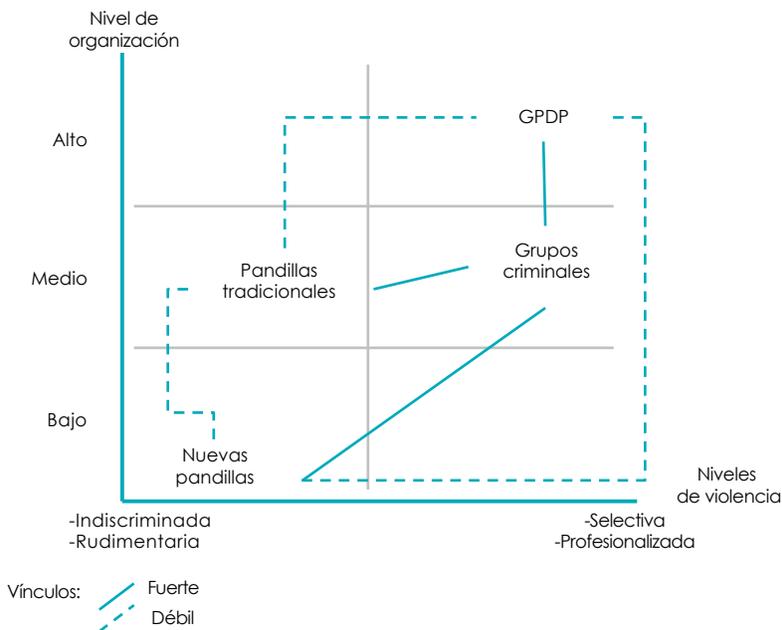
Por último la localidad histórica y del Caribe aglutina dos espacios claves en la criminalidad cartagenera: (1) las faldas del cerro de la Popa, donde han hecho presencia histórica pandillas de más de tres generaciones que delinquen en hurtos, sicariato y extorsión (Entrevista 72. Funcionario). (2) El mercado de Bazurto donde confluye la mayoría de GVO, por medio de la extorsión, y control a las transacciones que allí se presentan, ejerciendo un control sobre las mercancías que entran y salen del mercado y amenazando de muerte a las personas que no se sometan a este tipo de acciones (Ya van 5 comerciantes asesinados en mercado de Bazurto de Cartagena, 2012).

## 6.2. Análisis de la violencia juvenil

### 6.2.1. Los jóvenes y la violencia organizada

En Cartagena hacen presencia siete GVO que tienen relación con la violencia juvenil: pandillas juveniles, pandillas tradicionales, bandas criminales, mafias, y GPDP.

El siguiente gráfico presenta los grupos que se han mencionado anteriormente, conforme a su capacidad organizativa, el nivel de violencia que ejercen y las relaciones que sostienen.



**Figura 9.** Grupos de violencia organizada en Cartagena (2009 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

### 6.2.1.1. Nivel bajo: pandillas

El nivel bajo está conformado por las pandillas juveniles de barrio, que se concentran en su mayoría en la localidad de La Virgen y Turística, especialmente en los barrios El Pozón y Olaya Herrera de la comuna 6. Sin embargo, el pandillerismo no hace presencia exclusiva en esta localidad por el contrario se ubica en toda la ciudad:

(En la localidad) Histórica y del Caribe Norte, las pandillas se concentran especialmente en los barrios Palestina, Daniel Lemaitre, San Francisco, Lo Amador, Santa Rita, Pablo VI, Canapote y el sector del Pie de la Popa (...) en la localidad 3: Industrial y de la Bahía, las pandillas se ubican en los barrios Nelson Mandela, La Esmeralda y El Carmelo, entre otros. Así mismo en los sectores de Mebrillal y Pasacaballos en las unidades comuneras rurales. (Moreno y González, 2014, p.9).

Según la Policía (2008), las pandillas se clasifican en varias categorías según el grado de uso de la violencia y el riesgo que representan para la población: pandillas manejables, agresivas, peligrosas y muy peligrosas. En este sentido el grado de peligrosidad esta dado por las acciones criminales que se llevan a cabo, mientras unas se dedican a hurtos<sup>73</sup> y comenten lesiones, las más peligrosas llevan a cabo acciones de sicariato y tráfico de drogas (Moreno y González, 2014)

Las pandillas están conformadas en su mayoría por jóvenes entre los 12 y los 25 años. El gobierno de Cartagena estima que 1.600 menores pertenecen a estas estructuras, y que existen aproximadamente 82 de estos grupos. De los integrantes de las 52 pandillas peligrosas, el 48% son menores de edad, mientras que el 47,1% corresponde a jóvenes adultos (Moreno, P; González, 2014).

Este tipo de GVO actúa en los espacios locales y tiene una relación estrecha con los barrios a los que pertenecen, de ahí que es recurrente observar enfrentamientos entre pandillas de sectores fronterizos (Vándalos causaron destrozos en cuatro calles de Lo Amador, 2011). Estas disputas se llevan a cabo con piedras, palos, armas blancas y en ocasiones armas de fuego. Según la Alcaldía de Cartagena (2013), los homicidios por riñas entre pandillas aumentaron en relación al 2012.

Las pandillas tienen, además, las siguientes características:

Las pandillas suelen estar compuestas en su mayoría por jóvenes, no es posible identificar al líder o líderes y son integradas

en promedio de ocho a diez personas; en cuanto a las armas empleadas en los enfrentamientos se menciona el uso de cuchillos, changon, navajas y piedras. (Entrevista 71. Líder juvenil)

En cuanto la ocupación del territorio y las lógicas de las fronteras invisibles un funcionario entrevistado manifiesta:

Existen las barrera invisibles lo cual se evidenció hace poco menos de un mes cuando en el sector (barrio Torices) asesinaron a un joven, este hecho desencadenó en una serie de venganzas lo cual hizo necesario la militarización de la zona, pero las fronteras solo aplican para los jóvenes miembros de los grupos. (Entrevista 72).

Las actividades económicas de estas pandillas están relacionadas principalmente con el microtráfico, el hurto<sup>74</sup> y en ocasiones son contratados para ejecutar tareas encargadas por GVO de mayor nivel (Entrevista 77. Funcionaria).

La relación entre la comunidad y estas pandillas tiene dos características: por un lado, está mediada por el miedo generalizado y la zozobra que estas despiertan en la población, dada la violencia indiscriminada que ejercen estos grupos; y, por otro lado, por los lazos filiales que existen con personas de la población, quienes son madres, padres o amigos de estos jóvenes agresores (Entrevista 72. Funcionario). Aún así, las pandillas no han establecido mecanismos para regular la vida diaria de los pobladores locales ni para resolver los conflictos vecinales (Entrevista 77. Funcionaria).

De igual forma, la relación de los líderes comunitarios con las pandillas es mínima, ya que los líderes no se atreven a mediar en los conflictos propiciados por las pandillas debido a que pueden ser violentados (Entrevista 77. Funcionaria). El operar de las pandillas juveniles es de alta notoriedad, siendo los desmanes y las riñas de alto nivel el diario vivir en el distrito. En algunos barrios estas situaciones escalan a tal punto que la comunidad denuncia los hechos ante la Fuerza Pública, sin embargo, la respuesta estatal ante estos hechos suele ser limitada y de lenta reacción (Guerra entre pandillas deja tres muertos y un Policía herido en Cartagena, 2009).

En relación con lo anterior, es necesario analizar el papel del Estado frente a la violencia juvenil conforme a tres variables: primero, el nivel de confianza de la comunidad frente a la Policía; segundo, la relación de los jóvenes agresores o no con esta entidad; y por último, la relación que tienen

los jóvenes con las autoridades civiles que hacen presencia en las zonas donde habitan.

A diferencia de otras ciudades como Medellín, en Cartagena la comunidad acude a la Policía para denunciar las acciones de las pandillas, ya que el miedo a los pandilleros es mayor a la desconfianza que tienen frente a esta institución. Esto se debe en parte a que no se han dado indicios de corrupción, anuencia o cooperación entre las pandillas y la Fuerza Pública.

Sin embargo, la capacidad de acción de la Policía de cara a la mitigación del problema es limitada. Esta entidad se enfoca en su mayoría a una acción reactiva, dada la ausencia de actividades o acciones de prevención. En esta medida cuando se dan los hechos de criminalidad más recurrentes como vandalismo o enfrentamientos entre pandillas, la Policía no logra tramitar de manera asertiva el problema, permitiendo que el conflicto escale y devenga usualmente en la muerte de alguno de los enfrentados (Entrevista 71. Líder juvenil).

Adicionalmente, según personas entrevistadas, las actividades comunitarias de prevención de la violencia que son lideradas por la Policía, dependen de los comandantes o policías de turno, de tal forma que cuando ellos son asignados a otras ciudades, el trabajo adelantado se pierde (Entrevista 77. Funcionaria).

Las pandillas juveniles han afectado la prestación de servicios públicos en las zonas donde hacen presencia (Reforzarán seguridad de puestos de salud en Cartagena, 2013) (Misión médica marchó contra agresores de puestos de salud de Cartagena, 2014). Específicamente, en el marco de enfrentamientos entre estos grupos, se ha interrumpido la provisión de servicios como la salud, la pavimentación, o el arreglo de cableado en los servicios públicos (Enfrentamientos entre pandillas impiden la pavimentación de una calle en Cartagena, 2012). Así mismo, los prestadores del servicio de transporte son víctimas de extorsiones, a través del establecimiento de peajes ilegales, que cobran las pandillas en algunos sectores de la ciudad (Prenden las alarmas ante las extorsiones y denuncia, 2012).

En cuanto a la participación de las mujeres en las pandillas se identificaron tres aspectos: ellas tienen un papel marginal en la criminalidad de estos grupos, son afectadas en acciones delictivas ejercidas por estos grupos y, cuando se involucran en pandillas, cumplen el papel de vendedoras de sustancias; claro está que en menor medida que los hombres. Aun así se identificó una banda compuesta exclusivamente por mujeres denominada “las Jabonas” ubicada en el sector de Fredonia, las cuales se enfrentaban contra mujeres de otras bandas (Entrevista 80. Líderesa).

Las mujeres participan en las pandillas como compañeras sentimentales de los miembros de estos grupos y como cómplices en la comisión de delitos, ejerciendo actividades menores, por ejemplo, el descargue de armas o mercancía (Entrevista 68. Líder juvenil).

Por último, algunas pandillas buscan adquirir notoriedad y reconocimiento trasladando los enfrentamientos en los que se involucran hacia zonas turísticas o barrios de estrato alto como Boca Grande (Dos heridos deja riña en playas de Boca Grande, 2013)

### **6.2.1.2. Nivel medio: pandillas tradicionales**

En el nivel intermedio se identificaron dos tipos de grupos: en primer lugar, las pandillas tradicionales que se asientan en las faldas del cerro de la Popa, que tiene una tradición de cerca de tres generaciones, entre las que se destacan las Águilas y los Kalimanes. En segundo lugar están los grupos de criminalidad organizada que no se aglutinan alrededor de pandillas, sino que tienen características de oficinas de cobro, encargadas de prestar servicios de delincuencia como fleteo, sicariato, extorsión, robo de apartamentos, entre otros.

Las pandillas “tradicionales” se ubican en este nivel ya que tienen un grado mayor de organización, jerarquía e interlocución con las comunidades donde habitan.

El origen de las pandillas tradicionales se rastrea hacia la década de los 70, en donde jóvenes de sectores populares de ese entonces, en especial las faldas del cerro de la Popa, se asocian en las esquinas en búsqueda de identidad, alrededor de uniformes, música -en especial la champeta-, y el reconocimiento del barrio (Entrevista 72. Funcionario).

Resulta interesante destacar la influencia de la cultura estadounidense por medio de la película *The warriors* de 1979, donde los miembros de estas pandillas se uniformaban con símbolos distintivos, como emblemas de águilas o colores. En el caso de Cartagena, esto venía acompañado de las fiestas de *picó* y la música champeta, elementos culturales que aún sobreviven (Boyano, 2009).

El senador Antonio Correa afirmó que en Cartagena existen aproximadamente 82 pandillas. Según un experto entrevistado (Entrevista 72. Funcionario), de esas 82 pandillas, 30 cuentan con una clara jerarquización y mandos organizados, a manera de aparato armado. En igual medida estas 30 pandillas con un carácter más organizado, son enlaces de grupos armados en los niveles locales.

Este tipo de pandillas intermedias, en el último periodo han sufrido un cambio y una profesionalización de su accionar como consecuencia del proceso de desmovilización de las AUC (Entrevista 71. Líder juvenil).

Las pandillas tradicionales se caracterizan por tener fuertes vínculos filiales, sus miembros pertenecen a familias que se han dedicado por varias generaciones a delinquir. En igual medida el grado de interlocución y reconocimiento con la comunidad es mayor, a diferencia de los GVO de nivel bajo. Los líderes de los GVO del nivel medio, en específico las pandillas tradicionales tienen interlocución con algunos adultos mayores de las comunidades, esto se debe en parte a su presencia histórica en ciertos sectores (Entrevista 72. Funcionario).

Algunas pandillas tradicionales, en particular del sector industrial y portuario de Mamonal, concentran su accionar en campañas de limpieza social y prestación de servicios de seguridad.

En cuanto a la relación de la Policía con estos grupos, se ha reportado que existe un cierto tipo de anuencia, como se comentó en una entrevista:

(En) algunos lugares existe una complicidad de los actores al margen de la ley con la Policía, lo que se ve reflejado en que sean dejados libres después de cometer un delito o en que cuando se solicite la presencia de la Policía, estos sean llamados y no lleguen, todo funciona en una dinámica de que roban y parten, y ahí no pasa nada (Entrevista 73. Exagresora).

Adicionalmente, se han denunciado casos de participación de integrantes de la Fuerza Pública en el alquiler de armas y motos para cometer delitos (El Universal, 2010; Entrevista 77. Funcionaria)

Las acciones de los GVO de nivel medio no tienen tanta notoriedad en lo público, ya que manejan un accionar más estructurado y soterrado, y se dedican a labores que requieren un grado mayor de preparación como el fleteo o el robo de camiones enteros de mercancías. La actividad que más impactos tiene para la población es la extorsión a comerciantes, que se ha extendido al comercio menor; especialmente a vendedores ambulantes, vendedores de chance y personas con empleos formales.

El rol de las mujeres en los grupos del nivel intermedio tiene dos características: por un lado, es muy similar a la participación que tienen en los grupos del nivel bajo, como compañeras sentimentales, ayudantes, ventas de narcóticos. El segundo rol lo cumplen algunas mujeres adultas, que

ejercen un papel preponderante al interior de las GVO como matronas, consultoras, o mediadoras (Entrevista 77. Funcionaria).

### 6.2.1.3. Nivel alto: GPDP

En este nivel hacen presencia los GPDP; organizaciones de carácter nacional que se asientan en las ciudades según las ventajas comparativas que estas les ofrecen. Como se mencionó anteriormente, según la Defensoría del Pueblo (2011), en Cartagena han hecho presencia, primero, las Águilas Negras y Los Paisas, y, ahora, Los Urabeños, quienes controlan la mayoría de rentas ilegales de la ciudad.

La relación de la comunidad con estos grupos es conflictiva ya que estos últimos usan métodos similares a los que ejecutaban las AUC, “acciones que no se visibilizan fácilmente por las tácticas de amedrentamiento sobre las comunidades” (Defensoría del Pueblo, 2009, p.4). Entre otros objetivos, estos grupos buscan quebrar el tejido social en la comunidad que se ha construido alrededor de las reclamaciones de líderes de víctimas y restitución de tierras. Esto se da especialmente en los barrios más marginales receptores de población desplazada como El Pozón.

Por otro lado, dada la importancia del puerto de Cartagena para el comercio nacional e internacional de narcóticos, los GPDP han buscado controlar estas actividades: “el que controla la ruta, controla la distribución, el que controla la distribución, controla el microtráfico” (Entrevista 71. Líder juvenil). Adicionalmente, algunos de estos grupos, como Los Urabeños, han diversificado su campo de acción económico, donde el negocio del narco tráfico se ha visto relegado por otras actividades menos riesgosas, como la minería ilegal, la extorsión a grandes y pequeños comerciantes, la inclusión en las redes mundiales y locales de trata de personas (El microtráfico: guerra por las “ollas”, 2014). En este rubro de la criminalidad Cartagena juega un rol primordial, por su condición de destino turístico sexual (McDermott, 2014).

Estas organizaciones, a diferencia de las AUC, no tienen un orden jerárquico tan rígido. A nivel nacional existen unos líderes, pero en los niveles locales se organizan alrededor de la venta de franquicias y la cooptación de la criminalidad local (El microtráfico: guerra por las “ollas”, 2014). Es en este escenario donde se presentan las relaciones de los GPDP con las pandillas, de ahí que algunas acciones de las pandillas sean vistas como delincuencia común, cuando en realidad hacen parte del accionar de los GPDP (Defensoría del Pueblo, 2011).

En ese orden de ideas y según la Defensoría del Pueblo (2011), la relación de estos grupos con la violencia juvenil es más en su condición de victimarios;

los GPDP reclutan jóvenes y han comenzado a cooptar a las pandillas de la ciudad.

En cuanto a su relación con la Fuerza Pública, en los últimos dos años se han identificado sectores de las Fuerzas Militares que han colaborado con los GPDP en Cartagena, especialmente con el tráfico de armas (Grabaciones “salpican” a 8 generales por presunto tráfico de armas, 2014).

Aun así, los GPDP son un tema relevante en la agenda nacional de orden público lo cual se ve representado, en la investigación, judicialización y captura de miembros pertenecientes a estas bandas, en el caso de Cartagena se han visto varios operativos en donde han caído grandes cargamentos de cocaína y capturas de miembros de estas estructuras (Marín, 2014).

### **6.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes**

Se identificaron seis situaciones críticas de violencia contra los jóvenes: (1) reclutamiento forzado por parte de GVO; (2) agresiones físicas y asesinatos en el marco de los enfrentamientos entre pandillas; (3) asesinatos selectivos de jóvenes en el marco de acciones de sicariato; (4) amenazas contra hijos de desplazados e integrantes de organizaciones comunitarias por parte de GPDP; (5) restricciones a la movilidad (fronteras invisibles) por parte de las pandillas y (6) explotación sexual de jóvenes y menores de edad por parte de redes criminales no identificadas.

#### **6.2.2.1. Reclutamiento forzado de jóvenes por parte de los GVO**

El reclutamiento en Cartagena tiene varias particularidades, la cuales están asociadas a sus características socioeconómicas y a las estrategias y objetivos que los GVO se trazan sobre el control de la ciudad.

La problemática de reclutamiento que se presenta en la ciudad no puede ser enmarcada del todo en las definiciones tradicionales de reclutamiento forzado, ya que no es ejercida en su totalidad por grupos del conflicto.

Si bien los GPDP tienen características de organizaciones involucradas en el conflicto, ya que cuentan con una estructura, un cierto poder de coerción y un devenir histórico que los ha posicionado como actores en el conflicto actual; su forma de operar se basa en el uso de franquicias, construcción de acuerdos y cooptación de las manifestaciones de violencia urbana y pandillerismo, por medio de la delegación de tareas a cambio de recursos, armas o reconocimiento.

En este sentido, la siguiente definición de reclutamiento es acorde a dichas particularidades de los GPDP en Cartagena:

(...) todo tipo y forma de vinculación, coactiva o seductiva, permanente y/o transitoria, de niños, niñas y adolescentes (menores de 18 años), para ser utilizados directa o indirectamente en prácticas armadas y no armadas, ejecutadas por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados, o sus miembros, en contextos de violencia sistemática y generalizada (conflictos armados internos e internacionales y guerras civiles). (CNMH, 2013, p.277).

En el caso de Cartagena el reclutamiento tiene dos objetivos: primero, fortalecer la estructura criminal y la influencia de estos grupos en lo local; y, segundo, ejercer presión sobre las comunidades y los jóvenes, ya que si se niegan a unirse a los grupos son objeto de amenazas y amedrentamiento, en especial contra los hijos de madres asociadas en organizaciones de víctimas. Estas amenazas generan miedo, zozobra e, incluso, casos de desplazamiento forzado (Defensoría del Pueblo, 2010).

#### **6.2.2.2. Agresiones físicas y asesinatos en el marco de los enfrentamientos entre pandillas**

El grado de violencia que ejercen las pandillas en la ciudad de Cartagena es indiscriminado y a gran escala, enfrentándose en continuas oportunidades en gran parte de las zonas populares de la ciudad, con un especial énfasis en la localidad de la Virgen y Turística.

Se ha identificado que en algunas ocasiones las pandillas se citan por medio de redes sociales para saldar “cuentas pendientes” o “deudas de sangre”. Estos enfrentamientos se inician por medio del uso de piedras y palos, para luego escalar al uso de armas de fuego y cuchillos. Según el Centro de Observación y Seguimiento al Delito [COSED] (2013) en el periodo 2012 - 2013 murieron 63 personas en medio de estos enfrentamientos.

Este tipo de enfrentamientos fuera de los riesgos a los que se exponen los participantes de las riñas, también afectan a la comunidad en general. Por ejemplo, varios jóvenes habitantes de sectores como la Candelaria han muerto por “balas perdidas” en el marco de estos enfrentamientos (Pelea de pandillas causa la muerte de menor en el viernes santo, 2011). Además, los estudiantes y jóvenes que frecuentan los colegios se ven afectados por la violencia de las pandillas, en tanto en estos lugares se citan estos grupos para enfrentarse (Continúan enfrentamientos entre pandillas en Flor

del Campo, 2014; Joven herida por bala pérdida en enfrentamiento entre pandillas en Cartagena, 2012).

Los enfrentamientos han sido intervenidos por la Policía, pero en numerosas ocasiones el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales ha afectado a las poblaciones donde se llevan a cabo estos hechos (Aumentan peleas de pandillas a las afueras de colegios en Cartagena, 2014).

### **6.2.2.3. Asesinatos selectivos de jóvenes en el marco de acciones de sicariato**

Según COSED (2013), la mayor parte de los homicidios que se registran en Cartagena se han presentado en el marco de acciones sicariales. La actividad de este tipo de hechos se incrementa drásticamente en el periodo 2008 - 2009, cuando se pasó de 78 víctimas a 149 en el 2009, lo cual se explica por el reacomodo de los GPDP ya que en los años subsiguientes al 2009 las cifras disminuyen; a excepción del año 2012 donde se presentó un repunte como se observa en la figura 10 (Entrevista 71. Líder juvenil).

En cuanto a la forma como este tipo de violencia afecta a los jóvenes, según el Observatorio del Delito del Caribe (2014), de los 86 homicidios que se presentaron en el primer trimestre del año 2014 en el departamento de Bolívar, 71 muertes tuvieron lugar en la ciudad, 41 personas se ubicaban en el rango etario de 18 a 28 años. Del total de homicidios en este periodo de tiempo el 47% fueron cometidos por sicarios. Las armas que más se usaron fueron -según los reportes recopilados por el observatorio- armas calibre 9 mm y revolver calibre 28 mm.

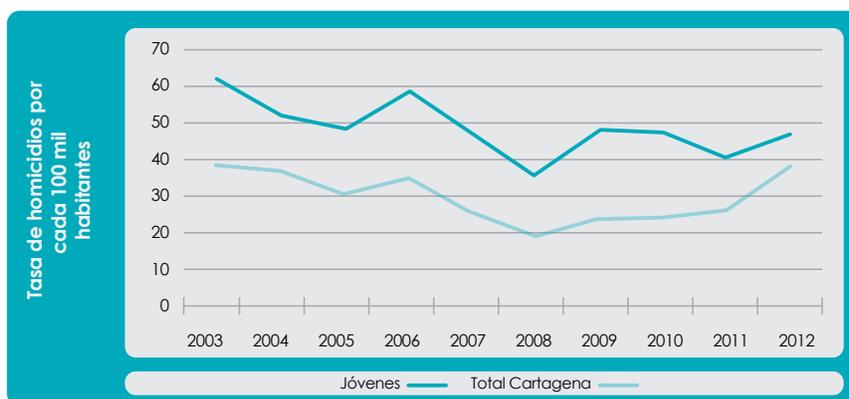
Adicionalmente, cabe destacar que los dos períodos de repunte de los homicidios realizados en el marco de acciones sicariales también coinciden con un incremento de los homicidios contra jóvenes ejercidos con arma de fuego, según la Policía Nacional. En efecto, entre 2008 y 2009 se presentó un aumento en este tipo de hechos del 26,8% y entre 2011 y 2012 del 63,6%<sup>75</sup>.

Por su parte, de acuerdo a distintas fuentes de prensa en Cartagena se está profesionalizando esta actividad delictiva por medio de la conformación de escuelas de sicarios por parte de GPDP.

Las escuelas estarían funcionando en la Localidad 3, en la unidad comunera 15, donde quedan barrios como La Consolata, Luis Carlos Galán, El Nazareno, El Educador, Vista Hermosa, Rosadales, Manuela Vergara de Curí, Villa Fany, Villa Corelca, Sol Teresa de Calcuta, entre otros. Todos estratos uno

y dos. (¿Hay escuelas de sicarios en Cartagena? Alcalde dice que sí, Policía lo niega, 2012)

Lo anterior permitiría evidenciar que el sicariato es una actividad ejercida no sólo contra jóvenes sino también por ellos. Como muestran los datos de reclusión carcelaria del INPEC, la modalidad de homicidio representa el tercer motivo por el cual los jóvenes son reclusos, con 28,54% por debajo de los motivos de “fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones” y “fabricación, tráfico, Porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.



**Figura 10.** Variación de la tasa de homicidios por grupos poblacionales en Cartagena

Fuente: datos Policía Nacional de Colombia, procesados por CERAC

#### 6.2.2.4. Violencia contra líderes sociales y de víctimas por parte de GPDP

Como se explicó anteriormente, Cartagena recibió en la época más álgida del conflicto armado (entre el 2000 y 2006) a 50.735 personas desplazadas provenientes de otras regiones del departamento de Bolívar, especialmente de Montes de María. Estas personas se asentaron en los barrios marginales de la ciudad, e iniciaron procesos organizativos encaminados a la restitución de sus derechos, como la Liga de Mujeres desplazadas.

Según, fuentes de prensa como RCN La Radio, GPDP hacen presencia en estas zonas del departamento y han generando amenazas en contra los líderes de estos procesos (Capturada en Cartagena mujer que pertenecería a “Los Urabeños, 2014).

En esta medida, las acciones de los GPDP en contra de las organizaciones de víctimas afectan de dos formas a los jóvenes (Defensoría del Pueblo,

2011): en primer lugar, buscan reclutar a los hijos de los integrantes de estas organizaciones para desencadenar procesos de desplazamiento, o desarticulación familiar. Con ello no solo afectan los procesos de reclamación de tierras, sino también las iniciativas comunitarias de prevención de reclutamiento. En segundo lugar, los GPDP amenazan de muerte, e incluso, asesinan a estos jóvenes<sup>76</sup>.

#### **6.2.2.5. Restricciones a la movilidad**

Las pandillas que hacen presencia en Cartagena establecen restricciones a la movilidad en sus áreas de influencia. Como afirma el personero William Matson “hay grupos que impiden que las demás personas de otro barrio, atraviesen por una determinada calle, ya que esa pertenece a una determinada pandilla” (Problema de fronteras invisibles llega a Cartagena, 2013). En el 2013 el secretario de interior manifestó que se habían logrado focalizar -en 13 barrios- 64 fronteras invisibles.

Un caso emblemático de esta situación se presenta en el barrio San Francisco de la ciudad, donde la pandilla los Tronquitos se enfrenta constantemente con la pandilla del Rincón del Guapo. Según El Universal (2011), esta confrontación a devenido en una situación de confinamiento para la población joven, estos hechos se han dado debido a las venganzas y “deudas de sangre” que estas dos agrupaciones han zanjado de tiempo atrás (Los Tronquitos, “secuestrados” para siempre en San Francisco, 2011).

El establecimiento de límites tiene dos objetivos: mantener el estado de zozobra y miedo en las comunidades, y controlar el territorio para asegurar los mercados del microtráfico. La restricción a la movilidad no solo se limita al establecimiento de fronteras entre barrios en contra de los miembros de las pandillas enemigas, sino también aplica como una amenaza constante de un posible enfrentamiento entre estas, dándose una situación de miedo a apropiarse de lo público por parte de la comunidad o los jóvenes a causa de la violencia.

#### **6.2.2.6. Violencia sexual por parte de redes criminales no identificadas**

Cartagena históricamente ha sido conocida como destino de turismo sexual. Este tipo de actividad se ha llevado a cabo en la ciudad y es promovido por agencias extranjeras de turismo, que impulsan específicamente el segmento de turismo sexual (Medina, 2012).

Es preocupante la situación de los menores de edad, quienes han sido incluidos abiertamente en la oferta de prostitución en la ciudad. Esto se evidencia en el último año por medio de una serie de capturas e investigaciones de

la Fiscalía, que han logrado desarticular redes involucradas en el delito de inducción a la prostitución de menores. Así lo explica un vocero de la Organización Tierra de Hombres a un medio nacional.

Aquí se han producido 29 condenas (...) y llevamos un total de 74 casos en la fundación. En Cartagena se presentan esos casos, especialmente por la condición de polo turístico que tiene la ciudad, por un lado y por otro lado porque es un centro de recepción de las personas que vienen siendo desplazadas de los Montes de María e inclusive de áreas como Chocó. Entonces Cartagena es un sitio donde se encuentran dos factores importantes, personas que vienen con muchas necesidades y personas que ofrecen, que son turistas. (29 condenas por inducción a la prostitución de menores en Cartagena, 2013)

Sumado a la pobreza y la condición de la ciudad como destino turístico, se observa un factor cultural favorable a la prostitución, puesto que en ocasiones esta actividad es aceptada socialmente y reforzada por los padres de los niños y niñas víctimas (Galarcio, 2013). Así mismo, la Fundación Renacer que lidera la lucha contra la explotación infantil por medio del programa ¡la Muralla soy yo! explica:

La pobreza no es todo el problema. Los y las jóvenes a menudo provienen de un pasado muy violento o de familias disfuncionales. Ellos buscan una manera fácil de hacer dinero pero también buscan aceptación social, lo cual no consiguen en su comunidad. Una niña de 11 años normalmente sería explotada con el consentimiento de aquellos cercanos a ella – padres, amigos, vecinos – quienes se benefician de la situación. Ella busca una figura paterna, un “papá” que la cuide. Desafortunadamente, Cartagena atrae a una gran cantidad de turistas, entonces nunca hay escasez de clientes. (Fondo Canadiense para la Niñez, 2013)

En este sentido,

(...) dada la vocación turística de la ciudad, la problemática reviste una especial complejidad. La evidente pauperización de la población, el crecimiento acelerado por el desplazamiento forzado, el incremento de la violencia en todas sus formas y la constitución de nuevos símbolos de consumo, de estatus y representación juvenil, son aspectos que aportan al desarrollo de la explotación sexual. (Valencia y Ospina, 2005, p.2)

Los principales responsables de estos tipos de hechos son grupos de criminalidad organizada no identificados. Sin embargo, según la Defensoría del Pueblo (2011) los GPDP también participarían en algún eslabón de la cadena de la prostitución; “Por tanto se puede deducir que existe una relación entre la explotación sexual y la dinámica de conflicto armado, como se manifiesta en la actualidad” (p.64).

Además, los pandilleros son agentes de riesgo para que las menores sufran este tipo de violencia.

La influencia de las pandillas en sectores populares también es un factor que puede propiciar la explotación de los niños, especialmente cuando la niña llega a la pubertad y es requerida sexualmente por miembros de estos grupos, los cuales pueden llegar a la coerción. (Scoppetta y Rodríguez, 2006, p.252)

### 6.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil

#### 6.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Se identificaron cuatro conjuntos de factores de riesgo que hacen a los jóvenes más vulnerables frente a la opción de participar en GVO en Cartagena.

##### 6.3.1.1. Modelo I

En los sectores más marginales de Cartagena, en lo público se presentan situaciones de violencia generalizada donde los enfrentamientos y la presencia de pandillas en los barrios ponen en riesgo a los jóvenes de ser agredidos. Como narra un joven ex pandillero perteneciente a la pandilla de Los Pannels

Fue en un acto de rabia porque me maltrataban y me tiraban piedra cuando me veían y eso no me gustaba. Me esperaban para pegarme y yo no les había hecho nada. Una noche cuando vi a Jorge Armando le disparé. (De la Cruz, 2012)

Sumado a esta situación, la convivencia al interior de las familias es precaria y se crean escenarios de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Como lo explica la Fundación Manos Visibles

De acuerdo con las entrevistas realizadas en las jornadas de trabajo con los jóvenes, familias son en la mayoría de los

casos disfuncionales y presentan cuadros de violencia doméstica de forma permanente; los niños y niñas son abusados sexualmente por adultos cercanos, y los jóvenes adolescentes maltratados. (Moreno y González, 2014, p.20)

Así lo narra un joven pandillero

Compa yo empecé en este mundo debido al constante rechazo por parte de mis padres. En mi casa no había qué comer y mi papá casi todos los días llegaba borracho, le pegaba a mi madre y a mis siete hermanos. (Márquez, 2009)

En esta medida el entorno protector por excelencia, es decir la familia, termina siendo un espacio de riesgo y vulneración, por lo que los hogares no logran cumplir el rol mínimo de garantes de derechos (Entrevista 69. Funcionario).

Siendo así se concatenan las dos situaciones en los mismos espacios territoriales, es decir los barrios marginales de La Heroica, dejando a las pandillas como el único referente de protección frente a estas violencias. En este sentido la pandilla se convierte en una posibilidad de escape y protección frente al entorno violento propiciado por las mismas pandillas, y frente a la violencia que se ejerce en el hogar.

### 6.3.1.2. Modelo II

Cartagena es una ciudad con graves problemas de desigualdad: por un lado, se aloja la riqueza a nivel global, representada en la visita de mandatarios extranjeros, turistas con alto poder adquisitivo, la creación de eventos y ferias internacionales, y la llegada de marcas y franquicias de alto costo. Por otro lado, se excluye a los habitantes regulares del Centro Histórico como sucedió en VI Cumbre de las Américas, cuando fueron “mudados” a la fuerza niños y jóvenes de la calle, indigentes, prostitutas, travestis, entre otros (Polémica ‘limpieza’ del Centro para la Cumbre, 2012).

Sumado a esta situación, el costo de vida del Centro Histórico se torna inaccesible para el cartagenero promedio, lo cual deviene en un resentimiento frente al turista y frente a lo que representa el sector más beneficiado de la ciudad entre la mayoría de la población (Entrevista 79. Funcionario).

Así mismo, la ciudad, a pesar de concentrar una alta riqueza, no ha logrado integrar con éxito a la masa de jóvenes desempleados, generando así oportunidades de ingreso sostenibles. Al respecto, De la Hoz, et al., (2013) señalan:

El desempleo juvenil en la ciudad de Cartagena ha alcanzado los más altos registros respecto al desempleo del resto de los grupos de edad. Solo en 2010, la cifra de desempleo juvenil superó en 17 puntos porcentuales a la cifra de desempleo en adultos, y en los últimos diez años ha experimentado una tendencia cíclica, ubicándose en la senda de 32,3% a 37,2%. (p.20)

En este sentido, la economía y la cultura del Centro Histórico termina segregando a los jóvenes vulnerables, afectando fuertemente su autoestima.

El desempleo juvenil trae consigo efectos negativos sobre las personas, dado que experimentar el desempleo origina frecuentemente trastornos psicosociales, vinculados al deterioro de las relaciones con la familia y con la sociedad en general, y que generan sentimientos de soledad, baja autoestima y desánimo respecto a las expectativas del futuro. (Espluga et al., 2004, p.57).

Los jóvenes desempleados, por la incapacidad de generar ingresos y por el escaso apoyo institucional en su periodo de desempleo, experimentan un alto riesgo de vincularse a formas ilegales de subsistencia, lo que los convierte en el centro de todos los episodios de violencia. (De La Hoz, et al., 2013, p.20).

Esta situación de baja autoestima y de autosegregación se enlaza con la falta de oportunidades y la necesidad de reconocimiento. “El sacerdote Efraín Aldana, conocedor del tema, dice que estos jóvenes mantienen una baja autoestima, sienten su dignidad atropellada y consideran que la mejor manera de recibir reconocimiento es agrupándose, haciéndose notar y defendiendo su territorio” (Pandillas se están tomando Cartagena, 2007).

En esa medida, en el nivel personal se dan sentimientos de baja autoestima y resentimiento, y a nivel social falta de oportunidades y una economía excluyente. Estas carencias son suplidas por los GVO, ya sea en el marco económico, por medio del desarrollo de actividades delictivas a cambio de dinero, o en el marco personal, por medio de adquirir reconocimiento y prestigio en los barrios por pertenecer a una pandilla.

El problema con las pandillas es que se hacen atractivas para los niños y adolescentes de los barrios vulnerados por estos grupos, porque los integrantes alardean del supuesto poder que adquieren, del dinero que empiezan a manejar, de las cosas materiales que consiguen y de las armas que manejan.

Más que todo convencen a muchachos de familias desestructuradas emocionalmente (...) Los pandilleros son muchachos de barrios pobres sin oportunidades que una vez terminan sus estudios suelen agruparse en pandillas para aumentar su autoestima, protagonizando hechos violentos. Consumen drogas y muchos de los delitos que cometen, como raponazos, atracos a mano armada, asalto a buses, lo hacen para financiar sus fiestas de los fines de semana con música de picó y consumo de licor y drogas. (Cartagena golpeada por noventa pandillas, 2013)

### 6.3.1.3. Modelo III

Las políticas públicas en Cartagena han sufrido rupturas en su continuidad debido a problemas de gobernabilidad en las últimas administraciones, como resultado de casos de corrupción y el constante cambio de los gobiernos antes de finalizar sus períodos oficiales. Esto ha afectado, en particular, la ejecución y consolidación de dos políticas centrales para los jóvenes: la política de juventud y la de empleo.

Esta precariedad institucional se ve reflejada en el reducido número de programas dirigidos hacia los menores y jóvenes cartageneros.

Por otra parte, la carencia de equipamientos urbanos para la convivencia y desarrollo comunitario, y los pocos que existen no tienen una asignación presupuestal para una operación social dinámica y oferta de servicios de calidad para la comunidad. La falta de calidad en los espacios públicos y las dificultades de movilidad (Moreno y González, 2014, p.10).

Además, la deserción escolar en la educación secundaria en los últimos años ha sido alarmante: por ejemplo, del total de niños y niñas que finalizaron con éxito el periodo académico en el 2011, 8.000 no se presentaron para continuar sus estudios en el 2012 (Preocupación por deserción escolar en Cartagena, 2012).

Estos hechos se ven reforzados por dos factores claves: (1) las presiones por parte de los padres para dar inicio a una vida laboral que logre aportar económicamente al hogar, y (2) las presiones ejercidas por las pandillas en los lugares circundantes a los planteles educativos, que generan zozobra y miedo entre los estudiantes, lo que en ocasiones obliga a los menores a no volver al colegio (Entrevista 77. Funcionaria).

En este sentido, según Rocío Castilla, secretaria de Participación Distrital la deserción escolar es directamente proporcional al crecimiento de las

pandillas en los barrios vulnerables de Cartagena (En Cartagena hay 90 pandillas que azotan los barrios populares, 2013).

Retomando, la falta de ofertas para los jóvenes, sumado a un incremento en la deserción escolar por los motivos antes expuestos, y un contacto permanente en los lugares de vivienda o de barrio con miembros de pandillas, ubican a los jóvenes en una mayor vulnerabilidad a ser vinculados a los GVO.

#### **6.3.1.4. Modelo IV**

Como se mencionó, la ciudad es receptora de población víctima de la violencia, donde se configuran familias mono parentales y en la mayoría de los casos se carece de la figura paterna.

La composición familiar de sus integrantes en su mayoría se caracteriza por provenir de hogares mono parentales de jefatura femenina. En gran parte de estos hogares convive más de una familia y su situación económica es precaria, ya que solo cuentan con una fuente de ingresos que por lo general deriva del trabajo informal” (Defensoría, 2011, p.36).

En ese tipo de contextos, se producen dos situaciones: además de que los jóvenes tienen que asumir en muchos casos el papel de proveedores en sus hogares, lo que incrementa el riesgo de involucrarse en GVO, como se explicó anteriormente; por otro lado, la carencia de una figura de autoridad como la que brinda el padre viene a ser suplida por modelos externos de autoridad, los cuales vienen a ser brindados por los GVO.

### **6.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada**

#### **6.3.2.1. Modelo I**

Existen programas y proyectos públicos y privados que dirigidos a jóvenes vulnerables que están encaminados a crear oportunidades y capacidades, y en igual medida, a mitigar el ingreso a los GVO.

La vinculación a estos escenarios de participación social amplia el margen, rango y abanico de toma de decisiones, donde la opción de vincularse a un GVO pasa a un segundo plano. Allí, se ofertan oportunidades como “Escuelas de paz, escuelas culturales, danza hip hop, break dance, centros culturales, universidades, espacios sociales, los jóvenes en los parches” (Entrevista 71. Líder juvenil).

De igual forma, procesos comunitarios más consolidados en ciertas comunidades generan posibilidades y oportunidades para los jóvenes, y contribuyen a crear en ellos una conciencia frente a los costos de entrar en un GVO (Entrevista 82. Funcionario).

Este tipo de iniciativas tanto públicas como privadas, generan nuevos referentes de éxito y liderazgo que compiten con los modelos de éxito brindados por los GVO. En esta medida, la participación en estos programas amplía el abanico de opciones, y el marco de toma de decisiones hacia otros imaginarios. A esto se anuda la posibilidad de desarrollar proyectos de vida, obtener reconocimiento social positivo, y construir redes sociales de apoyo en lo comunitario.

### **6.3.2.2. Modelo II**

Las familias que habitan contextos de vulnerabilidad, pero que aun así cuentan con solvencia económica, son un escenario de apoyo para los jóvenes (Entrevista 77. Funcionaria).

Fuera del factor económico, es importante mencionar el nivel de cohesión y de preocupación de la familia por sus hijos:

Jóvenes con mayores garantías en su hogar, mayor seguimiento de sus padres a los procesos que se llevan a cabo tanto en la calle o la escuela, una preocupación sobre el futuro de los hijos. Seguro hay limitaciones en las familias pero la preocupación por el futuro logra movilizar recursos para evitar el ingreso a los grupos. (Entrevista 77. Funcionario)

Siendo así las familias cohesionadas, con cierta solvencia económica y un acompañamiento permanente mediado por el diálogo con sus hijos, logra tornar el hogar en un entorno protector que aumenta la resiliencia a pertenecer a GVO.

### **6.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia**

En la ciudad existen perfiles de jóvenes que por sus labores diarias, desempeños, y relación con una serie de actores sociales adquieren un perfil de riesgo de ser víctimas de violencia. Para explicar estas situaciones se desarrollaron cuatro modelos explicativos.

#### **6.3.3.1. Modelo I**

Las acciones y los intereses de los GVO, en especial las pandillas, dificultan la seguridad y el trabajo comunitario, sobre todo aquel que está dirigido

a mitigar las vulnerabilidades de los jóvenes. De esta manera, gestores culturales o líderes sociales, tienen un alto riesgo de ser víctimas de violencia, debido a que están más cercanos a los barrios y las comunidades; “Los jóvenes que son ‘diferentes’, que generan liderazgo y buscan salirse de esa dinámica generan incomodidad entre los miembros de las pandillas” (Entrevista 74. Funcionaria).

En particular, el trabajo comunitario es amenazado por GVO cuando está dirigido hacia la desvinculación o prevención del fenómeno del pandillerismo (Entrevista 83. Líder juvenil).

Otro perfil que ha sido fuertemente amenazado en los últimos años, son los miembros jóvenes de la comunidad LGTBI. Las amenazas hacia a estos jóvenes provienen de grupos de limpieza social, que buscan ejercer un control sobre la vida en las comunidades, rechazando toda forma de diversidad sexual, o perfiles que no encajan en lo que ellos consideran “normal”.

#### **6.3.3.2. Modelo II**

Habitar sectores de la ciudad donde existen graves situaciones de violencia y marginalidad representa un riesgo para los jóvenes, no sólo en términos de vincularse a GVO o consumir drogas, sino de ser agredidos por estos grupos, sobre todo cuando los jóvenes se niegan a participar en dichos grupos.

En este sentido, habitar un contexto marginal con presencia de pandillas, y en simultáneo negarse a pertenecer de lleno a este tipo de lógicas ubica a los jóvenes en un riesgo muy alto de ser agredidos, o de tener que contestar las agresiones por medios violentos, como afirma un funcionario entrevistado: “Se generan escenarios y prácticas de violencia que hacen que el muchacho pueda llegar a agudizar las practicas de violencia en el entrono educativos, o ser afectado por esta misma violencia” (Entrevista 79).

#### **6.3.3.3. Modelo III**

Los jóvenes que tienen un empleo formal también pueden estar en riesgo de ser víctimas de violencia. El uso de un uniforme, y devengar un sueldo fijo mensualmente, pone en riesgo a los trabajadores que habitan lugares vulnerables, ya que las personas trabajadoras son objetos de extorsión o “paga diario” (Entrevista 77. Funcionaria).

#### **6.3.3.4. Modelo IV**

Ser hijo o hija de un defensor de derechos humanos, de miembros de organizaciones de desplazados o reclamantes de tierras, también representa

un riesgo de victimización por parte de los GPDP que hacen presencia en Cartagena.

Como se evidenció en las situaciones críticas de violencia, los GPDP han amenazado de muerte, reclutado forzosamente e, incluso, asesinado a los hijos e hijas de líderes de este tipo de organizaciones sociales. Ello está relacionado con el interés de estos grupos de forzar nuevos procesos de desplazamiento, reducir las denuncias que estas organizaciones realizan, y frenar los procesos organizativos que buscan mitigar el pandillerismo y la violencia en los barrios (Defensoría del Pueblo, 2011).

#### **6.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia**

Los niveles de violencia en Cartagena han superado a la institucionalidad y a las organizaciones comunitarias, aun así se logran identificar ciertas características y factores que son usados por los jóvenes como estrategias de protección.

El primer factor es la vinculación a actividades extracurriculares, proyectos comunitarios, participación en lo público o que generen ingresos económicos. Estas opciones están asociadas a actividades productivas, deportivas o culturales.

Estas iniciativas permiten la construcción y expansión de redes sociales, que en ocasiones sirven de protección, por medio de la información sobre las situaciones de violencia que se puedan presentar en los barrios. Así mismo, esta información es usada por los jóvenes que hacen parte de estas iniciativas para ajustar sus prácticas de autoprotección, como ubicarse en el territorio sin ser agredidos, identificar territorios peligrosos y los espacios de control de las pandillas (Entrevista 79. Funcionario).

### **6.4. Iniciativas de prevención de la violencia juvenil**

---

#### **6.4.1. Caracterización de la infraestructura**

La infraestructura de prevención de la violencia juvenil en Cartagena es precaria (oferta marginal de iniciativas, tanto públicas como privadas) en relación a las otras ciudades de estudio, y su efectividad es limitada, lo cual se comprueba por el incremento de la violencia y número de pandillas que ocupan el territorio.

A partir de un mapeo realizado se identificaron 56 iniciativas concretas ejecutadas durante el periodo (2008 - 2014). De éstas, 12 son desarrolladas

específicamente en la ciudad de Cartagena, el resto, es decir 44, son ejecutadas en el orden nacional o en varias ciudades.

De las 12 iniciativas que se dan exclusivamente en Cartagena, a excepción de una que se ejecuta en simultáneo en Medellín, tres son lideradas por la Alcaldía, de éstas se resalta el “Programa Jóvenes en Riesgo”, luego la denominada “Jóvenes íntegros”, ya que ha sido la estrategia central del gobierno municipal para focalizar los esfuerzos en aras de reducir el pandillerismo en la ciudad.

Las tres iniciativas de la Alcaldía se enfocan específicamente en la prevención de la violencia y el pandillerismo. Esto se hace a través de actividades en el tiempo libre, oportunidades de ingreso económico, la prevención del ingreso de menores al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, y el registro e ingreso al sistema de prestación de servicios sociales, municipales y nacionales.

De las 11 restantes 3 son patrocinadas por el sector privado, y se enfocan en la creación de capacidades y empleabilidad a través del fomento a la educación por medio de becas y la creación de proyectos productivos.

El resto son desarrolladas por ONG locales e internacionales enfocadas principalmente en: la prevención del reclutamiento forzado por parte de los GVO, la erradicación de la explotación sexual infantil, la restitución de derechos, la creación de ambientes de protección, y el fomento de la educación y el deporte.

De las 44 que operan en el ámbito nacional, tres son implementadas por agencias de cooperación internacional: la primera - liderada por la ONU- aborda la creación de entornos protectores en la escuela o la comunidad. La segunda usa el deporte y el tiempo libre como estrategias de prevención del reclutamiento, además de construir una red nacional de organizaciones similares, donde se vincule el fútbol con la prevención, a la violencia y en específico al reclutamiento. La tercera se basa en la construcción de nuevos patrones culturales, construcción de redes comunitarias y el apoyo al acceso a la educación.

Frente a las iniciativas implementadas por ONG en varias ciudades de Colombia, se encontraron ocho iniciativas, de las cuales tres son lideradas por la Cruz Roja. Dentro de estas iniciativas se trabajan cinco temas específicos: (1) el deporte, y en especial el fútbol, como un escenario de formación en competencias para la empleabilidad; (2) la mitigación de los niños y jóvenes en situación de calle; (3) la eliminación del trabajo infantil, fomentando el ingreso a la educación; (4) la creación de espacios formativos

para la convivencia y la paz, donde se desarrollan habilidades sociales y construcción de redes sociales que funcionen como entornos protectores; y (5) el arte y la cultura con un especial énfasis en el establecimiento de redes juveniles para la incidencia en la política y la paz.

El sector privado participa en su mayoría por medio de las fundaciones sociales creadas por empresas con presencia a nivel nacional y en Cartagena. Estas iniciativas se enfocan en la promoción de la educación superior por medio de convenios y becas; y la prevención del trabajo infantil, formando a menores de forma integral, y apoyando a los jóvenes mayores de edad que hayan hecho parte del proceso en la búsqueda del desarrollo profesional y laboral.

En cuanto al Estado, se encontraron 18 iniciativas, lideradas por la Policía Nacional, el ICBF y el SENA. Estas intervenciones se enfocan en la prevención al delito, control, acompañamiento, resocialización, prevención al consumo de drogas, y el trabajo conjunto con jóvenes; la mitigación del problema de las pandillas y grupos juveniles violentos; el empoderamiento de los jóvenes por medio de clubes juveniles; y programas nacionales como Familias con bienestar y Generaciones con bienestar, los cuales se enfocan en fortalecer la garantía de los derechos de menores y familias en condiciones de vulnerabilidad.

Otras iniciativas están dirigidas por el Gobierno Nacional por medio de programas sociales como Jóvenes en Acción, y Familias en Acción, además del programa de prevención del reclutamiento de la Agencia Colombiana para la Reintegración “Mambrú no va a la Guerra”. A ello se suma una iniciativa de la Presidencia en torno a la creación de casas de la juventud, una del Ministerio de Educación que busca reducir los niveles de analfabetismo, y por ultimo una de la Fiscalía, sobre prevención del delito en jóvenes.

Por último, a raíz del mapeo documental se logran destacar cuatro lugares públicos y comunitarios que han funcionado como centros de reunión y de gestión de iniciativas comunitarias juveniles. Entre estas iniciativas según el documento “juventud Urbana en Cartagena” de la fundación Mamos Visibles encontramos, el grupo María Mulatas Callejeras, el cual es un red de jóvenes que se articulan en torno a la cultura Hip Hop. Frente a los espacios públicos se destacan cuatro, como se nombro anteriormente: (1) Centro Cultural Las Palmeras; (2) Biblioteca Distrital Jorge Artel; (3) Centro Cultural El Pozón y (4) Centro Cultural Santa Rita.

#### **6.4.2. Análisis de la efectividad de la infraestructura de prevención**

La ciudad enfrenta una situación apremiante en materia de violencia juvenil. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades de estudio, los esfuerzos para prevenir esta problemática son bastantes precarios e insuficientes.

En Cartagena, a pesar de que el fenómeno del pandillerismo y la participación de jóvenes en otros GVO no es nuevo como se evidenció, el estudio de las pandillas, y la creación de mecanismos de mitigación es escaso, lo que se ve reflejado en una pobre infraestructura social encargada de mediar por la juventud.

En todo caso, también en esta ciudad se ha implementado la PPJ, que tiene un alcance de 5 años desde el 2010 hasta el 2015. Este marco normativo sientan las bases para programas de inclusión, construcción de ciudadanía y prevención de la violencia como son: el programa Jóvenes constructores de ciudadanía; el programa Reconociendo nuestros derechos; el programa Jóvenes en riesgo (actualmente conocido como Jóvenes Íntegros) y el programa Valores y competencias para la convivencia, entre otros.

Pese a lo anterior, la corrupción y la falta de continuidad de los gobiernos locales, han impedido la implementación de la PPJ, creando un rezago frente a otras ciudades similares como Barranquilla (Entrevista 69. Funcionario). Lo que es peor, la administración municipal no ha dimensionado la magnitud del fenómeno del pandillerismo. En ese sentido, el indicador de la meta de la política de juventud para el 2015 busca reducir en 80% la violencia juvenil (Alcaldía de Cartagena, 2010) lo cual para el 2014 no se ha cumplido y por el contrario ha aumentado.

Además, la infraestructura de prevención de la violencia juvenil tiene serias falencias. La primera de ellas es que no se ha propiciado desde la administración y desde las mismas organizaciones un ambiente adecuado para el trabajo en red (Entrevista 81. Funcionario; Entrevista 82. Funcionario).

El poco apoyo que se le ha dado a determinados grupos juveniles ha generado competencia entre las diferentes agrupaciones por los recursos que brinda el distrito. Aunado a esto, según un líder juvenil (Entrevista 71), para la participación en este presupuesto se exigía la formalización de los movimientos por medio de la creación de personerías jurídicas, factor que terminó debilitando las organizaciones dado su desconocimiento de los aspectos legales, burocráticos y tributarios que implica el proceso de formalización de las iniciativas. De acuerdo a esta misma persona, los más perjudicados por la formalización y el fraccionamiento del movimiento juvenil fueron los integrantes de las pandillas ya que su intento por desvincularse de los GVO se vio interrumpido, lo que produjo desconfianzas ante la municipalidad y las organizaciones juveniles.

Similar a Medellín y Bogotá, la construcción de bibliotecas o parques culturales, son una apuesta desde lo urbanístico para integrar a la población

vulnerable a circuitos culturales, artísticos, o académicos. En Cartagena, sin embargo, se identifican solo cuatro espacios importantes para las comunidades vulnerables, de ahí que la mayoría de este tipo de actividades se desarrollen en el Centro Histórico, reforzando la segregación de una gran parte de la población cartagenera, que se ha evidenciado a lo largo del capítulo.

Además, la precariedad económica en la que viven estas comunidades, sumadas a la pobre infraestructura de transporte dificulta los desplazamientos hacia el centro. En suma, la concentración de este tipo de actividades en el centro impide la apropiación de los espacios públicos por parte de los jóvenes.

Por otra parte, el potencial cultural de la ciudad no ha sido aprovechado por el Estado para ofrecer a los jóvenes una opción de vida y trabajo.

Esto contrasta con las iniciativas de varios líderes sociales que buscan posicionar estos ámbitos como proyectos de vida, generando así una industria de la cultura en torno a la danza y que de allí se produzcan ingresos económicos que garanticen la continuidad de estos procesos, e incentiven la vinculación de jóvenes a este tipo de actividades. Todo esto mediado por procesos pedagógicos y de empoderamiento, que construyan posturas críticas frente a este quehacer (Entrevista 83. Líder juvenil). Sin embargo, al igual que otras ciudades, estas iniciativas tienen serias dificultades para garantizar la sostenibilidad económica y financiera de los procesos (Entrevista 78. Lideresa juvenil).

Por último, el alto nivel de inseguridad de algunos territorios donde hacen presencia GVO dificulta el alcance de las iniciativas de prevención de la violencia juvenil. En efecto, el trabajo con jóvenes en riesgo de dichas comunidades se ve limitado por la falta de seguridad de los facilitadores, pedagogos, y talleristas en los territorios (Entrevista 81. Líder juvenil; Entrevista 82. Funcionario).

## 6.5. Conclusiones

---

Durante el período de estudio, Cartagena ha sufrido una grave situación de violencia juvenil, reflejada en el incremento de las pandillas que ocupan el territorio, la tercerización de actividades criminales como el sicariato y la extorsión por parte de GPDP con GVO relacionados con la violencia juvenil. Sin embargo, este fenómeno no ha alcanzado el grado de vinculación con la criminalidad organizada que tiene en otras ciudades de estudio.

En todo caso, Cartagena se encuentra en una situación límite donde el escenario de criminalidad puede llegar a cambiar y los GVO juveniles,

como las pandillas, pueden hacer un tránsito hacia grupos del crimen organizado.

Frente a esto, el desgobierno del que ha sido objeto la ciudad durante los últimos años ha interrumpido los procesos de mitigación y prevención de la violencia juvenil en la ciudad.

Por lo tanto, se hace urgente un esfuerzo decidido por atender de forma temprana la vinculación de jóvenes en GVO y prevenir una mayor articulación de las pandillas con grupos más estructurados del conflicto y del crimen, fenómeno que se ha comenzado a profundizar durante el período de estudio. Eso comienza por una mayor atención de las autoridades frente a este fenómeno y por un reconocimiento de la magnitud de los riesgos que implican un incremento de la violencia juvenil en el corto plazo.

Además, estos esfuerzos deben ir acompañados por la atención de los jóvenes de las zonas más marginales de la ciudad, como en la localidad de La Virgen y Turística, o los barrios El Pozón, Olaya Herrera o Nelson Mandela; asegurando su inserción laboral en los sectores económicos de Cartagena y la posibilidad de que disfruten del bienestar de la parte más desarrollada de la ciudad. En otras palabras, en este caso, prevenir la violencia pasa por sacar a los jóvenes de la marginalidad y la pobreza en la que se encuentran.

## **Ibagué: ¿Qué lecciones aprender de un caso no tan grave de violencia juvenil?**

*María Fernanda Arocha Velásquez*

### **7.1. Contexto de la ciudad**

---

Ibagué, la capital del departamento del Tolima, es considerada una ciudad intermedia, mucho más pequeña y con un crecimiento menor a las otras ciudades de estudio. En Ibagué no se presenta un fenómeno de violencia juvenil tan fuerte y profesionalizado como en las otras ciudades de estudio. Los factores que están asociados a estos niveles y tipo de violencia se pueden explicar a partir de características propias de la ciudad y, al mismo tiempo, por su contexto que está marcado principalmente por ser una ciudad de tránsito. Estas características serán profundizadas a continuación, siendo el punto de partida para identificar las diferencias entre la violencia juvenil que se manifiesta en esta ciudad y las demás ciudades de estudio.

#### **7.1.1. Las condiciones socioeconómicas**

La violencia juvenil en Ibagué es un fenómeno que se manifiesta en menor medida a como se puede observar en otras ciudades de estudio. Esto se demuestra con cifras como la tasa de homicidios de jóvenes, que para el 2012 era de 28 muertes violentas por cada 100 mil habitantes entre los 10 y los 25 años de edad (Policía Nacional, 2012). Si bien es una cifra que no deja de ser preocupante, es inferior al promedio total nacional, el cual se ubica en 42 homicidios por cada 100 mil habitantes entre los 10 y los 25 años (Policía Nacional, 2012).

En esta sección se desarrollarán las condiciones socioeconómicas que caracterizan a la ciudad, las cuáles son un factor esencial para analizar

las diferencias de este caso con respecto a los casos de las otras ciudades de estudio.

Ibagué puede ser entendida como una ciudad de paso, su ubicación geográfica le permite ser estratégica como punto de conexión con grandes ciudades como Bogotá, Buenaventura, Cali y Medellín (Misión de observación Electoral [MOE], 2007). Igualmente la ciudad es central porque está atravesada por una de las principales vías internas del país: La Línea. Esto hace que la ciudad sea estratégica para la movilidad, aun no existen condiciones para que la ciudad sea atractiva para el asentamiento o el desarrollo de comerciantes y grandes empresas.

Otra de las características del municipio es su espacio rural, el cual ocupa el 97% del territorio, mientras que el área urbana se reduce al 3% (Ibagué Cómo Vamos, 2011). El carácter principalmente rural de esta ciudad hace que sus dinámicas socioeconómicas y de violencia sean diferentes. Las demandas sociales son diferentes a la de una ciudad ampliamente urbanizada. Igualmente la posibilidad de asentamiento de grupos de criminalidad organizada es menor, debido a que este tipo de fenómeno se desarrolla principalmente en las áreas urbanas donde la capacidad de movimiento de mercados ilegales y de capital permite aumentar las rentas a dichos grupos.

El crecimiento de la ciudad, ha demandado a las administraciones atender factores asociados a las transformaciones de sectores rurales, que comienzan a entrar en las dinámicas urbanas. Por esta razón en la ciudad se observa un amplio sector de zonas periurbanas, las cuáles concentran mayores niveles de población en condiciones vulnerables. En los últimos años las administraciones han logrado avances importantes en el desarrollo y crecimiento de la ciudad, esto se refleja en la reducción de la pobreza. En el año 2002 se registraba una cifra de 8,4% de la población en situación de pobreza, reduciendo al 2,5% en 2013. Igualmente el índice de NBI ha disminuido entre 1993 y 2005 en un 21,9%.

A pesar de estos avances, el municipio no ha logrado disminuir la desigualdad, el coeficiente de desigualdad para el 2013 es de 0,45. Otro indicador que no refleja avances en el municipio es el de desempleo, para el 2013 el 11,3% de la población se encontraba en situación de desempleo. Si bien este último indicador ha registrado una disminución a lo largo de los años, sigue siendo un porcentaje alto si se compara con las otras ciudades de estudio.

En materia de educación, la ciudad para 2012 contaba con una cobertura del 74,5%, indicador que presentó una disminución del 4,18% entre 2011 y 2012, lo que, en comparación con el resto de las ciudades de estudio, ubica a Ibagué como la segunda ciudad con la cobertura más baja en educación

superior. Este tipo de indicadores refleja la existencia de problemáticas sociales que afectan principalmente a la población joven, la cual es especialmente representativa en la ciudad pues ha tenido un índice de juventud<sup>77</sup> de 1,02 en los últimos años.

Además de estos indicadores, es importante caracterizar a Ibagué como una de las ciudades que se encuentra afectada por el fenómeno de desplazamiento forzado. La ciudad durante el 2010 recibió 2.276 de los desplazados totales del país, esta cifra es representativa cuando se tiene en cuenta que Ibagué es una ciudad intermedia. El fenómeno del desplazamiento es igualmente relevante, en la medida en que Ibagué tiene problemáticas sociales que no contribuyen a que su oferta para mejorar la calidad de vida de esta población sea efectiva, por lo que las condiciones en las que debe vivir la población que llega a Ibagué contribuye al aumento de la desigualdad.

### **7.1.2. Condiciones de seguridad y presencia histórica de GVO**

Tolima ha sido un departamento que históricamente se ha visto afectados por el conflicto armado. Por esta razón la historia de violencia en Ibagué se encuentra influenciada por este fenómeno. En los años recientes la dinámica del conflicto ha cambiado, permitiendo que el control que tradicionalmente manejaban grupos guerrilleros fuera confrontado por otros GVO. Para llevar a cabo el análisis de las condiciones de seguridad y la presencia de GVO en la ciudad se tendrá en cuenta la siguiente periodización: Primera etapa (década de los 90): tradición guerrillera; Segunda etapa (2000 - 2007): entrada de las AUC; Tercera etapa (2007 - actualmente): relativa estabilidad.

#### **7.1.2.1. Primera etapa (década de los 90): tradición guerrillera**

La presencia de las FARC y el ELN en Tolima ha sido marcada y persistente (Vicepresidencia de la República, 2002). En especial la guerrilla de las FARC, la cual ha tenido presencia en mayor medida. El departamento del Tolima es el territorio donde las FARC se originaron y sobre el cual han ejercido control a lo largo de su accionar como grupo armado.

La ubicación estratégica de Ibagué no sólo le permite a las FARC tener corredores para las grandes ciudades, sino que también es un sitio de paso para conectarse con zonas del sur del país, donde ésta guerrilla tradicionalmente se ha establecido. Si bien el sur del Tolima ha concentrado la presencia de las FARC, la ciudad de Ibagué también ha tenido presencia evidente de este grupo. Para esta década, en el área urbana era evidente la presencia de milicias bolivarianas (Vicepresidencia de la República, 2002) y del Frente 50 (MOE, 2007).

Durante los 90, predominaban acciones unilaterales de las FARC y combates con la Fuerza Pública. Ibagué era una de las ciudades capitales más afectada por acciones unilaterales, sin embargo no concentraba la mayoría de los combates ni enfrentamientos entre los grupos guerrilleros y la Fuerza Pública (Vicepresidencia, 2002).

La hegemonía de la guerrilla de las FARC comienza a fracturarse a finales de la década de los noventa con la inserción de los paramilitares en el departamento. A partir de este período la violencia aumenta y el departamento del Tolima se vuelve un territorio de disputa, afectando el desarrollo de la dinámica de violencia urbana en Ibagué.

#### **7.1.2.2. Segunda etapa (2000 - 2007): entrada de las AUC**

A comienzos del 2000 se registra la entrada de paramilitares al departamento del Tolima. La entrada de estos grupos se dio principalmente por sus intereses en las tierras del departamento, en las que predominaban cultivos ilícitos (MOE, 2007).

Antes de la consolidación y organización de los grupos paramilitares, los narcotraficantes que poseían tierras en el departamento contrataban con grupos de seguridad privada para hacerle frente a la amenaza del control guerrillero en la zona. Esto facilitó la entrada de las AUC, las cuales contaban con el apoyo de los terratenientes y narcotraficantes, poseedores de la gran parte de la tierra.

La avanzada de las AUC a nivel nacional se hizo evidente en el departamento con la conformación del Bloque Tolima, y posteriormente con la entrada del Bloque Centauros (MOE, 2007). El cambio en las dinámicas de conflicto armado afectó la dinámica de violencia en Ibagué. Durante este período se presentaron, en las zonas periféricas, situaciones críticas como la limpieza social, que buscaba acabar con el control guerrillero en la zona (Entrevista 86. Funcionario).

El control paramilitar no fue tan marcado como en otras ciudades de estudio. Posterior a la desmovilización de las AUC en 2006, en Ibagué se ha mantenido una estabilidad en la cual han mejorado varios indicadores de violencia.

#### **7.1.2.3. Tercera etapa (2007- actualmente): relativa estabilidad**

La ciudad de Ibagué atravesó un período de transición luego de la época marcada por enfrentamientos entre las guerrillas y las AUC. La desmovilización paramilitar generó nuevos grupos armados - GPDP-, que estaban

conformados por antiguos miembros de las AUC reorganizados en grupos más pequeños. En el Tolima se han registrado acciones que se pueden atribuir a las Águilas Negras, Los Rastrojos, Los Conquistadores del Tolima, entre otros (MOE, 2007).

Las acciones de estos grupos, a diferencia de otras ciudades de estudio, no están encaminadas al objetivo concreto de mantener un control territorial. Estos grupos se han dedicado al desarrollo de actividades criminales, por lo cual la ubicación de Ibagué es un punto estratégico para el paso de mercancía, hacia otras ciudades con mercados ilegales más estructurados.

Paralelo al proceso del surgimiento de estos nuevos grupos de violencia armada, la presencia y el control de las guerrillas, especialmente de las FARC sigue siendo evidente. Sin embargo es necesario resaltar que este control se ha replegado a las zonas rurales, disminuyendo las acciones violentas en comparación con la década de los noventa. Este contexto es el que se tendrá en cuenta para la identificación de los GVO que hacen presencia y el análisis de la violencia juvenil en Ibagué.

## 7.2. Análisis de la violencia juvenil

### 7.2.1. Violencia armada organizada y jóvenes

Los GVO que hacen presencia en Ibagué tienen unas características diferentes a aquellos que hacen presencia en otras ciudades. A continuación se clasificarán los GVO que tienen presencia en Ibagué a partir de sus niveles de organización y el uso de la violencia.

#### 7.2.1.1. Nivel Alto

Dentro de este nivel se encuentran los grupos que están organizados con jerarquías definidas y su ejercicio de violencia es profesionalizado. Estos son GPDP y las FARC. A pesar de que estos grupos tienen presencia en otras ciudades de estudio, en Ibagué adquieren una dinámica diferente, teniendo una presencia menos visible y menos activa. Sin embargo, esto no significa que no tengan influencia en la dinámica de violencia juvenil de la ciudad.

En cuanto a los GPDP su presencia es intermitente, no se puede señalar un dominio concreto de uno de los grupos. De acuerdo a los registros de las acciones violentas de la base de datos de CERAC, se evidencia presencia principalmente de Los Rastrojos y las Águilas Negras. Estos grupos en su dinámica general se encuentran organizados en forma de red, de modo que diferentes células (jerárquicamente organizadas) responden a un núcleo central (Granada, et al., 2009).

El principal objetivo de los GPDP es el manejo del crimen organizado. Ibagué no es una de las ciudades estratégicas para que estos grupos mantengan un control visible. Por ser una ciudad de paso la visibilidad de estos grupos es muy poca, los principales intereses de estos se enfocan en tener un corredor para acceder a grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Buenaventura, las cuales resultan más estratégicas en términos de control territorial y de mercados ilegales (Entrevista 86. Funcionario). La participación de los jóvenes en estos grupos no es directa, en la mayoría de los casos las relaciones que se establecen con los jóvenes se enfocan en labores menores como ser mensajeros, colaboradores y en el manejo del microtráfico (Entrevista 88. Líder juvenil)

A diferencia de los GPDP, las FARC tiene una tradición de presencia, con momentos donde es más evidente en la ciudad y otros en los que no. En Ibagué, las FARC tienen una organización militarizada y fuertemente jerárquica.

Actualmente la presencia de esta guerrilla en Ibagué se concentra en las áreas periféricas, en los límites entre lo urbano y lo rural. La relación de la guerrilla con la comunidad en el área urbana es muy diferente a la que mantienen en el área rural. En la zona urbana, si bien se conoce de la presencia del grupo, no son evidentes relaciones directas entre la comunidad y los miembros de la guerrilla.

La participación de los jóvenes en este grupo es diferente a la que tienen en los GPDP, sobre todo en el proceso de involucramiento. El reclutamiento de los jóvenes los involucra en un proceso que va más allá de realizar actividades específicas, los jóvenes son vinculados directamente a la estructura del grupo guerrillero y hacen parte de un proceso de ideologización.

### **7.2.1.2. Nivel intermedio**

Este nivel está conformado por los grupos al servicio del narcotráfico, los cuales tienen una jerarquía menos estructurada y cuyo ejercicio de la violencia es profesionalizado. La violencia de estos grupos es ejercida en función de las dinámicas de criminalidad organizada.

Estos grupos no se definen con una identidad concreta ni operan con un grupo específico, constituyen redes criminales articulándose de acuerdo al contexto y a los intereses para maximizar las rentas provenientes de los mercados ilegales. Estos grupos tienen una presencia estratégica en Ibagué como zona de paso, por lo cual no buscan ser visibles sino principalmente realizar el transporte de la mercancía hacia las grandes ciudades o hacia regiones que permitan la salida internacional de droga.

La participación de los jóvenes en estos grupos es indirecta, realizando labores como la comercialización de la droga en los niveles locales (Entrevista 86. Funcionario; Entrevista 92. Funcionaria). “Las labores que los jóvenes deben realizar son las impuestas por las redes. La venta de droga principalmente.” (Entrevista 88. Líder juvenil).

### 7.2.1.3. Nivel bajo

Finalmente, en este nivel se clasifican a las pandillas, las cuáles tiene presencia en las zonas periféricas y vulnerables de la ciudad. Este tipo de grupos no se encuentra organizado con una jerarquía definida, su organización es cambiante lo cual no permite hablar de una estabilidad del grupo (Entrevista 90. Funcionario). En cuanto al ejercicio de la violencia no es profesionalizado, sus acciones no se planifican en torno a un objetivo estratégico del grupo, sino que tienden a darse de acuerdo a los intereses individuales de los miembros del grupo.

La articulación de las pandillas con grupos de niveles superiores no es clara, prueba de esto es la falta de indicios que demuestren cómo se da esta relación. Sin embargo se presume que existen relaciones indirectas entre estos grupos, lo cual le permite a los pandilleros tener acceso a la droga que expenden y manejar el microtráfico en algunas zonas de la ciudad.

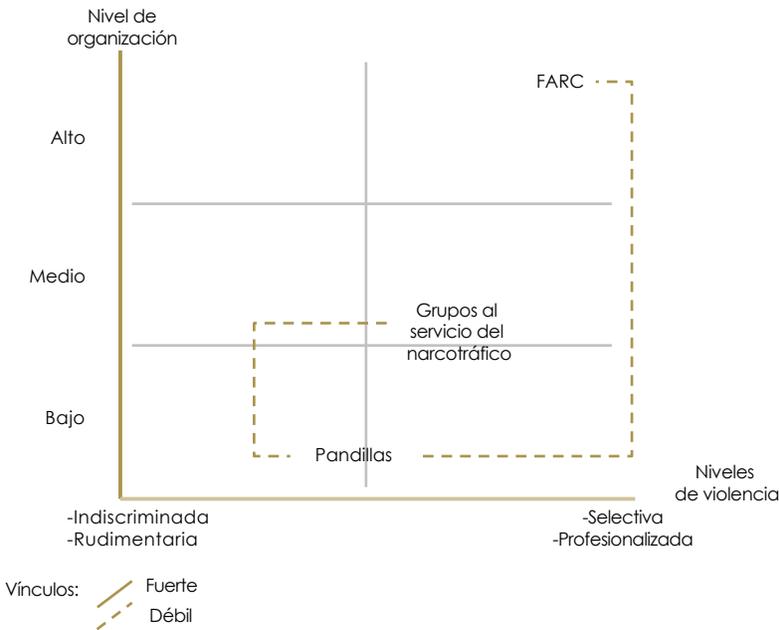
Estos grupos están conformados esencialmente por jóvenes, que buscan controlar pequeños territorios. La relación con la comunidad es directa, debido a que operan en las zonas donde se desenvuelven cotidianamente. A diferencia de los GVO del nivel bajo de los otros casos de estudio, las pandillas en Ibagué no tienen una injerencia sobre la comunidad que les permita imponer normas o restringir la movilidad. Igualmente estos grupos no tienen la influencia suficiente para interferir en la resolución de conflictos –de manera violenta– entre los miembros de la comunidad.

En cuanto a la Fuerza Pública, se evidencia una desconfianza hacia ésta, tanto de la comunidad como por parte de los pandilleros (Entrevista 84. Funcionaria). El contexto de violencia enmarca a Ibagué dentro de la dinámica del conflicto armado, por lo que el Ejército, sobre todo en las zonas periféricas, ha estado presente en los últimos años. A partir de esta relación se ha generado una especial desconfianza hacia la Fuerza Pública, la cual forma también parte de los responsables del ejercicio de la violencia juvenil como se evidenciará más adelante.

Estos GVO se concentran principalmente en acciones de delincuencia común (Lozano, 2007), como los hurtos, el expendio de drogas y, en algunos casos, las riñas entre los integrantes de las mismas pandillas (Entrevista

87. Líder juvenil). Igualmente este tipo de grupos tienden a utilizar armas blancas o hechizas para la realización de sus acciones violentas, lo cual además de evidenciar una diferencia marcada con respecto a otros GVO de jóvenes en otras ciudades de estudio, demuestra igualmente que la asociación de estos grupos a la criminalidad organizada es muy débil ejerciendo una violencia poco profesionalizada.

En la figura 10 se encuentran los grupos identificados cada uno de los niveles. Igualmente se muestran clasificados de acuerdo a su nivel de organización y de profesionalización de la violencia, mostrando las relaciones directas o indirectas que se dan entre los diferentes GVO identificados.



**Figura 11.** Grupos de violencia organizada en Ibagué (2008 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

### 7.2.2. Situaciones críticas de violencia contra los jóvenes

La violencia que afecta a los jóvenes en Ibagué se manifiesta de forma diferente a la que se observa en las otras ciudades de estudio. Si bien hay situaciones identificadas en los otros casos estudiados que se repiten para Ibagué, a diferencia de las otras ciudades de estudio -donde la mayoría de las situaciones críticas estaban asociadas a la criminalidad organizada- en Ibagué se encuentran situaciones asociadas a la delincuencia común.

Las situaciones críticas que afectan a los jóvenes han cambiado en los diferentes períodos de tiempo, esto se encuentra muy asociado a la presencia de los GVO que ha tenido Ibagué. Durante la entrada de las AUC los asesinatos a jóvenes se incrementaron, principalmente los asociados a fenómenos como la limpieza social. La tasa de homicidio para el final de este período, año 2007, era de 38 homicidios por cada 100 mil habitantes entre los 10 y los 25 años, esta tasa ha disminuido llegando en el año 2012 a 28 homicidios por cada 100 mil habitantes entre los 10 y los 25 años.

A continuación se describen las principales situaciones críticas de violencia contra jóvenes en Ibagué.

### **7.2.2.1. Agresiones en el marco de las riñas entre jóvenes**

Las riñas que se presentan en la ciudad de Ibagué no se pueden definir concretamente como un problema entre pandillas por controles territoriales. A pesar de que esto es un factor que influencia las dinámicas de los enfrentamientos entre los jóvenes, la mayoría de estas riñas no se podrían asociar a acciones organizadas de los GVO, sino que tienden a darse en el marco de problemas interpersonales entre los jóvenes.

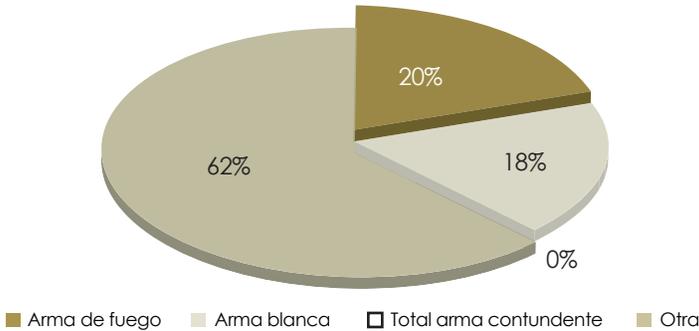
La falta de claridad con respecto a qué grupos juveniles son los que se involucran en esto, conlleva a que se den confusiones a la hora de determinar si es una situación crítica que se presenta únicamente con jóvenes pandilleros, con jóvenes pertenecientes a las barras de futbol o con jóvenes que no pertenecen a ningún tipo de grupo.

Los enfrentamientos entre los jóvenes tienden a darse en lugares exteriores a los barrios donde desarrollan sus actividades (Entrevista 92. Funcionaria). Por esta razón las riñas no afectan a la comunidad sino específicamente a los jóvenes que participan en ellas. Igualmente las riñas tienden a darse con arma blanca o con armas hechizas y, en menor medida, con arma de fuego (Entrevista 92. Funcionaria), lo cual contribuye a disminuir la letalidad de estos enfrentamientos (Ver figura11).

En el caso concreto de las barras futboleras es importante señalar que a diferencia de otros casos estudiados, las barras futboleras no tienen las mismas características que las barras futboleras violentas que se identificaron en casos como Bogotá o Cali. Los enfrentamientos que se relacionan con las barras futboleras en Ibagué se dan en la coyuntura de los partidos de futbol y no en otros escenarios distintos (Entrevista 84. Funcionaria; Entrevista 86. Funcionario). Sin embargo existen zonas grises en algunos casos, donde los jóvenes además de pertenecer a barras futboleras se involucran en grupos de delincuencia común.

Los jóvenes son utilizados e influenciados dándole un matiz diferente a la barra futbolera, viéndose involucrados en un grupo donde es necesario pasar pruebas para pertenecer y de esta manera delinquir dentro del mismo colectivo. Siempre maquillado bajo la figura de que somos una barra de futbol. (Entrevista 88. Líder juvenil)

**Tipos de armas utilizadas en homicidios de jóvenes**  
Población joven, 2012



**Gráfico 12.** Tipo de armas utilizadas en homicidios de jóvenes

Fuente: datos de la Policía Nacional de Colombia, procesados por CERAC

### 7.2.2.2. Afectaciones asociadas a la delincuencia común

Dentro de estas situaciones se encuentra los hurtos y los atracos atribuidos principalmente a las pandillas y a los jóvenes (Lozano, 2007). A diferencia del caso de Medellín, donde los combos controlan el territorio para evitar que los mismos jóvenes integrantes del grupo cometan robos en la comunidad; no existen GVO que controlen las acciones de los jóvenes pandilleros, quienes se involucran en estos hechos: “Los jóvenes se involucran –en pandillas– ejecutando robos por falta de trabajo” (Entrevista 85. Líder juvenil).

Este tipo de violencia tiende a afectar a los jóvenes no agresores y a los otros miembros de la comunidad. Según expertos y jóvenes de las comunidades, esta es una de las situaciones que más afectan las zonas periféricas de la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de población vulnerable.

### 7.2.2.3. Detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado

El reclutamiento legal e ilegal es una situación que históricamente se ha presentado en la ciudad debido a su contexto de violencia asociada al conflicto armado. En lo que respecta al reclutamiento legal el hecho violento que afecta a los jóvenes son las detenciones arbitrarias también llamadas “batidas”.

La responsabilidad de las detenciones arbitrarias, a diferencia de las otras situaciones críticas, recae en el Ejército. Según denuncias de jóvenes líderes de colectivos, las Fuerzas Militares detienen a jóvenes contra su voluntad y algunos, incluso, se encuentran estudiando o poseen libreta militar (Entrevista 84. Funcionario; Entrevista 90. Funcionario).

En cuanto al reclutamiento ilegal, es una situación que ha disminuido considerablemente en la zona urbana y que afecta mayormente a los jóvenes en las zonas rurales y a aquellos que se encuentran en las zonas periurbanas. El reclutamiento por parte de las FARC tiene una dinámica diferente en lo rural y en lo urbano (Entrevista 85. Líder juvenil; Entrevista 92. Funcionaria). En las áreas rurales el reclutamiento se hace por la guerrilla directamente, mientras que en las zonas urbanas la modalidad de reclutamiento es principalmente con milicianos infiltrados en universidades (Entrevista 85. Líder juvenil).

#### **7.2.2.4. Prostitución**

Este tipo de violencia afecta a menores de edad y mujeres jóvenes. Sin embargo, no es posible caracterizar sus procesos y dinámicas (Entrevista 90. Funcionario).

La prostitución se concentra principalmente en zonas vulnerables de la ciudad y en zonas que conectan con grandes vías de transporte, como es el caso de La Variante (Entrevista 86. Funcionario).

Es difícil establecer la responsabilidad de esta situación en cuanto no es claro si las redes de prostitución se encuentran asociados a GVO o si esta situación es promovida por individuos o familias de forma de independiente para obtener recursos. “Hay adultos involucrados y los mismos jóvenes que están involucrados promueven a los más pequeños. No se puede identificar una red organizada detrás como responsable” (Entrevista 90. Funcionario).

### **7.3. Factores de riesgo y protección asociados a la violencia juvenil**

---

#### **7.3.1. Factores que incrementan la vulnerabilidad frente a la violencia organizada**

Los factores de riesgo que hacen a los jóvenes más vulnerables a involucrarse en GVO se pueden explicar a través de dos modelos, en los cuales se relacionan factores de diferentes niveles (tomados del modelo ecológico de la violencia). Es necesario resaltar que los modelos que se explicarán a continuación tienen en común factores de riesgos estructurales, asociados principalmente a problemas socioeconómicos.

### 7.3.1.1. Modelo I

Dentro de este primer modelo se relacionan los siguientes factores de riesgo: *deserción escolar, necesidades económicas y el desempleo juvenil*.

La deserción escolar es un factor de riesgo que se manifiesta constantemente en la ciudad de Ibagué. Si bien ha habido avances en temas de cobertura de la educación, siguen existiendo problemas de deserción. Para el año 2009 se registraba una deserción del 5% en los colegios oficiales (Secretaría de Educación Municipal, 2010).

Esta problemática está vinculada generalmente a la búsqueda por parte de los jóvenes de generación de recursos económicos para satisfacer sus necesidades: “Problemas económicos en las familias llevan a los jóvenes a desertar y a buscar medios para poder sobrevivir” (Entrevista 90. Funcionario).

Los jóvenes que tienden a ser más vulnerables se concentran en las zonas periféricas de la ciudad donde los contextos de pobreza son generalizados. Esto conlleva a que los mismos jóvenes busquen diferentes modos de satisfacer sus necesidades económicas.

Al mismo tiempo otro factor de riesgo que contribuye a la vulnerabilidad de los jóvenes es el desempleo juvenil, para el año 2010 la tasa de desempleo en la población de los 14 a los 26 años era del 30%, siendo la más alta de todas las ciudades de estudio.

Teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes y las tasas de desempleo juvenil, la posibilidad de satisfacer estas necesidades a través de canales paralelos, generalmente ilegales, se hace cada vez más atractiva para los jóvenes.

### 7.3.1.2. Modelo II

En este segundo modelo se relacionan factores como la pertenencia a barras de fútbol, el consumo de drogas, la falta de oportunidades y los pares criminales.

Las barras futboleras no se consideran grupos de naturaleza violenta, sin embargo son consideradas un factor de riesgo porque pueden servir de base para la realización de actividades violentas. Como se mencionó anteriormente, las barras futboleras son aprovechadas por jóvenes pandilleros como plataforma en la cual pueden delinquir y encontrar otros jóvenes dispuestos a involucrarse.

Al mismo tiempo el consumo de drogas es otro factor que generalmente se manifiesta en jóvenes pertenecientes a las barras futboleras. Este factor de riesgo, como se ha mencionado en los casos de las otras ciudades, no

es determinante para el involucramiento en la violencia. Sin embargo la “adicción” que se crea hacia éstas hace más vulnerables a los jóvenes de involucrarse en dinámicas ilegales y violentas.

Teniendo en cuenta estos dos factores, los pares criminales son un producto del desenvolvimiento de los jóvenes en entornos como los mencionados anteriormente. Este factor puede facilitar el camino para que un joven acceda fácilmente a las redes delincuenciales o a los GVO.

Finalmente, la falta de oportunidades para el desarrollo de los jóvenes contribuye a que estos busquen oportunidades que les permitan no sólo la obtención de recursos sino también les permite mantener el reconocimiento social que les exigen este tipo de grupos (Entrevista 88. Líder juvenil).

### **7.3.2. Factores que incrementan la resiliencia frente a la violencia organizada**

En cuanto a los factores de protección que ayudan a que los jóvenes sean resilientes, se pueden identificar dos modelos. Ambos modelos parten del principio del involucramiento del joven en actividades o grupos que los mantienen alejados de la ilegalidad y la violencia.

#### **7.3.2.1. Modelo I**

El primer modelo de resiliencia parte de los resultados que generan las iniciativas de prevención de violencia, tales como: nuevas oportunidades laborales y la generación de proyectos de vida.

Las iniciativas de prevención, directas o indirectas capacitan a los jóvenes en diferentes áreas. Estas capacitaciones, a demás de motivarlos ayudan a los jóvenes a desarrollar habilidades en sus áreas de interés. A partir de esto el joven pueden acceder a una mejor oferta en el mercado laboral (Entrevista 84. Funcionario).

Algunas iniciativas buscan involucrar directamente a los jóvenes en educación formal, de modo que puedan después vincularse al mercado laboral profesional. Sin embargo, existen otras iniciativas que no se vinculan con la educación formal, pero buscan desarrollar habilidades en los jóvenes de modo que puedan realizar una carrera a partir de esa habilidad (deporte, cultura, artes, etc.) (Entrevista 88. Líder juvenil).

Junto con las nuevas oportunidades laborales, estas iniciativas de prevención motivan al joven en la construcción de un proyecto de vida; es decir que plantee unas metas definidas, buscando crecer en sus áreas de

interés. Teniendo en cuenta la situación socioeconómica de Ibagué, en la cual el desempleo es una de las problemáticas que más afecta a la sociedad, la existencia de iniciativas que busquen ayudar al joven a tener una mejor formación para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral demuestra cómo se busca atacar un factor de riesgo para transformarlo en un factor de protección.

La pobreza y el desempleo de Ibagué hacen necesario que los esfuerzos de prevención se concentren en atacar este tipo de factores de riesgo. Estas iniciativas buscan que los jóvenes se puedan sostener económicamente en el largo plazo, sin necesidad de recurrir a la violencia para la obtención de recursos.

### 7.3.2.2. Modelo II

El segundo modelo de resiliencia, a diferencia del anterior no se concentra en factores de riesgo como el desempleo juvenil o la falta de oportunidades. En este modelo se relacionan factores como la generación de redes de apoyo y fortalecimiento del tejido social.

Por medio de la conformación de grupos juveniles, no solo se contribuye al desarrollo de habilidades y capacitación de los jóvenes; igualmente se generan entornos en los cuales los jóvenes pueden desarrollarse con pares que comparten sus intereses y no están involucrados en actividades violentas (Entrevista 86. Funcionario).

La construcción de redes de apoyo hace a los jóvenes más resilientes ya que encuentran grupos de pares en los cuales puede confiar y sentirse reconocido. Esto finalmente contribuye al fortalecimiento del tejido social, haciendo que las generaciones de los jóvenes crezcan en entornos donde se refuerce la confianza y el apoyo entre los miembros de su misma comunidad.

### 7.3.3. Factores de riesgo de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Los factores que pueden poner a un joven en riesgo de ser víctima de la violencia están vinculados más a características del entorno que a factores personales.

Como se mencionó en la contextualización de la ciudad, la mayor parte de la ciudad es rural, por lo tanto la diferencia entre lo urbano y lo rural es muy marcada. Los territorios que concentran la mayor vulnerabilidad y que por lo general tienden a ser los espacios en los que se observan las situaciones críticas, antes señaladas, son los linderos entre la zona urbana y la zona rural. Por esta razón un factor de riesgo para que un joven sea víctima de la violencia es *habitar en estas zonas marginales*, a lo cual se agrega la *presencia de pandillas* que tiende a darse en estas zonas.

### 7.3.4. Factores de protección de los jóvenes a ser víctimas de violencia

Teniendo en cuenta los factores de riesgo para que un joven sea víctima, los factores de protección que se señalarán a continuación son los que tienden a presentarse en los jóvenes que habitan en las zonas marginales.

El involucramiento de los jóvenes en grupos y colectivos los ayuda a generar redes de apoyo, este factor además de hacerlos más resilientes, ayuda a que los jóvenes se protejan y se compartan información sobre la situación del territorio donde viven. Esta información contribuye a que se genere un mejor conocimiento del territorio y por lo tanto se puedan adoptar prácticas de autoprotección. Este tipo de prácticas incluyen evitar ciertos lugares, ir acompañados de grupos reconocidos y respetados por los GVO, entre otros.

## 7.4. Infraestructura de prevención de la violencia juvenil

### 7.4.1. Caracterización de la infraestructura

La infraestructura de prevención de la violencia juvenil en Ibagué es limitada, siendo una ciudad en la cual hay muy pocas iniciativas y el papel del Estado en este tipo de programas es poco representativo. Se identificaron un total de 48 iniciativas que han sido ejecutadas entre el 2008 y el 2014. En comparación con otras ciudades de estudio, esta es la ciudad que menos iniciativas de prevención registra.

Del total de iniciativas registradas, solo 11 se originan y aplican únicamente en Ibagué, el restante (37 iniciativas) operan a nivel regional o nacional. Esto demuestra que la infraestructura preventiva en Ibagué es precaria, debido a que tiene una fuerte dependencia de los programas externos a la ciudad.

Los coordinadores y responsables de la ejecución de las iniciativas se dividen en cuatro sectores: sector estatal, sector privado, ONG y cooperación internacional. Igualmente existen iniciativas que se coordinan en alianza entre estos diferentes sectores. Si bien el sector que más iniciativas registra es el estatal, con un total de 19 iniciativas, es necesario resaltar que de estas solo 1 se aplica concretamente en Ibagué; el resto son intervenciones ejecutadas por entidades nacionales. También es muy dicente que la administración local en Ibagué cuenta con la Secretaría de Apoyo a la Gestión, que se ocupa del área de juventud, sin embargo esta dependencia no cuenta con iniciativas concretas y sostenidas para la prevención de la violencia juvenil.

Otro de los sectores que tiene una alta participación en la infraestructura de prevención es el de las ONG. Se registran 9 iniciativas lideradas por este sector, de las cuales la mayoría se aplica específicamente en Ibagué.

Dentro de estas iniciativas se tienen en cuenta algunas organizadas por colectivos y grupos juveniles. El sector privado por su parte, registra 9 iniciativas y por último el sector de cooperación internacional que registra 2 iniciativas. Además de estas, se registraron 9 iniciativas que son llevadas a cabo por alianzas entre representantes de los diferentes sectores.

En cuanto al tipo de iniciativas que se aplican en Ibagué, la mayoría de estas son directas (26 iniciativas). En cuanto a las iniciativas de prevención indirectas, se registraron 22 en total. En específico, de las 11 iniciativas que se aplican únicamente en Ibagué, 10 son indirectas.

Las iniciativas de prevención en Ibagué se concentran en dos ejes temáticos: primero, actividades deportivas y artísticas, ejecutadas principalmente por los colectivos de jóvenes y ONG. El fútbol es el deporte que más se promueve; mientras que en el arte, el hip hop comienza a desarrollarse entre los jóvenes ibaguereños y tiene bastante acogida. El segundo eje que tiende a ser más utilizado como iniciativa de prevención es la educación y capacitación. Las iniciativas estatales y del sector privado se concentran en este eje. Este tipo de iniciativa busca capacitar en profesiones técnicas y brindar educación formal a los jóvenes.

Por último, existen algunas iniciativas que buscan mejorar la convivencia en las comunidades, a través de actividades lúdicas y participativas, involucrando a los jóvenes como parte activa de la sociedad. En menor medida hay iniciativas que buscan involucrar a los jóvenes en la participación política, especialmente en el ámbito local, como lo es la promoción de los Consejos Municipales de Juventud.

#### **7.4.2. Efectividad de la infraestructura**

La infraestructura de prevención de Ibagué tiene una efectividad media. Si bien ha habido avances, las condiciones actuales no demuestran una posibilidad de que a corto plazo la infraestructura pueda fortalecerse y dejar de ser precaria. Desde la administración local el tema de la prevención de la violencia juvenil no aparece como una de las prioridades a tratar, igualmente como se explicará a continuación hay ciertos obstáculos que impiden que las iniciativas que provienen de los mismos jóvenes puedan tener un mayor alcance y efectividad en materia de prevención.

Uno de los principales avances que se evidencian es en materia de participación de la juventud en la generación de políticas públicas. Esto se concreta específicamente con la adopción de los Consejos Municipales de Juventudes y la adopción de la Política Pública de Juventud para Ibagué en 2010 (Ministerio de Educación, 2010).

Ambos avances han logrado que el tema de juventud deje de ser ignorado por la administración local (Entrevista 85). Sin embargo, aún se necesita mejorar estos mecanismos, ya que en la mayoría de los casos el tema de juventud se entiende como falta de educación, deporte o cultura, sin definir concretamente cuáles son los problemas que afectan a los jóvenes (Lozano, 2007).

Como se pudo evidenciar en la caracterización de la infraestructura, el sector estatal tiene una alta participación en la infraestructura de la oferta de prevención. Sin embargo, si se observa concretamente el papel de las autoridades locales en la oferta preventiva se podría decir que esta tiene una participación muy baja. Esto afecta las iniciativas provenientes de otros sectores, ya que no logran tener un apoyo desde la institucionalidad local que permita facilidades para lograr un mejor desarrollo y sostenibilidad de las actividades que se proponen (Entrevista 90. Funcionario).

En cuanto a los Consejos Municipales de Juventud, si bien son un avance, han presentado efectos perversos: la politización de estos espacios que se abren a los jóvenes y las dinámicas clientelistas en las cuales algunos de los miembros se involucran (Entrevista 86. Funcionario).

Por parte del sector de ONG también se presentan falencias. La principal es la falta de articulación de esfuerzos, lo cual obstaculiza la integración de los colectivos juveniles con el apoyo que se quiere generar desde algunas ONG.

No hay una buena red de organizaciones y no se han generado plataformas que faciliten este trabajo. Organizaciones como Concern, ACJ, la Pastoral Juvenil han aportado para hacer fuertes en la construcción de esta plataforma. En un momento hubo un auge de esta iniciativa, sin embargo luego de la formulación de las políticas de jóvenes la iniciativa decayó. (Entrevista 92. Funcionaria)

Igualmente, los esfuerzos que se llevan a cabo desde estos dos sectores se enfrentan a problemas como la falta de recursos lo que afecta la sostenibilidad de los proyectos y desmotiva a los jóvenes participantes (Entrevista 92. Funcionaria). La estabilidad y la sostenibilidad afecta a los colectivos de jóvenes no solo por la falta de recursos, sino porque no se han apoyado de forma suficiente este tipo de agrupaciones evidenciándose una desarticulación al interior de las mismas (Entrevista 92. Funcionaria).

Finalmente, una de las problemáticas más importantes es la falta de interés y la desmotivación que tienen los jóvenes, percibida por ONG en terreno. Los procesos de resiliencia y de protección contra la violencia deben ir acompañados de la voluntad del joven, y esta se refuerza a través de la motivación y la

confianza, al evidenciar este tipo de problemáticas los esfuerzos que se realizan no tienen una de las condiciones base para que pueda haber efectividad. Los jóvenes no están interesados en procesos colectivos de formación. Hay una desmovilización de los jóvenes frente a estos procesos. No se cree y no hay esperanza en esos procesos de formación (Entrevista 90. Funcionario).

## 7.5. Conclusiones

---

El caso de Ibagué marca una diferencia siendo una ciudad que apenas comienza a crecer y que tiene una problemática de violencia juvenil menos evidente que otras grandes ciudades del país. El fenómeno de violencia juvenil en la ciudad no llega a tener el grado de organización y profesionalización que se observa en otros casos, sin embargo las condiciones actuales permiten que este fenómeno pueda evolucionar y transformarse.

La ciudad aún no es estratégica para el asentamiento de mercados ilegales y grupos de criminalidad organizada, sino que cumple una función de paso y donde los mercados ilegales funcionan en el nivel local. El crecimiento que se viene dando de la ciudad puede llevar a que en el largo plazo los grupos de criminalidad organizada busquen asentarse en la ciudad. Esto no significa que el crecimiento urbano sea un factor de riesgo para el incremento de la violencia juvenil, el factor de riesgo radica en que este crecimiento se haga sin el refuerzo de la institucionalidad y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas.

Las condiciones socioeconómicas son actualmente las que más ponen en riesgo a los jóvenes ibaguereños. Las estrategias de prevención, a pesar de que buscan atacar algunos de los factores de riesgos mencionados, no tienen la capacidad suficiente para abarcar todas las necesidades de los jóvenes. El papel del Estado, especialmente en lo local, es muy pasivo por lo que se requiere una mayor participación y apoyo a los otros sectores que también tienen un papel en la infraestructura preventiva.

Ibagué se podría tener en cuenta como un caso que amerita especial prevención. A diferencia de otras ciudades donde las estrategias de prevención deben ir acompañadas con programas de disminución de la violencia. Ibagué requiere especial atención en prevención, ya que no se enfrenta a una problemática tan álgida que requiera que se inviertan más esfuerzos en disminución. A pesar de que este tipo de casos puedan ser opacados por otros, cuya manifestación de violencia es más fuerte, sería recomendable que los programas preventivos se enfoquen en ciudades que comienzan a crecer y que son potenciales focos de desarrollo de violencia.

## **Panorama actual de la violencia juvenil en los contextos urbanos de Colombia**

*Pablo Alberto Ortega Poveda*

Este último capítulo presenta y discute desde una perspectiva comparada los principales hallazgos del libro en torno a la violencia juvenil en los contextos urbanos de Colombia. Estos resultados pueden servir como un punto de partida para futuras investigaciones sobre este tema en las ciudades estudiadas, así como un marco de análisis para lo que ocurre en otras urbes del país.

De igual forma, dado que uno de los principales hallazgos de este documento es la importancia que toma en estos momentos la criminalidad organizada y no el conflicto armado en las dinámicas de la violencia juvenil, es posible que los resultados del libro sean útiles, no sólo para evaluar los retos en la prevención de este fenómeno en un escenario posconflicto, sino también para contrastar la situación nacional con lo que ocurre en otras ciudades de América Latina.

El capítulo tiene la misma estructura de aquellos que abordan los casos de estudio: en primer lugar, se analizan las dinámicas generales de la violencia juvenil, tanto en lo concerniente a la participación de jóvenes en agrupaciones de violencia organizada como en los hechos violentos que más los afectan.

En segundo lugar, se discuten los principales factores de riesgo y protección asociados a este fenómeno, desde dos perspectivas diferentes: ¿qué lleva a los jóvenes a ser más vulnerables o resilientes frente a la opción de involucrarse en la violencia organizada?, y ¿qué pone en mayor riesgo o, por el contrario, protege a los jóvenes frente a la eventualidad de ser víctimas de violencia?

En tercer lugar, se presentan los principales resultados en torno a la “infraestructura” de prevención de la violencia juvenil instalada en cada uno de los casos y se analizan los factores que explican sus alcances y limitaciones.

Finalmente, se plantean recomendaciones de política pública para abordar la problemática.

## 8.1. Dinámicas de violencia juvenil en contextos urbanos

---

### 8.1.1. Jóvenes y violencia organizada

En términos generales, es posible resumir el panorama de la problemática de violencia juvenil en las ciudades analizadas a partir de dos dimensiones: de un lado, el tipo de violencia que ejercen los GVO relacionados con la violencia juvenil, y, del otro, el nivel de intensidad que tiene la violencia que ejercen estos grupos.

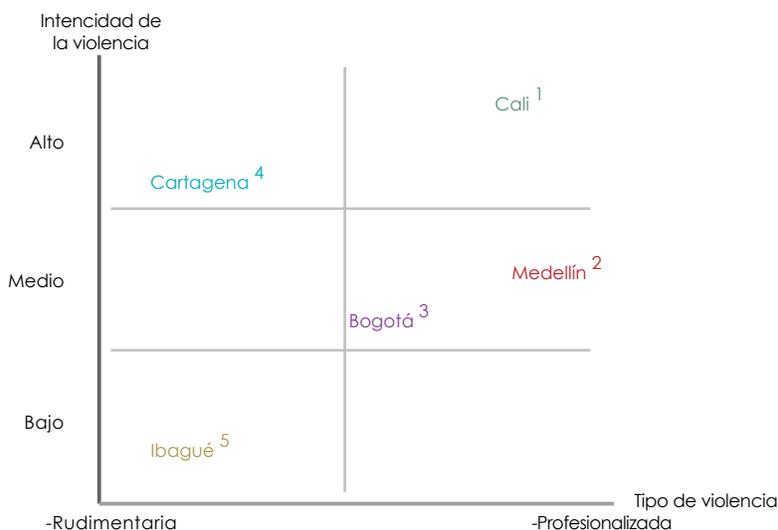
En cuanto a lo primero, el tipo de violencia está relacionado con tres variables: (1) el grado de articulación de los grupos con la criminalidad organizada; (2) el grado de precisión del objetivo de la violencia que ellos ejercen (selectivo o indiscriminado); y (3) la capacidad que tienen de ejercer violencia, de acuerdo al tipo de armamento que emplean (armas contundentes, armas blancas, armas de fuego –de hechizas a sofisticadas-).

En ese sentido, el tipo de violencia se puede enmarcar en un continuo que va desde la violencia “profesionalizada” (que tiene relación con el crimen organizado, es selectiva y emplea armas de fuego sofisticadas) hasta la violencia “rudimentaria” (que tiene poca relación con el crimen organizado, es indiscriminada y emplea en contados casos armas de fuego hechizas).

En cuanto a lo segundo, la intensidad de la violencia tiene que ver sobre todo con el grado de conflictividad evidenciado por enfrentamientos violentos entre los grupos relacionados con la violencia juvenil. Así, el nivel de intensidad puede ser alto, medio o bajo.

En síntesis, es posible agrupar las ciudades en tres categorías, de acuerdo al nivel de gravedad del fenómeno de la violencia juvenil: poco grave (violencia con baja intensidad y rudimentaria), medianamente grave (violencia con media intensidad y profesionalización) y muy grave (violencia con alta intensidad y profesionalizada).

La siguiente figura resume la situación de las ciudades de interés durante el período de estudio, de acuerdo a las dos dimensiones presentadas más atrás.



**Figura 13.** Situación de violencia juvenil en las ciudades de estudio (2008 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Entre el año 2008 y el año 2014, Cali y Medellín presentaron una problemática muy grave de violencia juvenil. La primera ciudad reportó la situación más crítica entre los casos de estudio: los GVO que allí hacen presencia se han involucrado en un álgido enfrentamiento por el control de la ciudad y han ejercido un tipo de violencia altamente profesionalizada. Mientras tanto, si bien los GVO de Medellín ostentan el mayor grado de profesionalización de la violencia entre los casos de interés, se ha observado un nivel bajo de disputa por el control de la ciudad en este período.

Por su parte, Bogotá y Cartagena tienen una problemática medianamente grave de violencia juvenil. Mientras que en la primera ciudad se han observado GVO con un nivel intermedio tanto en la profesionalización de la violencia que ejercen como en la disputa de territorios, en la segunda ciudad se ha registrado una alta conflictividad entre grupos que ejercen violencia predominantemente rudimentaria.

Finalmente, en Ibagué se observa una problemática poco grave de violencia juvenil. Los GVO que allí hacen presencia han ejercido una violencia rudimentaria y no han estado involucrados en enfrentamientos por el control de la ciudad.

### **8.1.1.1. Ciudades con un problema muy grave de violencia juvenil**

Cali y Medellín se caracterizan por la alta participación de jóvenes en la mayoría de GVO que hacen presencia en estas ciudades, así como por el alcance generalizado del fenómeno de la violencia juvenil en la mayoría de sus territorios.

En efecto, en ambas ciudades es posible observar una “carrera criminal” para los jóvenes agresores, en la que ellos comienzan como integrantes de combos y pandillas, luego son reclutados por grupos de criminalidad organizada (bandas y oficinas), en donde son entrenados en delitos de alto impacto, y luego terminan ocupando altos cargos en las estructuras de sicarios de grupos al servicio del narcotráfico o son reclutados por GPDP y grupos guerrilleros.

En estos contextos, los jóvenes agresores persiguen un patrón de “éxito” en el mundo delictivo, en el que es necesario posicionarse como los líderes del territorio bajo su influencia con el fin de escalar en la estructura criminal de la ciudad.

Adicionalmente, la problemática de la violencia juvenil afecta a la mayoría del territorio de cada una de las ciudades. En Cali, por ejemplo, hacen presencia 134 pandillas distribuidas en 17 de las 22 comunas de la ciudad, se han registrado algunos de estos grupos en barrios de estrato medio y alto, y se tiene conocimiento de 5 grupos que operan en toda la capital del Valle.

Pese a estas similitudes, es posible observar dos diferencias muy marcadas entre ambas ciudades, concernientes, por un lado, al grado de articulación de los grupos típicamente juveniles con la criminalidad organizada, y, por el otro, a los niveles de conflictividad entre estos grupos en el territorio.

En Cali las pandillas y las barras violentas están en un proceso avanzado de tránsito de estructuras tradicionales asociadas al pandillerismo hacia organizaciones cada vez más criminales y violentas. Allí se observan “pandillas tradicionales”, en las que priman los aspectos identitarios, la defensa del territorio frente a grupos rivales y la vinculación con delitos menores; pandillas similares a bandas criminales, dada su participación directa o a través de redes criminales en delitos de alto impacto; y pandillas similares a oficinas de cobro, por su especialización en dicha clase de delitos y el ofrecimiento de sus servicios a diferentes clases de clientes (narcotraficantes, guerrilleros, grupos criminales, etc).

Estas dos últimas clases de pandillas no sólo son subcontratadas por GVO del nivel “alto”, sino que además controlan a las pandillas tradicionales,

los grupos delincuenciales y las barras violentas en sus territorios de influencia y operan como intermediarias entre estos grupos y oficinas, GPD o narcotraficantes. Además, estas pandillas tienen recursos para ejercer una violencia letal, gracias a que cuentan con armas sofisticadas de corte militar como granadas y fusiles.

Por su parte, en Medellín ese proceso de tránsito ya culminó, de modo que no es posible observar pandillas tradicionales. Los GVO típicamente juveniles, es decir los combos armados, tienen una estructura, modo de operación y capacidad de ejercer violencia similar a las bandas criminales. Estos grupos tienen, además, una alta participación en el crimen organizado de la ciudad y una injerencia directa en el dominio de los territorios y poblaciones.

En cualquier caso, el nivel de disputa entre los GVO por el control de estas ciudades es el factor decisivo que diferencia estos casos de estudio y que sitúa a Cali como la ciudad con la problemática más preocupante de violencia juvenil.

En la capital del Valle se observa un recrudescimiento de la intensidad de la violencia juvenil por cuenta de la disputa por el dominio de la ciudad entre Los Urabeños y Los Rastrojos. Estos grupos han librado una guerra indirecta en la que alinean, subcontratan y fortalecen a oficinas de cobro, bandas y pandillas locales de acuerdo a sus intereses. Los GVO del nivel bajo e intermedio han aprovechado este escenario para competir y buscar doblegar a sus pares con el objetivo de fortalecer sus organizaciones y ascender en la estructura criminal de la ciudad.

En contraste con lo anterior, los GVO de Medellín han logrado establecer acuerdos tácticos, como por ejemplo el “Pacto de fusil”, para mantener bajos niveles de violencia, lo que les ha permitido recibir una menor atención por parte de las entidades estatales y maximizar el acceso a rentas ilegales derivado de su dominio de la ciudad. Sin embargo, estas alianzas son inestables y, tras su rompimiento, usualmente conllevan a un incremento de la violencia juvenil.

### **8.1.1.2. Ciudades con un problema medianamente grave de violencia juvenil**

Bogotá y Cartagena tienen como rasgo en común la participación restringida de los jóvenes agresores en la violencia organizada. En estas ciudades es mucho más frecuente que los jóvenes hagan parte de GVO del nivel bajo e intermedio que de grupos del nivel alto. Ellos participan en barras violentas, pandillas o máximo bandas criminales, ejerciendo el rol de vigilantes,

mensajeros, vendedores de droga, cobradores de extorsiones y sicariato. En todo caso, grupos armados y oficinas reclutan a jóvenes provenientes de zonas marginales de ambas ciudades.

El alcance del fenómeno de la violencia juvenil varía en cada uno de estos casos. En Bogotá la problemática está focalizada en las zonas socioeconómicamente más vulnerables de la ciudad, donde además confluyen las principales problemática de seguridad y violencia homicida asociados al crimen organizado (específicamente en las UPZ de 9 localidades). En Cartagena el fenómeno está extendido a prácticamente todo el territorio, con excepción de la zona turística, aunque es mucho más grave en la localidad 2 (La Virgen y Turística), donde se observa un fenómeno grave de marginalidad de la población.

Además, estas ciudades difieren en el grado de articulación de los GVO juveniles (en ambos casos pandillas) en el crimen organizado. Por un lado, en Bogotá se observa una transición incipiente de estos grupos hacia organizaciones más estructuradas, criminales y violentas, como resultado de una mayor intervención de grupos del narcotráfico en las actividades y formación de las pandillas.

Por otro lado, en Cartagena las pandillas están escasamente articuladas al crimen organizado, pero existe un riesgo alto de que esta situación cambie en el corto plazo y estas agrupaciones realicen un tránsito similar al de Bogotá o Cali. Ello se debe a la cooptación de las pandillas y el establecimiento de “escuelas de sicariato” en las zonas marginales de la ciudad por parte de GVO del nivel alto.

Sin embargo, la principal distinción entre estas dos ciudades, al igual que con Cali y Medellín, es el nivel de intensidad de la violencia juvenil. En Bogotá, tan sólo se ha observado una alta competencia por el control del territorio entre pandillas y bandas criminales en cuatro zonas focalizadas de las localidades de Usaquén, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. En Cartagena, por el contrario, las disputas entre las pandillas son frecuentes e intensas en casi todo el territorio, pero el tipo de violencia que ellas ejercen tiende a ser rudimentario por lo que la letalidad es baja.

### **8.1.1.3. Ciudades con un problema poco grave de violencia juvenil**

Ibagué es el único caso de estudio en esta categoría. En esta ciudad las pandillas y GVO juveniles están muy desarticuladas de la criminalidad organizada y no se observa en el corto plazo un riesgo de que esto cambie. Así mismo, la participación de los jóvenes está restringida principalmente

a los grupos del nivel bajo, aunque las FARC reclutan forzosamente a jóvenes de las zonas rurales.

La ciudad también se caracteriza por bajos niveles de conflictividad entre los GVO juveniles, quienes además ejercen una violencia rudimentaria en la que prima el uso de armas blancas. Finalmente, la problemática de violencia juvenil está concentrada únicamente en la zona periurbana de Ibagué.

### 8.1.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes

La siguiente tabla resume los principales hechos de violencia que más afectan a los jóvenes durante el período de estudio en cada una de las ciudades de interés.

**Tabla 1.**

*Situaciones críticas de violencia contra jóvenes en las ciudades de estudio (2008 – 2014)*

Situación crítica	Ciudad				
	Bogotá	Cali	Medellín	Cartagena	Ibagué
Asesinatos	x	x	x	x	
Desapariciones forzadas			x		
Desplazamiento intraurbano			x	x	
Violencia sexual	x	x	x	x	x
Agresiones físicas	x	x	x	x	x
Restricciones a la movilidad	x	x	x	x	
Reclutamiento forzado	x	x		x	x
Detenciones arbitrarias	x		x		x
Amenazas	x	x		x	

Fuente: elaborado por CERAC

Los asesinatos son la situación crítica de violencia que más afecta a los jóvenes en las ciudades de estudio.

Para comenzar, cabe destacar que este tipo de violencia tiene un nivel mucho más alto en las ciudades con el problema más grave de violencia juvenil. En efecto, en el 2012, según la Policía Nacional, Cali (142) y Medellín (97) tenían una tasa de jóvenes asesinados por cada cien mil habitantes mucho mayor que las demás ciudades de estudio (Bogotá -25-, Cartagena -39- e Ibagué -28) y el país (42).

En particular, es preocupante la situación de Cali. Entre 2003 y 2012, la ciudad tuvo unas tasas por encima de 100 jóvenes asesinados por cada cien mil jóvenes en cada año, y en ese período concentró el 12,3% del total de

jóvenes asesinados en el país (7.480 de 60.446). Estas tasas, que venían cayendo entre el 2003 (164) y el 2009 (119), se incrementaron durante el período de recrudescimiento de la disputa por el control de la ciudad entre GVO del nivel alto y llegaron a 142 en el 2012.

Esta ciudad es emblemática en la relación entre la violencia juvenil y los homicidios de jóvenes. Si bien no todos estos casos tienen que ver con las acciones de los GVO que allí hacen presencia, es diciente la coincidencia entre las zonas de mayor concentración de la violencia homicida juvenil y los territorios con graves problemas de pandillerismo y bandas criminales: las comunas del Distrito de Aguablanca, Ladera y el centro (Observatorio Social de Cali, 2014)<sup>78</sup>.

En parte, los homicidios de jóvenes en la ciudad tienen relación con dinámicas de la violencia juvenil: las balaceras, enfrentamientos e incursiones sicariales entre grupos rivales; la transgresión de fronteras invisibles impuestas por GVO; los ajustes de cuentas por el microtráfico; y las riñas al interior de bandas y pandillas.

En Bogotá, la violencia homicida contra los jóvenes tiene que ver mucho más con las campañas de “limpieza social” en zonas periféricas y marginales de la ciudad. En estos hechos participan sectores de la comunidad (comerciantes y líderes de JAC), así como integrantes de la Fuerza Pública, grupos de vigilancia comunitaria, oficinas de cobro y GPDP. La limpieza social afecta a jóvenes agresores y consumidores de drogas; militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes sociales; y a quienes están en el lugar y el momento “equivocados”.

En Cartagena esta violencia se ejerce principalmente en el marco de los enfrentamientos y riñas entre pandillas, así como en el desarrollo de acciones sicariales. Allí, los jóvenes que son hijos de líderes de restitución de tierras y grupos de víctimas han sido particularmente afectados por estos hechos.

Otro tipo de situación crítica de violencia contra los jóvenes en las ciudades de estudio es la violencia sexual, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad. Pese al subregistro de este tipo de violencia en las fuentes oficiales, lo anterior se puede constatar en las cifras que reporta Medicina Legal: para el 2012, las ciudades de estudio con las mayores tasas de agresiones sexuales de mujeres jóvenes (de 10 a 25 años) por cada cien mil habitantes eran Cartagena (205) y Bogotá (197), seguidas de Medellín (185), Cali (144) e Ibagué (138).

Además de estos hechos, en todas las ciudades de estudio se presenta una grave problemática de explotación sexual y prostitución forzada de mujeres

jóvenes y menores de edad. Si bien no es posible generalizar ni relacionar directamente las acciones de los GVO que hacen presencia en las ciudades con este tipo de hechos, diferentes entidades estatales y organizaciones encargadas de la lucha contra esta problemática han destacado la presunta participación de GPDP y otras agrupaciones en las redes que participan en esta clase de explotación sexual.

En Bogotá, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo (2014) señaló que las jóvenes víctimas son inducidas a prostitución forzada por redes criminales controladas por GPDP en Bosa y Ciudad Bolívar, a través de cuatro modalidades: (1) la entrega de dinero; (2) el ofrecimiento de mejores condiciones de vida; (3) la intimidación y las amenazas; y (4) la inducción a la drogadicción. La Personería de Cali (2012), por su parte, denunció que algunas pandillas de la ciudad participan en proxenetismo, tráfico de personas e inducción a la prostitución de mujeres jóvenes.

La tercera clase de hechos violentos que afectan de forma más preocupante a los jóvenes de las ciudades de interés son las restricciones a la movilidad impuestas por pandillas, bandas y GPDP. Estos GVO prohíben la entrada a ciertos territorios (con amenaza de muerte) a grupos rivales, con el fin garantizar el acceso exclusivo a fuentes de rentas ilegales en esas zonas, y con el paso del tiempo estas “fronteras invisibles” terminan siendo reconocidas por la comunidad.

En Cali las restricciones a la movilidad afectan gravemente a los jóvenes de zonas muy afectadas por la violencia y la criminalidad, en tanto la presencia de un número elevado de GVO en algunos barrios ha conducido a una fragmentación tal del territorio (entre sectores y cuadras), que los jóvenes y habitantes de estas comunidades viven en una situación similar a un confinamiento forzado. En esta ciudad y Medellín estos hechos limitan, a su vez, el acceso de los jóvenes a bienes y servicios del Estado, como la educación y programas sociales.

En cuarto lugar es necesario destacar el reclutamiento forzado de jóvenes y la vinculación y uso ilegal de menores de edad. Una particularidad de este tipo de esta situación crítica es la participación de grupos del conflicto armado tanto guerrilleros (sobre todo las FARC) como posdesmovilización paramilitar (p.e. Los Urabeños y Los Rastrojos). Estos grupos reclutan a los jóvenes mediante cuatro mecanismos: (1) la inducción a la drogadicción; (2) la entrega de alimentos, artículos de valor y pequeños regalos para construir lealtad y confianza en los jóvenes; (3) el pago de sumas de dineros; y (4) la violencia.

Finalmente, otros hechos que afecta de forma grave a los jóvenes de las ciudades de estudio son las detenciones arbitrarias y el trato abusivo por

parte de la Fuerza Pública. En particular, de estas formas no letales de violencia, se destacan las agresiones físicas e intimidaciones en el marco de acciones de registro y control por parte de la Policía, así como las “batidas ilegales” de jóvenes que no han logrado resolver su situación militar.

## 8.2. Factores de riesgo y protección frente a la violencia juvenil

### 8.2.1. Vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Los resultados que presenta el libro en torno a los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la opción de vincularse a GVO, permiten establecer un diálogo con las principales escuelas teóricas que abordan la problemática de la violencia juvenil desde un enfoque individualista, que se presentaron en el estado del arte del Capítulo 2.

En primer lugar, se ratifica el consenso al que llegaron autores como Rodgers y Jones (2009) en torno a la naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia juvenil. En ese sentido, a lo largo de este documento se ha denominado “encadenamientos de influencias” a los factores que se articulan para hacer a los jóvenes de las ciudades de estudio mucho más vulnerables frente a la violencia organizada. Estos encadenamientos causales pueden sintetizarse en cinco modelos explicativos: *familias disfuncionales*, *búsqueda de protección*, *satisfacción de estilos de vida*, *necesidad de provisión de bienes en el hogar*, y *drogadicción*.

El primer modelo establece un diálogo con la escuela de la teoría psicosocial de la violencia juvenil. Más allá de asumir que la articulación de los jóvenes a la violencia organizada es un comportamiento anómico o antisocial, en lo que llegan a un acuerdo este libro y dicha teoría es en la importancia que tiene las falencias de la institución social de la familia para que los jóvenes decidan ser agresores o iniciar una carrera criminal en GVO.

En particular, cuando los hogares no operan como un entorno protector exponen a los jóvenes a una mayor influencia frente a la criminalidad e incrementan su vulnerabilidad en cuanto a la decisión de vincularse a grupos armados, organizaciones criminales o pandillas. Esto ocurre en los hogares que cumplen algunas de estas características: (1) hay permisividad en los padres o en quienes ejercen posiciones de autoridad en la familia frente a la criminalidad y la violencia; (2) no hay acompañamiento ni apoyo en la construcción del proyecto de vida de los hijos ni supervisión de las actividades que ellos realizan y sus amistades; y (3) hay abuso de autoridad y casos de violencia intrafamiliar.

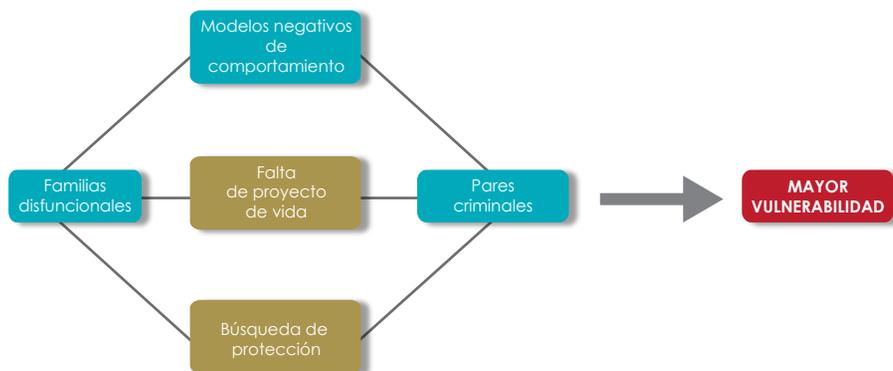


Figura 14. Modelo explicativo asociado a familias disfuncionales

Fuente: elaborado por CERAC

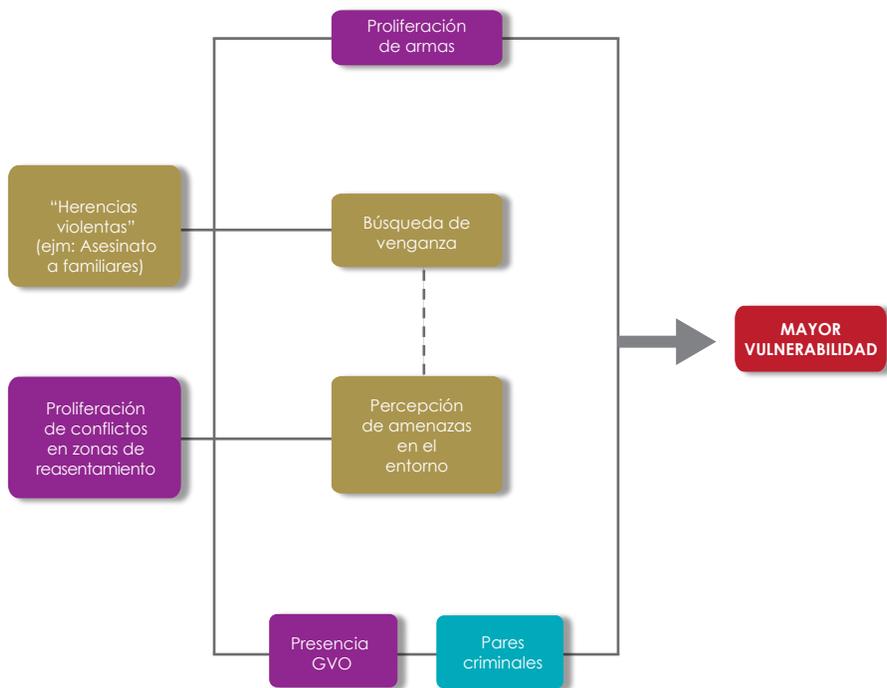
El segundo modelo, búsqueda de protección, está de acuerdo con los teóricos que plantean que la violencia tiene una utilidad para los jóvenes. En efecto, en las ciudades de estudio se encontró que en entornos con serias problemáticas de seguridad, los jóvenes pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando perciben una amenaza contra sus vidas en donde habitan o encuentran en la violencia una oportunidad para resolver sus conflictos personales.

En dichos contextos, la pertenencia a un GVO se convierte en una de las pocas opciones de los jóvenes para resguardarse frente a un entorno hostil.

En este barrio si usted no participa de una pandilla no es, por ejemplo, aquí operan los lecheros y cuando salga a coger el bus lo van a atacar, así que le toca ser de la banda. Se vinculan por fuerza porque las fronteras lo obligan (...) Para sobrevivir toca cuidarse uno mismo la espalda, entre compañeros. (Personería de Cali, 2014, p.21)

Además, los jóvenes pueden ver a los GVO como un medio para resolver de forma violenta sus conflictos personales. En esta clase de barrios de las ciudades de estudio, es frecuente que existan altos niveles de conflictividad social y falencias en la convivencia, que son asumidos por los jóvenes, y que son susceptibles de ser tramitados de forma violenta, dada la proliferación de armas de fuego, y la presencia de GVO.

En síntesis, en ambas situaciones, la violencia organizada puede ser percibida por los jóvenes como una vía para asegurar su supervivencia y alcanzar sus objetivos.



**Gráfico 15.** Modelo asociado a la búsqueda de protección

Fuente: elaborado por CERAC

El tercer modelo también está a favor de la teoría de la utilidad de la violencia. En las ciudades analizadas se encontró que tienden a ser vulnerables a optar por ser parte de GVO los jóvenes que buscan satisfacer estándares de vida asociados a una “cultura de la ilegalidad” a través de actividades violentas y delictivas.

En Cali y en Medellín, donde los carteles de narcotráfico tuvieron una notable influencia en los valores y las relaciones sociales, los jóvenes de barrios marginales están expuestos a una “cultura de la ilegalidad” en la que priman dos valores: el consumo de bienes y servicios costosos y de difícil acceso para estos jóvenes y la pérdida del valor de la vida. Según las personas entrevistadas en estas ciudades, en parte, la decisión de algunos jóvenes de involucrarse con GVO tiene que ver con la búsqueda de acceso a este estilo de vida.

En esa situación, otros factores, como el tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales, operan como una cadena de influencias que facilitan la decisión de los jóvenes a favor de la violencia organizada.



**Figura 16.** Modelo asociado a la de satisfacción de estilos de vida

Fuente: elaborado por CERAC

El cuarto modelo discute con las teorías que explican la violencia juvenil desde la desigualdad y las desventajas sociales.

Al igual que otros estudios (p.e. Solarte, 2010), en la investigación no se encontró evidencia a favor de una relación directa entre la pobreza y la decisión de los jóvenes de vincularse a GVO. Sin embargo, la situación en la que los jóvenes tienen que asumir el rol de proveedores en sus hogares, como resultado de la vulnerabilidad económica de sus familias, aunada a otros factores de riesgo, sí se identificó como determinante en la trayectoria de vida de los jóvenes agresores.

Usualmente, esto ocurre cuando quienes ejercen la figura de autoridad en los hogares tienen serias dificultades para insertarse laboralmente en la ciudad. La presión que reciben los jóvenes para iniciar su vida laboral a temprana edad (10 a 15 años) los hace más propensos a participar activa o esporádicamente en actividades delictivas, ante la premura de las necesidades materiales que afrontan. En particular, aquellos jóvenes que han desertado del colegio y tienen dificultades para conseguir empleo son mucho más vulnerables, sobre todo cuando reciben ofertas de actividades ilegales por parte de GVO.



**Gráfico 17.** Modelo asociado a la necesidad de proveer recursos en el hogar

Fuente: elaborado por CERAC

El último modelo no es susceptible de ser comparado a la luz de las teorías de la explicación de la violencia juvenil encontradas en el estado del arte. En el estudio se encontró que en un contexto de presencia de redes y grupos criminales que venden droga, los jóvenes adictos al consumo de estas sustancias suelen estar en un nivel alto de riesgo de involucrarse en GVO.

De hecho, GPDP, bandas y pandillas inducen a los jóvenes a la drogadicción para facilitar su vinculación en las actividades criminales que ellos controlan. Les ofrecen de forma gratuita una pequeña dosis de droga en parques públicos o en sus colegios para crear la adicción. Luego de que han logrado formar esa conducta en los jóvenes, y ante la carencia de recursos para financiar su necesidad de consumo, les ofrecen la oportunidad de articularse a la cadena del microtráfico como vendedores, en el mismo lugar donde fueron contactados.

De igual forma, los jóvenes que han sido inducidos a la adicción pueden ser más propensos a participar en hurtos, asesinatos y otros tipos de actividades realizadas por GVO, con el fin de satisfacer su necesidad de consumo.

A manera de cierre y en línea con los teóricos que evidencian la utilidad que puede llegar a tener la violencia para los jóvenes, se puede reafirmar que la participación de los jóvenes en GVO es un comportamiento racional en contextos donde estas agrupaciones proveen beneficios y oportunidades que los jóvenes no encuentran en sus hogares, comunidades o el Estado.

Así mismo, lo anterior evidencia que si bien los jóvenes tienden a ser instrumentalizados por organizaciones criminales, ellos también usan la violencia organizada para satisfacer sus intereses personales.



**Figura 18.** Modelo asociado a drogadicción

Fuente: elaborado por CERAC

### 8.2.2. Resiliencia frente a la violencia organizada

En correspondencia con los hallazgos presentados en la sección anterior, se identificaron dos factores que hacen más resilientes a los jóvenes de las ciudades de estudio frente a la opción de vincularse a GVO: las familias

que operan como entornos protectores, de un lado, y las intervenciones en materia de prevención de la violencia juvenil, así como las organizaciones y colectivos juveniles, del otro.

Los jóvenes que pertenecen a familias cohesionadas y con sistemas de autoridad funcionales tienen posibilidades de rechazar la opción de participar en acciones de violencia organizada, porque sus familias operan como entornos protectores y redes de apoyo que les ofrecen: (1) modelos positivos de comportamiento; (2) acompañamiento en la construcción de planes de vida; y (3) supervisión en el uso de su tiempo libre y en la construcción de sus redes sociales.

Por su parte, los jóvenes que son beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o que hacen parte de grupos y redes juveniles también pueden ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

Lo anterior se debe, en primer lugar, a que esta clase de iniciativas y agrupaciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad: (1) les ofrecen una amplia variedad de actividades que ocupan “positivamente” su tiempo libre, atacando un factor de riesgo clave frente a la vinculación a los GVO; (2) les forman habilidades que los fortalecen en lo laboral, en el nivel educativo, en el conocimiento de sus derechos, etc.; (3) les proveen referentes positivos de comportamiento; (4) les permiten ejercer liderazgos positivos; y (5) les permiten conocer otros entornos y modelos de vida, lo que facilita la posibilidad de construir proyectos de vida diferentes a la violencia.

### **8.2.3. Factores de riesgo para ser víctima de violencia**

En general, la mayoría de la población que reside en barrios con graves problemas de inseguridad en las ciudades de estudio, está sujeta a la posibilidad de ser víctimas de agresiones físicas, asesinatos, restricciones a la movilidad, etc. Sin embargo, tienden a estar en un nivel especial de riesgo los jóvenes en tres tipos de situaciones que se explicarán a continuación.

En primer lugar, aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas en la comunidad (p.e. el consumo de drogas o la pertenencia a subculturas urbanas) en sitios públicos “peligrosos”, ya sea por la presencia de GVO y agentes que ejercen violencia contra los jóvenes, o por el desarrollo de actividades criminales en esos lugares.

En particular, se identificaron tres sitios que representan un riesgo alto para estos jóvenes: primero, los colegios públicos y sus alrededores. Allí se

observan puntos de venta de droga, controlados por GVO, redes dedicadas al tráfico de mujeres y niñas para la prostitución forzada, y son lugares donde se reúnen y enfrentan barras violentas de fútbol y pandillas.

En ese sentido, en estos sitios los jóvenes enfrentan la amenaza de ser hurtados o agredidos físicamente por pandillas y bandas criminales; ser lesionados en el marco de los enfrentamientos entre GVO como las barras violentas; ser inducidos a la drogadicción y por esa vía ser reclutados forzosamente o vinculados a grupos criminales; e incluso, ser víctimas de prostitución forzada.

Segundo, los parques públicos son sitios peligrosos porque también son punto de encuentro de pandillas, bandas y barristas, así como de venta de droga. En los parques, los jóvenes con el perfil mencionado se enfrentan ante las mismas amenazas señaladas más atrás, pero además están ante el riesgo de sufrir tratos arbitrarios por parte de la Policía.

Finalmente, las estaciones y CAI de Policía representan un lugar de riesgo para los jóvenes con el perfil mencionado en zonas marginalizadas de las ciudades, puesto que allí pueden ser víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias o amenazas por parte de agentes estatales.

En segundo lugar, tienden a estar en un nivel mayor de riesgo de ser víctimas los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En concreto, el trabajo de líderes puede ser percibido como un riesgo para los intereses estratégicos de los GVO, en tres clases de situaciones: (1) si se dirige a ofrecer opciones para el cambio en la trayectoria de vida de jóvenes agresores con roles importantes dentro de las estructuras de estos grupos (líderes de sicarios, vendedores de droga, etc.); (2) si afecta las actividades económicas de los grupos, mediante la denuncia de delitos cometidos por bandas y pandillas (como el microtráfico); y (3) si pone en riesgo el interés de ejercer control sobre la población que tienen algunos de estos grupos, mediante las denuncias de las violaciones a los derechos humanos que ellos realizan.

En tercer lugar y para terminar, en contextos de dominio de los GVO y de internalización de normas tácitas impuestas por ellos en las comunidades, la resistencia que pueda poner un joven de la comunidad, a través de la contravención directa o indirecta de dichas reglas, puede potenciar el riesgo. Al subvertir el orden, el principal riesgo es sufrir represalias impuesta por los GVO, que buscarán por medio de la violencia mantener ese control que ejercen.

Así mismo, en ese contexto, la interacción cotidiana (y obligada) de los jóvenes con los integrantes de combos, bandas y pandillas puede conllevar a que existan conflictos interpersonales entre los jóvenes que no están involucrados y aquellos que sí lo están. Estos conflictos pueden incrementar notablemente el perfil de riesgo de los jóvenes no agresores que se involucran en ellos.

#### 8.2.4. Factores de protección frente a la violencia

Para finalizar esta sección, en la investigación se identificó como un factor común de protección en las ciudades de estudio la pertenencia a organizaciones y redes juveniles, toda vez que este tipo de iniciativas no sean percibidas como una amenaza para los GVO que hacen presencia en los territorios.

Esto tiene que ver con el grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones y agrupaciones en la comunidad, y entre los jóvenes agresores. Además, con la construcción de mecanismos de protección colectiva que apuntan a la identificación y comunicación de riesgos a sus participantes por parte de estas iniciativas.

En general, aunque tienen un alcance limitado, estos factores mitigan un poco las amenazas que enfrentan los jóvenes en contextos de alto riesgo, por lo que es posible plantear que los jóvenes más vulnerables frente a la violencia son aquellos que no tienen conexiones ni redes de apoyos como éstas.

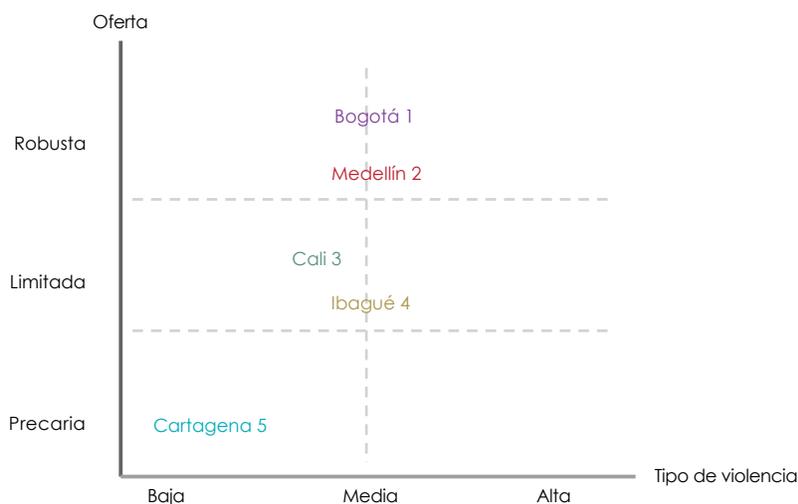
### 8.3. Infraestructura de prevención de la violencia: alcances y limitaciones

---

En términos generales, es posible resumir el panorama de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil instalada en las ciudades de estudio, a partir de dos dimensiones: de un lado, la oferta de iniciativas de prevención de la violencia en comparación con la magnitud de la problemática. Frente a lo cual, se pueden establecer tres categorías: robusta (si es un número considerable frente a la problemática), limitada (si no es un número suficiente frente a la problemática) y precaria (si es un número muy bajo frente a la problemática)<sup>79</sup>.

De otro lado, la efectividad percibida de las iniciativas para prevenir la persistencia del fenómeno. Aunque es muy difícil evaluar esta dimensión, se pueden plantear tres categorías de análisis: baja efectividad, media efectividad y alta efectividad.

La siguiente gráfica resume la situación de las ciudades de interés durante el período de estudio, de acuerdo a las dos dimensiones presentadas más atrás.



**Figura 18.** Infraestructura de prevención de la violencia juvenil en las ciudades de estudio (2008 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Así, en síntesis se observa que Bogotá y Medellín tienen una infraestructura muy similar, de carácter robusto pero con una mediana efectividad. Cali e Ibagué también tienen características en común, una oferta de iniciativas limitadas con un alcance medio. Finalmente, Cartagena tiene la infraestructura con mayores problemáticas; precaria en cuanto a la oferta de iniciativas y con muy baja efectividad.

### 8.3.1. Bogotá y Medellín

Estas ciudades tienen una infraestructura robusta en tanto concentran la mayoría de las iniciativas de prevención de la violencia identificadas en la investigación entre el período 2008 y 2014.

De estas dos, el liderazgo lo tiene Bogotá: el 51,7% de las iniciativas (102 de 197) operan en la capital del país, ciudad que, como se mencionó en la primera sección, tiene una situación medianamente grave de violencia juvenil. De ahí que se pueda afirmar que, incluso, hay una sobreoferta de iniciativas de prevención frente a la dimensión de la problemática que en la ciudad se afronta.

Medellín tiene el segundo lugar en términos de robustez entre los casos de estudio: el 43,1% de las iniciativas registradas (85 de 197) operan en

esta ciudad. No obstante, la problemática de Medellín es mucho más preocupante que la de Bogotá, por lo que se esperaría que ella recibiera una mayor atención en materia de prevención.

En cuanto a efectividad, ambas ciudades han presentado importantes avances durante el período de estudio. En primer lugar, tanto Bogotá como Medellín han tenido un importante desarrollo institucional en la atención de los jóvenes, mediante la implementación de la PPJ: se han creado mecanismos de participación de los jóvenes (como el Presupuesto Participativo en Medellín o el CDJ en Bogotá); se han creado entidades municipales encargadas de la atención directa de esta temática; y se han establecido los lineamientos normativos para que la prevención de la violencia juvenil pueda abordarse desde un enfoque acompañado por una política social a favor de los jóvenes.

Adicionalmente, las iniciativas de prevención de la violencia juvenil que en estas ciudades se ejecutan realizan una priorización acertada de las poblaciones objetivo, así como atienden factores de riesgo presentes en cada una de las ciudades, como por ejemplo, la drogadicción, el mal uso del tiempo libre, la falta de formación laboral, etc.

Finalmente, en los dos casos de estudio se observa un sector comunitario muy fuerte y robusto que trabaja el tema de juventud desde el esfuerzo de colectivos, parches y organizaciones juveniles, así como ONG de base. Muchas de estas iniciativas apuntan a los factores de riesgo mencionados anteriormente, como por ejemplo el desarrollo de habilidades y el ofrecimiento de alternativas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, así como la recuperación de espacios públicos por parte de la comunidad. En todo caso, las actividades, objetivos y resultados de estas iniciativas son de difícil caracterización, dada la falta de información disponible sobre estos temas.

A pesar de estos avances, Bogotá y Medellín han tenido serias limitaciones en la prevención de la violencia juvenil.

En el caso de la primera ciudad, se ha observado un retroceso en una de sus principales fortalezas: la PPJ. En ese sentido, se ha observado un proceso de “securitización” y mayor énfasis en el componente represivo que en el preventivo en el manejo del tema de los jóvenes; casos de corrupción y clientelismo en el manejo de la política, lo que la ha llevado a un replanteamiento estratégico en la actual administración; y problemas de falta de liderazgo, recursos insuficientes, dificultades en la articulación de las diferentes entidades estatales y entre el nivel distrital y el local, así como falencias en el funcionamiento del CDJ.

Además, ambas ciudades han tenido dificultades en la institucionalización de las iniciativas comunitarias, y la apertura de espacios de interlocución con el Estado ha favorecido casos de clientelismo, acaparamiento de dichos espacios por parte de organizaciones expertas en las licitaciones públicas (“juventólogos”), competencia desleal entre las organizaciones, etc. Estas iniciativas, además, afrontan problemas de falta de sostenibilidad de los procesos.

Por último, tanto las entidades estatales como los actores de los demás sectores de la infraestructura de prevención de ambas ciudades se han visto limitadas en su actuación por problemas de seguridad y criminalidad en los territorios donde operan. Esta situación es más preocupante en Medellín que en Bogotá.

### 8.3.2. Cali e Ibagué

Estas ciudades tienen en común una oferta limitada de iniciativas en comparación con las problemáticas de violencia juvenil que afrontan.

Es necesario resaltar que Cali está mucho peor que Ibagué, en tanto es la ciudad de estudio con la situación más grave de la violencia ejercida por los jóvenes y contra ellos. Así, aunque el 39,5% de las iniciativas identificadas (78 de 197) operan en la ciudad este esfuerzo en materia de prevención es insuficiente.

Ibagué está en la situación contraria de Cali, tiene una oferta limitada porque si bien tiene un número de iniciativas mucho menor que los demás casos de estudio (concentra sólo el 22,4%, 44 de 197), también la problemática que afronta es menos grave que en el resto de ciudades.

En términos de efectividad, los avances tienen que ver con un desarrollo normativo e institucional favorable similar al de los casos de estudio pasados, así como con la existencia de un fuerte sector comunitario en el caso de Cali, muy efectivo y con un gran potencial de prevención de la violencia juvenil en territorios limitados a barrios o máximo sectores más grandes de las comunas.

Las limitaciones también son similares a los casos anteriores: en Cali, énfasis en el enfoque represivo de la violencia juvenil (que se explica por la magnitud de esta problemática en la ciudad), dificultades en la articulación entre los sectores relacionados con la infraestructura, y falta de planeación, recursos y liderazgo en la ejecución de las iniciativas estatales.

Adicionalmente, en ambas ciudades se presentan problemas de sostenibilidad en las iniciativas privadas, comunitarias y de ONG nacionales, así como casos de corrupción y clientelismo en algunas de estas organizaciones.

Finalmente, en Cali también se presenta un grave problema de limitación al alcance de las iniciativas de todos los sectores por cuenta de las acciones violentas de los GVO, como por ejemplo las amenazas a los operadores o la existencia de restricciones a la movilidad impuestas por estos grupos en los territorios de interés de los actores institucionales.

### 8.3.3. Cartagena

Esta ciudad tiene la infraestructura más débil de los casos de estudio. En términos de oferta, es precaria la cantidad de iniciativas registradas en la ciudad (28,4%, 56 de 197) frente a la problemática de violencia que afrontan los jóvenes cartageneros.

Además, a diferencia del resto de casos analizados, en esta ciudad no se reportan importantes avances en la prevención de la violencia juvenil, por lo que la efectividad de esta infraestructura ha sido muy baja. Por el contrario, las administraciones locales no han reconocido la magnitud del fenómeno de la violencia juvenil en la ciudad y la falta de gobernabilidad de las últimas administraciones ha impedido cualquier progreso en la implementación de la PPJ.

Adicionalmente, se han observado dificultades para trabajar en red entre los diferentes sectores involucrados en la infraestructura y las acciones de los GVO han limitado el trabajo de ONG, fundaciones e incluso entidades estatales, al igual de lo que sucede en Cali y Medellín.

## 8.4. Recomendaciones para afrontar y prevenir la violencia juvenil

---

Para finalizar, es posible plantear tres recomendaciones de política pública para la prevención de la violencia juvenil en las ciudades de Colombia, a la luz de la situación observada en los casos de estudio.

En primer lugar, las dificultades que han tenido todos los actores de la infraestructura para prevenir de forma efectiva la violencia juvenil en ciudades como Medellín, donde se han realizado importantes esfuerzos en esta materia, da cuenta del reto que implica atender esta problemática cuando los GVO juveniles han hecho un tránsito hacia organizaciones del crimen organizado y cuando los jóvenes agresores se han involucrado de lleno en todos los grupos que tienen presencia en la estructura criminal de una ciudad.

En este tipo de escenarios, que es la situación que se presenta actualmente en Cali y hacia donde se perfila Bogotá (en zonas focalizadas) y en el

mediano plazo Cartagena, el sólo esfuerzo de prevención no es suficiente por más integral que sea. Allí, se deben complementar estas medidas con acciones encaminadas a la desarticulación de las organizaciones criminales, así como a la depuración en las entidades estatales y la Fuerza Pública de prácticas de corrupción y convivencia con los actores criminales. Estas entidades también deben ser intervenidas en el mejoramiento de los estándares de respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes agresores y estigmatizados.

Adicionalmente, los esfuerzos de prevención deben ir más allá de los jóvenes en riesgo de convertirse en agresores: se hace urgente el diseño de programas integrales que permitan a jóvenes que ya estén involucrados en GVO rehabilitarse y reintegrarse a sus comunidades.

En ese orden de ideas, el principal indicador de éxito de un programa nacional de prevención de la violencia juvenil tendría que ser prevenir que los GVO juveniles hagan un tránsito definitivo hacia grupos organizados de crimen y violencia. Así mismo, otros de sus objetivos serían lograr la desarticulación de los GVO juveniles, y potenciar los colectivos y las agrupaciones no violentas de los jóvenes.

En segundo lugar, la situación de ciudades como Cartagena e Ibagué evidencia que los esfuerzos actuales del Estado y la sociedad en su conjunto para prevenir la violencia juvenil son insuficientes y precarios. Es muy paradójico que estas dos ciudades, en las que es posible implementar programas que atiendan este fenómeno con un énfasis mucho más preventivo que represivo (dado que su situación aún no es tan problemática) sean las que tienen la infraestructura de prevención más débil entre los casos de estudio. Eso da cuenta de que las autoridades civiles de todos los niveles, como en otros casos, no son proactivas en la atención de este fenómeno antes de que emerja como un asunto de seguridad ciudadana, sino que esperan a que este se convierta en un problema inmanejable para pensar tardíamente en su prevención.

Así, se puede concluir que hasta este momento el tema de la violencia juvenil no se ha posicionado en la agenda pública de Colombia, con excepción de las ciudades donde este fenómeno ha tomado una dimensión preocupante, como Cali y Medellín.

Por último, algunos aspectos exitosos de la implementación de la PPJ en Bogotá y Medellín, en específico la ejecución de las iniciativas de prevención en el marco de una política social que ha logrado mejorar las condiciones de jóvenes vulnerables, invitan a reflexionar sobre el alcance de los esfuerzos estatales para la atención preventiva de esta problemática.

Aunque las iniciativas de pequeña escala pueden ser significativas para ciertos territorios y poblaciones, puede ser mucho más efectivo un programa estatal de alcance nacional que tenga un enfoque integral, de largo plazo, en el que se busquen atender factores de riesgo como: la falta de acceso a educación básica, secundaria y superior; las dificultades de los jóvenes para insertarse laboralmente en las ciudades; la debilidad de las familias en su función de proveer entornos protectores a los jóvenes; los riesgos que tienen los jóvenes para ser víctimas de violencia en colegios públicos, los hogares, los parques públicos, entre otros.



## Referencias

- Acosta, et al. (2011). Estudios de caso: algunos barrios de Cali y el desarrollo de intervenciones para la prevención de la violencia. *Observatorio de Cali*, pp. 61 – 88. Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. Santiago de Cali, Colombia, Impresos Richard.
- Acosta, K. (2012). *Cartagena, entre el progreso industrial y el rezago social*. Documentos de Trabajo sobre economía regional, Banco de la República, Vol 178.
- Aguilar, J., y Carranza, M. (2008). *Las Maras y Pandillas como Actores Ilegales de la Región*. Ponencia preparada en el marco del Informe estado de la región en desarrollo humano sostenible 2008. San Salvador. Recuperado de: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/icap/unpan032670.pdf>, recuperado: 2 de Diciembre de 2013
- Aguilera, M., Barcos, R., Orozco, A., Reina, y Yabrudy, J. (2013). *Composición de la economía de la región caribe de Colombia*. Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) Cartagena. Núm. 53.
- Alcaldía de Cali. (2012a). *Plan de Desarrollo 2012-2015*. Recuperado de: [http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan\\_de\\_desarrollo2012-2015F.pdf](http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/2013/Plan_de_desarrollo2012-2015F.pdf).
- Alcaldía de Cali. (2012b). *Respuesta al Honorable consejo*. Recuperado de: <http://www.concejodecali.gov.co/descargar.php?idFile=7695>.
- Alerta sobre posible acción paramilitar detrás del asesinato de joven en Ciudad Bolívar*. (2014, 5 de Abril). Colombia Informa. Recuperado de: <http://www.colombiainforma.info/index.php/politicas/1182-alerta-sobre-posible-accion-paramilitar-detras-del-asesinato-de-joven-en-ciudad-bolivar-bogota>.
- Alquilaban armas a sicarios y a fleteros. (2010, 16 de septiembre). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/alquilaban-armas-sicarios-y-fleteros>

- Alvarado, A. (2013, enero-abril). La violencia juvenil en América Latina. *Revista de Estudios Sociológicos*, 31(91), pp. 229-258
- Arévalo L., y Guáqueta M. (2014). La seguridad en Cali: entre políticas municipales y la degradación del conflicto armado *Violencia urbana. Radiografía de una región Cali*. Santiago de Cali, Colombia: Fescol
- Aumentan peleas de pandillas a las afueras de colegios en Cartagena*. Caracol Radio. (2014, 27 de febrero). Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/aumentan-peleas-de-pandillas-a-las-afueras-de-colegios-en-cartagena/20140227/nota/2102973.aspx>
- Ávila, A, y Pérez, B. (2011). *Mercados de Criminalidad en Bogotá*. Bogotá, Colombia; Corporación Nuevo Arco Iris, Secretaría de Gobierno de Bogotá.
- Ávila, A. (2010). Circuitos de violencia y reconfiguración criminal. Bogotá y Medellín. *Temas*, 64, pp. 19-23. Recuperado de: <http://www.temas.cult.cu/revistas/64/019%20Avila.pdf>, recuperado: 24 de febrero de 2014
- Ávila, A. (2014). *Gestión de la seguridad en Bogotá*. Bogotá, Colombia: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.
- Banco Inter Americano de Desarrollo [BID], e Instituto de Estudios Ambientales [IDEA] de la Universidad Nacional de Colombia. (2002). *Programa de información e indicadores de gestión de riesgos: componente II, indicadores para la gestión de riesgos*. Manizales, Colombia: BID e IDEA.
- Banco Mundial. (2005). *Youth Crime Prevention*. Recuperado de: <http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPURBDEV/Resources/841042-1219076931513/5301922-1250717140763/Youth.pdf>
- Banco Mundial. (2012). *Violencia Juvenil en México. Reporte de la situación, el marco legal y los programas gubernamentales*. Recuperado de: [http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/la\\_violencia\\_juvenil\\_en\\_M\\_xico.pdf](http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/la_violencia_juvenil_en_M_xico.pdf)
- Bernal, L. y Navas, C. (2013). Urban violence and humanitarian action in Medellín. Recuperado de: <http://www.hasow.org/uploads/trabalhos/103/doc/1258280755.pdf>
- Blanco, J., y Varela, J. (2011) Delincuencia Juvenil, Violencia y Desafíos para los Programas de Intervención. *El Observador*, 8. Reduperdo de: [http://www.sename.cl/wsename/otros/OBS8/OBS\\_8\\_70-81.pdf](http://www.sename.cl/wsename/otros/OBS8/OBS_8_70-81.pdf)

- Blandon, M. (s.f.). *Relacion existente entre la pobreza y la violencia en Cartagena de Indias, periodo 200-2006*. Recuperado de: <http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/668/45461753.pdf?sequence=1>
- Bogotá Cómo Vamos. (2014). *Calidad de Vida Local*. Recuperado de: [http://www.bogotacomovamos.org/media/flash\\_data/ARCHIVOS%20FLASH%20LOCALIDADES/archivos\\_web/](http://www.bogotacomovamos.org/media/flash_data/ARCHIVOS%20FLASH%20LOCALIDADES/archivos_web/)
- Bogotá Humana. (2010). *Directorio de organizaciones sociales, poblacionales y territoriales de Bogotá*. Recuperado de: <http://participacionbogota.gov.co/index.php/home/remository.html?func=fileinfo&id=325>
- Bogotá una capital con 132 pandillas*. (2012, 27 de octubre) El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12337060>
- Bogotá, Medellín y Pereira, con mayor consumo de drogas Periódico*. (2013, 13 de marzo). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/bogota-medellin-y-pereira-con-mayor-consumo-de-drogas-112093>
- Caicedo, B., Duque, L., Orduz, J., Sandoval, J., y Klevens, J. (2007). Lecciones del programa de prevención temprana de la violencia, Medellín, Colombia, *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan Am J Public Health* 21(1)
- Caicedo, J. (2005). Hacia una estrategia integral de prevencion e intervencion frente a la delincuencia juvenil y de menores en la ciudad de Santiago de Cali. *Papel Político Estudiantil* 2, pp. 161-182. Recuperado de: [http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/11%20hacia\\_una.pdf](http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/11%20hacia_una.pdf)
- Callejas, Lorena. (2012). *Prácticas de resistencia de los y las jóvenes en contextos de militarización: a la orilla de Aguablanca* (Tesis de Maestría en Estudios Políticos). Universidad del Valle, Cali, Colombia.
- Camacho, A.; Guzmán, A. (1990). Colombia, ciudad y violencia. Bogotá, Colombia: Foro Nacional.
- Campbell, M., French, S., y Gendreau, P. (2009). The prediction of violence in adult offenders. A Meta-analytic comparison of instruments and methods of assessment. *Criminal Justice and Behavior*, 36(6), pp. 567-590.

- Cañon, A. (2014). Entre murallas y muros: Un apartheid con boquetillos en la configuración territorial de Cartagena de Indias. *En Memorias del IV congreso internacional negritud. Estudios afrolatinoamericanos*. Cartagena, Colombia: Editorial Negritud, Universidad de Cartagena. Recuperado de: [http://www.negritud.com/\\_img/Memorias,%20Cartagena%202014.pdf#page=47](http://www.negritud.com/_img/Memorias,%20Cartagena%202014.pdf#page=47)
- Capturada en Cartagena mujer que pertenecería a “Los Urabeños”*. (2014, 5 de mayo). RCN La Radio. Recuperado de: <http://www.rcnradio.com/noticias/capturada-en-cartagena-mujer-que-perteneceria-los-urabenos-134407>
- Capturados 11 integrantes de la banda delincuencia “los Urabeños” en Cartagena*. (2014, 27 de enero). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturados-11-integrantes-de-la-banda-delincuencia-los-urabenos-en-cartagena-149728>
- Capturan a 17 ‘Urabeños’, entre ellos tres suboficiales de la Armada*. (2014, 18 de marzo). El Espectador. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13674377>
- Cartagena, golpeada por noventa pandillas*. (2013, 7 de diciembre). El Heraldo. Recuperado de: <http://www.elheraldo.co/judicial/cartagena-golpeada-por-noventa-pandillas-137198>
- Cartagena: denuncia sobre escuelas de sicariato alerta a autoridades*. (2012, 13 de Junio). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/cartagena-denuncia-sobre-escuelas-de-sicariato-alerta-autoridades-79929>
- Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana [CEACSC]. (s.f.). *Estrategia de focalización e intervención Bogotá D. C. 19 UPZ*, Bogotá, Colombia: Alcaldía de Bogotá
- Centro Nacional de Memoria Histórica [CNMH]. (2011). *Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra*. Recuperado de: [http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe\\_comuna13\\_la\\_huella\\_invisible\\_de\\_la\\_guerra.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_comuna13_la_huella_invisible_de_la_guerra.pdf)
- Centro Virtual de Noticias de la Educación. (2010 noviembre 5). *Ibagué tendrá oficialmente política pública de juventud*. Recuperado de: <http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-253846.html>

- Cerbino, M. (2001). Jóvenes víctimas de violencias, caras tatuadas y borramientos. *Revistas Perfiles Latinoamericanos*, (38), pp. 9-38. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11519271001>
- CODHES Y ACNUR. (2013). *Desplazamiento forzado intraurbano y soluciones duraderas. Una aproximación desde los casos de Buenaventura, Tumaco y Soacha*. Bogotá, Colombia: Antropos.
- Continúan enfrentamientos entre pandillas en Flor del Campo*. (2014, 28 de febrero). Recuperado de: <http://www2.rcnradio.com.co/noticias/continuan-enfrentamientos-entre-pandillas-en-flor-del-campo-120665>
- Corporación Nuevo Arcoíris. (2012). *Seguridad Urbana en Bogotá*. Recuperado de: [http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/informes/seguridad\\_bogota\\_multi/mapacomunidades.html](http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/informes/seguridad_bogota_multi/mapacomunidades.html)
- Coutinho, V., Ruotti, C., y Tourinho, M. (2004). *Vulnerability and violence: a new conception of risk for the study of youth homicides*. São Paulo, Brasil: Núcleo de Estudos da Violência, Universidade de São Paulo. Recuperado de: [http://www.scielo.br/pdf/icse/v15n37/en\\_a05v15n37.pdf](http://www.scielo.br/pdf/icse/v15n37/en_a05v15n37.pdf), recuperado
- Criado, E. (2007), Características, dinámicas y condiciones de emergencia de las pandillas en Bogotá, *Revista Análisis Político*, XX (60) pp. 135-138. Recuperado de: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052007000200007&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-47052007000200007&script=sci_arttext)
- Cruz, J. (2005). *Los Factores Asociados a las Pandillas Juveniles en Centroamérica*. *Estudios Centroamericanos*, 685-686, pp. 1155-1182. Recuperado de: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1464802>
- CTI y Armada propinaron duro golpe al narcotráfico en Cartagena*. (2010, 27 de marzo). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/cti-y-armada-propinaron-duro-golpe-al-narcotrafico-en-cartagena/20100327/nota/979765.aspx>
- Cuartas, D., y Valencia, D. (2011). Violencia y criminalidad urbana en Colombia (2000-2010) el enfoque económico ortodoxo. *Perfil de coyuntura económica*, 17, pp. 141-164. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86122459007>
- Dammert, L., Salazar, F., Montt, C., y González, P. A. (2010). Crimen e Inseguridad. Indicadores para las Américas. Proyecto de violencia y criminalidad en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: FLACSO Chile, Banco Interamericano de Desarrollo.

- Daniels, A., Román, R., y Jiménez, J (2010). La población desplazada en Cartagena de Indias: alcances y limitaciones de la política Pública. *Palabra que obra*, 11(11), pp. 40-57
- DARA. (2011). The Humanitarian Response Index 2011: addressing the gender challenge. recuperado de: [http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/03/HRI\\_2011\\_Complete\\_Report.pdf](http://daraint.org/wp-content/uploads/2012/03/HRI_2011_Complete_Report.pdf)
- De La Hoz, F, Quejada, R., y Contreras, M. (2013). Desempleo juvenil en Cartagena de Indias: un análisis transversal de sus causas y consecuencias. *Pap. Poblac*, 19(75). Recuperado de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci\\_arttext&tln-g=pt](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci_arttext&tln-g=pt), recuperado: 24 de febrero de 2014.
- De Los “Urabeños” serían las 7 toneladas de cocaína incautadas en Cartagena* (2014, 10 de abril). El Espectador. Recuperado de <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/de-los-urabenos-serian-7-toneladas-de-cocaina-incautada-articulo-486129>
- Defensoría del Pueblo. (2011). *Situación de riesgo e impacto diferencial del conflicto armado en las mujeres del Distrito de Cartagena. Informe temático*. Recuperado de: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci\\_arttext&tln-g=pt](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci_arttext&tln-g=pt).
- Defensoría del Pueblo. (2012) *Informe de Riesgo Nro. 007-12 A.I.* Bogotá, Colombia: Defensoría del Pueblo.
- Defensoría Del Pueblo. (2013). *Informe de Riesgo N° 008-13*. Bogotá, Colombia: Defensoría del Pueblo. Recuperado de: [http://revistakavilando.weebly.com/uploads/1/3/6/3/13632409/ir\\_n\\_008-13\\_antioquia-medelln.pdf](http://revistakavilando.weebly.com/uploads/1/3/6/3/13632409/ir_n_008-13_antioquia-medelln.pdf)
- Defensoría del Pueblo. (2013). *Informe de Riesgo Nro. 007-13 del 5 de febrero de 2013*. Bogotá, Colombia: Defensoría del Pueblo
- Defensoría del Pueblo. (2014). *Informe de riesgo. Nro 002-14. Sistema de Alertas Tempranas*. Bogotá, Colombia: Defensoría del Pueblo
- Defez, C. (2006). *Delincuencia juvenil*. Recuperado de: [http://iugm.es/uploads/tx\\_iugm/TRABAJO\\_CURSO\\_IUGM.pdf](http://iugm.es/uploads/tx_iugm/TRABAJO_CURSO_IUGM.pdf)
- Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2009). *Guía Metodológica para la Formulación de Indicadores*. Bogotá, Colombia: Departamento Nacional de Planeación.

- Domínguez, M. (2003). La Playboy: la participación de hombres y mujeres en una pandilla juvenil de Siloé, Cali. *Revista Sociedad y Economía*, 5, pp. 82-104. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99617828004>.
- Dos heridos deja riña en playas de Bocagrande*. (2013 14 de mayo). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/dos-heridos-deja-rina-en-playas-de-bocagrande-119391>
- Dowdney, L. (2006). *Ni Guerra ni Paz. Comparaciones internacionales de niños y jóvenes en violencia armada organizada*. Recuperado de: [https://www.dropbox.com/s/kjne9p7up41iq02/Dowdney\\_ChildrenYouthOrganizedArmedViolence.pdf](https://www.dropbox.com/s/kjne9p7up41iq02/Dowdney_ChildrenYouthOrganizedArmedViolence.pdf)
- Duncan, G. (2013). Una lectura política de Pablo Escobar. *Revista Coherencia*, 10(19) pp. 235-262. Medellín, Colombia: Universidad Eafi
- Duque, L. (2013). Cultura de la ilegalidad en Medellín y su asociación con diversas formas de violencia. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 31(2) pp. 118-124. Recuperado de: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-386X2013000200007&script=sci\\_arttext&tlng=es](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-386X2013000200007&script=sci_arttext&tlng=es)
- Duque, L., Montoya, N., y Montoya, M. (2007). Similitudes y diferencias entre miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, agresores severos y controles comunitarios en Medellín. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 25(2), pp. 37-47. Recuperado de: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-386X2007000200005&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-386X2007000200005&script=sci_arttext&tlng=pt)
- El microtráfico: guerra por las "ollas"*. (2012, 20 de octubre). Revista Semana. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-microtrafico-guerra-ollas/266596-3>
- En Cartagena hay 90 pandillas que azotan los barrios populares*. (2014, 15 de febrero). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/en-cartagena-hay-90-pandillas-que-azotan-los-barríos-populares/20140215/nota/2083013.aspx>
- Enfrentamientos entre pandillas impiden la pavimentación de una calle en Cartagena*. (2012, 16 de junio). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/enfrentamientos-entre-pandillas-impiden-la-pavimentacion-de-una-calle-en-cartagena/20120616/nota/1706924.aspx>

- Escofier, B. y Pagès, J. (1992). *Análisis factoriales simples y múltiples: objetivos, métodos e interpretaciones*. Barcelona, España: Servicio editorial de la Universidad del País Vasco.
- Fagan, J. y Wilkinson, D. (1998), Guns, youth violence, and social identity in inner cities. *Crime and Justice*, XXIV, pp. 105-188
- Farrington, D. (1998). Predictors, Causes, and Correlates of Male Youth Violence. *Crime and Justice*, 24(Youth Violence), pp. 421-475.
- Ferradas, P. y Medina, N. (2003). *Riesgos de desastres y derechos de la niñez en Centroamérica y el Caribe*. Lima, Perú: Intermediate Technology Development Group, ITDG-Perú.
- Fondo Canadiense para la Niñez. (2013). *Juventud Robada: Luchando Contra la Explotación Sexual de Niños en Cartagena, Colombia*. Recuperado de: <http://www.fondocanadienseparalaninez.com/presentacion-acdi/juventud-robada-luchando-contra-la-explotacion-sexual-de-ninos-en-cartagena-colombia>
- Frías, M., et al. (2003). Predictores de la conducta antisocial juvenil: un modelo ecológico. *Estudios de Psicología*, 8(1), pp. 15-24, en: [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2003000100003&script=sci\\_arttext&tlng=es](http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-294X2003000100003&script=sci_arttext&tlng=es)
- Fundación Ideas para la Paz [FIT]. (2013). *Crimen organizado, intensidad y focalización de la violencia homicida en Bogotá, una mirada de largo plazo. Informes FIP 20*. Recuperado de: [\t “\\_blank](https://www.google.com/url?q=http://archive.ideaspaz.org/images/Info%252020%2520Crimen%2520Organizado_final%2520WEB.pdf&sa=D&usg=ALhd-y29H66I1Cg_-GkhFTMRcEM7m9gDytA)
- Galarcio, T. (2013). *La explotación sexual infantil: cómo acabar con una vida*. Bogotá, Colombia: Tierra de Hombres. Recuperado de: <http://www.tierradehombres.org/index.php/actualidad/noticias/item/118-la-explotacion-sexual-infantil-como-acabar-con-una-vida>
- Gaula, *tras cuatro bandas extorsivas*. (2013, 26 de junio). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-6278399>.
- Geneva Declaration. (2011). *Lucha contra la violencia: prácticas prometedoras para la reducción y la prevención de la violencia armada*. Ginebra: Secretaría de la Declaración de Ginebra.

- Giammaría, G. (2011). *Análisis de la exclusión social de la infancia y juventud en Colombia. (el caso de Cartagena de Indias): respuestas alternativas desde el ámbito institucional* (Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Recuperado de: <http://eprints.ucm.es/12346/1/T32841.pdf>
- Gil, M. (2013). *Medellín 1993-2013: Una ciudad que no logra encontrar el camino para salir definitivamente del laberinto*. Washington, Estados Unidos: Wilson Center Latin American Program. Recuperado de: [http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Gil%20Ramirez%20-%20Colombia%20-%20Paper\\_1.pdf](http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Gil%20Ramirez%20-%20Colombia%20-%20Paper_1.pdf)
- Giraldo, J. (2008). *Seguridad en Medellín: el éxito, sus explicaciones, limitaciones y fragilidades*. Washington, USA: Wilson Center Latin American Program. Recuperado de: <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Presentacion%20Giraldo.pdf>
- González, F. (2010). *Búsqueda sistemática de Información. Seminario de Investigación I*. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <http://dis.unal.edu.co/~fgonza/courses/2006-II/seminario-I/busquedaSistematica.pdf>
- Goyeneche, F., Pardo, J., y Mármol, O. (2013). Incidencia y características de la violencia intrafamiliar en Cartagena de Indias 2008-2012. *Saber, ciencia y libertad*, 8(1). Recuperado de: [http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/SABER\\_CIENCIAYLIB\\_ENE\\_JUNIO\\_2013.pdf#page=88](http://www.unilibrectg.edu.co/Descarga/PDF/SABER_CIENCIAYLIB_ENE_JUNIO_2013.pdf#page=88)
- Grabaciones "salpican" a 8 generales por presunto tráfico de armas*. (2014, 13 de marzo). RCN La Radio. Recuperado de: <http://www.rcnradio.com/noticias/fiscalia-investigara-ocho-generales-por-escandalo-de-corrupcion-123570>
- Guerra entre pandillas deja tres muertos y un policía herido en Cartagena. (2009, 8 de diciembre). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-6763487>
- Guerrero, R. (2008). Qué sirve en la prevención de la violencia juvenil?. *Salud Publica Mex 2008, 50 supl 1*. Recuperado de: <http://www.scielo.org.mx/pdf/spm/v50s1/a13v50s1.pdf>
- Gutiérrez, L. (2012). Geografías de violencia y exclusión: Pandillas encarceladas en Honduras. *Latin American Research Review, XLVII(2)*, pp. 167-179.

Hazen, J. (2007). *Gangs, groups, and guns*. Recuperado de: <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2010/en/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-03-EN.pdf>

*¿Hay escuelas de sicarios en Cartagena? Alcalde dice que sí, Policía lo niega.* (2012, junio 13). Noticias Caracol. Recuperado de: <http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-267567-hay-escuelas-de-sicarios-cartagena-alcalde-dice-si-policia-niega>

Incautan dos toneladas de cocaína líquida en Cartagena. (2014 abril 15). *Incautan dos toneladas de cocaína líquida en Cartagena*. El Colombiano. Recuperado de: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/incautan\\_dos\\_toneladas\\_de\\_cocaina\\_liquida\\_en\\_cartagena/incautan\\_dos\\_toneladas\\_de\\_cocaina\\_liquida\\_en\\_cartagena.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/incautan_dos_toneladas_de_cocaina_liquida_en_cartagena/incautan_dos_toneladas_de_cocaina_liquida_en_cartagena.asp)

Institute for Economics & Peace. (2013). *Global Peace Index 2013. Measuring the State of Global Peace*. Sydney, Australia: Institute for Economics & Peace.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF]. (2013). Muertes violentas de niños, niñas y adolescentes: Análisis del primer trimestre 2012-2013. *Observatorio del Bienestar de la Niñez*. Boletín Coyuntural.

Jaramillo, J. (2013). *¿“Entrar” o “salir” de la violencia?, construcción del sentido de lo joven en Medellín desde el graffiti, el hip-hop y la violencia*. Recuperado de: <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/3812/1/JaramilloMoralesJuanDiego2013.pdf>

Jiménez, J. (2011). *Sobre las cifras oficiales*. Bogotá, Colombia: INDEPAZ. Recuperado de: <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Sobre-las-cifras-oficiales.pdf>

Jones, G. y Rodgers, D. (2009). *Youth violence in Latin America: gangs and juvenile justice in perspective*, Nueva York, USA: Palgrave Macmillan.

Joven herida por bala pérdida en enfrentamiento entre pandillas en Cartagena. (2012, 9 de agosto) RCN La radio. Recuperado de: <http://www.rcnnoticias.com.co/noticias/joven-herida-por-bala-perdida-en-enfrentamiento-entre-pandillas-en-cartagena-14683>

*Judith Pinedo, obtuvo el 54% de aceptación sobre su gestión.* (2011, 3 de noviembre). El Planeta. Recuperado de: <http://elplaneta.co/article/judith-pinedo-obtuvo-el-54-de-aceptaci%C3%B3n-sobre-su-gesti%C3%B3n>

- Klein, M., y Maxson, C. (1989). *Street Gang Violence. In Violent Crime, Violent Criminals*. En: Neil Weiner and Marvin E. Wolfgang (Ed.). Newbury Park, Calif: Sage.
- Kramer, R. (2000) Poverty, Inequality, and Youth Violence. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 567, pp. 123-139.
- La mala hora de las FARC. (2010, 23 de septiembre). El espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/mala-hora-de-farc-articulo-225956>
- Le Dien S. y Pagès, J. (2003b). Hierarchical Multiple-Factor Analysis: Application to the comparison of sensory profiles. *Food Quality and Preference*, Vol. 14(5-6), pp. 397-403.
- Le Dien, S. y Pagès, J. (2003a). Analyse Factorielle Multiple Hiérarchique. *Revue De Statistique Appliquée*, 51(2), pp. 47-73.
- Lebart, L., Piron, M. y Morineau, A. (2006). Statistique exploratoire multidimensionnelle. Visualisation et inférence en fouilles de données, Dunod.
- Líder de restitución de tierras abandona Cartagena por amenazas (2014, 1 mayo). RCN Radio. Recuperado de: <http://m.rcnradio.com/noticias/lider-de-restitucion-de-tierras-abandona-cartagena-por-amenazas-133750>
- Liebel, M. (2004). Pandillas juveniles en Centroamérica y la difícil búsqueda de justicia en una sociedad violenta. *Revista Desacato, primavera-verano*, 14, pp. 85-104. Recuperado de: <http://www.ciesas.edu.mx/desacatos/14%20Indexado/1%20Saberes%204.pdf>
- Los capos del cartel de Cali. (2012, 24 de Agosto) El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/especiales/los-capos-del-cartel-de-cali-articulo-369729>
- Los doce sicarios de 'Juancho Dique' en Cartagena*. (2009). Verdad Abierta. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/507-bloque-norte-bloque-heroes-de-los-montes-de-maria/1133-los-doce-sicarios-de-juancho-dique-en-cartagena>
- Los Tronquitos, “secuestrados” para siempre en San Francisco. (2011, 6 de marzo). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/los-tronquitos-%E2%80%9Csecuestrados%E2%80%9D-para-siempre-en-san-francisco-12848>

- Lozano, J. (2007). *Política Pública de Juventud para el municipio de Ibagué*. Ibagué, Colombia: Universidad del Tolima. Recuperado de: [http://portal.ut.edu.co/administrativos/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/CERE/Convenios/POLITICA\\_JUVENTUD\\_IBAGUE.pdf](http://portal.ut.edu.co/administrativos/images/DOCUMENTOS%20ADMINISTRATIVOS/CERE/Convenios/POLITICA_JUVENTUD_IBAGUE.pdf)
- Marín, A. (2014, 11 de abril). *Caen «ollas», pero crece el consumo*. El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/caen-ollas-crece-el-consumo-articulo-486533>
- Mayor cargamento de cocaína líquida incautada sería de 'Urabeños'*. (2014, d16 de abril). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13839461>
- McDermott, J. (2014). Los Urabeños - El híbrido criminal. InSight Crime. [En línea], disponible en <http://es.insightcrime.org/investigaciones/los-urabenos-el-hibrido-criminal> recuperado el 29 de mayo del 2014
- Medellín Cómo Vamos. (2013). *Informe de Calidad de Vida de Medellín 2012*. Medellín, Colombia. Recuperado de: <http://www.medellincomovamos.org/bitcache/2bb4c80ac0d3d66cc52489363671b8b5777a55d0?vid=2557&disposition=attachment&op=download>
- Mediante matoneo, obligan a jóvenes de colegios a unirse a bandas*. (2014, 30 de enero). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13428238>
- Medina, P. (2012). *Cartagena, distrito turístico y erótico*. La Silla Vacía. Recuperado de: <http://lasillavacia.com/labutaca/barralibre/32810/cartagena-districto-turistico-y-erotico>
- Méndez, J. (2014). *Crisis de seguridad en el departamento de Bolívar*. Las 2 Orillas. Recuperado de <http://www.las2orillas.co/crisis-de-seguridad-en-el-departamento-de-bolivar/>
- Misión de Observación Electoral [MOE]. (2008). *Monografía Político Electoral, departamento de Tolima 1997 a 2007*. Bogotá, Colombia. Recuperado. [http://moe.org.co/home/doc/moe\\_mre/CD/PDF/tolima.pdf](http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/tolima.pdf)
- Misión médica marchó contra agresores de puestos de salud de Cartagena*. (2014, 7 de abril). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/mision-medica-marcho-contra-agresores-de-puestos-de-salud-de-cartagena/20140407/nota/2166565.aspx>

- Moestue, H., Moestue, L., y Muggah, R. (2013). *Youth Violence prevention in Latin America and the Caribbean: a scoping review of the evidence*. Recuperado de: <http://pt.igarape.org.br/youth-violence-prevention-in-latin-america-and-the-caribbean-a-scoping-review-of-the-evidence/>
- Monahan, J., et al. (2001). *Rethinking Risk Assessment*. Oxford University Press, USA
- Moreno, P, y González, E. Juventud urbana en cartagena: de los riesgos a las oportunidades, informe no 3. [En línea], disponible en: [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci\\_arttext&tlng=pt](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-74252013000100003&script=sci_arttext&tlng=pt), recuperado: 24 de febrero de 2014
- Nuñez, M. (2010) *Monografía Político Electoral departamento del Valle del Cauca 1997 – 2007*. Santiago de Cali, Colombia. Recuperado de: [http://moe.org.co/home/doc/moe\\_mre/CD/PDF/vdelcauca.pdf](http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/vdelcauca.pdf)
- Observatorio de Cali; Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad. (2011). *Violencia, convivencia y dinámica social en Cali: lectura desde el Observatorio Social*. Santiago de Cali, Colombia: Impresos Richard.
- Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2002). *Panorama actual del Tolima*. Bogotá Colombia. Recuperado de: [http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu\\_Regionales/04\\_03\\_regiones/tolima/tolima.pdf](http://www.derechoshumanos.gov.co/Observatorio/Publicaciones/Documents/2010/Estu_Regionales/04_03_regiones/tolima/tolima.pdf)
- Observatorio Social de Cali. (2014). Informe de homicidios en el segundo semestre de 2013. *Boletín Informativo, 041*. Recuperado de: <http://www.cali.gov.co/observatorios/descargar.php?id=35538>
- OCHA. (2012). This is OCHA. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- OECD. (2009). *Conflict and Fragility, Armed Violence Reduction Enabling Development*. Paris, Francia: OECD Publishing.
- OECD. (2011). *Investing in Security: A Global Assessment of Armed Violence Reduction Initiatives, Conflict and Fragility*. OECD Publishing. Recuperado de: <http://www.oecd.org/dac/incaf/48927716.pdf>
- OECD. (2011). *Preventing and Reducing Armed Violence in Urban Areas*. Paris: OECD Publishing.

- OECD. (2011). *Reducing the Involvement of Youth in Armed Violence: Programming Note, Conflict and Fragility*, OECD Publishing. Recuperado de: <http://www.oecd.org/dac/incaf/47942093.pdf>
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2002). *Informe mundial sobre la salud y la violencia*. Recuperado de: [http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/world\\_report/es/summary\\_es.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf)
- Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud [OPS] y [OMS]. (2012). *Prevención de la violencia: la evidencia. Serie de orientaciones sobre prevención de la violencia: la evidencia*. Recuperado de: [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85671/1/9789275317488\\_spa.pdf](http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85671/1/9789275317488_spa.pdf).
- Pagès, J. (2004). Multiple factor analysis: Main features and application to sensory data. *Revista Colombiana de Estadística*, 27(1) pp. 1-26.
- Pandillas ascienden a más de 1300 en Bogotá. (2011, 15 de enero). *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8785484>
- Pandillas en Cartagena reclutan a niños desde los 7 años*. (2013 junio 14). *El Universal*. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/pandillas-en-cartagena-reclutan-ninos-desde-los-7-anos-123088>
- Pandillas se están tomando Cartagena*. (2007, 26 de febrero). *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3454589>
- Pardo, C. (2011). Métodos en ejes principales para tablas de contingencia con estructura de partición en filas y columnas. PhD tesis, Universidad Nacional.
- Pelea de pandillas causa la muerte de menor en el viernes santo*. (2011, 24 de Abril). *El Universal*. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/pelea-de-pandillas-causa-muerte-de-menor-en-el-viernes-santo-20717>
- Peleas entre pandillas afectan un colegio de Cartagena*. (2012, 14 de febrero). *Noticias Caracol*. Recuperado de: <http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-257589-peleas-entre-pandillas-afectan-un-colegio-de-cartagena>
- Perea, C. (2000). Un ruedo significa respeto y poder: pandillas y violencia en Bogotá. *Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos*, 2(3,2000). Instituto Francés de Estudios Andinos. Organismo Internacional. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12629307>

- Perea, C. (2000). Un ruedo significa respeto y poder. Pandillas y violencia en Bogotá. *Bull. Inst. fr. études andines*, 29(3), pp. 403-432. Institut Français d'Études Andines. Organismo Internacional.
- Perea, C. (2008). Pandillas: muerte y sentido. *Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 4, pp. 23-34. Quito, Ecuador: FLACSO. Recuperado de: <http://www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/1485/3/RFLACSO-U04-02-Perea.pdf>, recuperado: 24 de febrero de 2014.
- Pérez, G. y Salazar, I. (2007). *La pobreza en Cartagena: Un análisis por barrios. Documentos de trabajo sobre economía nacional*. Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER) Cartagena. Núm. 97. Recuperado: 9 de mayo de 2014.
- Pérez, M. (2007). *El cambio de la visión sobre la juventud como primer paso para su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas*. Décimo Segundo Certamen de Ensayo Político. Página 107 – 125.
- Personería de Cali. (2014). Situación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Santiago de Cali – 2013. Recuperado de: <http://archivos2.personeriacali.gov.co/coleccion/download/%5B%26quot%3Blibro-informe-ddhh.pdf%26quot%3B%2C%26quot%3Blibro-informe-ddhh%26quot%3B%2C%26quot%3Bpdf%26quot%3B%2C%26quot%3B169%26quot%3B%2C%26quot%3B52a71ada76de5%26quot%3B%5D>
- Personería de Medellín (2012) Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Recuperado de:
- Personería de Medellín. (2013). Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la ciudad de Medellín. Recuperado de: [http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/INFORME\\_D1.pdf](http://www.personeriamedellin.gov.co/documentos/INFORME_D1.pdf) recuperado.
- Pesca, A., Mariño, G., Ríos, C., y Ortiz, K. (2011). *¿Las pandillas en Bogotá? Reflexiones en torno a su conceptualización e investigación*. Secretaría Distrital de Integración Social. Bogotá, Colombia.
- Polémica 'limpieza' del Centro para la Cumbre*. (2012 marzo 20). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5294059>
- Policía Nacional de Colombia. (2011). *GAULA capturó dos sujetos que se identificaban como integrantes de la Red Criminal de "Los paisas"*. Recuperado de: <http://oasportal.policia.gov.co/portal/pls/portal/JOHN>.

NOTICIAS\_NUEVAS\_DETALLADAS.SHOW?p\_arg\_names=identificador&p\_arg\_values=298277

*Prenda las alarmas ante las extorsiones y denuncie.* (2012 28 de enero). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/prenda-las-alarmas-ante-las-extorsiones-y-denuncie-62527>

*Preocupación en Cartagena por ola de crímenes* (2012, 27 de marzo). El Heraldó. Recuperado de: <http://www.elheraldo.co/judicial/preocupacion-en-cartagena-por-ola-de-crimenes-61940>

*Preocupación por deserción escolar en Cartagena.* (2012, 27 de julio) RCN La Radio. Recuperado de: <http://www.rcnradio.com/noticias/preocupacion-por-desercion-escolar-en-cartagena-12433>

Prieto, C. (2013) Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia. *Friedrich Ebert Stiftung. Seguridad. Policy, paper 47*. Recuperado de: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/la-seguridad/09714.pdf>

*Problema de fronteras invisibles llega a Cartagena.* (2013 19 de febrero). Hora 13 Noticias. Recuperado de: <http://www.hora13noticias.tv/index.php/actualidad-en-antioquia/1782-problema-de-fronteras-invisibles-llega-a-cartagena>

Programa Cartagena Cómo Vamos. (2013). Expertos en mercado laboral hablan con CCV sobre desempleo en Cartagena. RCN La Radio. Recuperado de: [http://cartagenacomovamos.org/noticias\\_001.php?idnot=89](http://cartagenacomovamos.org/noticias_001.php?idnot=89)

Quintín, P. y Urrea, F. (2000). *Segregación urbana y violencia en Cali: trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca*. Recuperado de: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/segregacion.pdf>

Ramos, L. (2003). *Características, Dinámicas y Condiciones de Emergencia de las Pandillas en Bogotá*. Bogotá, Colombia. Recuperado de: [https://www.oea.org/dsp/lecturas/Colombia/Pandillas/Caracter%C3%ADsticas\\_pandillas\\_Bogot%C3%A1.pdf](https://www.oea.org/dsp/lecturas/Colombia/Pandillas/Caracter%C3%ADsticas_pandillas_Bogot%C3%A1.pdf), recuperado: 24 de febrero de 2014.

*Reforzarán seguridad de puestos de salud en Cartagena.* (2013, 11 de diciembre). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/reforzarán-seguridad-de-puestos-de-salud-en-cartagena/20131211/nota/2035872.aspx>

Restrepo, J. y Tobón, A. (2011). *Guatemala en la encrucijada panorama de una violencia transformada*. Bogotá, Colombia.

- Rezende, M. y Estevão, R. (2012). Juvenile Criminal Behavior and Peers Influences: A Comparative Study in the Brazilian Context. *Universitas Psychologica*, 11(4), pp. 1157-1166. Bogotá. Recuperado de: [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672012000400011&script=sci\\_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1657-92672012000400011&script=sci_arttext)
- Riaño, P. (2006). *Dwellers of memory: Youth and violence in Medellín, Colombia*. Estados Unidos: Transactions Publishers
- Rocha, J. (2013). *Violencia Juvenil y Orden Social en el Reparto Schick, Juventud Marginada y Relación con el Estado*. Banco Interamericano de Desarrollo Oficina de Evaluación y Supervisión. Documento para Discusión. no. IDB-DP-308
- Rodgers, D. (2006). Living in the Shadow of Death: Gangs, Violence and Social Order in Urban Nicaragua, 1996-2002. *Journal of Latin American Studies*, 38(2), pp. 267-292
- Rodríguez, E. (2009). Jóvenes y violencias en América Latina: priorizar la prevención con enfoques integrados. *Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud*, 5(2), pp. 539-571. Manizales, Colombia. Recuperado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v5n2/v5n2a03.pdf>
- Rodríguez, E. (2012). *Pandillas juveniles y políticas públicas en América Latina: Notas para una nueva agenda de investigaciones*. Recuperado de: <http://www.celaju.net/wp-content/publicaciones/2012/11/pandillas-juveniles.pdf>
- Rozema, R. (2007). Paramilitares y violencia urbana en Medellín, Colombia. *Foro Internacional* 189, XLVII(3), pp. 535-550
- Salazar, A. (2002). No nacimos pa' semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín. Bogotá, Colombia: Planeta.
- Sanabria, A. y Uribe, A. (2007). Prevalencia de la delincuencia juvenil en Santiago de Cali. *Pensamiento Psicológico*, 3(9), pp. 111-122. Pontificia Universidad Javeriana Colombia. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80103909>
- Sanchez, D. (2012). Factores de riesgo y protección ante la delincuencia en menores y jóvenes. *Revista de Educación Social*, 15. Recuperado de: [http://www.eduso.net/res/pdf/15/factores\\_res\\_15.pdf](http://www.eduso.net/res/pdf/15/factores_res_15.pdf)
- Scoppetta, O. y Rodriguez, R. (2006). La explotación sexual de los niños en Cartagena de Indias y Bogotá, Colombia. *Revista infancia, adolescencia*

y familia, 1(2). Recuperado de: [http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/en/pdf/v1n2/v1n2\\_2.pdf](http://www.revistaiaf.abacolombia.org.co/en/pdf/v1n2/v1n2_2.pdf)

Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. (2011). *Boletín estadístico graficado 2010*. Recuperado de: [//www.semibague.gov.co/index.php?option=com\\_remository&Itemid=&func=download&id=1083&chk=f4834b7465339f54fc5d810fd2505ff3&no\\_html=1](http://www.semibague.gov.co/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=download&id=1083&chk=f4834b7465339f54fc5d810fd2505ff3&no_html=1)

*Sicarios y pandilleros “ponen” los muertos en Cartagena*. (2009, 9 de abril). El Espectador. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/articulo135148-sicarios-y-pandilleros-ponen-los-muertos-cartagena>

Small Arms Survey. (2006). *Few options but the gun. Angry young men*. Recuperado de: <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2006/en/Small-Arms-Survey-2006-Chapter-12-EN.pdf>

Small Arms Survey. (2007). *Getting Past Suppression*. Recuperado de: <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2010/en/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-09-EN.pdf>

Soares, L., Sé, J., Rodrigues L., y Cerneiro L. (1996). *Violencia e politica no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro, Brasil: Editora Relume

Solarte, L. (2010), Jóvenes entre la violencia y la búsqueda de la paz. *Sociedad y Economía*, 18. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/996/99618003006.pdf>

Spergel, I. (1990). Youth Gangs: Continuity and Change. *Crime and Justice*, 12, pp. 171-275

Strocka, C. (2006) Youth Gangs in Latin America, *SAIS Review*, 26(2), pp. 133-146

Thrasher, F. (1936). *The Gang*. Chicago: University of Chicago Press.

Tobón, A. (2012). *Dinámicas y usos de la violencia neoparamilitar en el Valle del Cauca*. Recuperado de: [http://cerac.org.co/assets/pdf/CERAC\\_WP18.pdf](http://cerac.org.co/assets/pdf/CERAC_WP18.pdf)

Torres-Castro. (2013). Pandillismo y violencia escolar femenina en el barrio y su proyección a la escuela. *Revista Internacional de Investigación en Educación*, 4(8). Edición especial La violencia en las escuelas, pp. 383-398. Recuperado de: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/MAGIS/article/viewFile/3570/2685>, recuperado: 24 de febrero de 2014.

- Torres, I. (2011). *Conflicto armado, crimen organizado y disputas por la hegemonía en Soacha y el Sur de Bogotá*. Bogotá Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: <http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/1571/1/TorresArangurenIvanArturo2011.pdf>
- Un muerto y cuatro heridos deja enfrentamiento entre pandillas en Cartagena*. (2013, 28 de mayo). Caracol Radio. Recuperado de: <http://caracol.glradio.com/noticias/regionales/un-muerto-y-cuatro-heridos-deja-enfrentamiento-entre-pandillas-en-cartagena/20130528/nota/1905978.aspx>
- Un muerto y tres heridos deja pelea entre pandillas en Cartagena*. (2014, 16 de febrero). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/un-muerto-y-tres-heridos-deja-pelea-entre-pandillas-en-cartagena/20140216/nota/2083478.aspx>
- UNICEF. (2006). *Manual for the Measurement of Indicators of Violence against Children*. United Nations Secretary-General's Study.
- Universidad de Antioquia. (2014). *Medellín. Violencia de Combos o falla de la política de seguridad democrática*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Centro de Estudios de Opinión. Recuperado de: <http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/7035/6451>
- Universidad Santo Tomás (USTA) & Oficina para la coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) (2009). Índice de Riesgo en Situación Humanitaria. Recuperado de: [http://www.colombiassh.org/irsh/IMG/pdf/Documento\\_IRSH\\_Agosto\\_29\\_de\\_2009\\_add.pdf](http://www.colombiassh.org/irsh/IMG/pdf/Documento_IRSH_Agosto_29_de_2009_add.pdf)
- Urrea, F., y Quintín, P. (2000). *Segregación urbana y violencia en Cali: Trayectorias de vida de jóvenes negros del distrito de Aguablanca*. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/colombia/cidse/segregacion.pdf>
- Valencia, M., y Ospina, C. (2005). El abordaje de la problemática de explotación sexual infantil en Cartagena. *Revista Palabra*, 6 Agosto. Recuperado de: <http://ojs.udc.edu.co/index.php/palobra/article/view/67/56>
- Vándalos causaron destrozos en cuatro calles de Lo Amador. (2011 9 de octubre). El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.co/cartagena/sucesos/vandalos-causaron-destrozos-en-cuatro-calles-de-lo-amador-47646>
- Vargas, Y. (s.f.). *Política Pública de Juventud de Cartagena. Diagnóstico técnico*. Reuperado de: <http://www.cartagena.gov.co/Concejo/Documentos/PoliticadejuVentud.pdf>

- Veintinueve condenas por inducción a la prostitución de menores en Cartagena.* (2013, 19 de noviembre). RCN Radio. Recuperado de: <http://www.rcnradio.com/noticias/29-condenas-por-la-induccion-la-prostitucion-de-menores-en-cartagena-101651> Hein, A. (2004). *Factores de riesgo y delincuencia juvenil, revisión de la literatura nacional e internacional.* Santiago de Chile, Fundación Paz Ciudadana. Recuperado de: [http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sinviolencia/modulo\\_2/Factores\\_de\\_riesgo\\_delicuencia\\_juvenil.pdf](http://saludxmi.cnpss.gob.mx/inpsiquiatria/portal/saludxmi/biblioteca/sinviolencia/modulo_2/Factores_de_riesgo_delicuencia_juvenil.pdf)
- Violencia por 'fronteras invisibles' no da tregua en Cali.* (2013, 17 de noviembre). El Tiempo. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13198756>
- Wilkinson, D., Chauncey, B., y Lurry, R. (2009). The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science. Youth Violence – Crime or Self-Help? Marginalized Urban Males' Perspectives on the Limited Efficacy of the Criminal Justice System to Stop Youth Violence. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 25
- World Bank. (2005). *Youth Crime Prevention.* Recuperado de: <http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPURBDEV/Resources/841042-1219076931513/5301922-1250717140763/Youth.pdf>, recuperado: 10 de diciembre de 2013
- World Health Organization. (2013). *World Health Organization.* Recuperado de: [http://www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/youth/en/](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/youth/en/)
- Ya van 5 comerciantes asesinados en mercado de Bazurto de Cartagena.* (2012, 30 de septiembre). Caracol Radio. Recuperado de: <http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/ya-van-5-comerciantes-asesinados-en-mercado-de-bazurto-de-cartagena/20120930/nota/1770538.aspx>
- Zaluar, Alba. (2007). *Crimes and Violence Trends in Rio de Janeiro, Brazil.* Recuperado de: <http://www.unhabitat.org/downloads/docs/grhs.2007.casestudy.crime.riodejaneiro.pdf>
- Zubillaga, V. (2008). En búsqueda de salidas a la violencia: relatos de reconversión biográfica de hombres jóvenes en Caracas. *Revista Mexicana de Sociología*, 70(4), pp. 759-789.

- AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
- ACNUR: La Agencia de la ONU para los Refugiados
- ACP: Análisis en Componentes Principales
- ACJ: Asociación Cristiana de Jóvenes (por sus siglas en inglés YMCA)
- ACR: Agencia Colombiana para la Reintegración
- AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional
- AFM: Análisis Factorial Múltiple
- AFMJ: Análisis Factorial Múltiple Jerárquico
- AOAV: Action On Armed Violence
- BID: Banco Interamericano de Desarrollo
- CEACS: Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad
- CERAC: Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos
- CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica
- CODHES: Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
- COSED: Centro de Observación y Seguimiento del Delito
- CTI: Cuerpo Técnico de Investigación
- DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- DDHH: Derechos Humanos
- DIH: Derecho Internacional Humanitario
- DNP: Departamento Nacional de Planeación

- DIJIN: Dirección de Investigación Criminal e Interpol
- ELN: Ejército de Liberación Nacional
- FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
- FICONPAZ: Fundación Instituto para la Construcción de Paz
- FIP: Fundación Ideas Para la Paz
- FFPP: Fuerza Publica
- GVO: Grupos de Violencia Organizada
- GPDP: Grupos Post Desmovilización Paramilitares
- ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- IDIPRON: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
- IRSH: Índice de Riesgo de Situación Humanitaria.
- JAC: Juntas de Acción Comunal
- JAL: Juntas Administradoras Locales
- M19: Movimiento 19 de abril
- MOE: Misión de Observación Electoral
- NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas
- NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
- OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
- OECD: The Organisation for Economic Co-operation and Development
- OMS: Organización Mundial de la Salud
- ONG: Organización No Gubernamental
- ONU: Organización de las Naciones Unidas
- OPS: Organización Panamericana de la Salud
- PIB: Producto Interno Bruto
- PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

- SAS: Small Arms Survey
- SENA: Servicio Nacional de Aprendizaje
- TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación
- TIOS: Territorios de Integración y Oportunidades
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UPZ: Unidades de Planeamiento Zonal

1. Ver Restrepo y Tobón, 2011.
2. La violencia ejercida de forma defensiva les permite proyectar una imagen de guerreros protectores por las personas del entorno; la violencia ejercida contra los “enemigos” o “extranjeros a su sector o barrio”, les reafirma su identidad de miembros de las pandillas y justicieros comunitarios; la violencia instrumental en contra de los competidores antagónicos en los negocios clandestinos, los constituye en agentes económicos, dándoles respeto entre sus pares y familiares; y, por último, la violencia expresiva, le permite construir una identidad masculina definida por su capacidad de dominación (Zubillaga, et al., 2008).
3. Para autores como Mauricio Rubio, la violencia provee a los jóvenes de sectores marginales de las ciudades la posibilidad de vivir un estilo de vida que difícilmente podrían experimentar sin recurrir a la violencia y la criminalidad. Este enfoque ha sido denominado “sexo, rumba y drogas” (Rodríguez, 2012).
4. No todos los autores entienden los factores de riesgo y los factores de protección como una relación dicotómica. Por ejemplo, Farrington (1998) plantea que existen factores de protección que no tienen ninguna relación con los factores de riesgo.
5. La OECD ha creado un enfoque para el estudio de la violencia armada en la que define tres lentes a través de los cuales se analiza la violencia. El primero es el de actores, este busca identificar quienes son los perpetradores de la violencia, el segundo es el de las instituciones entendiendo por este concepto las normas que regulan los comportamientos de los individuos y facilitan la comisión de actos violentos, y finalmente los instrumentos buscando identificar la disponibilidad y el acceso a elementos que permitan que la violencia escale (OECD, 2009)
6. Algunas de estas son: Corabastos, Santa Fe, 7 de Agosto, San Fernando, Las Ferias, Antonio Nariño, Plaza España y en los San Andrecitos
7. Según el IDIPRON en Bogotá hacían presencia 1.319 pandillas en el 2008 (Pandillas ascienden a más de 1300 en Bogotá, 2103).
8. Según CEACSC en Bogotá hacían presencia 132 pandillas en el 2012. (Bogotá una capital con 132 pandillas, 2012)
9. Según un líder juvenil entrevistado “Los pandilleros, a veces tienen contactos por vínculos de barrio, y cuando algún joven roba en el barrio, la pandilla contraria toma represarías” (Entrevista 3. Líder Juvenil).
10. Varias de las personas entrevistadas señalaban cómo la violencia de las barras estaba prácticamente dirigida a sus pares: “cuando comienzan los partidos es que ellos se alborotan” (Entrevista 7. Lideresa juvenil); “siempre se agarran, se tiran botellas, cada vez que hay fiesta de un equipo llega el otro a arruinárselas a botella, a palo y todo eso” (Entrevista 9. Líder juvenil).
11. Según un líder juvenil entrevistado, “Las barras son grupos muy territoriales, grafitean zonas con sus símbolos y se toman parques o lugares públicos. Además, defienden sus territorios frente a otras barras” (Entrevista 1. Líder juvenil).
12. Según una funcionaria pública entrevistada, hay un alto grado de “Estigmatización de los jóvenes por parte de la comunidad por el desarrollo de su identidad. Si tienen

- tatuajes, si se visten diferentes o tienen el cabello diferente entonces los estigmatizan, los rechazan y esto causa que los jóvenes se conviertan en delincuentes cuando no ven más oportunidad para ser escuchados” (Entrevista 22. Funcionaria)
13. “Todo el mundo sabe dónde queda la olla pero nadie dice nada (...) los habitantes de la comunidad ven como natural el fenómeno del pandillismo” (Entrevista 1. Líder juvenil).
  14. El siguiente testimonio de un líder juvenil sintetiza lo anterior: “(...) usted está mamado que el barrio tenga esa fama de mala seguridad, pero ante quién va a denunciar, si al hacerlo la policía puede decirle a la pandilla, y ese parche queda todo ofendido con usted (...) el barrio entero sabe quién es el man que lidera, todo el barrio lo sabe, por años ha pasado, pero el man nunca se ha metido con usted porque el man está cuidando el barrio. La gente asume esa seguridad (...) el pandillero es el man que fue niño y creció en el barrio y todo el mundo lo conoce” (Entrevista 1).
  15. En varias de las entrevistas se reportó la presunta participación, en algún momento del tiempo, de integrantes de JAC y comerciantes en este tipo de agrupaciones; como lo señala un líder juvenil entrevistado: “(...) hay grupos paramilitares que han sido conformados por los integrantes de las juntas de acción comunal (los comunales), frente a las falencias del Estado para proveer protección y seguridad en el territorio” (Entrevista 1).
  16. Según Carmen Torres-Castro (2013), las pandillas de mujeres operan en zonas marginales y siempre andan armadas, algunas de ellas son: Las Yoguiis, Charco de sangre, Las Moscas, entre otras.
  17. Vale la pena revisar el testimonio de un joven exagresor entrevistado al respecto: “Las mujeres se encargan de ser el descargue de las armas, cuando acaba el combate, se les entrega las armas de fuego o fierros a las mujeres y ellas se pierden” (Entrevista 18).
  18. “También existen casos de ejercicio de territorialidad femenina, como la que se describió en las pandillas y barras violentas. Las mujeres que pertenecen a esos grupos ‘se dan en la jeta’, usan navajas y machetes para enfrentarse con otros grupos de mujeres. Son más discretas que los hombres” (Entrevista 1).
  19. Según la Policía, a junio de 2013 habían sido capturadas destinas bandas criminales en Bogotá dedicadas a este tipo de delito: ‘los Luisitos’ (Usaquén), ‘los Gekkos’ y ‘los Chinchés’ (Suba), ‘los Búfalos’ y ‘los Carpinteros’ (Bosa), ‘los Sureños’ (Ciudad Bolívar), ‘los Mineros (Mártires), ‘los Comejenes’ (Engativá) y ‘los Mochos’ y ‘los Boyacos’ (Kennedy) (Gaula, tras cuatro bandas extorsivas, 2013).
  20. Los Tarazona son una banda criminal que tiene cerca de 30 integrantes, la mayoría de ellos menores de edad.
  21. Por ejemplo: Ciudad Bolívar, Suba, Bosa, San Cristóbal, Usme, Usaquén, Kennedy, Fontibón, Barrios Unidos y Tunjuelito.
  22. En torno a la presencia de GPDP en estas localidades de la ciudad, un líder juvenil entrevistado relataba: “(...) grupos, como Las Águilas, tienen presencia en Ciudad Bolívar, Caracolí, Potosí y Cazucá. Estos grupos tienen fuerte presencia en algunas comunidades, por ejemplo, en Sierra Morena (...) Los grupos paramilitares se ubicaron en las márgenes de la ciudad, por las entradas a Bogotá: Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar (y Soacha). Hace unos años era común ver en la loma a hombres con una pañoleta roja, vestidos de jean, de particular, con un rifle. Aquí, se organizaron históricamente grupos paramilitares y por eso tienen tanta influencia en la zona. Además, esto tiene que ver con la llegada de desmovilizados a estas zonas de la ciudad; ocuparon cuadras y barrios enteros”. (Entrevista 1. Líder juvenil).

23. Estas bandas son usadas por los GPDP mientras sean funcionales a sus intereses y luego son eliminados, o algunos de sus integrantes son incorporados a la estructura formal de los GPDP (Torres, 2010).
24. Los Pascuales, efectivamente, están en una posición intermedia: “no son una Bacrim, pero se relacionan con ellas para adquirir la droga que luego venden en las calles; no tienen una presencia territorial con patrullajes y estructuras uniformadas, pero no las necesitan pues controlan las economías ilegales en un territorio y eso les basta” (Ávila, 2014, p.61).
25. Según Iván Torres “los jóvenes son vistos por sus comunidades como generadores de conflictos y desórdenes, por lo cual no es raro que muchas veces la muerte de jóvenes esté ampliamente ‘justificada’, aún antes de que ocurra” (2010, p.10)
26. Frente a la presunta participación de la Fuerza Pública en estos hechos, un líder juvenil entrevistado señalaba: “Nosotros nos organizamos con miedo; hicimos una marcha de antorchas protestando por el asesinato de jóvenes por grupos paramilitares, pero teníamos miedo de que estuviera detrás la policía y nos iba a tomar fotos y después esas fotos iban a aparecer en una lista negra. No sabíamos si había alguien infiltrado entre los parches juveniles identificando gente; quién es el líder, quién está gritando” (Entrevista 1. Joven no agresor).
27. Para los GPDP, estas acciones les permite alcanzar diferentes objetivos: posicionarse en una zona al eliminar a enemigos y contradictores; legitimarse en el imaginario colectivo como garantes de seguridad y tramitadores de los conflictos sociales; y controlar la población a través del terror y el miedo (Torres, 2010).
28. Según una líder juvenil entrevistada: “Hay mujeres que igualmente son victimizadas en casos de ‘limpieza social’, ya que pueden estar involucradas en ventas de droga, tener relaciones con personas de bandas paramilitares o también por haber denunciado o hablado de información perjudicial para los grupos responsables de este tipo de hechos violentos” (Entrevista 2. Joven no agresora).
29. Carlos Enrique Ruíz Escárraga era un joven de 24 años, estudiante de la Universidad Pedagógica e integrante del colectivo contracultural Res Gestae. Días previos a su asesinato, en el barrio Sierra Morena, el 26 de enero de este año, había aparecido un panfleto amenazante firmado por las “Bacrim” en la localidad. (Alertan sobre posible acción paramilitar detrás del asesinato de joven en Ciudad Bolívar, 2014)
30. Según un funcionario público que trabaja en la localidad de Usme, en algunos las barras violentas acuerdan encontrarse en sitios públicos para enfrentarse violentamente; “Se enfrentan grupos de hinchas de Millonarios (que son de Danubio) contra hinchas del Nacional (que son de Gran Yomasa) , y tienen como punto de encuentro los colegios más grandes de la localidad; Paulo Freire, Almirante Padilla y Saavedra” (Entrevista 95. Funcionario Público).
31. Finalmente, es necesario señalar que los GVO también vinculan a mujeres jóvenes y niñas, mediante el ofrecimiento de dinero y regalos, para que se involucren en el transporte de armas y drogas (Defensoría del Pueblo, 2013, p.14).
32. En Suba, “El reclutamiento ilegal lo hacen desmovilizados y reinsertados, pandillas y para el microtráfico” (Entrevista 9. Funcionario público).
33. Cabe destacar el último mecanismo. Los jóvenes que se rehúsan a vincularse a los grupos han sido víctimas de intimidaciones, amenazas, agresiones físicas, e incluso, desplazamiento forzado (de ellos y/o sus familias) (Defensoría del Pueblo, 2013). Además, jóvenes de colegios públicos han sido sufrido matoneo escolar para que ingresen a pandillas y bandas criminales (El Tiempo, 2014a).

34. Por ejemplo, los jóvenes barristas suelen estar en una situación particular de riesgo en Bogotá, dada la cercanía de algunos de estos grupos juveniles con organizaciones criminales y pandillas (Entrevista 1. Líder juvenil).
35. En torno a la presencia de GPDP en estas localidades de la ciudad, un líder juvenil entrevistado relataba: “(...) grupos, como Las Águilas, tienen presencia en Ciudad Bolívar, Caracolí, Potosí y Cazucá. Estos grupos tienen fuerte presencia en algunas comunidades, por ejemplo, en Sierra Morena (...) Los grupos paramilitares se ubicaron en las márgenes de la ciudad, por las entradas a Bogotá: Usme, Sumapaz y Ciudad Bolívar (y Soacha). Hace unos años era común ver en la loma a hombres con una pañoleta roja, vestidos de jean, de particular, con un rifle. Aquí, se organizaron históricamente grupos paramilitares y por eso tienen tanta influencia en la zona. Además, esto tiene que ver con la llegada de desmovilizados a estas zonas de la ciudad; ocuparon cuadras y barrios enteros”. (Entrevista 1. Líder juvenil).
36. “Falta articulación entre el Distrito y las localidades, incluso en las mismas entidades como la Secretaría de Integración Social (...) Además, falta planeación con las localidades, sólo se envían lineamientos desde arriba sin tenerlos a ellos en cuenta. Hay buen flujo de información de abajo hacia arriba pero no de arriba hacia abajo” (Entrevista 95).
37. Una funcionaria reconocía que existía mucha dificultad para realizar iniciativas con jóvenes, puesto que la entrega de capitales semilla o de modelos tradicionales de empleo no siempre funcionan puesto que no responden a las expectativas que ellos tienen; más bien, una apuesta más acertada sería promover los espacios que a ellos les gusta. (Entrevista 14. Funcionaria Pública).
38. “Las cosas duraron así como hasta el 2001 cuando pusieron un batallón del Ejército en la cima de la loma. Ahí sí se puso fea la cosa porque el Ejército tenía artillería pesada y todo. Nosotros nos estábamos cansando de todo esa guerra, hasta que un día le dijimos a la guerrilla que queríamos salirnos de eso. Los guerrilleros nos dijeron que ‘tranquillos, que entregáramos las armas y no había ningún problema’. Pero nosotros dijimos que no, que nos habíamos ganado las armas con nuestro trabajo, y no entregamos nada. Ahí entonces se puso más dura la guerra; teníamos de enemigos a la banda rival, al Ejército y la Policía, y a la misma guerrilla” (Entrevista 45. Exagresor).
39. Una muestra de esta situación, la Personería de Cali (2012, p.13) ha registrado cerca de 20 asesinatos de jóvenes por cruzar fronteras invisibles en el barrio El Vergel, durante el último año.
40. Sin embargo, es más probable que los jóvenes lleguen a ser jefes de las bandas que de las oficinas; “Los jóvenes son los principales integrantes de las bandas de los barrios, comienzan su participación en roles como campaneros o haciendo mandados a personas de la banda y pueden llegar a ser líderes” (Entrevista 23. Líder juvenil).
41. En efecto, las oficinas de cobro tienen una interacción con grupos armados (paramilitares o guerrilleros) y narcotraficantes, así como con políticos, militares o prestigiosos personajes de la sociedad (Callejas, 2012; Entrevista 31. Líder juvenil).
42. En esencia, estos grupos son “acreedores armados con usura”, que toman las deudas de un particular (quien los contrata) y le suben el valor que debe la persona morosa, quien tiene que pagarles con dinero o propiedades a cambio de salvaguardar su vida (Callejas, 2012: 69-70).
43. Callejas (2012) denomina esta última forma de articulación como “padrinazgo” y la ilustra con el siguiente testimonio de un jefe de oficina entrevistado en su trabajo: “Solamente yo por darle mi nombre a usted le cobro el 25% de lo que usted va a cobrar, hay oficinas que trabajan así, oficinas chiquitas que trabajan con el nombre de la grande

(...) entonces, por lo general el que maneja oficina tiene que tener un nombre que haya sido reconocido".(...)" (p.55).

44. "Es muy difícil desligar los afectos y las relaciones de los habitantes de la comunidad con esas bandas. En muchos casos no es gente que llegó al territorio y lo está dominando, es la misma gente que cogió otro perfil" (Entrevista 44. Funcionaria).
45. Es posible que esto último esté relacionado con el papel de intermediación violenta que tienen algunos de estos grupos en los conflictos vecinales, por ejemplo, con el cobro de deudas.
46. Los siguientes testimonios ilustran lo anterior: "Yo nunca he sido amigo de la Policía. Le voy a decir como le respondería un muchacho de la calle: 'yo sé que la Policía es muy sapa'" (Entrevista 42. Líder juvenil) "Por otro lado, es muy difícil denunciar a la Policía si está es el contacto o campanero de los grupos. Es necesario revisar el nivel de permeabilidad de la institucionalidad que ha tenido la criminalidad en Cali" (Entrevista 44. Funcionaria).
47. En efecto, una parte importante de los integrantes de base de los GPDP son jóvenes reclutados de pandillas y bandas que han hecho toda la "carrera criminal" y, según una funcionaria entrevistada, es posible que se estén involucrando a jóvenes cada vez más pequeños: "Existen grupos al margen de la ley con cierto poder que tienen su nombre propio Los Urabeños, en Cali estamos ya completamente invadidos por estos. El involucramiento con estos grupos se da a una edad temprana iniciando por ser campaneros y van comenzando a entrar a las escuelas de entrenamiento y de reclutamiento, las cuales están ubicadas en los asentamientos, además de estar establecidas con costos y con salarios ya determinados, pasan a involucrarse en el sicariato, inician el consumo tanto de licor como de sustancias psicoactivas y desde el inicio ya les están dando armas" (Entrevista 38. Lideresa juvenil).
48. Es necesario aclarar que estas situaciones ocurren con mayor frecuencia en los barrios de las zonas más afectadas por la criminalidad y la inseguridad en Cali, como por ejemplo el Distrito de Aguablanca, la zona de ladera o la comuna 6.
49. Por ejemplo, la tasa de Cali supera con creces desde la de Medellín -97-, la segunda mayor entre los casos de estudio, hasta Bogotá -25- que tiene la menor, y el país (44).
50. "Se ha registrado un gran número de homicidios relacionados con vendettas mafiosas: porque alguien se robó un cargamento, porque no vendió lo suficiente, porque vendió en el territorio donde opera el mercado de un grupo rival, porque le compró a otro proveedor, porque se quiso quedar con el negocio, etc" (Entrevista 30. Funcionaria)
51. Sobre la situación en Petecuy, un líder entrevistado señalaba: "Aunque este fenómeno tendía a presentarse antes con mayor frecuencia... ahora está volviendo a ocurrir. En este año van 6 muertes de jóvenes pandilleros en casos de limpieza social, y el periódico Q'Hubo publicó un reportaje sobre la reaparición de la Mano Negra en el barrio" (Entrevista 42. Líder juvenil). En general, estos hechos afectan la movilidad, libertad de expresión y seguridad de los jóvenes que habitan en estos territorios (Entrevista 42. Líder juvenil).
52. Cabe recordar que en Cali se reportan 46 asentamientos ilegales localizados en las siguientes columnas: 1, 4, 7, 13, 14, 15, 18, y 20 (Defensoría del Pueblo, 2014). Además, a esto hay que añadir el barrio Potrero Grande en la comuna 21, que es un proyecto de reasentamiento de varias comunidades que provenían de estos territorios, pero que conserva muchas de las características socioeconómicas y de seguridad de los asentamientos ilegales.
53. En estos lugares, por ejemplo, en ocasiones los artículos de la canasta familiar son robados de carros expendedores y revendidos en tiendas de barrio o partes de carros desbaliados vendidos en talleres (Entrevista 30. Funcionaria).

54. Un ejemplo de este tipo de lugares son algunos barrios de las comunas 1, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.
55. Por cuestiones de seguridad se omite cualquier tipo de información que permita reconocer a la persona entrevistada, incluso el número de su entrevista.
56. El ejemplo más claro de esa situación es el barrio Potrero Grande, que responde a un proyecto de reasentamiento de familias provenientes de invasiones ilegales (v.g. el Jarillón del río Cauca, la Laguna de Pondaje, Cinta Larga, Alfonso López, la Colonia Nariñense, Brisas del Cauca, etc.). Allí, la asignación por sorteo de los predios, sin ninguna intervención previa en materia de convivencia, ha sido una fuente de conflictos sociales en mucho de los casos asumidos por los jóvenes: las familias reasentadas encontraron como vecinos a personas con las cuales tenían conflictos pactados desde donde provenían, “La transformación de las rivalidades en agresiones físicas fue cuestión de tiempo” (Acosta, et al., 2011, pp.69-70).
57. Este estilo de vida acompaña a los jóvenes agresores una vez han recorrido en un GVO una ruta criminal o violenta, como lo señalan otros autores que han estudiado a los jóvenes pandilleros (p.e. Perea, 2008): “Usted corona una vuelta y sólo piensa en la rumba, las mujeres y la vareta” (Entrevista 31. Líder juvenil).
58. “En algunos lugares hay consentimiento por parte de los padres para que el joven sea reclutado o de que participe en grupos armados” (Entrevista 32. Funcionaria).
59. “El joven cree que debe servir al papá en lo que él está” (Entrevista 42. Líder juvenil).
60. “Algunas familias fomentan actividades criminales en los jóvenes. Yo conozco mujeres que les dicen a sus hijos: vaya que llegó un camión, apúrese antes que se le adelanten los del otro grupo” (Entrevista 25. Funcionaria).
61. “Sin embargo, ser líder también abre puertas en otros espacios y puede ser un factor de protección... Eso depende mucho de las bandas: los líderes de algunos de estos grupos dicen ‘siga en esa parce, qué bien’, e incluso respaldan, respetan y cuidan a los muchachos que toman otro camino” (Entrevista 25. Funcionaria).
62. Cabe destacar que al interior de la Alcaldía se destaca la participación de las Secretaría de Educación y de Gobierno en la implementación de las iniciativas, pero no de la Secretaría de Desarrollo, que como se señalará más adelante es la encargada del tema de jóvenes.
63. “Hay falta de comunicación entre las secretarías, los funcionarios y quienes implementan los programas; por lo tanto no hay memoria, ni seguimiento ni monitoreo de las iniciativas. ¿Qué ha pasado en el marco de las intervenciones sociales?” (Entrevista 44. Funcionaria).
64. Como muestra de lo anterior, para el jefe de una de las entidades a cargo de la PPJ en Cali, del cual no se dará información que permita su reconocimiento por cuestiones de seguridad, “Algunas iniciativas de carácter más mediático, como darle la oportunidad a un joven de que entre al grupo” de música ‘Delirio’ tiene muy poco impacto y tiene el riesgo de generar frustración en los jóvenes.
65. “La falta de planificación no permite que lleguen programas, sólo llegan actividades aisladas que dificultan que existan registros de memoria histórica. Incluso no hay indicadores sociales. Los operadores no tienen una línea de base clara para operar en el marco de una política y unos programas. El presupuesto también es un desorden, no hay situado fiscal ni recursos propios para generar programas. Todo es un activismo inmediato; sólo son paños de agua tibia” (Entrevista 44. Funcionaria).
66. Por cuestiones de seguridad se omite cualquier tipo de información que permita reconocer a la persona entrevistada, incluso el número de su entrevista.

67. “Estas organizaciones son desconocidas en el mundo institucional y para la cooperación internacional. En parte, esto se debe a que no le juegan a la corrupción y prefieren hacer su trabajo en una lógica de autosostenibilidad. Ellos son quienes tienen la memoria de los barrios, de los procesos, las dinámicas y las acciones concretas” (Entrevista 44. Funcionaria).
68. “Las lógicas de monopolio del poder que ejercen las JAL y JAC. Estas instancias tienen poca representatividad de otros actores sociales de la comunidad, que no tienen el acceso para determinar la planificación de las comunidades, la priorización y seguimiento a proyectos. Hay círculos muy cerrados para la interlocución con la institucionalidad: sólo lo hacen 2 ó 3 y dejan excluidos a organizaciones comunitarias que hacen trabajos importantes con los jóvenes... Hay una fragmentación entre quienes toman las acciones y quienes van a los espacios donde se toman las decisiones. Esto es importante porque allí se definen las intervenciones: por eso se hace énfasis en las actividades y no en los procesos” (Entrevista 44. Funcionaria).
69. Como ejemplo de lo anterior, la Defensoría del Pueblo (2014) denunció que pandillas y bandas de las comunas 13, 14, 15 y 20 restringieron la implementación del programa “Generación con bienestar” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante intimidaciones y amenazas a sus funcionarios, porque consideraban que las acciones de prevención del reclutamiento forzado que esta iniciativa estaba realizando afectaba sus intereses.
70. Proceso urbano, donde la población originaria de barrios tradicionales deteriorados, se ve desplazada progresivamente por población con mayor nivel adquisitivo.
71. La intensidad de la violencia en la región de Montes de María entre el año 1998 y 2004 es de carácter intensivo e indiscriminado. En la región se produjeron varias masacres, como las del Salado, San Isidro y Caracolí, Macayepo (Bolívar) y Colosó (Sucre) (Observatorio de DHH y DIH, 2005) y el desplazamiento masivo del corregimiento de Mampuján. En su mayoría, estos hechos fueron cometidos por Uber Banquez alias “Juancho Dique” y Rodrigo Mercado alias “Cadena” pertenecientes al bloque Héroes de Montes de María de las AUC (Observatorio de DHH y DIH, 2005).
72. Como una muestra de lo anterior, entre 2008 y 2012 se registraron 168 casos de asesinatos en el marco de acciones sicariales, según COSED (2013).
73. En las modalidades de hurto se identificó el asocio con algunos sparring o ayudantes de bus, los cuales indican que pasajero tiene posesiones de valor para luego ser hurtadas por los pandilleros (Entrevista 72. Funcionario).
74. Una zona de alto riesgo para ser víctima del hurto es lo que se considera la ruta ecológica, donde los pandilleros se esconden en el mangle a la espera de robar a los despercibidos.
75. En comparación con otras ciudades, Cartagena es la ciudad donde, en los últimos 3 años, se presenta un mayor incremento de homicidio contra jóvenes con arma de fuego. Adicional a esto como demuestra en el último informe del Observatorio del Delito de la Costa Caribe, en lo que va corrido del año (2014) se han dado cuatro masacres, específicamente en los barrios Nelson Mandela, Olaya Herrera, El Pozón y San Fernando; en su mayoría cometidas contra el gremio de los Moto taxistas y la última masacre que sucedió en el barrio el Pozón fue dirigida en contra de familiares de víctimas de la violencia y desplazados vinculados a procesos de restitución de tierras.
76. El último hecho del que se tiene registro sucedió en el Barrio el Pozón donde asesinaron a 3 personas relacionadas con los procesos de tierras en el primer trimestre del presente año. (CESPA, 2014)

77. Por construcción, el índice de juventud permite determinar si una población entre los 10 y 25 años tiene una participación mayor en la población total con respecto al promedio nacional. Es decir, si hay más jóvenes que el promedio nacional. Cuando la cifra sobrepasa de 1 quiere decir que la población joven es superior al promedio nacional.
78. Por ejemplo, del total de menores asesinados Cali en el 2012 (225 de 1.843 personas) el 39% de los casos estaba asociado a la violencia pandilleril, según el Observatorio Social de Cali (2014). El año siguiente este porcentaje se incrementó a un 47% de acuerdo a la misma fuente.
79. Cabe recordar la metodología que se implementó para la identificación de las iniciativas de prevención de la violencia que se usó en la investigación, que se mencionó en el Capítulo 1 de la introducción del libro.

*Violencia juvenil en contextos urbanos* se terminó de imprimir en la ciudad de Bogotá, D.C.  
en el mes de diciembre de 2014 en los talleres de Opciones Gráficas Editores Ltda.

Somos una empresa responsable con el ambiente